Gobiernos progresistas y gobiernos conservadores en América Latina del siglo XXI

ALBERTO ROCHA VALENCIA
JAIME EZEQUIEL TAMAYO RODRÍGUEZ
COORDINADORES



Universidad de Guadalajara



Gobiernos progresistas y gobiernos conservadores en América Latina del siglo xxi

Gobiernos progresistas y gobiernos conservadores en América Latina del siglo xxi

Alberto Rocha Valencia
Jaime Ezequiel Tamayo Rodríguez
Coordinadores

Universidad de Guadalajara
2021

Esta publicación fue financiada con el fondo federal PROINPEP 2020
Programa de incorporación y Permanencia de los Posgrados en el PCPC



Primera edición, 2021

Centro Universitario
de Ciencias Sociales y Humanidades
Unidad de Apoyo Editorial
Guanajuato 1045
CP 44260
Alcalde Barranquitas
Guadalajara, Jalisco, México

ISBN: 978-607-571-071-6

Impreso y hecho en México
Printed and made in Mexico

Índice

Introducción

América Latina desplegó sus capacidades en la búsqueda de su progreso histórico durante un período creativo e innovador (2000-2015) conducido por gobiernos progresistas. En este período histórico la región se unió, cohesionó y autonomizó paulatinamente hasta hacer converger las dinámicas estatales y gubernamentales con los procesos de integración regional, lo que generó un bosquejo político-institucional regional conducido por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Este bosquejo político e institucional permitió la conformación de un inicial orden político regional.

Por ello es que, durante estos años, la región promovió una intensa dinámica interna integradora y una extensa dinámica externa con proyección geopolítica Sur-Sur, sin dejar de lado la proyección Sur-Norte. Todos los gobiernos progresistas sumaron sus contribuciones y esfuerzos, y fueron liderados por la entonces potencia regional progresista, Brasil, del presidente Lula da Silva y de la presidenta Dilma Rousseff, así como por Venezuela de Hugo Chávez, Bolivia de Evo Morales, Uruguay de Tabaré y Mujica, Argentina de Kirchner, Ecuador de Correa, entre otros.

Este período concluyó con una relativa crisis política de los gobiernos progresistas y de sus respectivos modelos de desarrollo, todavía muy sustentados en prácticas económicas extractivistas (petróleo, gas, minerales).

Desde entonces, la región fue cooptada por gobiernos neoconservadores y neoliberales en muchos de los países que experimentaron proyectos progresistas. Los casos más notables de esta restauración conservadora neoliberal son los de Argentina con Macri, Brasil con Temer y Bolsonaro, Chile con Piñera, Ecuador con Moreno, Colombia con Duque, entre otros.

En consecuencia, la región ha sufrido una regresión histórica inimaginable. La CELAC fue detenida y sus procesos sustentadores fueron desarticulados (e incluso Grupo Lima intentó reemplazarla, aunque sin éxito); la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) fue desmantelada y sustituida por un proyecto sudamericano (PROSUR); se trataba de desactivar los procesos de integración regional de su multidimensionalidad para hacerlos involucionar a una unidimensionalidad comercial. Los proyectos de desarrollo nacional y de bienestar social fueron eliminados, y la región fue reconducida hacia sus vinculaciones geopolíticas seculares retropanamericanas y estadounidenses.

Los primeros resultados de esta regresión histórica regional están a la vista: golpes *suaves*, o *blando*s; crisis general en la Argentina de Mauricio Macri; crisis en el Brasil de Jair Bolsonaro; crisis económica y política en el Chile de Sebastián Piñera; crisis política en la Colombia de Iván Duque, entre otros. La regresión histórica implica crisis general porque no se pueden desactivar y comprimir las dinámicas alcanzadas por los países y porque no es posible reducir las demandas crecientes, y menos la humanidad de las poblaciones de cada país.

En el fondo de la escena política se encuentran las luchas de los pueblos originarios amazónicos contra el ecocidio y el etnocidio, de los pueblos andinos contra las empresas mineras extractivistas y sobreexplotadoras, de los movimientos sociales contra la sobreexplotación y conculcación de sus derechos sociales y laborales, entre otros. Por ello estos pueblos se levantaron durante todo el 2019 e inicios de 2020 en la región.

Mientras tanto el proceso progresista latinoamericano se ha recuperado de su declive después de la llegada al Gobierno de México del

presidente Andrés Manuel López Obrador e igualmente del presidente Alberto Fernández en Argentina. Otros sucesos pueden seguir esta dirección en Chile y Ecuador. Lo mismo puede decirse de Bolivia, que, a pesar de un golpe que combinó elementos de golpe suave y golpe militar, parece que apunta a recuperar el proyecto de Evo Morales con un eventual triunfo electoral de su partido, el MAS.

En esta obra planteamos las siguientes preguntas: ¿El proceso político y social progresista habrá detenido su declive e iniciado su recuperación? ¿Es posible un resurgimiento del progresismo sobre bases diferentes? ¿Por qué el resurgimiento de los gobiernos conservadores neoliberales no habría durado ni un período de cinco años? ¿El programa neoliberal de los gobiernos conservadores conduce a la ruina de sus países? ¿El alineamiento económicamente dependiente y geopolíticamente subordinado de los gobiernos conservadores neoliberales respecto de los EUA y del gobierno de D. Trump es la típica trampa imperial y retropanamericana del "patio trasero"?

A lo largo de las siguientes páginas, nos proponemos abordar el desenvolvimiento general de la región desde perspectivas políticas y geopolíticas a partir del momento en que los gobiernos conservadores neoliberales regresaron a la región, además de analizar el desempeño gubernamental de los gobiernos conservadores neoliberales y de los gobiernos progresistas.

Por un lado, podemos observar retrocesos que a simple vista parecieran cerrar el ciclo progresista en América Latina, pero, con una mirada más profunda, nos muestran un proceso dialéctico, en espiral, que muestra no sólo el rápido agotamiento de las propuestas conservadoras y neoliberales de la restauración, sino que las alternativas progresistas muestran también capacidad de resistencia y recuperación en algunos países, puesto que las luchas sociales se activaron a finales de 2019, y ni siquiera la pandemia las ha podido contener, si bien han sufrido algún inevitable repliegue.

Es cierto que América Latina no nos ofrece una perspectiva optimista en este nuevo decenio que comienza, pero al menos sí es esperanza-

dora. Y, contrario a la idea del fin del ciclo progresista, queda claro que el regreso conservador no llegó para quedarse en Nuestra América.

La obra está conformada por diez trabajos dedicados a la investigación de los sucesos políticos de la región de América Latina desde inicios de 2000 hasta el año de 2019 y parte de 2020. En el período que va de 2000 a 2015, abordamos los aportes y limitaciones de los gobiernos progresistas, así como las crisis que tuvieron que enfrentar. Luego, en el período que va desde 2016 hacia adelante, se aborda la difícil transición, el ascenso de los gobiernos conservadores neoliberales y sus proyecciones. En general, se pueden apuntalar las ideas de que los gobiernos progresistas promovieron un avance histórico general en la región y que los gobiernos conservadores neoliberales hasta el momento, ya casi cerca de cinco años, se han dedicado a generar las condiciones de una regresión histórica general que tendrá profundas y graves consecuencias.

A continuación, presentamos una síntesis de cada uno de los trabajos, siguiendo una perspectiva de lo general regional a lo particular nacional.

En "Orden político e integración regional en América Latina: Del avance autónomo a la regresión heterónoma (2000-2019)", el investigador Alberto Rocha, aborda un tema central de la política regional: el ensayo de construcción de un orden político regional (2000-20015) sobre la base del sistema interestatal y de los procesos de integración regionales, con la CELAC en la cúspide de tal configuración. Esto fue el resultado de un proceso muy importante, impulsado por los gobiernos progresistas, y que trajo consigo unidad, cohesión y autonomía en la región. Después, desde 2016 hacia adelante, los gobiernos conservadores neoliberales que se instalaron en la región procedieron a la desarticulación de tal ensayo, creando el Grupo de Lima y el PROSUR con la finalidad de volver a las relaciones estrechas con los EUA, insertándose así en un nuevo esquema dependiente y retropanamericano. En una perspectiva general, en lugar de proseguir con su avance histórico, la región tiende a emprender una vía de regresión histórica.

En "Los golpes suaves contra los gobiernos progresistas en América Latina", Jaime Ezequiel Tamayo y Daniela Paulina Íñiguez sostienen

que hablar de *golpes suaves* no es sino referirse a una nueva etapa del intervencionismo norteamericano en América Latina. Estados Unidos ha intervenido en diferentes partes del mundo a partir una construcción ideológica que considera que este país es excepcional, una idea que parece estar presente prácticamente desde los orígenes de esta nación. Pareciera que la era de los golpes militares en América Latina ha llegado a su fin, o que en algunos casos se han ajustado a un mundo cada día más globalizado, y con ello se han creado nuevas formas de intervencionismo occidental para instaurar gobiernos adeptos a su proyecto neoliberal. De esta manera, en el siglo XXI la modalidad de los llamados *golpes blandos* vino a darle un rostro menos agresivo al, a todas luces ilegal, intervencinismo norteamericano; además, tales golpes han sido apoyados por movilizaciones internas que pretenden darles un cierto grado de legitimidad. Sin embargo, no hay duda de que son los intereses de grupos miniritarios apoyados por el imperialismo los que intentan estos golpes, y que además recurren a la violencia sin mayor escrúpulo si las estrategias pacíficas no cumplen con el objetivo. No obstante, también es indudable que es posible resistir a estos golpes y derrotarlos.

En "Auge y declinación de los gobiernos progresistas en América Latina", Armando Páez plantea que la atmósfera de descontento social por los efectos de la gestión de los gobiernos neoliberales fue propiciando la búsqueda de alternativas para votar en las elecciones, lo que permitió a grupos de izquierda llegar al gobierno y mostrar a la ciudadanía que ellos constituían una opción política conveniente, al mismo tiempo que adquirían experiencia en el ejercicio del gobierno. Es indudable que una serie de medidas adoptadas por estos gobiernos van en dirección contraria a la corriente neoliberal que los sectores de derecha impusieron en la región desde los ochenta. Sin embargo, por otro lado, aspectos como la falta de proyectos de transformación estructural del aparato productivo de estos países, que siguieron basando su economía en la producción de materias primas para el mercado mundial, la falta de profundidad de las medidas tributarias en relación con las ganancias de las grandes empresas transnacionales, con las cuales los Estados a menudo

participaron como socios —a pesar del creciente daño ecológico—, así como el reconocimiento solamente discursivo de la plurinacionalidad y la ausencia de soporte constitucional para varios de los derechos reconocidos previamente en la mayoría de estos países, provocaron el distanciamiento entre los países y los gobiernos.

En “Los gobiernos progresistas en América Latina. Senderos Luminosos”, el profesor Pablo Casillas propone que, a finales del salvaje siglo xx, con el neoliberalismo, se abre el esperanzador siglo xxi con los gobiernos progresistas en América Latina, cuyas distintas expresiones son el socialismo latinoamericano del Sumak Kawsay y la socialdemocracia latinoamericana. Éstas fueron alternativas diferentes al neoliberalismo. Para su estudio, se tomaron algunas consideraciones teórico-metodológicas sobre el Estado progresista, una filosofía política diferente al liberalismo eurocentrista, con diversas propuestas económicas, la relación entre la sociedad y los gobiernos progresistas y las perspectivas de los gobiernos progresistas en el corto plazo. De estas consideraciones, diferentes al neoliberalismo, se observó que tuvieron una profunda transformación en las estructuras mentales; el ejercicio de la democracia; la concepción de la política y la ética; los replanteamientos de las visiones del mundo, la humanidad y la naturaleza, y su relación intrínseca. Fue una esperanza llena de alegría, la utopía hecha realidad, pero, como tal, inalcanzable en su plenitud, toda vez que las fuerzas del capitalismo, el patriarcado, el colonialismo y el racismo que se han impuesto eurocéntricamente en América Latina desde su conquista, impidieron tal sueño. Por el contrario, la extrema derecha, los organismos internacionales (bm, fmi), las transnacionales y los Estados Unidos regresaron con mayor coraje y fuerza en forma de neofascismo, neocolonialismo, neorracismo y ultraneoliberalismo. Ahora tal sueño no sólo es exiguo sino que la propia existencia de la humanidad y la naturaleza, el mundo en el que vivimos y habitamos, están en riesgo.

En “La difícil transición hacia la 4T. Desarrollo, inercias y antagonismos”, Jorge Ceja y David de Anda dan cuenta de las circunstancias en que, en las elecciones federales de julio de 2018, se dio el triunfo del

partido político Morena, y en particular de su candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador. Los autores nos presentan la significación histórica de estos hechos y las expectativas que todo ello generó. Además, muestran un breve esbozo de la trayectoria política de AMLO, y nos hablan de su ideario político, social y económico, que, desde su perspectiva, conlleva el abandono del paradigma neoliberal. También exhiben algunas de las directrices delineadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y abordan la postura gubernamental ante el fenómeno del extractivismo minero y algunas de las contradicciones y conflictos derivados de la visión desarrollista del presidente, específicamente a partir de los megaproyectos que su administración se ha propuesto impulsar. Finalmente, el trabajo da cuenta de la conformación y las resistencias desplegadas por un sector de la derecha mexicana cuyo principal propósito es lograr la restauración del régimen autoritario.

En "La política exterior mexicana. Un breve recorrido por el tiempo hasta la gestión de la Cuarta Transformación", la investigadora Anabel Castillón sostiene que, sin duda, la política exterior es un elemento fundamental para comprender la relación que México mantiene con otros países, que de una u otra forma impacta la vida nacional. Para poder entender la propuesta internacional de la Cuarta Transformación, se hace una rápida reconstrucción de la evolución y las características de la política exterior del Estado mexicano, partiendo de la identificación de algunos aspectos políticos e incluso económicos que permitan comprender la participación de México en el mundo. Si bien se ofrece con claridad la gran cantidad de información que existe al respecto, la intención es presentar de forma breve y clara elementos de la política exterior mexicana, para contrastarlos con los resultados obtenidos por la administración del presidente López Obrador. Es evidente que se trata de una administración en curso; por tanto, lo que se vierte son acontecimientos, momentos y circunstancias que han impactado la política exterior. Aun así, es conveniente señalar que aún falta trecho por caminar y momentos y circunstancias que explorar con los que la Cuarta Transfor-

mación nos llegue a sorprender y con los que se espera deje un legado en lo que se refiere a la política exterior.

En "Las tensiones de los gobiernos progresistas y su reflejo en la reacción conservadora. El *golpe suave* en Brasil como enseñanza histórica", la profesora Martha Guadalupe Loza considera que, si se subrayan algunas características de la *corriente progresista* y si se observan las tensiones que sus gobiernos experimentaron en el período 2003-2016, pueden identificarse las reacciones conservadoras frente al intento de disminuir la hegemonía y poder de la derecha latinoamericana. En este sentido, Brasil se convierte en el caso paradigmático de este proceso, por las pretensiones proyectadas y los logros realizados. Y, sobre todo, la desestabilización provocada a través de los llamados *golpes blandos* —con altos costos para la economía, la política, las relaciones sociales y la proyección internacional de los países— se convierte en una advertencia para la izquierda continental.

En "Argentina y sus vaivenes político-económicos. El ascenso y declive de la derecha con Mauricio Macri y el PRO", Leticia Carrasco Gutiérrez sostiene que, en los últimos cuarenta años, Argentina se ha caracterizado por presentar en forma recurrente una serie de crisis económicas y, a la par de éstas, una conflictividad social y política por lo menos cada diez años. En el sistema político argentino ha predominado el bipartidismo para las elecciones presidenciales y el multipartidismo para las legislativas. Desde 1916 los argentinos han tenido presidentes radicales o peronistas, es decir, de la Unión Cívica Radical (UCR) y del Partido Justicialista, respectivamente. Por lo menos así fue hasta el 15 de diciembre de 2015, cuando tomó posesión como presidente de la nación argentina Mauricio Macri, un empresario identificado con la derecha que no provenía de ninguna de las dos principales corrientes políticas y que fue electo democráticamente logrando un amplio respaldo social entre los sectores conservadores tradicionalmente antiperonistas y antikirchneristas. En 2019, y nuevamente con un país en crisis, Macri volvió a postularse para otro período en la presidencia, pero perdió, y el gobierno y el poder regresaron a manos del peronismo.

En "Implicaciones socioambientales del gobernar y la conflictividad social en América Latina y el Caribe", el profesor Jorge Gastón Gutiérrez realiza un acercamiento a las implicaciones de los procesos de conflictividad socioambiental generados por políticas y dinámicas económicas productivas, tanto de gobiernos neoconservadores como progresistas o nacional populares de países de la región. Para fundamentar dicho acercamiento, se toman como base nociones de la ecología social que orientan el análisis de las relaciones entre poder político, procesos productivos, metabolismo social y conflictividad socioambiental.

Y, finalmente, en "Morena, de movimiento social a partido político a pocos años de su conformación (2014-2019)", María Guadalupe Moreno y Lucía Ibarra abordan la compleja relación movimiento-partido, partido-movimiento, que se ha desarrollado en años recientes desde la sociología política para entender el proceso de institucionalización del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en México, puesto que, de ser un movimiento social en 2010, se constituyó como partido político en 2014. En 2018, Morena participó como partido político, obteniendo el triunfo de la presidencia de la República y una mayoría en las cámaras de Senadores y Diputados con un resultado avasallante, sin precedente en la historia reciente de México.

Orden político e integración regional en América latina: del avance autónomo a la regresión heterónoma (2000-2019)

ALBERTO ROCHA VALENCIA*

Introducción

Hasta fines de la década de 1990, en las Américas sencillamente contábamos con un orden continental americano. No había, pues, algo que pudiera llamarse *orden regional latinoamericano-caribeño*. Durante esos años, los Estados de la región se mantuvieron conectados con una dinámica política continental y, además, ensayaron vincularse entre ellos para impulsar un proceso de integración regional. Tan sólo en 1986, los gobiernos latinoamericanos decidieron formar el Grupo de Río, resultado de la fusión del Grupo de Contadora y el Grupo de Apoyo a Contadora, como mecanismo permanente de consulta y concertación política regional. Pero estos mismos Estados, desde mucho antes, se involucraron en un proceso de integración que recorrió dos períodos: el regionalismo cerrado (décadas de 1960 y 1970) y el regionalismo abierto (décadas de 1980 y 1990). Así pues, hasta inicios de los años noventa, los gobiernos y Estados latinoamericanos solamente lograron constituir el Grupo de Río y hacer avanzar el proceso de integración regional en dos períodos. Todo esto mientras los procesos regionales fueron compatibles con el orden continental americano y panamericano.

A inicios de los años 2000, llegaron los gobiernos progresistas a la región (en Venezuela sucedió a finales de los años noventa) y se inició el

* Profesor e investigador. Universidad de Guadalajara.

tercer período de la integración regional (2000-2015), conocido como *período del regionalismo alternativo*, *semicerrado y autónomo*, *también denominado posneoliberal y poshegemónico* (Rocha, 2019; Sanahuja, 2008-2009). Los Estados y gobiernos progresistas de la región fueron liderados por Lula, Chávez, Kirchner, Morales, Correa, entre otros, pero, sobre todo, por un Estado, la potencia regional sudamericana: Brasil. Asimismo, los procesos de integración regional se encontraron bajo la conducción de gobiernos progresistas y el liderazgo de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) (Rocha, 2020).

La hipótesis que proponemos en este trabajo es que en el período 2000-2015 se inició la gestación de un orden regional latinoamericano-caribeño que propició la unificación, cohesión y autonomización de la región. Esto sucedió debido a la convergencia de dos dinámicas: la dinámica interestatal intergubernamental y la dinámica de la integración regional también intergubernamental; esto es, los Estados y sus gobiernos se incorporaron a una dinámica (geo)política regional y los procesos de integración también lo hicieron. Esto generó condiciones favorables para la creación de la CELAC como foro político y diplomático regional. Más todavía, este orden regional nuevo, nunca experimentado, trató de articularse con el naciente orden internacional euroasiático conducido por China, Rusia e India.

En la cuarta etapa de la integración regional que se inició en 2016 y que sigue en curso, los nuevos gobiernos de derecha conservadores y neoliberales (*neocons*) cerraron el período anterior, detuvieron la convergencia del proceso interestatal y del proceso de integración y desactivaron la cúspide (geo)política de estos dos procesos, la CELAC. Así se terminó el ensayo de construcción de un orden regional latinoamericano-caribeño. Enseguida, los gobiernos *neocons* reanudan la conexión de sus Estados y gobiernos con el orden continental americano y neopanamericano (que había perdido vigencia), y el proceso de integración regional fue replanteado y reestructurado, ahora desde un enfoque unidimensional: económico comercial e intergubernamental, sin mayores perspectivas sociales, culturales y políticas.

El Grupo de Lima (que ha pretendido reemplazar a la CELAC) intentó apuntalar estos dos procesos, que han llevado a la región a su reincorporación a la OEA (de los EUA y de su vasallo Almagro), y pretendió retomar el llamado *regionalismo abierto* de bases neoliberales. En consecuencia, el Grupo de Lima buscó conectar con el gobierno estadounidense de Trump de orientaciones neoliberales (en economía), conservadoras (en política, además de autoritario y racista) y retronacionalista-proteccionista (supremacista).

Así pues, en la región estamos experimentando un verdadero proceso de regresión histórica y de heteronomía geopolítica. En esta etapa en curso, el presidente de Brasil, Bolsonaro, es la máxima expresión de este proceso histórico: reprimarización económica, reprivatización extrema, autoritarismo político, racismo primario y subordinación geopolítica (Singer, 2020; Löwy, 2019).

Aproximación al orden continental americano

El orden político internacional (bipolar) que surgió de la Segunda Guerra Mundial reposaba sobre organizaciones espaciales de Estados, ya sea continentales o regionales. Estas organizaciones continentales o regionales de Estados funcionaban bajo la hegemonía de alguna potencia mundial o, en su caso, de dos o tres potencias.

En las Américas se constituyó un orden continental cuando los EUA se convirtieron en la primera potencia del planeta en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. El desenvolvimiento histórico de este orden continental abarcó el período de Guerra Fría (1950-1990) y parte de la pos-Guerra Fría (1990-2016), esto es, durante toda la bipolaridad y parte del ensayo unipolar (Rocha, 2019c).

Durante estos años (1945-1999), América Latina y el Caribe (ALC) se encontraron totalmente articulados al orden continental americano o panamericano; la excepción fue Cuba. Los elementos de este orden continental fueron los siguientes: doctrina Monroe (1823) y Corolario Roosevelt (1904); el llamado *panamericanismo* y la idea de ALC como "patio trasero"; la hegemonía de los EUA (1945); el TIAR (1947); la OEA

(1948); el Pacto de Bogotá (Tratado Americano de Soluciones Pacíficas) (1948); la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1959-1960) y la Convención Americana de Derechos Humanos (1969); el BID (1959); la Carta Democrática (2001); el Comando Sur de los EUA (fundado en 1943 y reactivado en 2008).

En síntesis, este orden continental fue sumamente jerárquico y hegemonizado por los EUA, donde la situación de ALC fue la de una región totalmente subordinada a la geopolítica y la geoeconomía continental de los Estados Unidos. En consecuencia, no había posibilidad de proyectar una alternativa regional latinoamericana y caribeña. Todo acto de resistencia de cualquier gobierno de la región fue controlado y desactivado por diversos medios, hasta llegar a los golpes de Estado (militares y civiles) (Saxe-Fernández, 2006).

El giro geopolítico de los años ochenta en ALC

En los primeros años de la década de 1980, se produjo un acontecimiento geopolítico regional: el giro geopolítico de dos Estados semiperiféricos como México y Brasil. México abandonó el nacionalismo revolucionario independentista para asumir el neoliberalismo y después adoptar la asociación estratégica con los EUA, lo que lo conducirá a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). De esta manera, la política exterior de México contó con un fuerte énfasis Sur-Norte. Pero esta direccionalidad fue complementada con una orientación Sur-Sur, que le permitió participar en la Asociación de Estados del Caribe (AEC), el Plan Puebla Panamá (PPP, que después se denominó *Proyecto de Integración Mesoamericano* [PIM]) y, un poco más tarde, en la Alianza del Pacífico (AP). Brasil, por su parte, abandonó la asociación estratégica con los EUA para adoptar una postura desarrollista y autonomista, y se inclinó por una estrategia de asociación regional, que después daría lugar al Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Así, la política exterior de Brasil tomó el rumbo Sur-Sur, que lo condujo a formar la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y, posteriormente, a integrar el foro BRICS (Rocha y Morales, 2008).

Este giro geopolítico de los ochenta fue de tal envergadura que impactó a toda la región, con las siguientes consecuencias: 1) la conformación de dos potencias regionales geopolíticamente divergentes; 2) la llegada de los gobiernos progresistas desde finales de la década de 1990; 3) la decadencia del orden continental panamericano casi al cierre de los años noventa, y 4) la configuración de un orden regional autónomo desde inicios de los años 2000, basado en la creciente dinámica interestatal e intergubernamental autonomista y en el reimpulso del proceso de integración regional multidimensional.

Aproximación a la integración regional latinoamericana

Desde los años sesenta, el proyecto de conformación de ALC como una región permitió impulsar un proceso de integración regional que ha atravesado tres períodos y que actualmente se encuentra en el cuarto:

Primer período, 1960-1979: El regionalismo cerrado y su lógica de desarrollo hacia adentro (de cuño estructuralista) sustentado en el modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI). En este período se impulsaron el proyecto de construcción de un Mercado Común Latinoamericano y se crearon instituciones regionales como la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), el Parlamento Latinoamericano (PARLATINO) y el Sistema Económico Latinoamericano (SELA). El enfoque fue regional al principio, y luego se pasó al enfoque subregional, lo que dio lugar a la formación del Acuerdo de Cartagena (AC), el Mercado Común Centroamericano (MCCA) y la Comunidad del Caribe (CARICOM). La crisis del modelo ISI puso fin a esta etapa.

Segundo período, 1980-1999: El regionalismo abierto y su lógica de desarrollo hacia afuera (de matriz neoliberal) que reposa sobre la acción externa de los capitales (de afuera hacia adentro) y la dinámica económica volcada hacia las exportaciones. A nivel regional, se mantuvo el proyecto de construcción del Mercado Común Latinoamericano, se impulsó el proyecto de Comunidad Latinoamericana de Naciones (CLAN), la ALALC se transformó en el Área de Latinoamericana de Inte-

gración (ALADI), apareció el Grupo de Río y se mantuvo el SELA. En el nivel subregional, los esquemas anteriores fueron reestructurados: el AC se convirtió en la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el MCCA se transformó en el Sistema de Integración de Centro América (SICA) y la CARICOM continuó como tal. Ahora bien, en este período se intensificó la dinámica subregional y se crearon el Grupo de los Tres (G3), la Asociación de Estados del Caribe (AEC, que no pasó de ser un esquema de cooperación) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR). En este período se pensaba que las dinámicas subregionales podrían abonar a la dinámica regional y converger en ella en algún momento. Esta etapa se cerró con la crisis del modelo de regionalismo abierto y la experiencia de los gobiernos neoliberales.

Hasta este segundo período, lo que acontecía en el proceso general regional de ALC no inquietaba seriamente a la superpotencia estadounidense. La dinámica interestatal latinoamericana-caribeña se encontraba articulada en el orden continental (el Grupo de Río no ofrecía mayor resistencia). Aun así, para evitar cualquier riesgo, EUA se propuso controlarla por medio de las Cumbres de las Américas. El proceso de integración regional tampoco preocupaba a la superpotencia norteamericana, pero igual trató de sujetarlo por medio del Proyecto Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que no se proponía otra cosa que la articulación subordinada del proceso de integración regional de ALC al TLCAN. Entonces, desde la década de 1990 el orden continental contempló las dos dinámicas de la región: la interestatal y la de integración regional. Pero estas dos dinámicas no estaban articuladas.

Tercer período, 2000-2015: Estamos ante el regionalismo alternativo y semiabierto (cercano al neoestructuralismo y al nuevo desarrollismo) que fue impulsado por los gobiernos progresistas. En un primer momento, los cambios se produjeron en el nivel subregional cuando se dio la convergencia integradora de México con el SICA. Apareció el Plan Puebla Panamá (PPP) y, más adelante, el Proyecto de Integración Mesoamericano (PIM). Esto es, tomó forma una suerte de mesorregión de integración, muy influida por el rol de México como potencia regional.

En un segundo momento, tomó forma el Área de Libre Comercio de Sudamérica o el Proyecto de Integración Sudamericano (PIS), con base en la convergencia integradora entre el MERCOSUR, la CAN y Chile. Entonces se conformó de manera inicial la segunda mesorregión, liderada por la otra potencia regional, Brasil. Este proceso sudamericano fue nombrado Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR). Asimismo, en este momento se fundó la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), y Venezuela decidió salir de la CAN para incorporarse al MERCOSUR. En un tercer momento, se creó la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en el nivel regional, y la Alianza del Pacífico (AP) en el nivel subregional (Rocha, 2018c).

Esta etapa se cerró con el relativo declive de los gobiernos progresistas, debido a la crisis de los modelos económicos primarios exportadores y extractivistas, que, a su vez, fue provocada por la caída de los precios de las materias primas (petróleo, gas, minerales diversos y productos agrícolas). Es entonces cuando se inició la emergencia de los gobiernos conservadores y neoliberales.

El avance hacia un orden regional autónomo: La convergencia de las dinámicas interestatal y de integración regional (2000-2015)

¿Qué sucedió con la dinámica interestatal y la dinámica de integración en la región? Desde nuestro punto de vista, ésta es una cuestión clave, por lo que trataremos de responderla en este apartado.

La dinámica interestatal, los gobiernos progresistas y los tres foros

La convergencia México-Centroamérica condujo hacia la formación del Foro de Tuxtla Gutiérrez, un foro mesoamericano para una dinámica interestatal mesoamericana, entre México y los Estados centroamericanos. Aquí el rol de la potencia regional mesoamericana (México) fue de suma importancia.

La convergencia sudamericana andina y atlántica llevó a la constitución de la UNASUR, un foro sudamericano para una dinámica interestatal sudamericana entre los países del MERCOSUR, los de la CAN y Chile.

Como en el caso anterior, aquí el rol de la potencia regional sudamericana (Brasil) fue remarcable.

En la región, por iniciativa de Brasil —secundado por México—, el Grupo de Río dio paso al impulso de las Cumbres de América Latina y el Caribe (CALC) (I, II y III), que fueron las que concibieron, diseñaron y crearon la CELAC, un foro regional para impulsar la dinámica interestatal regional. De esta manera, las dos dinámicas interestatales mesorregionales (mesoamericana y sudamericana) y la cooperación entre Brasil y México, de alguna manera, terminaron retroalimentando a la dinámica interestatal regional general; mismo si las dos potencias regionales guardan sus distancias y preservan sus intereses. Y, no está de más decirlo, los gobiernos progresistas y también los neoliberales fueron los impulsores de las dos dinámicas interestatales mesorregionales y de la dinámica interestatal regional.

La dinámica de la integración regional y los dos mesosistemas de integración regional

Las dinámicas de las interestatales mesorregionales eran de integración (mesoamericana y sudamericana); y la dinámica interestatal regional era de integración latinoamericana y caribeña. Ahora bien, lo que ocurrió en la tercera etapa del proceso de integración de ALC fue la convergencia entre las dinámicas interestatales mesorregionales y la regional, y esta convergencia fue lo que permitió que un *bosquejo político-institucional regional* se construyera de la siguiente manera:

- En la cúspide la CELAC.
- En el segundo nivel, el Foro de Tuxtla Gutiérrez y la UNASUR.
- En el tercer nivel, el PPP/PIM y el PIS.
- En el cuarto nivel, el MERCOSUR, el SICA, la CARICOM, la CAN, la AP, la ALBA, la AEC y el G-3.
- En la base, los TLC bilaterales y los ACE.

Este bosquejo político-institucional regional proporcionó a la región, por un lado, unidad, cohesión y autonomía; por otro lado, una dinámica interna regional (de relación entre los Estados y los procesos de integración) y una dinámica externa (de relación de la región con otras regiones y países). Dicho sea de paso, esto nunca había sucedido en la historia de ALC: nunca los 33 gobiernos latinoamericanos y caribeños se habían reunido sin la tutela de la superpotencia mundial ni los ministros de todos los sectores y altas autoridades de los países habían convergido en múltiples foros y actividades. Pues bien, todo esto no era más que un orden regional latinoamericano-caribeño naciente, experimental y con proyección histórica.

Además, es importante subrayar dos cuestiones. Primero, este proceso fue liderado por los gobiernos progresistas de la potencia regional brasileña y de otros Estados de la región (Argentina, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Chile, Uruguay, Nicaragua, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Cuba). Segundo, se propuso conectar nuestro naciente orden regional con el orden mundial emergente euroasiático liderado por China, Rusia e India. No es para nada extraño que se haya puesto en marcha el Foro CELAC-China (2014) y que esta instancia para formar relaciones geoeconómicas y geopolíticas se haya promovido por medio de reuniones ministeriales (Rocha, 2018b).

Ahora bien, por progresismo entendemos un movimiento político y social articulado alrededor de las siguientes premisas: desarrollo sostenible (industrialización adecuada y extractivismo minero regulado), bienestar general (erradicación de la pobreza, combate de la desigualdad social, defensa de los derechos sociales y humanos), sociedad civil dinámica y participativa, Estado desarrollista (promoción de las empresas públicas estratégicas), democracia participativa, política exterior autónoma y basada en una geopolítica Sur-Sur, entre otras.

El giro geopolítico del período 2016-2018 en ALC

En el contexto de la finalización de la pos-Guerra Fría, del fracaso del ensayo unipolar estadounidense y del inicio de una multipolaridad, se

produjo el segundo giro geopolítico de los Estados semiperiféricos y de las potencias regionales de ALC. Brasil regresó a la asociación estratégica con EUA y adoptó una postura dependiente respecto de la superpotencia mundial; además, cuestionó su asociación estratégica regional con el MERCOSUR, se retiró de la UNASUR y se abstuvo de participar en las Cumbres de la CELAC.

La política exterior de Brasil se posicionó en el eje Sur-Norte, aunque mantuvo una relación geoeconómica con China. Además, el gobierno de Brasil se insertó firmemente en el campo de los gobiernos conservadores y neoliberales. México volvió a retomar una postura de independencia y autonomía. Esta potencia regional persistió en su asociación estratégica con los EUA y Canadá (TLCAN, ahora Tratado México, EUA y Canadá [T-MEC]), pero también continuó con su inserción y membresía en el PIM y la AP; en la actualidad, tiene bajo su responsabilidad la presidencia pro tempore de la CELAC y se encuentra implementando un Plan de Trabajo (de 14 proyectos) que se propone la reactivación de este organismo regional. Se puede anotar que, en la política exterior de esta potencia regional, se combinan el eje norteamericano (Sur-Norte) y el eje latinoamericano (Sur-Sur); el primero fue renovado y el segundo se volvió a fortalecer. Además, el gobierno actual de México se ha insertado en una perspectiva política progresista.

Este nuevo giro geopolítico de las dos potencias regionales ha impactado en toda la región, como sucedió con el primero, y las consecuencias más relevantes son las siguientes: *1)* el desmantelamiento y debilitamiento de la potencia regional sudamericana (Brasil) y el fortalecimiento de la potencia regional mesoamericana (México); *2)* el posicionamiento geopolítico casi opuesto de ambas potencias regionales, lo que constituyó la nueva divergencia geopolítica regional; *3)* el arribo de gobiernos conservadores y neoliberales; *4)* el resurgimiento del orden continental retropanamericano, con sus rasgos supremacistas y jerárquicos; *5)* la creciente dinámica interestatal dependiente y subordinada de la superpotencia estadounidense, y *6)* la decadencia del proceso de integración regional (Serbin, 2018).

La regresión heterónoma regional y el orden continental: La ruptura de la convergencia de las dinámicas interestatales y de integración regional (2016-2019)

A partir de ahora todo lo que se genere (geo)políticamente en la región irá en dirección contraria del proceso impulsado en el período 2000-2015. El orden regional naciente fue considerado demasiado peligroso para las oligarquías conservadoras y neoliberales y también para la superpotencia estadounidense. Las oligarquías nativas regionales y los intereses imperiales estadounidenses, en una más de sus coincidencias retropanamericanas, decidieron aferrarse al timón geopolítico del control de la región. Es entonces cuando se decidió desactivar el proceso histórico que había concebido tal orden regional original; para ello, las oligarquías nativas y los intereses imperiales continentales decidieron actuar conjuntamente. Lo primero que debían hacer era desarticular la dinámica interestatal y la dinámica de la integración regional y, en segundo lugar, impactar el liderazgo del Grupo de Gobiernos Progresistas, atacar y desplazar a cada uno de estos gobiernos y, a los más resistentes, mantenerlos bajo acoso permanente.

La dinámica interestatal subordinada al retropanamericanismo

No es nada claro el proceso que permitió llegar a las fuerzas conservadoras y neoliberales al gobierno de cada uno de sus países. Este apartado no es el lugar adecuado para revisar la actuación conjunta de los intereses continentales estadounidenses y de los intereses de las oligarquías nativas regionales. Empero, los casos están a la vista de todos: Brasil, Paraguay, Honduras, Ecuador, Bolivia, Chile, Guatemala y El Salvador, donde el juego oligárquico-imperial fue descarado; entre ellos, Argentina y Uruguay transitaron hacia el conservadurismo neoliberal de manera menos tensa y caótica. Venezuela y Nicaragua quedaron plenamente expuestos y hasta el momento resisten la desestabilización y las amenazas de intervención.

Por *conservadurismo neoliberal* entendemos un movimiento político y social conformado alrededor de las siguientes premisas. Es conservador

políticamente, y neoliberal económicamente. Los elementos relevantes de este conservadurismo político son la democracia restringida, el recorte de los derechos políticos y sociales, el gobierno oligárquico (fusión de la oligarquía política y de la oligarquía empresarial), el Estado autoritario y la sociedad civil contenida; y los del neoliberalismo económico son muy visibles: un patrón económico comercial primario-exportador y fuertemente anclado en el extractivismo minero, un Estado antidesarrollista y privatizador (de las empresas y de las ganancias), un gobierno de malestar (recorte del gasto público en educación, salud, vivienda, prestaciones sociales, investigación e innovación), la promoción de la inserción de las transnacionales y un mercado interno restringido.

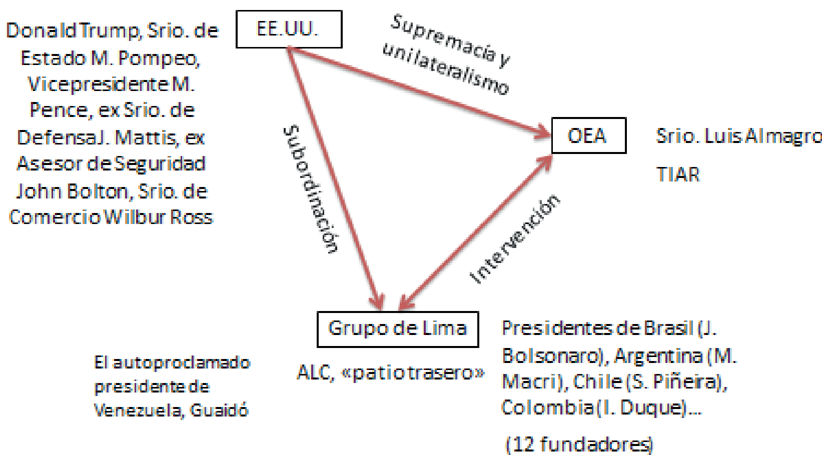
Los gobiernos conservadores y neoliberales avanzan y fundan el Grupo de Lima, en un encuentro de alcance regional que emite la *Declaración de Lima* (agosto de 2017), cuyo tema central es un cuestionamiento radical del gobierno de Venezuela y la amenaza de una posible intervención. Además, estos gobiernos *neocons* acordaron y propusieron separar a sus Estados de los foros político-diplomáticos existentes (UNASUR y CELAC) con la finalidad de vaciarlos y paralizarlos. La UNASUR fue vaciada, luego desactivada y finalmente refundada como Foro para el Progreso de América del Sur (PROSUR), en febrero de 2019. Este foro realizó su primera cumbre con el nombre de *Encuentro de presidentes de América del Sur* (marzo de 2019). La CELAC también fue desactivada y sigue paralizada, pero no se atrevieron a desarticularla y liquidarla; las presidencias pro tempore siguieron rotándose, pero no hay más cumbres presidenciales; la última fue la V Cumbre en el año de 2017. No está de más anotarlo, el Grupo de Lima pretendió reemplazar las cumbres presidenciales de la CELAC, pero no logró sumar y alcanzar una proyección regional.

Las consecuencias de los hechos anteriores son el regreso de la presencia imperial y el ejercicio de la supremacía continental de los EUA, con sus amenazas unilaterales permanentes; el reforzamiento del rol retropanamericano de la OEA con sus decisiones de intervención política y militar en la región, y la diplomacia de subordinación y predisposición

del Grupo de Lima, que nuevamente ha convertido a la región en el patio trasero de la superpotencia estadounidense. La triada EUA-OEA-Grupo de Lima (apoyado por el PROSUR) (Gobierno USA, 2017; García, 2018; Grupo de Lima, 2017) hizo sentir su peso (geo)político para inducir una regresión panamericana en el conjunto de la región y en cada uno de los países donde hubo gobiernos progresistas.

El triángulo diplomático retropanamericano que se presenta a continuación permite visualizar el mecanismo montado por los gobiernos conservadores y neoliberales.

Figura 1
El triángulo diplomático retro-panamericano
y la política regional entreguista del Grupo de Lima



Elaboración propia

El ejemplo simbólico de esta regresión histórica es el desmantelamiento de la potencia regional sudamericana, Brasil; la potencia regional, líder de la región, miembro integrante del foro BRICS y conductora de la conexión de la región con el orden mundial naciente en Asia Pa-

cífico. Claramente, hemos regresado al orden continental retropanamericano, donde quedan prohibidos los ensayos políticos regionales autónomos, mientras que los gobiernos progresistas que quedan están en la lista negra y no son bienvenidos nuevos gobiernos de este tipo.

La dinámica de la integración regional en involución

Estamos en la cuarta etapa de la ir que inició en 2016. La involución de los procesos de integración está ya bien trazada. Adiós a las perspectivas de desenvolvimiento multidimensional (económica y comercial, política, social y cultural) y a la profundización de los procesos de integración regional (más allá de las áreas de libre comercio y de las uniones aduaneras para formar mercados comunes). Ahora se recomiendan acuerdos comerciales (tipo TLCAN y T-MEC) que no distorsionen los movimientos libres de los mercados. En un comienzo, parecía que los gobiernos conservadores y neoliberales retomarían el camino del *regionalismo abierto*, pero, como no hay nada claro, también quisieran emprender la ruta pragmática del comercio bilateral, que bien podría debilitar y producir crisis en los procesos de integración.

Éste es un momento de cuestionamiento de los procesos de integración subregionales existentes (MERCOSUR, CAN, SICA, CARICOM…) por su multidimensionalidad avanzada, inicial supranacionalidad y sus rasgos políticos y sociales. Se argumenta que estos procesos se tornaron muy políticos, puesto que se desviaron de los objetivos para los que fueron creados. Claro está, se soslaya el debate entre el modelo de la UE y el modelo del TLCAN. En fin, se estaría promoviendo el modelo unidimensional económico comercial, al estilo del TLCAN y hoy T-MEC, donde la profundidad de la integración implica abarcar el mayor número de dominios y sectores de la actividad económica comercial (Mesquita, 2018).

A finales de la segunda década del siglo XXI, se proyectó la creación de una Área de Libre Comercio Latinoamericana con base en la convergencia del MERCOSUR (el golpista Temer se encontraba en el gobierno de Brasil y el presidente neoliberal Macri estaba en el gobierno de Argentina) y la AP (el neoliberal Peña Nieto en el gobierno de México),

pero las situaciones políticas de Argentina (con la llegada de un nuevo gobierno progresista) y Brasil (con el arribo de un gobierno cercano al neofascismo) cambiaron en el mercosur y también cambió en la AP la situación política de México (donde fue elegido un gobierno progresista). El mercosur ingresó en una situación crítica y la unanimidad política neoliberal en la AP se terminó, entonces ese proyecto quedó detenido.

Habrá que observar lo que sucede en los próximos meses y años, pero a los gobiernos *neocons* les causan dolor de cabeza los modelos multidimensionales y de más alto nivel de integración regional. En esta curta etapa, están prohibidos los experimentos avanzados de integración regional, pues los tiempos de los gobiernos *necons* no son los de armar sino los de desmantelar y desactivar, siguiendo las orientaciones imperiales estadounidenses y trumpistas.

Conclusiones

El orden regional naciente que implicó la articulación virtuosa entre la dinámica interestatal y la dinámica de integración regional, con la CELAC en su cúspide, y que permitió una autonomía nunca experimentada por la región ha sido desmontado. Fue muy evidente que el experimento de configurar una región autónoma se consideró altamente peligroso para mantener la estabilidad de los intereses de la superpotencia estadounidense y también para la preservación de los intereses de las oligarquías conservadores y neoliberales en la región.

ALC está experimentando una regresión histórica sin precedente con los gobiernos *neocons*, pues éstos están tratando de borrar las huellas del avance histórico y el bienestar logrados por los gobiernos progresistas en desarrollo en cada uno de sus países. En la actualidad, la tendencia hacia la regresión histórica es predominante en la región debido a la existencia de una mayoría de gobiernos *neocons*, y la tendencia hacia el avance histórico es minoritaria, pues los gobiernos progresistas son los menos.

La región, gracias a las políticas exteriores de los gobiernos *neocons*, ha sido revinculada al orden continental retropanamericano, con las consecuencias que ya fueron expuestas. Pero en este dominio se presenta

una situación contradictoria: los gobiernos *neocons* restablecieron relaciones geopolíticas con la superpotencia estadounidense y mantuvieron sus relaciones geoeconómicas con China.

Los gobiernos *neocons* habrían alcanzado su punto máximo de desenvolvimiento y se encontrarían estancados, involucionando e ingresando en situaciones de crisis. Los levantamientos y resistencias de los movimientos sociales populares durante 2019, en casi toda la región, fueron expresiones muy claras de lo que se está gestando.

En el horizonte aparecen las posibilidades de un nuevo despliegue regional de gobiernos progresistas, esto después del arribo de gobiernos progresistas en México y Argentina, dos países importantes en la región.

Bibliografía

García Encina, Carlota (2018), *La estrategia de Seguridad Nacional de la administración Trump*, documento de trabajo, Madrid, Real Instituto Elcano, 6 de abril..

Gobierno EUA (2017), *The 2017 National Security Strategy of the United States*, Washington D.C., 12 de diciembre.

Grupo de Lima (2017), *Declaración de Lima*, Lima.

Mesquita M., Mauricio (coord.) (2018), *Conectando los puntos. Una hoja de ruta para una mejor integración de América Latina y el Caribe*, Banco Interamericano de Desarrollo.

Löwy, Michael (2019), "Neofascismo: Um fenómeno planetario: O Caso Bolsonaro", *Revista Cronicas do Sul*, Brasil, en https://cronicasdosul.com.2019/11/02/neofascismo-um-fenomeno-planetario-ocaso-bolsonaro-michael-lowy/

Rocha, Alberto (2020), "El proceso de integración regional de América Latina y el Caribe en su tercera etapa (2000-2016): Dinamización de los procesos de integración y auge de la autonomía regional", presentación y coordinación de la *Revista InterNaciones*, núm. 22, año 9, enero-junio, Universidad de Guadalajara.

___ *et al.* (2019a), "La integración latinoamericana en debate", Alberto Rocha, José Briceño, Jorge Leal y Miguel Serna (coords.), *Incertidum-*

bre, formatos institucionales fragmentados y caminos alternativos latentes, Buenos Aires, TESEO, CLACSO, ALAS.
___ (2019b), "La dimensión político-institucional de los procesos de integración de América Latina (2000-2016)", *Revista Anuario Latinoamericano, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales*, vol. 7, Lublin, Universidad María Curie-Sklodowska.
___ (2019c), "América Latina en las aguas agitadas de la multipolaridad del orden mundial emergente. Política y geopolítica regional (2000-2018)", *Revista de Sociología,* núm. 29, Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
___ (2019d), "Un ensayo de gobernabilidad autónoma regional en un contexto de gobernabilidad-gobernanza subregional en América Latina (2000-2016)", Rita Giacalone, Edgar Vieira y Fernanda Caballero (coords.), *La integración regional latinoamericana y europea en el siglo XXI: Marco para la reflexión sobre su presente y futuro*, Bogotá, Universidad Cooperativa de Colombia.
___ (2006-2015), coordinador de la *Dimensión Política del Anuario de la Integración Latinoamericana y Caribeña* (Jaime Preciado Coronado, coordinador general) y autor de un artículo en cada uno de los anuarios 2006-2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, Universidad de Guadalajara, Jalisco-México.
___ (2018a), coordinador de la dimensión política en *Dimensiones, estrategias y alternativas de la integración autónoma para América Latina y el Caribe. Desafíos para el caso mexicano, 2010-2015* (Jaime Preciado Coronado, coordinador general), tomos I, II, III y IV, Universidad de Guadalajara, Guadalajara-Jalisco.
___ (2018b), "La CELAC en el proceso de construcción de una región autónoma global", en *Dimensiones, estrategias y alternativas de la integración autónoma para América Latina y el Caribe. Desafíos para el caso mexicano*, *2010-2015*, tomo II, Jalisco, Universidad de Guadalajara.
___ (2018c), "La integración autónoma de América Latina: El papel relevante de la CELAC", José Luis Calva (coord.), *La globalización neoliberal en crisis*, México, Consejo Nacional de Universitarios y Universidad de

Guadalajara.
___y Morales, Daniel (2008), "El sistema político internacional de pos-Guerra Fría y el rol de las potencias regionales-mediadoras, los casos de Brasil y México", *Espiral*, vol. 15, núm. 43, Guadalajara, México.
Singer, André (2020), "La cavalcade autoritaire de Jair Bolsonaro", *Le Monde Diplomatique*, París, julio.
Sanahuja, José Antonio (2008-2009), "Del 'regionalismo abierto' al 'regionalismo posliberal'", *Crisis y cambio en la integración regional en América Latina. Anuario de la Integración Regional de América Latina y el Gran Caribe*, núm. 7, Buenos Aires, CRIES-CIEM-CIEI-CEGRE.
Servin, Andrés (2018), "El nuevo orden mundial y América Latina y el Caribe: Modelo para armar", *Revista Mexicana de Política Exterior*, núm. 114, México.
Saxe-Fernández, John (2006), *Terror e imperio. La hegemonía política y económica de Estados Unidos*, Random House Mandadori, México.

Los golpes suaves contra los gobiernos progresistas en América Latina

JAIME EZEQUIEL TAMAYO RODRÍGUEZ
DANIELA PAULINA ÍÑIGUEZ VARGAS

Tal ha sido la legitimidad lograda por los actores que emprendieron este nuevo tipo de golpismo, que en diferentes campos discursivos —intelectuales, periodísticos, etc.— se ha producido un desplazamiento semántico a la hora de nombrarlos, como si el quiebre de la voluntad popular y la soberanía política fueran más "blandos" o más "suaves" porque ya no son necesarias las armas de los militares ni la violencia física directa como metodología predominante de los sectores dominantes para mantener el statu quo.

Lorena Soler

Hablar de *golpes suaves* no es sino referirse a una nueva etapa del intervencionismo norteamericano en América Latina. Las intervenciones en el mundo por parte de los Estados Unidos se sustentan desde una construcción ideológica que considera que este país es excepcional, una idea que parece estar presente prácticamente desde los orígenes de esta nación.

En referencia a Latinoamérica, el sustento parte de la elaboración un tanto simplista de la llamada *doctrina Monroe,* propuesta por el presidente que le dio nombre en 1823. Ésta se resume en la idea de que Estados Unidos no intervendría en los asuntos europeos, mientras que los países de Europa no podrían intervenir en este continente, lo que se sintetiza en la frase «América para los americanos». La única potencia que

podría intervenir en los asuntos de las nuevas naciones latinoamericanas sería Estados Unidos, la naciente potencia en expansión en este continente, y no las viejas potencias colonialistas europeas. Poco después, una ocurrencia periodística dio pie a la elaboración de la idea de que Dios había destinado a Estados Unidos a expandirse y dominar al resto del continente, el llamado *destino manifiesto*.

Así, la ocupación de Texas y la posterior guerra e invasión de México, por la que este país perdió poco más de la mitad de su territorio; la guerra con España para arrebatarle Cuba, Puerto Rico y, en el Pacífico asiático, Filipinas a comienzos del siglo xx, y la división de Colombia y la ocupación de Panamá para construir el canal, tuvieron como justificación estas ideas.

A partir de la Guerra Fría se agregó la idea de preservar «la libertad» en el llamado «mundo libre» frente a los avances del socialismo y de las luchas anticoloniales y nacionales. Invasiones y guerra, como en el caso de Grecia, fueron acompañadas por golpes de Estado —como sucedió en Irán—, así como con la creación de instrumentos militares interestatales dirigidos por Estados Unidos, en primer lugar la otan y también otros en distintas regiones del mundo. En el caso de nuestro continente, se formuló el Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca (tiar) bajo la hegemonía y los principios dictados por los Estados Unidos.

De esta manera, se darían intervenciones militares contra gobiernos legítimos, ya sea con la utilización de ejércitos mercenarios— como el de Guatemala en junio de 1954 contra el gobierno de Jacobo Árbenz— o con un conglomerado de ejércitos nacionales bajo las órdenes norteamericanas —como en Santo Domingo, en abril de 1965, para derrocar al gobierno de Juan Bosch—. Así, con el argumento de impedir la implantación y el avance del comunismo en el continente americano, se derrocaron gobiernos nacionalistas y se impusieron gobiernos afines a los intereses económicos y políticos de los Estados Unidos.

A la par, los Estados Unidos comenzaron a promover en esta región golpes de Estado con los mismos objetivos, con la participación de los ejércitos nacionales sometidos a los designios norteamericanos. Así se

inició esta nueva era de golpismo antinacionalista y pronorteamericano con el golpe de Estado en 1964 contra el gobierno populista de João Goulart en Brasil. En 1973 tendría lugar el golpe contra el primer gobierno marxista que había llegado al poder por la vía democrática, el de Salvador Allende en Chile.

El discurso del excepcionalismo norteamericano para justificar invasiones e intervenciones fue retomado con fuerza por el gobierno de Barack Obama, pero también se ha revitalizado la «vigencia» de la doctrina Monroe, tanto para justificar las intervenciones en Venezuela como para intentar cerrarles el paso a las inversiones chinas en América Latina. Las referencias a esta doctrina han estado presentes con más énfasis en la administración de Trump.

Sin embargo, pareciera que la era de los golpes militares en América Latina ha llegado a su fin o que, en algunos casos, éstos se han ajustado a un mundo cada día más globalizado, y con ello se han creado nuevas formas de intervencionismo occidental para instaurar gobiernos adeptos al proyecto neoliberal: los golpes suaves. El término *golpes suaves* fue concebido por el teórico estadounidense Gene Sharp, fundador del Instituto Albert Einstein —organización que promueve rebeliones no violentas en el mundo—, quien desarrolló las formas de la lucha no violenta para socavar "dictaduras". Para ejecutar un golpe de Estado suave, Sharp establece cinco etapas: *1)* ablandamiento: momento en que se exponen y denuncian las deficiencias del gobierno, y se promueven factores de malestar; *2)* deslegitimación: dan inicio las campañas mediáticas; *3)* calentamiento de la calle: se fomentan las movilizaciones; *4)* combinación de diversas formas de lucha: organización de las marchas, toma de instituciones, guerra psicológica y acciones armadas, y *5)* fractura institucional: se obliga al presidente a renunciar (*Ciudad Oriental*, 2020).

Entre los trabajos de Sharp, se encuentra el aclamado libro *La política de la acción no violenta* de 1973, que ahonda sobre los métodos no violentos de la protesta y la persuasión, la no cooperación social, económica —boicots y huelgas— y política, la intervención no violenta y las bases para la acción no violenta; establece su postura sobre la represión, la so-

lidaridad y la disciplina para luchar contra aquélla, el *jiu-jitsu* político, las tres formas de éxito del golpe suave —la conversión, la adaptación y la coacción—, así como la redistribución del poder una vez que se consigue la victoria.

El *jiu-jitsu* político es clave para efectuar un golpe blando, según Sharp (1973); es uno de los procesos en los que la acción no violenta lidia con la represión violenta o, mejor dicho, la utiliza; aquí el activista de la no violencia provoca actos represivos por parte del gobierno para que éste sea expuesto de la peor manera ante los medios, y así obtener una reacción favorable por parte de las demás agrupaciones de la sociedad civil, así como la retirada del apoyo que le otorgan a nivel nacional e internacional, como fue evidente en el caso de Nicaragua en 2018 y Venezuela en 2019.

No obstante, de la teoría a la práctica hay sólo un elemento interviniente: el financiamiento. A partir de un fondo especial proveniente de instituciones y organizaciones no gubernamentales (ONG) de Estados Unidos y, en menor medida, del resto del mundo occidental, se proporciona personal y material para preparar un golpe suave; un elemento crucial ha sido la obra *De la dictadura a la democracia. Un sistema conceptual para la liberación* de Sharp.

El ensayo de Sharp, que "enfoca el problema genérico de cómo destruir una dictadura y cómo impedir el surgimiento de una nueva", fue publicado por primera vez en 1993, y a partir de entonces se ha traducido a decenas de idiomas, y activistas "prodemocráticos" lo han difundido de forma gratuita en sus respectivos países "dictatoriales". Como apertura, Sharp plantea que "la caída de [las] […] dictaduras ha reducido […] mucho del sufrimiento de las víctimas de opresión, y ha abierto el camino para la reconstrucción de […] sociedades con una mayor democracia política, más libertades personales y justicia social" (2011: 2).

Asimismo, Sharp menciona que las democracias no se diferencian de las dictaduras por contar con procesos electorales, puesto que puede tratarse de un instrumento político "para obtener la aprobación pública de los candidatos escogidos por los dictadores" (2011: 6). Aquí se pun-

tualizan el bloque oriental que conformaba la Unión Soviética, la "farsa" que representan los plebiscitos de los noventa y el hecho de que, ante la manera de ejercer el control, heredado del Partido Comunista, se lograba la obediencia del pueblo. Con increíbles semejanzas, la derecha latinoamericana ha producido la imagen de los gobiernos progresistas, que ciertamente poseen una gran presencia en el sector popular, aunque la derecha no lo atribuye a su trabajo por la erradicación de la desigualdad, sino a que han consolidado una inalterable obediencia.

Según Sharp, "el que conozca las razones de la obediencia, conoce la naturaleza íntima del poder" (1988: 28). Y señala las motivaciones de la obediencia: el hábito, el miedo a las sanciones, la obligación moral —por el bien común, factores suprahumanos, legitimidad del mando, conformidad del mandato a normas aceptadas—, el interés personal, la identificación psicológica con el gobernante, las zonas de indiferencia y la falta de confianza en sí mismo (Sharp, 1988). De hecho, en muchos casos los pueblos "creen que sólo una ayuda internacional puede ser lo bastante fuerte como para derribar a los dictadores" (Sharp, 2011: 6).

Las fuerzas externas pueden ejercer presiones a través del "boicot económico internacional, los embargos, la ruptura de relaciones diplomáticas, la expulsión del gobierno de organizaciones internacionales, la condena […] por alguno de los cuerpos de las Naciones Unidas" (Sharp, 2011: 7). Pero en el libro se advierte que "si interviene otro Estado [en la problemática nacional], probablemente no deba confiarse en él" (Sharp, 2011: 7). Los Estados siempre actuarán en beneficio de sus intereses, incluso occidente, como autoproclamado representante de la democracia, ha promovido y beneficiado a las dictaduras militares en América Latina.

De acuerdo con Sharp:

- Con frecuencia los Estados extranjeros tolerarán a la dictadura, e incluso la apoyarán, a fin de hacer avanzar sus propios intereses económicos o políticos.

- Los Estados extranjeros podrían estar dispuestos a vender al pueblo oprimido a cambio de otros objetivos, en lugar de mantener las promesas que le hicieran de ayudarlo en su liberación.
- Algunos Estados extranjeros actuarán contra la dictadura, pero sólo a fin de ganar para sí mismos el control económico, político y militar del país.
- Los Estados extranjeros podrían involucrarse activamente para fines positivos sólo cuando hubiere un movimiento interno que ya haya comenzado a sacudir la dictadura y logrado que la atención internacional se enfoque sobre a la índole brutal del gobierno (2011: 7)

De igual modo, Sharp (2011) expone sus reservas sobre las negociaciones con las dictaduras; casi bajo ningún motivo debe llegarse a ello, es aceptable sólo cuando se haya perdido toda esperanza. Lo esencial para conseguir la victoria es la resistencia ante todo tipo de represión —control de comunicaciones e información, presiones psicológicas, confiscación, sanciones económicas, prohibiciones y restricciones, arrestos y cárcel, restricciones excepcionales y violencia física directa—.

Un paso fundamental para evitar lo anterior comprende retirar o bloquear las fuentes del poder político —fuentes de poder u obediencia civil—: la autoridad, los recursos humanos, el conocimiento y las destrezas —asesores y empleados—, los factores intangibles —psicológicos e ideológicos—, los recursos materiales y las sanciones. Esto está determinado por tres factores: el deseo de imponer límites al gobierno, la fuerza de las organizaciones e instituciones independientes y la capacidad de la población para imponer su voluntad (Sharp, 2011). "Siendo que el poder político es el control sobre otras personas, se concluye que el poder político siempre es bilateral" (Sharp, 1988: 27).

Es claro que la sociedad democrática comprende la presencia de las ONG (Sharp, 2011), que pueden incidir en grandes conglomerados sociales y crear un peso significativo para contrarrestar el poder del Estado. De igual manera, las redes de confianza (Tilly, 2011) crean lazos con otros actores políticos para seguir operando, son entes que crean vín-

culos más allá de sus agrupaciones, y conforme van expandiéndose, su poder también lo hace. El rol de la sociedad civil es omnipresente y es imposible aplastarla, solamente la autolimitación puede detenerla. Por lo tanto, toda "dictadura" posee puntos débiles y puede ser derrocada, y esto con mayor probabilidad de éxito si se recurre a la lucha no violenta. Sharp establece 198 métodos de acción no violenta:

> Estos procedimientos se clasifican en tres grandes categorías: protesta y persuasión, no cooperación e intervención. Los métodos no violentos de protesta y persuasión son mayormente manifestaciones simbólicas, que incluyen desfiles, marchas y vigilias [...]. La no cooperación se divide en tres subcategorías: *a)* de no cooperación social [...], *b)* de no cooperación económica: el boicot inclusive [...] y huelgas [...], y *c)* de no cooperación política [...]. La intervención no violenta, mediante procedimientos psicológicos, sociales, económicos o políticos tales como el ayuno, la ocupación no violenta y el gobierno paralelo [...] es el último grupo (Sharp, 2011: 31).

Hay factores que deben considerarse en la elección de las acciones para la lucha: tradiciones, conocimientos, situación política y social, grado de resistencia a la represión, naturaleza y recursos del adversario, grado de brutalidad esperada, grado de dependencia del adversario hacia los miembros de la resistencia, cantidad de participantes y grado de apoyo de la sociedad, calidad de los miembros y el entorno. Ahora bien, las tres formas en que se puede lograr el éxito son la conversión: cambiar el modo de pensar de los adversarios; la adaptación: los adversarios acceden a las demandas del movimiento, y la coacción no violenta: el movimiento ha producido los cambios deseados contra la voluntad de los adversarios (Sharp, 1988).

Sin embargo, las estrategias, métodos y tácticas no lo son todo, es necesario que en el movimiento haya disciplina, valor y hacer un "cálculo realista de la situación" (Sharp, 2011: 42). Asimismo, se debe priorizar la no cooperación —la premisa política básica de la acción no violenta—; alentar a la burocracia, a las fuerzas policiacas y militares a soli-

darizarse con la rebelión. De igual forma, el sistema político emergente debe preocuparse por los diferentes puntos de vista de la sociedad civil y desarrollar políticas orientadas a esto, y con ello redactar una nueva constitución con los objetivos; separar y limitar los poderes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial; establecer procedimientos y fechas electorales; reescribir derechos del pueblo —que consideren las libertades civiles, los derechos de las minorías y las prerrogativas de los gobiernos regionales, estatales o locales e instituciones no gubernamentales—, y restringir las actividades de la policía, los servicios de inteligencia y las fuerzas armadas (Sharp, 2011).

Para aquellos que se mantienen escépticos, los puntos expuestos hasta ahora han estado ejecutándose casi religiosamente en los países postsocialistas de Europa del este, gracias a la política de intervención abierta de Bill Clinton, que dejó de lado el secretismo de la CIA para "ayudar" a los países a "democratizarse". Clinton obtuvo un gran éxito cuando puso a prueba por primera vez la teoría de Sharp en la antigua Yugoslavia, donde una fracción de la población estaba hastiada del régimen de Slobodan Milošević . Este grupo estaba conformado por jóvenes activistas serbios que se identificaban con el nombre de *Otpor* (Resistencia), un movimiento en favor de la democracia. Otpor emprendió una campaña intensiva contra Milošević a partir de los ataques aéreos de la OTAN del 24 de marzo de 1999 —que se prolongó 78 días— sobre Yugoslavia. El cometido de Otpor era romper con la apatía política de los ciudadanos, donde supuestamente no se trataba de favorecer a ningún partido o individuo sino, esencialmente, de derribar a Milošević a través de comicios justos. La realidad fue diferente. Ni siquiera se habían dado a conocer los resultados electorales cuando los jóvenes se lanzaron a las calles y deslegitimaron a Milošević. Así dio inicio la Revolución Buldócer.

> Pasado el tiempo, los líderes de Otpor reconocieron públicamente que recibieron apoyo logístico y financiero del exterior, particularmente por la Fundación Nacional para la Democracia —NED, por sus siglas en inglés— la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional —USAID—,

el Instituto Republicano Internacional —IRI— y el Instituto Nacional Demócrata —DNI— (Barricada, 2018).

Tras la Revolución Buldócer se mostró que un golpe suave es posible, y como efecto dominó éste se esparció por el espacio postsoviético; por ejemplo, en la Revolución de las Rosas de 2003 en Georgia, la Revolución Naranja de 2004 en Ucrania y la Revolución de los Tulipanes de 2005 en Kirguistán, que, aunque tuvo aspectos erráticos, tuvo influencia en la Revolución Blanca o de los Jeans de 2006 en Bielorrusia y en la Revolución del Twitter de 2009 en Moldavia, porque "cuando se usa la acción no violenta con una eficacia cuando menos mediana, la técnica tenderá a extenderse" (Sharp, 1988: 112). Y en algunos casos a repetirse, tal es el caso de Ucrania con el Euromaidán de 2013 y el actual intento de golpe suave que está llevándose a cabo en Bielorrusia.

Para Estados Unidos es importante el éxito de tales revoluciones; no se trata de algo al azar, sino planificado con base en "la geografía de la política internacional, en particular la relación entre el entorno físico —ubicación, recursos, territorio, etc.— y la conducta de la política exterior" (Ó Tuathail y Agnew, 2003: 79), es decir, con base en la geopolítica.

Lo geopolítico puede estudiarse desde la teoría de movilización de recursos. De acuerdo con Touraine:

> La noción de movilización de recursos ha sido utilizada para transformar el estudio de los movimientos sociales en un estudio de estrategias como si los actores estuviesen definidos por sus metas y no por sus relaciones sociales —y especialmente relaciones de poder— en las cuales están involucrados. Tal transformación es a veces aceptable cuando aparentemente los movimientos radicales o ideológicos son instrumentalmente orientados por grupos de interés. Pero en demasiados casos, esta noción es usada para eliminar consultas sobre el significado de la acción colectiva como un recurso de movilización que podría ser definido independientemente de la naturaleza de las metas y de las relaciones sociales del actor, como si todos los actores fueran finalmente conducidos por la lógica de la racionalidad económica (1985: 769).

Esto es interesante porque plantea la existencia de grupos de poder que destinan recursos a ciertos individuos para crear movimientos que conlleven cambios institucionales, lo cual expone la materia prima y las metas de los golpes suaves en los casos de estudio del presente trabajo: Honduras (2009), Paraguay (2012), Brasil (2016), Bolivia (2019) y los intentos de golpe en Nicaragua (2018) y Venezuela (2019). Concluyentemente, las agrupaciones que participan activamente en las movilizaciones están siendo apoyadas por ciertos entes económicos y políticos que buscan un cambio de régimen para conseguir o incrementar sus beneficios.

> La aportación más característica de la teoría de la movilización de recursos es el carácter significativo que atribuye a las contribuciones de personas ajenas y a la cooptación de recursos institucionales por parte de los movimientos sociales contemporáneos. Tradicionalmente, los analistas han asumido que los recursos provienen de los beneficiarios directos de los cambios sociales que persiguen, y que, habida cuenta que los movimientos se emplazan fuera de la política institucionalizada, sus recursos se derivan de fuentes no institucionales (Jenkins, 1983: 15).

Entre los filántropos de los golpes suaves destaca el Instituto Republicano Internacional y el Instituto Demócrata Nacional, ambos derivados de los partidos políticos estadounidenses; la Freedom House, la Fundación Nacional para la Democracia, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo y la Open Society Foundations —previamente conocida como *Open Society Institute*— del magnate George Soros.

George Soros ha sido un personaje polémico porque fundó la Open Society en 1993 bajo la bandera de la defensa de los derechos humanos, y con ello buscaba formar dirigentes políticos que "custodiasen" la libertad de información mediante un plan de becas para comunicadores de prensa. A través de su organización favorece a candidatos, maneja las demandas de los pueblos a conveniencia y genera opinión pública; fi-

nancia investigaciones en Europa y Estados Unidos a través de su red de relaciones con otras ONG, intelectuales y medios. La Open Society trabaja con la aprobación del FMI y el Banco Mundial, ya que los gobiernos impuestos a través de los golpes suaves generan grandes compromisos con tales organismos. A su vez, Soros controla Crisis Group y Human Rights Watch, organización que vigiló con especial atención el gobierno de Milošević.

¿Cómo es que tales organizaciones logran la aceptación de las masas? Jenkins estipula que "el principal objetivo de la movilización es [...] la generación de solidaridad y compromiso moral para con las amplias colectividades en nombre de las cuales se actúa" (1983: 22). Aparentemente, demandan el respeto de los derechos fundamentales de la población, pero por ahora esto ha demostrado no ser más que propaganda.

Según Alberoni:

> Cualquier movimiento puede y debe ser estudiado como producto de ciertos intereses o utilizado por grupos portadores de intereses, y lo mismo puede decirse de cualquier acto del movimiento, desde su aparición hasta su final. Pero, al mismo tiempo, el lenguaje del movimiento es un lenguaje de solidaridad, justicia, derechos, culpas, es decir, un lenguaje ético, ético político o ético religioso (1984: 360).

Golpe de Estado en Honduras 2009

El desencadenante del golpe en Honduras fue la propuesta del presidente Manuel Zelaya de realizar una consulta que determinara si el pueblo se encontraba a favor o en contra de la creación de una Asamblea Nacional Constituyente. Pero, en la madrugada del 28 de junio de 2009, en vísperas de lo que hubiera sido la primera consulta popular en la historia de Honduras, militares que actuaron bajo las órdenes de la Corte Suprema de Justicia irrumpieron en la casa del presidente Zelaya y lo sacaron en pijama para montarlo en un avión y así botarlo en Costa Rica. Esto se conoce como el primer golpe de Estado en Latinoamérica del siglo XXI (Sánchez, 2019). El argumento de las autoridades corres-

pondientes fue que el presidente había violado la Constitución en reiteradas ocasiones y una supuesta tentativa de reelección.

La crisis política se instauró después de que el Congreso destituyera a Zelaya y nombrara al titular del Legislativo, Roberto Micheletti, del propio Partido Liberal al que el presidente pertenecía. En la misma sesión fue leída una carta de dimisión atribuida a Zelaya, lo que él desmintió posteriormente. La nota enunciaba:

> Debido a problemas insuperables de salud, que me han impedido concentrarme en los asuntos fundamentales del Estado, cumplo con el deber de interponer mi renuncia irrevocable a la Presidencia, junto con la de mi gabinete de Gobierno, efectiva a partir de esta fecha. Con mi renuncia espero contribuir a sanar las heridas del ambiente político nacional (*Prensa Libre*, 2009).

Después del exilio, Zelaya fundó el Partido Libre, pero no ha salido triunfante en las elecciones. Frustrado por la situación, en entrevista para *El Diario*, Zelaya manifestó que el país estaba peor que nunca; su deuda externa pasó de 3 mil millones a 14 mil millones de dólares; aumentó drásticamente el precio de servicios como el agua, electricidad, combustible y transporte; se crearon nuevos impuestos; se privatizó desmedidamente; se dio una fuerte vinculación del gobierno con el narcotráfico, y se prohibió el derecho a la protesta (Sánchez, 2019). El actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, "ha militarizado el país y ha dado una respuesta militar a cualquier tipo de protesta social" (Wallace, 2019).

"Efectivamente, en los años posteriores al golpe las organizaciones de derechos humanos denunciaron un aumento de los asesinatos de activistas y periodistas. Y este tipo de muertes se siguen produciendo con preocupante frecuencia" (Wallace, 2019). Sobre el asesinato en 2016 de Berta Cáceres, una líder indígena lenca, feminista y activista del medio ambiente, Zelaya (2019) comentó:

> Berta es un símbolo en Honduras. Berta fue una persona que me defendió fuertemente en el momento del golpe de Estado. Era antiimperialista, anticapitalista y defensora de los derechos naturales de los pueblos indígenas. Y la asesinaron simplemente por defender un río, por oponerse a una represa. La lista de asesinatos de la resistencia hondureña que hay es grande y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene una gran labor que hacer en Honduras.

Y es que no es coincidencia que los gobiernos progresistas sean el foco de los golpes o tentativas de golpe. La administración de Zelaya "se adhirió a la iniciativa Petrocaribe, a la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América —ALBA—; apoyó a Cuba y al gobierno del entonces presidente de Bolivia, Evo Morales" (*TeleSur*, 2020). Entretanto, hoy se da la enérgica privatización de asuntos, que, anteriormente, eran de jurisdicción estatal, como carreteras, puertos, aeropuertos y recursos naturales, además de los intentos por desestatificar la salud y la educación (Wallace, 2019).

De acuerdo con Zelaya (2019):

> Éste es un país colonizado. Es un país controlado absolutamente por el Comando Sur. Ni siquiera tenemos embajador de Estados Unidos, tenemos la teniente coronel Heide Fulton, con pasado en Irak y Afganistán, que ha estado aquí tres años manejando la embajada. Estados Unidos ve tan pequeño a Honduras, con una economía tan débil, que no le interesa más que la ubicación geográfica, porque tenemos siete fronteras en el Caribe, porque tenemos tres fronteras terrestres, porque estamos en el centro de América y porque tienen bases militares aquí. Ahí se pueden dar cuenta que éste es un país militarizado y manejado con represión y autoritarismo, con apariencia y fachada legal.

Golpe de Estado en Paraguay 2012

Según Soler (2014), "una de las principales novedades que aportan estos formatos destituyentes, además de los actores civiles e instituciones par-

lamentarias y judiciales involucrados, es que garantizan todos los 'mecanismos legales' para dar continuidad al régimen democrático". Es una condición para ser reconocidos por la Comunidad Internacional, pero, aunque se cumplen con las formas, en el fondo la situación es bastante contradictoria.

El 15 de agosto de 2008 fue electo el exobispo católico Fernando Lugo, quien rompió con más de setenta años de hegemonía del Partido Colorado, los cuales incluyeron 35 años de la dictadura militar de Alfredo Stroessner. La Alianza Patriótica para el Cambio recibió el apoyo de sectores populares y partidos políticos; aun así, desde la asunción de Lugo se planteó su destitución.

A petición de la Cámara de Diputados y con la aprobación de la cámara baja se ratificó la acusación para someter al presidente Lugo a juicio político por el infundado "mal desempeño en sus funciones" (*TeleSur*, 2020). El golpe se diferenció del hondureño puesto que no fue por la vía militar, sino por supuestas faltas cometidas por el presidente que debían ser procesadas, con lo que se estableció como justificación la Masacre de Curuguaty del 15 de junio, un ataque que lanzaron policías contra campesinos para recuperar las tierras del político y empresario Blas Riquelme. La agresión se efectuó contra un campamento de los sin tierra y el enfrentamiento dejó un saldo de seis policías y 11 campesinos muertos. Pero ¿cómo fue posible atribuir a Lugo esta masacre? Soler (2014) recogió un par de aseveraciones que contradicen por completo las denuncias de los diputados:

> "Yo creo que [Federico] Franco va a ser mucho más firme en lo que hace a respetar la propiedad privada", dijo tras el golpe institucional el presidente de la Asociación de Empresarios Cristianos, Luis Fretes. Y el portavoz de los "brasiguayos", Aurio Fighetto, declaró que con Lugo "los carperos —campesinos sin tierra— estaban en el Palacio", y así dejó en claro las motivaciones más profundas de la destitución del exobispo.

Federico Franco, miembro de la oligarquía paraguaya y el entonces vicepresidente de Lugo, operó como adversario político, asumió la presidencia de forma interina y reprochó el supuesto accionar del presidente Lugo. Si bien movimientos populares y campesinos acompañaron a Lugo, no se logró crear una estructura que ejerciera la fuerza necesaria para evitar el golpe. Se necesitaba una Asamblea Constituyente. Ante la carencia de vínculos con la clase política y la evidente falta de apoyo desde el Parlamento, la Cámara de Senadores destituyó a Lugo el 22 de junio de 2012 a través de un juicio exprés en el Congreso.

> Es posible afirmar que el acceso de Lugo al gobierno mediante una ecléctica alianza, que incluyó desde movimientos sociales hasta partidos de izquierda, fue un intento de resolución política por fuera de las estructuras partidarias, más allá de la alianza pragmática que firmó con el antiguo Partido Liberal (Soler, 2014).

De acuerdo con Soler (2014), los medios de comunicación prepararon el golpe con antelación, mortificaron a los ciudadanos sobre el imaginario dominio de Hugo Chávez sobre Paraguay. El poder de los medios era tal que fue posible televisar el golpe. De hecho, "los nuevos golpismos utilizan las instituciones de la democracia o la República —Parlamento, partidos políticos, constituciones— para quebrarlas. Tienden, en ese sentido, a preservar cierta semblanza institucional mínima, a partir de prácticas antidemocráticas" (Soler, 2014).

> El golpe de Estado parlamentario a Lugo formó parte de la nueva estrategia impulsada por Estados Unidos para el restablecimiento de la derecha neoliberal en la región, al igual que el juicio parlamentario en Brasil y que llevo a la destitución de Dilma Rousseff (*TeleSur*, 2017).

Golpe de Estado en Brasil 2016

Para entender el golpe en Brasil es preciso regresar a las protestas masivas de junio de 2013, cuando más de cincuenta mil personas salieron a

las calles para manifestar su descontento por el incremento del costo del transporte, la inflación, los gastos del gobierno para la Copa Mundial de futbol, la demanda de mejores servicios y los escándalos de corrupción en el país. A pesar de que, bajo las administraciones del Partido de los Trabajadores, muchas personas salieron de la pobreza y pasaron a formar parte de la clase media, en las marchas se alegaba que la calidad de vida no había mejorado, ¿por qué?

Ciertamente no fue un movimiento de pobres, se trataba de estudiantes de la clase media y clase media alta que no reclamaban por la pobreza, sino para ejercer su derecho democrático de protesta; inclusive la presidenta, Dilma Rousseff, felicitó a los aglomerados porque ello era una señal de la democratización de Brasil, y por esto la represión se mantuvo al mínimo; de hecho, la respuesta policial en São Paulo se dio solamente cuando los manifestantes intentaron tomar edificios públicos, y el gobierno fue muy cuidadoso con esta situación. Aun así, cuando la policía intervino, inmediatamente la organización de Soros Human Rights Watch pidió hacer investigaciones.

Aunque el movimiento se declaró apartidista, había tres discursos identificables: *1)* el socialista, que conglomera a la izquierda brasileña; *2)* el autonomista, que agrupa a libertarios críticos del poder y el Estado, y *3)* el patriótico, con un discurso nacionalista. Si bien las demandas por la democratización, por ejemplo por la educación pública, provenían del campo autonomista, el campo patriótico manifestaba una indignación compartida respecto a la corrupción; a su vez, hubo polarizaciones que llevaron a un conflicto lleno de agresiones del patriótico al socialista, ya que dentro de éste se encontraban adeptos al Partido de los Trabajadores y a la izquierda tradicional (Bringel, 2016). Y el mismo escenario se trasladó al gobierno, ya que, si bien las elecciones presidenciales de 2014 le dieron el triunfo a Rousseff:

> El Congreso Nacional elegido directamente por las urnas fue el más conservador de la historia de Brasil, desde el golpe de 1964. Eso significa que la mayoría del poder legislativo pasó a estar controlada por parlamentarios

de diferente signo conservador: militares, religiosos, ruralistas defensores del agronegocio, empresarios, entre otros (Bringel, 2016).

En este escenario es que surgió el Movimiento Brasil Libre, movimiento juvenil de derechas financiado por empresarios y *think tanks* conservadores que se plantearon imprimir la agenda neoliberal y sus valores morales para restringir, desde "la cara amable" del tercer sector, políticas sociales y derechos humanos emanados del Ejecutivo. Entre sus principales apoyos internacionales se encuentran algunos grupos estudiantiles y empresariales vinculados con la oposición en Venezuela, así como industrias Koch, que es un conglomerado de empresas estadounidenses con intereses petrolíferos y químicos; algo distintivo del Movimiento Brasil Libre es que aprovechó la apertura de Rousseff sobre el derecho de reclamo y convocaron a diversas manifestaciones y actos públicos de protesta, lo que generó aún más cohesión en el campo patriótico ya no solamente en el Congreso, sino en las calles y las redes sociales (Brigel, 2016).

En esta élite conservadora se encontraba el presidente de la Cámara de Diputados del Partido del Movimiento Democrático Brasileño Eduardo Cunha, quien el 2 de diciembre de 2015 aceptó el pedido de *impeachment* contra la presidenta Dilma Rousseff. El procedimiento de destitución se abordó apenas horas después de que diputados del Partido de los Trabajadores retiraran su apoyo a Cunha en el Consejo de Ética y Decoro Parlamentario; esto tras ser denunciado por corrupción y lavado de dinero, que tenían que ver con su rol en Petrobras y cuentas bancarias en Suiza. Si bien Cunha fue suspendido, el proceso de *impeachment* continuó; el 17 de abril de 2016 se realizaron las votaciones en la Cámara de Diputados, y en la mañana del 12 de mayo el Senado determinó que la presidenta Rousseff debía ir a juicio político.

El 31 de agosto la presidenta Dilma Rousseff fue destituida por irregularidades contables, "unas reasignaciones presupuestarias entre bancos públicos y pagos del Estado que no habían pasado por el Congreso y que eran declaradas en el año fiscal siguiente" (Becerra Rebo-

lledo, 2016). Todas estas cuestiones siempre estuvieron presentes en los períodos presidenciales previos, y nunca se les dio la más mínima importancia. De hecho, no pudo ser acusada por corrupción y hasta ahora no se ha encontrado implicada en escándalos de tal talante (Duval, 2018). Más de 60% de los parlamentarios enfrentan acusaciones de cohecho, fraude electoral, deforestación ilegal, secuestro y hasta homicidio, pero "por más de un año cada día los principales noticiarios de televisión y los diarios paulistas noticiaban casos de corrupción que afectaban a la gobernante del Partido de los Trabajadores" (Becerra Rebolledo, 2016).

Según Bringel (2016):

> Muchos esperaban que el proceso de *impeachment* fuera fuertemente contestado en las calles, sobre todo a partir de mayo de 2016, cuando Dilma es apartada del cargo para el juicio. Hubo protestas, pero no sólo contra, sino también a favor de la destitución. Dos frentes populares, constituidos a finales de 2015, trataron de articular la movilización contra el golpe, por la democracia y la lucha por la defensa de derechos: el Frente Brasil Popular, constituido por casi setenta colectivos, sindicatos y movimientos populares —entre ellos el Movimiento de los Sin Tierra—, afines o de apoyo crítico al Partido de los Trabajadores; y el Frente Pueblo Sin Miedo, impulsado por el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo y una treintena de movimientos sociales y organizaciones que, si bien confluyen con el anterior en algunas convocatorias, hacen una crítica más radical al Partido de los Trabajadores y al Estado, buscando la construcción de un nuevo espacio de referencia para los trabajadores y trabajadoras.

El proceso contra Rousseff buscó ponerle fin a más de una década de gobierno del Partido de los Trabajadores. Este gobierno disminuyó la pobreza de los brasileños, abrió cuotas para pobres y negros, destinó fondos para la educación, dio estabilidad y proyección internacional a Brasil con el BRICS, proyectó un banco común y moneda única junto con otras potencias emergentes y su primer líder, Luiz Inácio Lula da

Silva, terminó su gobierno con más de 80% de popularidad (Becerra Rebolledo, 2016).

De acuerdo con Rousseff (2019):

> El principal objetivo del golpe fue la adecuación de Brasil a la agenda neoliberal que, en cuatro elecciones presidenciales había sido derrotada en las urnas. Por lo tanto, una de las primeras acciones de los interesados en el golpe fue la formación de una oposición salvaje en el Congreso. Su objetivo era impedir al gobierno recién electo gobernar, creando una grave crisis fiscal. Para ello, echaron mano de asuntos bomba que aumentaban gastos y reducían ingresos. También impidieron sistemáticamente la aprobación de proyectos cruciales para la estabilidad económica del país. Y durante los primeros seis de gobierno, presentaron 15 pedidos de *impeachment*.

Según Rousseff (2019), se trató de un sabotaje económico disfrazado de crisis política, una recesión atribuida a la reducción de ingresos frenados por las constantes amenazas de *impeachment* y que terminaron alejando a los inversionistas, lo que deprimió la recaudación y la economía. A Dilma se le acusó de gastos primordialmente invertidos en educación y salud; en efecto, "todos esos gastos son fundamentales para corregir injusticias históricas, reducir desigualdades sociales y desarrollar al país" (Rousseff, 2019). Pero los medios de comunicación se convirtieron en una instancia del Poder Judicial que procuró la destrucción y criminalización del Partido de los Trabajadores, y del propio Lula, condenado a prisión para dejar paso libre en las presidenciales de Brasil al ultraderechista Jair Bolsonaro.

> El gobierno de Bolsonaro está ampliando un legado de retrocesos del gobierno de [Michel] Temer, manteniendo y hasta profundizando la absurda enmienda del techo de gastos, que reduce las inversiones en educación y en salud; la reforma laboral, que abrió las puertas para la explotación más brutal y para la indulgencia con el trabajo análogo a la esclavitud; la venta de bloques del Pre-sal; la reducción del Bolsa Familia; la extinción para los más

pobres del programa Mi Casa Mi Vida y del Aquí Hay Farmacia Popular y la reducción del programa Más Médicos; la destrucción de los principales programas educativos y la dilapidación de la Amazonía y del medio ambiente (Rousseff, 2019).

Golpe de Estado en Bolivia 2019

El domingo 20 de octubre de 2019 se realizaron comicios generales en Bolivia para elegir al presidente, al vicepresidente y a los diputados y senadores, las votaciones de las presidenciales arrojaron el triunfo de Evo Morales sobre Carlos Mesa sin necesidad de una segunda vuelta, así como un mayor número de asientos en el legislativo para el Movimiento al Socialismo sobre Comunidad Ciudadana; sin embargo, antes y después de la publicación de los resultados oficiales, la Organización de Estados Americanos presentó un informe donde expuso irregularidades en el recuento de los votos; a su vez, la oposición no reconoció los resultados, lo que desembocó en una escalada de violencia protagonizada por comités cívicos, grupos de choque y de civiles armados.

El martes posterior a las elecciones, el presidente Evo Morales sostuvo una reunión con observadores y delegaciones de la Unión Europea y de la OEA y los invitó a "que fiscalicen todo el proceso de cómputo de votos, acta por acta, con todas las garantías" (*CNN*, 2019). Instó a las entidades a auditar cada una de las boletas de votación. El resultado de la auditoría no fue favorable, por lo que las fuerzas armadas "sugirieron" a Evo renunciar para pacificar el país.

El 10 de noviembre el presidente Evo Morales anunció la repetición de las elecciones, pero horas después presentó su renuncia a la presidencia de Bolivia para evitar un baño de sangre, e igualmente lo hicieron el vicepresidente Álvaro García Linera, y ministros y servidores públicos que fueron amenazados, a cuyas casas se les prendió fuego y que, en otros casos, sufrieron secuestros. Y de esta forma se llevó a cabo un golpe de Estado cívico, militar y político.

La variable determinante fue el factor externo, que de hecho desencadenó la auditoría de la OEA. Uno pensaría que fue un golpe planeado a nivel institucional, pero aquí se trata del servilismo al neoliberalismo, es decir, una situación de la que obtuvieron grandes beneficios las empresas estadounidenses:

> El empresario y CEO de Tesla Inc., Elon Musk, causó revuelo en redes sociales al sugerir en su cuenta de Twitter que puede llevar a cabo un golpe de Estado en beneficio de su empresa para obtener el litio, ya que este ingrediente es fundamental para elaborar las baterías que serían usadas en un futuro para la electro-movilidad (*La Jornada*, 2020).

Que se efectuara el golpe a Evo Morales era cuestión de tiempo, solamente hay que sumar: el "triángulo del litio" —conformado por Argentina, Bolivia y Chile— concentra más de 85% de las reservas del planeta de este metal; los yacimientos bolivianos de petróleo y gas; la negativa del gobierno de Evo de adscribirse al proyecto neoliberal de Occidente, y los medios de comunicación que, con perseverancia, implantaron el imaginario de un "autoritarismo boliviano" a céntimas de convertirse en Venezuela. Por estas razones la USAID fue expulsada de Bolivia en 2013, pero la NED, así como el IRI y el DNI, continuaron su financiación a partidos políticos de oposición, a organizaciones de la sociedad civil y a los medios de comunicación; asimismo, otro factor desestabilizador fue la militarización de la lucha contra las drogas bajo convenios bilaterales entre Bolivia y Estados Unidos (García Fernández, Lajtman, Romano y Tirado, 2019).

Evo Morales asumió la presidencia el 22 de enero de 2006, convirtiéndose en el primer presidente indígena de su país; dos meses después, promulgó la ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente, de donde nació la nueva Constitución y el Estado Plurinacional. Durante su mandato, hubo un gran crecimiento económico, que fue inclusivo "porque estuvo acompañado de políticas públicas que ayudaron a disminuir los negativos indicadores sociales" (Romero, 2019). Evo llevó a cabo la

nacionalización de los hidrocarburos, logró un crecimiento económico de casi 5%, inició una campaña de alfabetización nacional mediante el método cubano "yo sí puedo", y en 2008, declaró al país libre del analfabetismo, redujo la pobreza, hubo mejoras laborales, en salud, educación y en infraestructura (Romero, 2019).

> ¿Fórmula mágica? No: políticas de Estado hacia la recuperación de los recursos naturales —especialmente gas, minerales metálicos y litio—, reglas claras ante el poder empresarial y financiero, mayor justicia fiscal y fortalecimiento de los servicios públicos que garantizan derechos humanos y sociales. La más reciente de las políticas fue el lanzamiento del Sistema Único de Salud, para superar la desfinanciación, fragmentación y precariedad de la oferta sanitaria, que ha funcionado según el ingreso, ubicación territorial, tipo de aseguramiento y estrato sociolaboral de los ciudadanos (Bosch Carcuro, 2019).

Ahora la oposición está en una encrucijada ya que los resultados de encuestas de opinión frente a los comicios que se prevén para el 18 de octubre apuntan una tendencia de voto para el exministro de Economía, candidato del MAS a la presidencia, Luis Arce. Y lo anterior frente a Carlos Mesa, ya que la golpista presidenta interina Jeanine Áñez está por los suelos, a pesar de hacer tiempo para mejorar su imagen con dos aplazamientos de las elecciones —originalmente convocadas para el 3 de mayo, y luego para el 6 de septiembre—.

Otra estrategia para evitar el retorno del MAS ha sido una denuncia penal contra Luis Arce por supuesto daño económico al poner en marcha la gestora pública para la administración de los aportes sociales de los trabajadores. Pero esto no es todo: a su regreso de México, en el aeropuerto de El Alto, se le entregó una citación para declarar por el caso del fondo indígena (Reyes, 2020).

> El objetivo de aquellos que administran hoy a Bolivia resulta evidente: restaurar plenamente el proyecto neoliberal, a través del apoyo que le está brindando Estados Unidos con sus organizaciones gubernamentales en temas

> sociales y de combate a las drogas, además del trabajo del Fondo Monetario Internacional y los préstamos —en este caso la aprobación de 327 millones de dólares durante el mes de abril— que suelen hipotecar el futuro de las naciones exigiendo ajustes estructurales, privatización de las empresas públicas, jibarizar el tamaño del Estado entre otras demandas. Tal idea lleva aparejado el favorecer a los grupos económicos bolivianos y transnacionales: financieros, comerciales, terratenientes y al mismo tiempo, otorgar franquicias favorables, a las empresas extranjeras vinculadas, fundamentalmente, a la industria petrolera y minera, que vuelven a convertir a Bolivia en un botín de guerra (Leal, 2020).

Intento de golpe en Nicaragua 2018

El 16 de abril de 2018 el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aprobó un paquete de reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, en el que se estipula una nueva distribución de las responsabilidades entre las empresas y los trabajadores, por lo que en éste se impuso un aumento de las cuotas a trabajadores y un impuesto del 5% a los pensionados, medida necesaria, según Ortega, para afrontar el déficit del Instituto.

> Un día después de decretadas las reformas un grupo de jóvenes autoconvocados en las redes sociales se reunieron en Camino de Oriente, céntrico centro comercial de Managua, para protestar. Estos jóvenes ya habían formado un colectivo que exigía al Gobierno mayor protección de las reservas naturales, después de que se incendiara la Reserva Indio Maíz. Los jóvenes indignados organizaron protestas en Managua, que fueron reprimidas por la Policía Nacional. Ese movimiento, bautizado como #SOSIndioMaíz, atrajo la atención nacional y se tradujo luego en #SOSINSS. Fueron ellos los que aquella tarde del 18 de abril se reunieron en el centro comercial acompañados de algunos jubilados (Ynestroza, 2019).

El 18 de abril dio inicio una rebelión cívica y surgió en Twitter el distintivo #SOSINSS para promover la movilización ciudadana y llamar

la atención de la Comunidad Internacional. A los opositores del gobierno sandinista se les adhirió la OEA —la cual decidió enviar un grupo de trabajo para investigar la situación—, Estados Unidos y la Iglesia católica, esto porque las marchas fueron duramente reprimidas por las fuerzas del orden, tanto así que los medios de comunicación arrojaron cifras de fallecidos que van desde los 295 a los 568, por lo que Estados Unidos impuso sanciones contra Nicaragua y pidió la realización de elecciones.

> El jueves 19 de abril las protestas contra la reforma se extendieron a varios departamentos, incluyendo León, Managua, Granada, Boaco, Carazo, Estelí y Rivas. Los manifestantes hicieron uso de piedras, morteros caseros y cocteles molotov y la policía de gas lacrimógeno y balas (Ynestroza, 2019).

El presidente Daniel Ortega revocó la reforma y llamó al cese de la violencia, pero los opositores se mantuvieron en la calle. Ya se había puesto en marcha una campaña mediática para la criminalización de Ortega. Aquí queda nuevamente evidenciada la necesidad de destituir a cualquier gobierno opuesto a la agenda estadounidense, especialmente tras los acuerdos de la administración nicaragüense con China, que afectan las áreas de influencia de Estados Unidos. Y se establece que, donde no puede impulsarse un golpe parlamentario, se recurre al apoyo de los medios de comunicación para que sean las movilizaciones quienes lo hagan. Así el derrocamiento de un gobierno se justifica de una manera mucho más orgánica.

Lo llamativo es que los manifestantes eran en su mayoría jóvenes y estudiantes, pero las reformas no afectaban propiamente a este sector de la población, así que, realmente, no se trataba de una lucha contra las cuotas y pensiones, sino contra el gobierno sandinista. Los medios occidentales lo atribuyeron al hastío generalizado de la población, pero "las [...] protestas en Nicaragua siguen el guion del golpe blando impulsado desde Estados Unidos" (*TeleSur*, 2018). Por ejemplo, Sharp establece la importancia de la toma de lugares emblemáticos como lo fue Masaya.

La ciudad de Masaya, una vez corazón de la Revolución sandinis-

ta, fue retomada como símbolo de resistencia contra el líder del Frente Sandinista, ahí se atrincheraron y declararon al territorio "libre del dictador", pero Ortega retomó el control tras un intenso bombardeo de más de siete horas sobre la comunidad indígena de Monimbó, el cual dejó al menos tres muertos (Rodríguez Martínez, 2018). Las cifras de fallecidos son inciertas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos contabilizó 325 manifestantes muertos; las instituciones humanitarias locales, 568, y el gobierno, 199.

Está claro que, en el caso de Nicaragua —que vivió en los años ochenta una guerra encubierta para derrocar a la recién triunfante Revolución sandinista—, el sandinismo no cedió a las presiones nacionales e internacionales para sacarlo del poder. El golpe suave fracasó finalmente.

Intento de golpe en Venezuela 2019

En el caso de Venezuela, el gobierno norteamericano ha intentado de todas las formas posibles acabar con el gobierno bolivariano. Encontramos el apoyo a los grupos opositores de toda la gama política —desde los exguerrilleros del MAS hasta la ultraderechista Voluntad Popular—, golpes militares tradicionales —como el fracasado golpe contra Hugo Chávez en 2002— e intentos de golpes parlamentarios en los últimos años, cuando la Asamblea Nacional, con el apoyo de los Estados Unidos, nombró a un «presidente» encargado del gobierno, Juan Guaidó, en 2019, desconociendo al presidente legítimo, Nicolás Maduro.

En Venezuela se ha intentado la convinación de todas las formas de golpes. Ante el fracaso de conseguir derrocar al gobierno de Maduro, a pesar del bloqueo que le ha impuesto Estados Unidos con sus aliados de la OTAN, de nuevo se intentó un golpe de Estado con la participación de sectores del ejército, y más recientemente una invasión de mercenearios provenientes de Colombia, que igualmente han fracasado.

Así, la madrugada del 30 de abril de 2019, el diputado opositor, jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, transmitió, supuestamente, desde La Carlota y anunció en redes sociales el inicio de la fase final de

la Operación Libertad; afirmó, con un grupo de alrededor de cuarenta uniformados a sus espaldas, que las fuerzas armadas estaban del lado del pueblo y llamó a los venezolanos a unirse a él en las calles:

> "Hoy como presidente de Venezuela, como legítimo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas convoco a todos los soldados, a toda la familia militar, a acompañarnos en esta gesta como siempre hemos hecho en el marco de la Constitución, en el marco de la lucha no violenta», asegura en el video en que aparece acompañado por el líder opositor Leopoldo López (*Euskaraz*, 2019).

No obstante, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, publicó en Twitter que ya se había desactivado al grupo de militares que se encontraban promoviendo un golpe de Estado:

> "Informamos al pueblo de Venezuela que en estos momentos estamos enfrentando y desactivando a un reducido grupo de efectivos militares traidores que se posicionaron en el Distribuidor Altamira para promover un golpe de Estado contra la Constitución y la paz de la República», ha indicado el ministro (*Euskaraz*, 2019).

Posteriormente, se advirtió que la base aérea de La Carlota estaba asediada por grupos que pretendían ingresar a las instalaciones, pero esta información fue desechada por el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosado Cabello; más tarde, el pueblo empezó a movilizarse al Palacio Miraflores para respaldar al presidente Nicolás Maduro; entretanto, agrupaciones antichavistas también se dirigían a Miraflores, pero decidieron cambiar de rumbo hacia Plaza Altamira, el bastión de la oposición (*TeleSur*, 2019).

Sin duda muchos se percataron de que se trataba de un engaño lo de las fuerzas armadas, para que los venezolanos antichavistas llevaran a cabo actividades delictivas y fueran reprimidos con severidad, y luego exponer aquello a los medios internacionales, el *jiu-jitsu* político, y aunque muchos partidarios de la oposición se enfrentaron a la policía, poco

a poco se disolvieron, pero la situación no terminó ahí. Con estas acciones se desencadenó una crisis política tal que resonó por varios meses el llamado a un golpe militar contra el presidente Maduro, y el autoproclamado presidente Guaidó sostuvo hasta el último aliento "vamos a recuperar la democracia y la libertad en Venezuela" (*Euskaraz*, 2019), incluso en sus giras internacionales patrocinadas por Occidente.

Maduro llamó a la máxima movilización del pueblo, mientras que los militares reafirmaron su respaldo al gobierno bolivariano. Por supuesto, la Comunidad Internacional apoyó mayoritariamente el golpe militar, como Estados Unidos, Francia, Colombia, Costa Rica, Panamá, Perú, Argentina, Chile y Brasil, mientras que Bolivia, México, Nicaragua, Rusia, Turquía y China lo condenaron.

Los intentos de golpe en Venezuela no son nuevos, se han practicado sinnúmero de estrategias, pero el país con los mayores yacimientos de petróleo en el mundo tiene dos elementos que lo han impedido: la lealtad de las fuerzas militares y del pueblo bolivariano.

Conclusiones

Los intentos de los países latinoamericanos para librarse del sometimiento neocolonial y del imperialismo norteamericano, así como de buscar alternativas a la desigualdad social, siempre han encontrado la oposición tanto de las clases dominantes, que temen perder sus privilegios, como de los intereseses internacionales representados por el capital transnacional y de manera directa de los Estados Unidos, sin importar si se trata de gobiernan demócratas o republicanos, negros o supremasistas blancos. En el siglo xxi la modalidad de los llamados *golpes blandos* vino a darle un rostro menos agresivo al a todas luces ilegal intervencinismo norteamericano, además apoyado en movilizaciones internas, que pretenden darles un cierto grado de legitimidad a tales golpes; sin embargo, no puede quedar en duda que son por los intereses de grupos miniritarios apoyados por el imperialismo que se intentan o llevan a cabo estos golpes y que además recurren a la violencia sin mayor escrúpulo si las estrategias pacíficas no cumplen con el objetivo.

No obstante, también es indudable que es posible resistir a estos golpes, e incluso derrotarlos, y que aun en caso de prosperar, es posible revertirlos en el corto o mediano plazo, por lo que, a pesar del costo que sigifica recuperar la soberanía nacional y abatir la desigualdad, la conquista de estas demandas populares no está cancelada para América Latina.

Bibliografía

"A medida que crecen las tensiones sobre las elecciones presidenciales, el gobierno de Bolivia solicita una auditoría electoral" (2019), *CNN,* 23 de octubre, en https://cnnespanol.cnn.com/2019/10/23/a-medida-que-crecen-las-tensiones-sobre-las-elecciones-presidenciales-el-gobierno-de-bolivia-solicita-una-auditoria-electoral/

Alberoni, F. (1984), *Movimiento e institución: Teoría general*, Madrid, Editora Nacional.

Becerra Rebolledo, M. (2016), "Cómo se fabricó un golpe de Estado en Brasil", *Pressenza,* 31 de julio, en https://www.pressenza.com/es/2016/07/se-fabrico-golpe-estado-brasil/

Bosch Carcuro, M. (2019), "Bolivia: Golpe de Estado y ajuste de cuentas", *CLACSO*, en https://www.clacso.org/bolivia-golpe-de-estado-y-ajuste-de-cuentas/

Bringel, B. (2016), "De las protestas de 2013 al golpe de 2016", *Viento Sur*, 8 de diciembre, en https://vientosur.info/de-las-protestas-de-2013-al-golpe-de-2016/

"Cinco años del golpe a Fernando Lugo en Paraguay" (2017), *TeleSur,* 22 de junio, en https://www.telesurtv.net/news/A-tres-anos-del-golpe-de-Estado-en-Paraguay-20150622-0038.html

"¿Cómo fue el intento de golpe de Estado promovido por la oposición y EUA en Venezuela?" (2019), *TeleSur,* 30 de abril, en https://www.telesurtv.net/news/venezuela-cronologia-intento-golpe-de-estado-oposicion-eeuu-20190430-0031.html

Duval, J. (2018), "Brasil: Golpe de estado institucional a manera de destitución", *Comité para la abolición de las deudas ilegítimas,* 17 de diciembre, en https://www.cadtm.org/Brasil-golpe-de-estado-institucional-a-ma-

nera-de-destitucion
"El rotundo fracaso del imperio en su estrategia de golpe suave" (2018), *Barricada,* 9 de julio, en https://barricada.com.ni/el-rotundo-fracaso-del-imperio-en-su-estrategia-de-golpe-suave/
"Elon Musk avala en Twitter dar golpes de Estado para obtener litio" (2020), *La Jornada,* 25 de julio, en https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2020/07/25/elon-musk-sugiere-golpe-de-estado-en-bolivia-por-litio-9647.html
"¿Está Estados Unidos detrás de las protestas en Nicaragua?" (2018), *TeleSur,* 23 de abril, en https://www.telesurtv.net/news/esta-estados-unidos-detras-protestas-nicaragua-20180423-0042.html
García Fernández, A., T. Lajtman, S. Romano, y A. Tirado (2019), "EUA y la construcción del golpe en Bolivia", *Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica*, en https://www.celag.org/wp-content/uploads/2019/11/ee-uu-y-la-construccion-del-golpe-en-bolivia-1.pdf
"Guaidó libera al opositor Leopoldo López e impulsa un golpe militar contra Maduro" (2019), *Edukia Euskaraz Ikusi,* 30 de abril, en https://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/detalle/6372770/alzamiento-militar-venezuela-liberacion-leopoldo-lopez-30-abril-2019/
"Honduras, a 11 años del golpe de Estado contra Manuel Zelaya" (2020), *TeleSur,* 28 de junio, en https://www.telesurtv.net/news/honduras-aniversario-golpe-estado-contra-manuel-zelaya-20200627-0020.html
"Honduras amanece con dos presidentes" (2009), *Prensa Libre,* 29 de junio, en https://www.prensalibre.com/hemeroteca/golpe-de-estado-en-honduras/
Jenkins, C. (1983), "Resource Mobilization Theory and the Study of Social Movements", *Annual Review of Sociology*, en https://ses.unam.mx/docencia/2016II/Jenkins1994_LaTeoriaDeLaMovilizacionDeRecursos.pdf
Jofre Leal, P. (2020), "Bolivia vuelve al redil imperial", *TeleSur*, 22 de junio, en https://www.telesurtv.net/bloggers/Bolivia-Vuelve-al-redil-imperial-20200622-0003.html?utm_source=planisys&utm_me-

dium=NewsletterEspa%C3%B1ol&utm_campaign=NewsletterEspa%C3%B1ol&utm_content=35
“Las cinco etapas para asestar un golpe de Estado ‘blando’, según Gene Sharp” (2020), *Ciudad Oriental,* 28 de febrero, en https://ciudadoriental.com/las-cinco-etapas-para-asestar-un-golpe-de-estado-blando-segun-gene-sharp/
Ó Tuathail, G. y Agnew, J. (2003), “Geopolitics and discourse: Practical geopolitical reasoning in American foreign policy”, G. Ó Tuathail, S. Dalby y P. Routledge (eds.), *The Geopolitics Reader*, Londres, Taylor & Francis e-Library, pp. 78-91.
“Paraguay: A 8 años del golpe parlamentario contra Fernando Lugo” (2020), *TeleSur,* 22 de junio, en https://www.telesurtv.net/news/golpe-parlamentario-fernando-lugo-paraguay-20180622-0003.html
Reyes, E. (2020), “Dictadura boliviana se dispone a detener a candidato que lidera intención de voto”, *TeleSur*, 30 de junio, en https://www.telesurtv.net/opinion/dictadura-boliviana-dispone-detener-candidato-lidera-intencion-voto-20200630-0033.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterEspa%C3%B1ol&utm_campaign=NewsletterEspa%C3%B1ol&utm_content=39
Rodríguez Martínez, M. (2018), “¿Qué está pasando en Nicaragua? La crisis explicada”, *Euronews,* 20 de julio, en https://es.euronews.com/2018/07/30/-que-esta-pasando-en-nicaragua-la-crisis-explicada
Romero, E. (2019), “La Bolivia que deja Evo Morales en 6 puntos económicos y sociales”, *RT,* 12 de noviembre, en https://actualidad.rt.com/actualidad/333291-bolivia-evo-morales-puntos-economicos-sociales
Rousseff, D. (2019), “El golpe de 2016: Una puerta al desastre, por Dilma Rousseff”, *Brasil de Fato,* en https://www.brasildefato.com.br/2019/04/18/el-golpe-de-2016-una-puerta-al-desastre-por-dilma-rousseff
Sánchez, E. (2019), “Manuel Zelaya: ‘El golpe en Honduras se dio por los intereses de las petroleras de EEUU y la orden era liquidarme, igual que a Allende’”, *El Diario,* 27 de junio, en https://www.eldiario.es/

internacional/manuel-zelaya-petroleras-eeuu-allende_128_1464388.html

Sharp, G., (1973), *The Politics of Nonviolent Action,* Boston, Porter Sargent, en https://www.bmartin.cc/pubs/peace/73Sharp/

___ (1988), *La lucha política no violenta: Criterios y métodos*, en https://www.aeinstein.org/wp-content/uploads/2013/10/La-Lucha-Politica-Nonviolenta.pdf

___ (2011), *De la dictadura a la democracia: Un sistema conceptual para la liberación*, en https://www.aeinstein.org/wp-content/uploads/2013/09/DelaDict.pdf

Soler, L. (2014), "Golpe de Estado y derechas en Paraguay. Transiciones circulares y restauración conservadora", *Nueva Sociedad,* en https://nuso.org/articulo/golpe-de-estado-y-derechas-en-paraguay-transiciones-circulares-y-restauracion-conservadora/

Touraine, A. (1985), "An introduction to the study of social movements", *Social Research*, en https://ses.unam.mx/docencia/2016II/Touraine1985_AnIntroductionOfTheStudyOfSocialMovements.pdf

Wallace, A. (2019), "10 años del golpe de Estado en Honduras: Qué ha cambiado en el país —y qué no— a una década de la salida forzada del presidente Manuel Zelaya", *BBC,* 28 de junio, en https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48798825

Ynestroza, P. (2019), "Abril 2018. El pero abril de Nicaragua", *Vatican News,* 17 de abril, en https://www.vaticannews.va/es/mundo/news/2019-04/nicaragua-dialogo-derechos-humanos-aniversario-datos.html

Auge y declinación de los gobiernos progresistas en américa latina

ARMANDO PÁEZ FLORES

…todo proceso de transición
que no esté dirigido, conformado y regido por
el ejercicio pleno de la democracia como elemento
decisivo de la conformación de la hegemonía
(democracia que significa el proceso de autogobierno
de las masas) adquiere el carácter de una revolución
pasiva, de un poder de transformación que
se ejerce desde la cúspide contra la voluntad de las masas
y que, en última instancia acaba siempre
por cuestionar la posibilidad concreta
de constitución del socialismo.
José Aricó.

Acceso al poder

El 2 de febrero de 1999, dos meses después de haber ganado las elecciones, el coronel Hugo Chávez Frías tomó posesión del cargo de presidente constitucional de la República de Venezuela. Chávez fue postulado por el Movimiento Quinta República —una organización amplia de orientación popular y nacionalista— y por otras organizaciones políticas, entre ellas el Partido Patria para Todos, el Partido Comunista de Venezuela y el Movimiento Electoral del Pueblo. Chávez obtuvo el 56% de los votos, y de inmediato anunció su intención de realizar una Asam-

blea Nacional Constituyente como parte de la transformación política que impulsaría a su gobierno en dirección de la defensa de la soberanía nacional, es decir, a contrapelo de la globalización neoliberal en auge (Martínez, 2014).

Con el gobierno de Chávez —que se mantuvo en períodos sucesivos hasta su muerte, en 2013, y que Nicolás Maduro continuó—, inició la era de los llamados gobiernos *progresistas*, denominada también *giro a la izquierda* o *tercera ola de la democracia* (Moreira, 2019; Torrico, 2017). A Chávez le siguieron, en 2003, en Brasil, la llegada a la presidencia de Lula da Silva —dos períodos, hasta 2010—, que fue sucedido por Dilma Rousseff (2011-2016), y en Argentina, la de Néstor Kirchner, a quien lo sucedió en 2007 Cristina Fernández; Tabaré Vázquez (2005-2010) y después José Mujica (2010-2015) en Uruguay; Evo Morales en Bolivia, hasta 2019, y Rafael Correa en Ecuador, desde 2007 hasta 2017.

La trayectoria político-social de este conjunto de figuras propició la formación de expectativas generalizadas de que se iniciaría un cambio de rumbo de la política conservadora o neoliberal practicada en los países de la región durante las últimas décadas. Tales expectativas eran completamente razonables, pues entre quienes llegaban a la presidencia había sindicalistas, dirigentes de organizaciones agrarias e indias, excombatientes guerrilleros, políticos de izquierda que llegaron como candidatos de diversas organizaciones sociales y políticas en alianza con fuerzas afines en cuanto a la idea general de rectificar el ejercicio de gobierno y revertir la desastrosa situación económica, social y política que afectaba principalmente a millones de personas de los sectores más pobres. Todos ellos accedieron electoralmente al gobierno con un amplio apoyo de la ciudadanía, en parte ganado gracias a discursos nacionalistas y prodemocráticos, así como a sus trayectorias políticas y al respaldo de los grupos populares movilizados.

Los factores

¿Cómo fue posible que se produjera esta oleada de gobiernos pertenecientes a diversas posiciones del espectro político del ala de la izquier-

da? Hay que recordar, en primer lugar, que las condiciones particulares de estos países son propias de sus respectivos procesos históricos y que responden, por lo tanto, a condiciones sociales, económicas, culturales y políticas específicas. Así pues, analizando los casos particulares, podremos comprender más precisamente los elementos que explican las diferencias. Esto supone que, para referirnos al conjunto regional, tenemos que enfocarnos en aquellos factores que, por otro lado, se hallaron presentes en el espacio latinoamericano.

Menciono sólo aquellos factores que considero más relevantes, los cuales, por cierto, articulan el ámbito interior y el exterior de estos países. Para empezar, hay que señalar los efectos sociales de las políticas neoliberales de *ajuste estructural*, generalizadas como respuesta a la crisis del sistema capitalista mundial que se precipitó a finales de los setenta y que, desde comienzos de los ochenta, significó, en el campo económico, disminuciones drásticas del gasto social de los Estados latinoamericanos, privatización de empresas, inflación, "crisis de la deuda externa", pérdida del poder adquisitivo de los salarios, aumento de la economía informal y de las actividades criminales, así como de la concentración del ingreso.

Socialmente, se agravaron los problemas urbanos, aumentó el desempleo, los movimientos migratorios, la inseguridad pública, la desigualdad social, los niveles de pobreza y de miseria, sin que cursar estudios universitarios representara una opción clara de movilidad social.

En el terreno político el Estado perdió legitimidad; al igual que los partidos, los esquemas corporativistas se fracturaron al quedar sin sustento la capacidad del Estado para intercambiar favores por votos; aumentaron las protestas sociales y la represión. Los llamados actores *multilaterales* —como el FMI, el BM y la OMC— consiguieron imponer su dominio a costa del desgarramiento de la largamente vulnerada soberanía nacional de los Estados.

La sociedad civil de estos países, que cuenta en su haber con una añeja tradición de lucha y que en su pasado reciente había logrado reconstruir el rasgado tejido social ahí donde se había padecido la dic-

tadura militar, volvió a buscar caminos para reorganizarse, resistir y contestar a la ofensiva del capitalismo neoliberal, protagonizando los procesos de transición a la democracia.

En este caminar se fueron encontrando los actores de los diferentes países, reconociendo la comunidad de intereses, valores y objetivos que compartían, lo que dio lugar a la constitución de redes de colaboración, tanto en el interior como en el exterior de las fronteras nacionales. Ya en la década de los noventa, tales procesos se vieron fortalecidos por el uso de las *tecnologías de información y comunicación,* así como por el papel excepcionalmente dinamizador de la insurgencia, desde el ámbito local hasta el global, desempeñado por la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuya estrategia no fue convocar a la construcción de una forma de organización social determinada, concebida de antemano por ellos mismos, sino convocar a los pueblos de todo el mundo a discutir, consensuar y actuar para construir entre todos formas emancipadoras de convivencia.

De esa rica experiencia abrevaron las organizaciones populares de lucha ya constituidas y muchos otros tomaron inspiración para organizarse. Los Encuentros Intercontinentales por la Humanidad y Contra el Neoliberalismo, la Batalla de Seattle y las que le siguieron —el Foro Social Mundial, la Alianza Social Continental, etc.— son algunas de las manifestaciones de la reactivación del espíritu de lucha que se esparció por todos los rincones del planeta cuando el derrumbe del bloque socialista había producido por lo menos incertidumbre en muchos sectores de izquierda sobre la existencia de un referente de orientación para la lucha social.

La atmósfera de descontento social por los efectos de la gestión de los gobiernos neoliberales fue propiciando la búsqueda de alternativas para votar en las elecciones, lo que permitió a grupos de izquierda llegar al gobierno de estados y municipios, y mostrar a la ciudadanía que constituían una opción política conveniente, al tiempo que adquirían experiencia en el ejercicio del gobierno. En relación con estas experiencias, Torrico (2014: 16) señala: “Además, el acceso que tuvo la izquierda a los

poderes legislativos le permitió proyectar su imagen y mezclar discursos de oposición radical con el juego pragmático de alianzas y compromisos parlamentarios. En este sentido, el giro habría sido producto de un proceso de acumulación política de la democracia".

El mismo Torrico consigna otros dos factores que los estudiosos del progresismo latinoamericano suelen mencionar como propiciatorios de su instauración. Uno es que Estados Unidos mantuvo puesta su atención en la reacción contra los atentados del 11 de septiembre, por lo que, en aquel momento, América Latina pasó a un segundo plano y, por lo tanto, no se experimentó una intervención mayor ante la extensión del fenómeno progresista. El otro factor es la difusión regional que fue teniendo la llegada de gobiernos de izquierda a causa de la adecuada gestión de los primeros de ellos y al momento favorable de los precios de sus productos de exportación (Torrico, 2014).

Los logros del progresismo

El principal logro de estos gobiernos es que, al inicio del período, alcanzaron altos índices de crecimiento durante varios años, llegando a tener picos del orden del 18.3% en Venezuela y de 11.8% en Uruguay, por ejemplo, lo que contrastaba con las cifras de los países industrializados. Asimismo, registraron alzas en el valor total de las exportaciones y en los montos de la inversión extranjera (Gudynas, 2016).

Bajo el principio de que debía haber una intervención estatal en la economía para dirigirla a la obtención de objetivos sociales, se suspendieron las políticas de austeridad en el marco de diversas estrategias que tuvieron como resultado el fortalecimiento o la reconstitución de algunas empresas estatales, la aplicación de programas de lo que llamaron *combate a la pobreza*, mediante subsidios y programas de ayuda económica directa[2] (Bolsa Familia en Brasil y bonos en Bolivia y Ecuador),

---

2 A inicios de los 2000 el nivel de pobreza era de 64% de la población, el cual descendió a 36.6% en 2011. En Ecuador descendió de 61.6% a 33.6% aproximadamente en el mismo lapso (Gudynas, 2016).

así como con la creación de fuentes de trabajo (Gudynas, 2016). Se canalizó un gasto incrementado en servicios sociales básicos y en infraestructura en barrios urbanos y áreas rurales marginadas. Se extendió el acceso a la educación básica gratuita y, en algunos casos, se democratizó el acceso a la universidad.

"En varios países desaparecieron los déficits fiscales, se alcanzaron superávits en sus balanzas comerciales y se redujo el peso del endeudamiento" (Gudynas, 2016: 36).

Webber puntualiza que "Hubo importantes conquistas democráticas, como las asambleas constituyentes y las nuevas constituciones en Bolivia, Ecuador y Venezuela". Asimismo, fueron derogadas las leyes que otorgaban impunidad a funcionarios del gobierno dictatorial (Webber, 2019: 97-98).

Límites del progresismo y conflicto entre gobiernos y sociedad

El crecimiento económico y los programas sociales de los gobiernos fueron posibles gracias a dos condiciones fundamentales: el aumento de la demanda internacional de sus mercancías al mismo tiempo que el de los precios. En este período, China se convirtió en uno de los mercados más importantes para los productos de varios países de la región.

Como la historia nos lo ha mostrado una y otra vez, esta base es altamente vulnerable, pues depende del mantenimiento de dichas condiciones y en cuanto éstas se deterioran aquélla se desintegra, exhibiendo las limitaciones de un modelo de desarrollo que no se propone la transformación estructural de la economía. De este modo, al limitar las políticas gubernamentales al aprovechamiento del aumento de los precios internacionales de sus productos, sujetaron sus programas a la duración de la coyuntura y limitaron las posibilidades de emprender políticas consistentes de combate a la pobreza, que suponen garantizar efectivamente la educación y la cultura, los servicios de salud, la seguridad en la tenencia de la tierra y la inversión en obras de infraestructura para el aumento de la productividad, así como la vivienda digna para los sectores populares, la formalización del empleo y la institucionalización de la seguridad so-

cial; es decir, ir mucho más allá de solamente otorgar subsidios y apoyos económicos.

La estrategia de centrar las políticas económicas en la exportación de materias primas ha significado, por un lado, el reforzamiento del modo de inserción en el mercado internacional que genera el intercambio desigual[3] y la dependencia del exterior para la adquisición de bienes industrializados y, por otro, lo que se ha denominado *extractivismo*, que es un modo no sostenible de explotación de los recursos naturales para abastecer la demanda del mercado mundial y para satisfacer las necesidades de capitalización de los inversionistas.

Esto ha sido una de las principales fuentes de crítica y desaprobación de la gestión de los gobiernos progresistas y una de las primeras causas de distanciamiento y confrontación entre éstos y diversos sectores de la sociedad, principalmente con las comunidades indias y campesinas y con grupos defensores de la naturaleza, cuyas posiciones han sido etiquetadas por el presidente Correa como "infantiles", o por el vicepresidente boliviano García Linera como "ambientalismo colonial" y "trotskistas verdes" coludidos con intereses extranjeros. Derrotas electorales como la del MAS en Bolivia, que perdió importantes distritos en los comicios departamentales y la del referendo que rechazó la postulación de Evo Morales para un cuarto mandato presidencial, el triunfo de Macri en Argentina y la derrota presidencial de Correa en 2017 tienen que ver, en parte, con los conflictos abiertos a raíz de esta problemática.

Por considerar muy ilustrativo del punto de vista crítico hacia la gestión territorial y ambiental, cito en extenso el señalamiento de Rivera para el caso boliviano:

> No está por demás reiterar ese nexo perverso que exhibe el gobierno de Evo Morales con el estado colonial del MNR de los años 1950, que propició una

[3] El 96% de las exportaciones venezolanas corresponde al petróleo, mientras que en Ecuador "entre cuatro productos —principalmente el crudo— suman el 75% de las exportaciones" (Machado, 2016: 104).

escalada de corrupción y relaciones prebendales con dirigentes del campesinado indígena, culminando en la llamada *ch'ampa guerra* de los años 1960 y en la sangrienta "pacificación" barrientista. Hoy, todo ello forma parte de una memoria estatal de colonialismo interno que ya no se circunscribe a un partido, siendo patrimonio de la clase política y del sistema de partidos en su conjunto. Así, todo alarde de ruptura del MAS con el viejo modelo político hace aguas al contemplar esta versión remozada de la parodia revolucionaria, tan bien expresada en su políticas culturales y desarrollistas, que son una repetición en clave de farsa, del adusto y racional programa de desarrollo del MNR. Con un agravante: antes las cosas se decían y se hacían de frente [...] Hoy en cambio los gobernantes se llenan la boca con esas bonitas palabras, mientras sus prácticas siguen las trilladas rutas del modelo estatal colonialista, fundado sobre la prebenda, la alienación del trabajo y la destrucción de la biodiversidad. Peor que hace sesenta años, estas prácticas se han vuelto vergonzantes, solapadas y astutas, mostrando no sólo mala fe sino un velado desprecio racista por la autonomía y dignidad de los pueblos indígenas a los que dicen representar (2014: 17-18).

Según Machado,

Si bien es cierto que los gobiernos progresistas han implementado una batería de políticas públicas destinadas a los sectores más pobres, también lo es que la fuerza de penetración y obtención de ganancias del gran capital no se ha visto mermada [...] Es más, el sector privado ha obtenido durante estos años "progresistas" tasas de beneficio muy superiores a las obtenidas durante la última etapa neoliberal [...] en Brasil, el primer semestre de 2015, el lucro de los cuatro principales bancos del país creció un 46% respecto al mismo período del año anterior a pesar de la recesión actual que sufre la economía brasileña (2016: 100-101).

El costo de esto lo paga el endeudamiento creciente de las familias.

En el plano político, las críticas desde dentro y fuera se han dirigido contra el peso excesivo de la figura presidencial. A este respecto, Gudy-

nas señala que "Se debilitan otros instrumentos democráticos de consulta y participación ciudadana e incluso se limita el papel de otros poderes del Estado" (2016: 42). Sin duda el caso de Venezuela es el que mejor ilustra este punto, pero Ecuador y Uruguay también recortaron los mecanismos plebiscitarios a fin de dar cauce a los proyectos extractivistas (Gudynas, 2016). En este sentido, como sostiene Svampa: "El fin del *boom* de los *commodities* nos confronta a la consolidación de la ecuación 'más extractivismo, menos democracia'" (2016: 76).

¿Cómo interpretar teóricamente las experiencias progresistas?

Desde el arribo al poder de estos gobiernos y hasta hoy, se han utilizado diferentes adjetivos para caracterizarlos. Algunos de ellos son los siguientes: *de izquierda, antineoliberales, posneoliberales, progresistas* y *populistas*, entre otros.

Es indudable que una serie de medidas adoptadas por estos gobiernos van en dirección contraria a la corriente neoliberal impuesta en la región desde los ochenta por los sectores de derecha, cuyo combate fue lo que propició las iniciativas de organización y movilización popular durante dos décadas, lo que llevó finalmente a estos gobiernos al poder. Me refiero a la estrategia de recuperación del protagonismo estatal como actor político y económico ("traer de vuelta al Estado", se decía), como condición primera para diseñar y ejecutar políticas públicas redistributivas del ingreso, combate a la pobreza, ampliación de la seguridad social y la cobertura educativa, por ejemplo, así como a la promoción y protección de los derechos humanos de diversos sectores y la apertura de espacios de participación popular directa. Este notable viraje en la corriente histórica de la política neoliberal dominante permite pensar en un contenido *antineoliberal* o *posneoliberal* en el ejercicio de gobierno.

Sin embargo, por otro lado, aspectos como la falta de proyectos de transformación estructural del aparato productivo de estos países, que siguieron basando su economía en la producción de materias primas en el mercado mundial, la falta de profundidad de las medidas tributarias en relación con las ganancias de las grandes empresas transnacionales,

con las cuales los Estados a menudo participaron como socios —a pesar del creciente daño ecológico—, así como el reconocimiento solamente discursivo de la plurinacionalidad y la ausencia de soporte constitucional para varios de los derechos reconocidos previamente en la mayoría de estos países, hablan de la continuidad de una serie de condiciones económicas, sociales y políticas de los regímenes neoliberales anteriores, esto es, el mantenimiento de la condición de los sectores populares como clases subalternas, lo que lógicamente provocó el distanciamiento entre éstos y los gobiernos.

A esto hay que agregar el descontento social por la realización de malas prácticas políticas gubernamentales, como la división de las organizaciones sociales, como ya se señaló, a través de prebendas y la represión selectiva, además de la corrupción multimillonaria, como la de las constructoras Odebrecht y OAS en varios países, lo que dio pie al encarcelamiento de Lula y al *golpe blando* contra Dilma Rousseff en Brasil en 2016.

Desde mi punto de vista, el concepto gramsciano de *revolución pasiva* que propone Modonesi (2017) como clave de interpretación se ajusta mucho mejor a los hechos fundamentales que definen el perfil general del ciclo progresista. Con base en un cuidadoso análisis de las notas de Gramsci, Modonesi explica que la revolución pasiva es el proceso de transformación que llevan a cabo las clases dominantes como reacción estratégica para contener el ímpetu revolucionario de las clases populares, para lo que incorporan dentro de las transformaciones que realizan diversas demandas planteadas por éstas, pero cuyo objetivo final es mantener el orden dominante.

En otras palabras, se trata de procesos de modernización conservadora conducidos desde arriba que tienen vocación hegemónica, es decir, se proponen contar con la conformidad de los dominados,[4] quienes, por cierto, se ven envueltos en ese proceso debido a que la estrategia, la unidad de acción y la movilización de toda clase de recursos aplicados

[4] De aquí que se satisfagan algunas de sus demandas.

durante el ascenso de sus luchas resultan insuficientes para alcanzar las transformaciones revolucionarias que se proponen.

Además de la pasivización que se consigue, con la revolución pasiva se busca desmantelar la subjetividad antagónica y resubalternizar a los sectores movilizados. En palabras de Modonesi:

> Si bien los términos no refieren a situaciones idénticas, hay que considerar que la subalternidad incluye tanto una dimensión de pasividad, de aceptación relativa de la condición de subordinación, como otra activa, ligada a la acción de resistencia. Existe una tendencia a la pasividad que cohabita con tendencias hacia la acción, hacia el antagonismo y la autonomía (2017: 29).

Aun dentro de este marco, la revolución pasiva no sólo es regresiva, sino que también puede ser progresiva. Es progresiva cuando amplía la fuerza política de las clases subalternas y no impone medidas demasiado reaccionarias en el ámbito de las libertades políticas; en tanto que es regresiva cuando combina reformas y altos índices de represión o "para decirlo en términos más actuales: que buscan o logran desmovilizarlos" (Modonesi, 2017: 47).

Existen dos procedimientos a través de los cuales son realizadas las revoluciones pasivas (*dispositivos de pasivización*): el transformismo y el cesarismo. El transformismo, neologismo utilizado por Gramsci en su análisis del *Risorgimento* italiano, consiste en el efecto medrador del grupo dominante a costa del debilitamiento de los dominados, sea debido a la absorción de individuos, grupos o sectores de éste por aquél, o bien por la libre opción que ejercen estos últimos para cambiar de bando.

Por su parte, el cesarismo se refiere al fenómeno político-estratégico de emergencia de una figura con liderazgo carismático que emerge en el contexto de la crisis hegemónica, ya sea que se deba al descontento de la población por los resultados de la gestión de la clase dominante o a la movilización política opositora de las clases subalternas.

El objetivo del dispositivo cesarista —fórmula que no necesariamente debe recaer en un líder unipersonal, sino que también puede hacerlo en una entidad colectiva como un partido, sindicato, consejo, etc.— es conducir la revolución pasiva impulsando soluciones de compromiso entre las fuerzas en pugna, de tal manera que el conflicto no desborde los límites del sistema.

Transversalizado por los términos contradictorios de la tarea —revolucionar/pasivizar—, el cesarismo actuará en el marco de una correlación de fuerzas específica que lógicamente lo condicionará en mayor o menor medida, otorgándole a su ejercicio un carácter progresivo o regresivo en función del bando cuyas demandas resulten satisfechas en mayor medida.

Lo anterior no debe hacer que perdamos de vista que el funcionamiento del dispositivo cesarista no es neutro. Además de actuar como factor de equilibrio entre clases, "pasiviza y subalterniza por medio de la delegación y la representación distorsionada propia del fenómeno carismático" (Modonesi, 2017: 41).

Conviene tener en cuenta dos aspectos puntuales respecto al dispositivo cesarista:

1. No todas las revoluciones pasivas recurren al cesarismo. Cuando surge la crisis de dominación, la clase o clases dominantes pueden operar una serie de cambios de distinto orden y conseguir así el restablecimiento de la hegemonía.
2. Puede haber cesarismo sin revolución pasiva. Esto sucede cuando la figura cesarista no realiza una modernización conservadora, sino una contrarreforma (Modonesi, 2017).

Basta esta exposición abreviada del concepto de *revolución pasiva* y de su funcionamiento para poder advertir lo pertinente que resulta para entender y explicar el auge y la declinación del *progresismo latinoamericano*. Para empezar, como lo señala Modonesi, hay un ascenso de las luchas populares en la región que antecede a la llegada al poder de los gobier-

nos progresistas. Como ya lo apunté, es notable la proliferación y generalización de iniciativas de organización popular protagonizadas por una gran variedad de actores que conformaron redes locales, regionales, nacionales y globales de acción contra el neoliberalismo, proceso que arrancó en los ochenta y que para la segunda mitad de los noventa alcanzó una gran fuerza expresada en formas de organización y movilización.

En los países de América Latina los movimientos indios, los de mujeres, los demandantes de suelo y vivienda, los movimientos en defensa del territorio y los movimientos de trabajadores y en defensa de los derechos humanos estuvieron entre los principales protagonistas de la lucha.

Los movimientos pasaron de la acción directa a la acción institucional electoral "impulsando o sólo apoyando explícita o implícitamente —con distintos niveles de vinculación orgánica— partidos y candidatos progresistas que se proclamaban, con mayor o menor radicalidad, antineoliberales" (Modonesi, 2017: 105).

Victorias electorales incuestionables llevaron a la presidencia a los líderes progresistas que a continuación se encargaron de realizar las revoluciones pasivas que mediante una serie de medidas políticas regresaron las aguas a su cauce. Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Néstor y Cristina Kirchner, y Luiz Inácio Lula desempeñaron la tarea cesarista de pasivizar y resubalternizar a los sectores populares movilizados a través de los recursos ya expuestos.[5]

Al enlistar las razones más comúnmente señaladas por los críticos como causas de esta pasivización y resubalternización, Modonesi menciona las siguientes:

> […] el contexto de crisis de las instituciones políticas y de los partidos; la instalación de gobiernos y de césares que desahogaron las tensiones y deman-

[5] En cuanto al cesarismo, los casos de Chávez, Morales, Correa y Kirchner muestran con claridad la encarnación unipersonal de la figura en un líder carismático que tiende a perpetuarse en el poder cuando el régimen no encuentra un sustituto digno y confiable.

> das catalizadas por las organizaciones y los movimientos sociales en los años anteriores; la cooptación y el ingreso voluntario y entusiasta de dirigentes y militantes de movimientos populares a las instituciones estatales con miras a traducir las demandas en políticas públicas; la presión y los manejos clientelares realizados por los actores gubernamentales, y la eventual represión selectiva (2017: 107).

Debo decir que no considero que la determinación de llevar a cabo un programa de resubalternización de los sectores insurgentes esté presente desde el inicio del arribo a la presidencia de estos líderes, o aun antes. Puede ser más realista suponer que tenían efectivamente el propósito de llevar adelante transformaciones más profundas en todos los órdenes, pero el enfrentamiento contra el sistema capitalista, desde el orden local hasta el global, acabó por imponérseles, obligándolos a variar el rumbo, una vez más, como en tantas otras ocasiones en el pasado. Eso sí, con diversos grados de avenencia ante tal imposición, entre un mandatario y otro.

Hoy, después de poco más de una década de crecimiento en la que América Latina atrajo los ojos del mundo por las innovaciones económicas y políticas, el paisaje es contrastante, con gran afectación para millones de personas en la región. Los escenarios son de desmantelamiento de las medidas, programas e instituciones construidas para dar cauce a las políticas de los gobiernos progresistas.

Lo de hoy, en varios países, señaladamente Brasil, Argentina y Ecuador, es congelamiento del gasto público, desmantelamiento de los ministerios sociales, incremento de la deuda externa, inflación y aumento de la "mano dura" (Cajas, 2018; Moreira, 2019).

En el plano internacional acabó por desintegrarse definitivamente el proyecto de creación de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) que había arrancado en 2008 con el objetivo de integrar y fortalecer coordinadamente los procesos de desarrollo social de los 12 países miembros a través, entre otras medidas, de una moneda única y un organismo financiero propio, el Banco del Sur, lo que podía haber cons-

tituido una importante plataforma de aprovechamiento de la coyuntura económica favorable que se vivía. Según apunta Moreira (2019), la resistencia de Brasil a impulsar estas iniciativas fue parte de las causas que impidieron el avance.

Posteriormente, la muerte de Chávez y de Kirchner, así como la caída de los precios internacionales de las materias primas y la llegada al poder de gobiernos derechistas en Brasil y Argentina disminuyeron notablemente las posibilidades de avanzar en la construcción de esa plataforma. Finalmente, la retirada del proyecto, además de los dos países ya mencionados, de otros tres (Chile, Paraguay y Perú) en abril de 2018, acabó por desfondar el proyecto de la UNASUR (Moreira, 2019).

Conclusiones

El ascenso de las luchas populares ante el descontento por el deterioro de las condiciones de vida ocasionado por dos décadas de aplicación de políticas neoliberales en América Latina fue el factor fundamental de la llegada de grupos de izquierda al poder en un buen número de países, entre ellos los más grandes de la región.

En realidad, son estos movimientos, articulados de manera diversa con partidos y candidatos progresistas, los que llevan a estos personajes a las instancias de poder institucionales e inauguran y extienden el llamado *ciclo progresista*.

Como en los años treinta y cuarenta, cuando el aumento de las movilizaciones sociales abrió la coyuntura política que allanó el camino para la llegada al poder de los gobiernos nacional-populares en varios países de esta misma región latinoamericana, los cuales a continuación operaron un programa de gobierno que llevó a institucionalizar la participación, los gobiernos progresistas del siglo XXI reeditan esa clase de intervención.

Tenemos numerosas evidencias para comprobarlo. De ahí que, como atinadamente lo propone Modonesi, el concepto gramsciano de *revolución pasiva* ofrece un buen punto de partida para interpretar estos

procesos, orientados a resituar a las clases populares movilizadas como actores subordinados en el sistema autoritario del poder vigente.

La hipótesis recurrente en algunos análisis de estos procesos sostiene que los protagonistas del progresismo tomaron el gobierno, pero no el Estado, que pertenece al sistema capitalista, por lo que la realización de transformaciones estructurales en favor de una sociedad democrática, igualitaria y soberana resulta inviable. Por eso, más tarde o más temprano, los presidentes, congresos y aparatos judiciales terminaron con las ilusiones de encaminarse a la construcción de una sociedad sobre nuevas bases.

La extensión y profundización del extractivismo productivo, sin que importe el grado de deterioro ambiental alcanzado, es uno de los datos que confirma el carácter ilusorio de la política progresista emancipadora. Pero también el entendimiento de la plurinacionalidad a contracorriente del imaginario de los pueblos indios y la realización de estrategias divisionistas para debilitar las organizaciones críticas, para desestructurar su autonomía, así sea valiéndose de la represión. La perpetuación de las economías de estos países como fuentes de materias primas para el capitalismo mundial, la aplicación de políticas clientelares y la incorporación de personalidades de la derecha política en puestos importantes del aparato estatal e incurrir en prácticas corruptas para financiar campañas electorales, son todas ellas muestras de la continuidad del orden antidemocrático, dependiente e injusto.

Como lo he aclarado en otras ocasiones, esta narrativa no es simplemente la expresión de un posicionamiento reduccionista en el que el gobierno es malo y la sociedad es buena. Ni lo uno ni lo otro, ambos tienen tanto componentes criticables como dignos de reconocimiento. Las dos partes aciertan y se equivocan, y las decisiones y comportamientos de uno y otra se conjugan para producir la realidad. Puede haber, y hay, perversidad en los dos lados, como también ingenuidad, egoísmo y temor. Los análisis que se emprenden de los fenómenos sociales contribuyen precisamente arrojando luz sobre las deficiencias y excesos de la acción social a fin aprender las lecciones de la historia y desempeñarnos mejor en el futuro.

Por lo pronto, la sociedad que habita en estos países del progresismo latinoamericano o, ahora, del *giro a la derecha*, ha vuelto a comenzar a inconformarse y ese recomienzo de las movilizaciones envuelve la esperanza de reconstitución de la subjetividad antagonista necesaria para acometer nuevamente la transformación revolucionaria de la sociedad.

Bibliografía

Aricó, José (2018), *Dilemas del marxismo en América Latina. Antología esencial,* Buenos Aires, CLACSO/Fundación Rosa Luxemburgo, en http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20171117024109/Antologia_Jose_Arico.pdf

Cajas, John (2018), "¿Hacia dónde va el Ecuador de Lenín Moreno?, *Nueva Sociedad*, junio, en https://www.nuso.org/articulo/hacia-donde-va-ecuador-lenin-moreno-/

Gudynas, Eduardo (2016), "Los progresismos sudamericanos: Ideas y prácticas, avances y límites", Gudynas *et al., Rescatar la esperanza. Más allá del neoliberalismo y el progresismo,* Barcelona, Entrepueblos, pp. 27-61, en https://www.entrepueblos.org/wp-content/uploads/2016/11/RescatarEsperanza_web.pdf

Machado, Decio (2016), "El progresismo latinoamericano en su laberinto", Gudynas *et al., Rescatar la esperanza. Más allá del neoliberalismo y el progresismo,* Barcelona, Entrepueblos, pp. 91-112.

Martínez, José (2014), "El papel del Movimiento Quinta República en la recomposición del estado venezolano (1998-2000)", *Historia Actual Online* 33, pp. 21-34, en https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4611731.pdf

Modonesi, Massimo (2017), *Revoluciones pasivas en América,* México, UAM/Itaca, en http://www.redmovimientos.mx/2016/wp-content/uploads/2016/10/Revoluciones-pasivas-MM.pdf

Moreira, Constanza (2019), *Tiempos de democracia plebeya. Presente y futuro del progresismo en Uruguay y América Latina,* Buenos Aires, CLACSO, en http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20191101021329/Tiempos_de_democracia_plebeya.pdf

Rivera, Silvia (2014), *Mito y desarrollo en Bolivia. El giro colonial del gobierno del MAS,* La Paz, Piedra Rota/Plural Editores.
Svampa, Maristella (2016), "América Latina: Fin de ciclo y populismos de alta intensidad", Gudynas *et al., Rescatar la esperanza. Más allá del neoliberalismo y el progresismo,* Barcelona, Entrepueblos, pp. 63-88.
Torrico, Mario (ed.) (2017), ¿Fin del giro a la izquierda en América Latina? Gobiernos y políticas públicas, México, FLACSO, en https://www.flacso.edu.mx/sites/default/files/libros_oa/fin-del-giro.pdf
Webber, Jeffery (2019), "Mercado mundial, desarrollo desigual y patrones de acumulación: La política económica de la izquierda latinoamericana", F. Gaudichaud, J. Webber y M. Modonesi, *Los gobiernos progresistas latinoamericanos del siglo XXI. Ensayos de interpretación histórica,* México, UNAM, pp. 97-180, en https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02320891/document

Los gobiernos progresistas en América Latina. Senderos luminosos

PABLO CASILLAS HERRERA*

Introducción

A finales del salvaje siglo XX con el neoliberalismo y a principios del esperanzador siglo XXI se configuraron los gobiernos progresistas en América Latina, cuya esperanza se vio desarrollada democráticamente con ingenio a una corta edad en las propuestas del socialismo latinoamericano de acuerdo con sus raíces culturales, políticas y sociales, como el socialismo del siglo XXI y el Sumak Kawsay, o con otras sugerencias menos profundas como la socialdemocracia latinoamericana. Estas propuestas, diferentes al neoliberalismo, tuvieron una profunda transformación en las estructuras mentales, el ejercicio de la democracia, la concepción de la política y la ética, los replanteamientos de las visiones del mundo, la humanidad y la naturaleza, y en su relación intrínseca. Fueron una *esperanza* llena de alegría, la *utopía* hecha realidad, pero, como tal, inalcanzable en su plenitud, ya que las fuerzas del capitalismo, el patriarcado, el colonialismo y el racismo que se han impuesto eurocéntricamente en América Latina desde su conquista impidieron tal sueño,

* Profesor e investigador. Departamento de Sociología, Universidad de Guadalajara. Dr. en Ciencias Sociales con especialidad en Relaciones de Poder y Cultura Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, México. CE: pacahe_2000@yahoo.com; perfil SNI 2; línea de investigación: "Cultura política y movimientos sociales en América Latina"; cuerpo académico: "Cultura, política y poder en América Latina".

y, por el contrario, regresaron con mayor coraje y fuerza en forma de neofascismo, neocolonialismo y neorracismo con la extrema derecha y el ultraneoliberalismo. Ahora tal sueño no sólo está exiguo, sino que también lo están la propia existencia de la humanidad y la naturaleza, el mundo en el que habitamos. El propósito del presente artículo es analizar esas propuestas utópicas, su incursión y sus adversidades, así como las insoportables e infranqueables barreras económicas y políticas.

Palabras claves: Gobiernos progresistas, esperanza, utopía, extrema derecha, neofascismo, neocolonialismo, neorracismo y ultraneoliberalismo.

Algunas consideraciones teórico-metodológicas sobre los gobiernos progresistas o alternativos al neoliberalismo

En América Latina se configuraron los gobiernos progresistas a principios del siglo xx y fueron hegemónicos hasta más o menos el 2013, cuando inició su declive. El primer país que puede considerarse el parteaguas respecto al modelo neoliberal es Venezuela, con el gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías desde 1999 hasta 2013. De ahí fueron apareciendo los gobiernos progresistas de Luiz Inácio da Silva (2003-2010) y Dilma Vana Rousseff (2010-2016) de Brasil; los de Tabaré Ramón Vázquez Rosas (2005-2010 y 20015-2020) y José Alberto Mujica Cordano (2010-2015) en Uruguay; los de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Elizabet Fernández de Kirchner (2007-20015) en Argentina; el de Nicolás Maduro Moros (2013-2025) en Venezuela; el de Evo Morales en Bolivia (2006-2020); el de Rafael Vicente Correa Delgado (2007-20017) en Ecuador; el de Verónica Michelle Bachelet Jeria (2006-2010) de Chile; el de José Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) de Honduras, y el de José Daniel Ortega Saavedra (2007-2022) en Nicaragua.

La categoría *gobiernos progresistas* o *alternativos* no es homogénea, estructural y determinista, sino, por el contrario, es heterogénea, diversa, historicista y dialéctica. Es decir, hace referencia a la historia de la lucha de los pueblos en su diversa composición (campesinos, indígenas, afrodescendientes, estudiantes, obreros, etc.) y en la heterogeneidad de

su cosmovisión histórica, cultural, identitaria, lingüística y política. Bajo concepciones bioéticas y biopolíticas diferentes a la "civilización occidental", hacer una lectura desde una epistemología del desarrollo, la nación, la sociedad y el Estado bajo el paraguas de la modernidad occidental es abstraer la memoria, la concreción, la realidad local y los sujetos de su contexto histórico o historicista y acomodarlos, adecuarlos, a una estructura, a un sistema determinado y determinante: capitalista, paternalista, racista y colonial. Es considerarlos una estructura sistémica dada e inevitable en el devenir de la historia. No podemos seguir concibiendo la historia como dominación, colonizada y eurocéntrica. Pero tampoco podemos abstraernos de esta concepción, pues es nuestro punto de referencia para no repetirla; no puede considerarse una epistemología idónea para explicarnos la emergencia de los movimientos sociales, pues la negación de los sujetos populares o *subalternos* y su diversidad es negar que a la historia la hacen esos sujetos, y no hay historia sin sujetos. Esto parece elemental, pero en la ideología de la dominación capitalista no es así. Entonces, para transcender esta visión, la eurocéntrica, la occidentalizada, hay que tomar en cuenta otras epistemologías de manufactura más bien latinoamericana que consideren la dialéctica materialista de la historia (Wolf, 1994) desde su propio contexto y realidad, en donde los sujetos viven condiciones de dominación pero que son transformadores, y no transformados y determinados, emancipadores de sistemas determinados y determinantes, que son objeto de cambio de los sujetos, de los pueblos con historia, de sus formas religiosas, de sus estilos de vida, de sus formas de gobierno, de sus tradiciones, *habitus* y costumbres, de sus magias, identidades y manifestaciones culturales, hasta en sus manifestaciones antropomórficas de la realidad.

Son alternativas de diversas concepciones que se dan en América Latina, la que hay que ver desde sus entrañas, de lo que produce la materia latinoamericana, la que nos permita visualizar los modos de entender, pensar, concebir, parir y crear la realidad. Por ello, hay que considerar otras epistemologías a las que se han usado, como nos invita Boaventura. Por ejemplo, las epistemologías del Sur (De Sousa Santos, 2011) o

las del Sumak Kawsay de Bolivia, las de los de Sin Tierra de Brasil, las de las Misiones de Venezuela, las de los Caracoles de los zapatistas en México, o las cosmovisiones epistemológicas de los afrodescendientes e indígenas en la cordillera andina, o las epistemologías de los Estados plurinacionales y pluringüísticos en Ecuador y Bolivia, que nos proporcionan visiones dialécticas de la historia que descolonializan los modos de acercarse y estudiar la realidad, en una "ecología de los conocimientos" (De Sousa, 2001).

Estas epistemologías de la dialéctica materialista de la historia latinoamericana nos permiten alejarnos de los paradigmas hegemónicos occidentales, de la socialdemocracia o del tercer Estado, del Estado de bienestar, del Estado desarrollista, del Estado neoliberal y del castillo de conceptos ideologizantes como *Estado*, *nación*, *sociedad*, *desarrollo*, *progreso* y un largo etcétera, que no hacen sino alusión a la lógica del capitalismo, al pensamiento liberal y a la razón moderna (Flores Olea *et al.*, 2000), que habitan en América Latina como paradigmas dominantes sin demostrar realmente su eficacia y viabilidad.

Las epistemologías alternativas, de diferentes pensamientos y modos latinoamericanos, nos permiten alejarnos de los paradigmas teóricos eurocéntricos de la historia, por ejemplo de la concepción hegeliana, que, a decir de Fukuyama, concebía que "la historia culminaba en un momento absoluto, en el que triunfaba la forma definitiva, racional, de la sociedad y del Estado" (Fukuyama, 1988). La dialéctica de la historia de Hegel alude a la contradicción inherente de las cosas, que están en un constante movimiento fijadas por su pasado, en el que se afirman los sujetos en "algo de lo que no es". Así, la totalidad sería el producto de la contradicción. Entonces, la historia es el resultado de lo que fue, producto de la contradicción (Hegel, 1987).[7]

[7] En la *Filosofía de la historia americana* de Leopoldo Zea, se reflexiona sobre cómo la dialéctica de la dependencia latinoamericana (ya sea respecto a España, Estados Unidos o al espíritu dependentista) del esclavo a su amo se da —considerando su condición de ser esclavo y su sentido de ser— gracias a que es su amo el que le da identidad. Sin em-

Esa concepción de la dialéctica de la historia, en los opuestos, se concebiría en "el término de la evolución ideológico en sí", en "el fin de la historia en términos hegelianos" de acuerdo con Fukuyama (1988). Es decir, sería el fin de la historia porque los puestos ideológicos (capitalismo-socialismo) que le daban sentido de ser habrían concluido en su evolución dialéctica, y entonces se erguiría el triunfo de uno de los opuestos, "el liberalismo ideológico en la esfera de las ideas y de la conciencia" (Fukuyama, 1988). En esta interpretación, Fukuyama, como Hegel, deduce que la historia culmina en un momento absoluto en "el que triunfaba de forma definitiva, racional, de la sociedad y el Estado" (Fukuyama, 1988). Ya no hay la posibilidad de pensar otro futuro. La utopía concluyó.

Contrariamente a esta concepción positivista de la historia, la temporalidad de los *gobiernos progresistas* no es de ciclos, ni de inicio ni de fin de ciclo. Éstos no son temporalidades lineales, no son tiempos cronometrables, no son absolutos, no están en la lógica del fin de la historia (Fukuyama, 1988), de la no memoria, de lo irreversible, de las leyes intelectuales determinadas y determinantes. No es la racionalidad instrumental. Esta concepción de la historia borra por completo las contradicciones materiales de dominación de los sistemas sociales y económicos capitalistas y las intenciones subjetivas e intersubjetivas de la acción de los sujetos, escamoteándoles su historia, memoria e historicidad (la historia de su acción social, de sus luchas); asimismo, suprime la posibilidad de transformar sus historias, sus realidades, socialmente conscientes. Al contrario, se convierten en sujetos estructurados, determinados y determinantes estructural e históricamente. Se les cierra toda posibilidad de transformación y emancipación.

bargo, esa superación de esclavo-amo se dará cuando el esclavo cobre conciencia "espiritual" de esa contradicción, y entonces el esclavo será el amo y éste pasará a ser el esclavo; es el resultado de la contradicción de lo que fue. Pero la historia se repetiría porque la conciencia de la contradicción volvería a aparecer, pues el "espíritu nunca realmente se halla quieto". (Zea, 1978).

Son las epistemologías de la dialéctica materialista de la historia latinoamericana las que nos permiten visualizar a los gobiernos progresistas como gobiernos alternativos, como la superación del capitalismo neoliberal, *grosso modo*, y situar a éste en la crítica como su fase de crisis sistémica, al analizar sus postulados de progreso (económico, social, urbano, etc.), desarrollo (sustentable, humano, etc.), soberanía (nacional, de Estado, etc.), autonomía (política, social, cultural, etc.), totalmente inevitables y pertinentes.

Las epistemologías latinoamericanas nos permiten otros imaginarios: el otro tiempo, el tiempo de la vida, la bioética, las cosmovisiones latinoamericanas (andina, zapatista, afrodescendiente, indígenas, etc.), y otras éticas y bioéticas, las relaciones hombre-naturaleza, los vínculos naturales madre tierra-humanidad. Son gobiernos alternativos al neoliberalismo salvaje, gobiernos de procesos sociales en transición, de acciones colectivas, de los grandes relatos de los sujetos anticolonialistas, anticapitalistas, antipatriarcales, antineoliberales, anticoloniales. En estos gobiernos alternativos los sujetos sociales dan otro significado al tiempo: es tiempo de vida, social, cultural, de identidad, de ser y pensar, de no hacer. Es otra lingüística, es la lingüística de los indígenas, de los campesinos, de los afrodescendientes (Walter Mignolo, 2000). Son bioéticos, bioecológicos, biopolíticos, biosociales. Se trata de otra subjetividad y otra intersubjetividad de los sujetos sociales latinoamericanos; son categorías más complejas de la historia social.

Los gobiernos progresistas o alternativos no se plantearon desde el inicio el cambio del sistema capitalista porque su emergencia no fue producto de la revolución, de un cambio radical, estructural, social, económico, mental, cultural, ideológico y político (marxista, leninista, ni maoísta). Ascendieron al poder por los movimientos sociales, populares, indígenas, afrodescendientes, obreros, estudiantiles, de mujeres y ecológicos, que se manifestaban como antineoliberales, antisistémicos, globalifóbicos, anticapitalistas, antirracistas, antipatriarcales y anticoloniales. Ascendieron al poder por las vías de las democracias liberales, acotadas, manipuladas y controladas por la aristocracia política liberal, es decir,

bajo la lógica del pensamiento y del proyecto liberal para América Latina: la teoría de la dependencia. Y estos movimientos sociales, a través de la representación y el consenso, se plantearon ser posneoliberales.

Para los sujetos sociales estos hechos son procesos en construcción, en los que sus sentidos de ser son sentidos de memoria, identidad, pertenencia y cosmovisión. El poder para ellos tiene esa significación; no son Maquiavelo ni Weber quienes están presentes en su concepción bioética y biopolítica; no se trata del pensamiento occidental, eurocéntrico ni moderno, sino de la historia pasada y presente latinoamericana en una dialéctica materialista de la historia, que se construyó en la acción y en la utopía, y que no concluye, porque aún no se construyó. Es una reconstrucción de la descontrucción de epistemologías latinoamericanas.

Negar a los gobiernos progresistas es negar ese sustrato emergente; es negar esas configuraciones materialistas de la historia; es negar no sólo su diversidad cultural, nacional, comunitaria y lingüística, así como su cosmovisión identitaria, sino que es negar también la historia de sus luchas emancipatorias contra el dominio hegemónico eurocéntrico desde la conquista y la instauración del capitalismo, el patriarcado, el colonialismo y el racismo como sistema dominante. El surgimiento de los gobiernos progresistas o alternativos obedece a esa historia, y en el decurso de esa historia, esos gobiernos progresistas no pueden entenderse tampoco en una lectura homogénea, lineal, evolucionista, en pueblos sin historia, pues, al interior de los países latinoamericanos que se manifiestan como gobiernos progresistas, se desarrollaron diversas concepciones sociales y políticas. Ésta es la posibilidad fértil que nos permite el recurso de las configuraciones materialistas de la historia, el dar cuenta no sólo de las contradicciones sino de las diversas formas materiales de concepciones políticas, culturales, cosmovisiones, económicas, éticas, etc., que los diversos sujetos sociales (afrodescendientes, indígenas, obreros, estudiantes, mujeres, comunidades, etc.) realizan cotidianamente, ejercen en la acción, proyectan, discuten, debaten y experimentan.

Así es como proyectan sus utopías los gobiernos progresistas a diferentes escalas, desde abajo. De esta manera, observamos que hubo gobiernos progresistas que se configuraron en tendencias utópicas de las socialdemocracias latinoamericanas, o de loa socialismos latinoamericanos, que no eran homogéneos ni lineales u ortodoxos entre sí; por el contrario, afloraba la diversidad social y política, la cosmovisión cultural e identitaria, y ello les hacía tomar rumbos distintos, configuraciones contrapuestas y diversas. Así podemos considerar que en la socialdemocracia latinoamericana aparecían alternativas distintas en Brasil, Argentina, Uruguay, Honduras o Chile. O de socialismos latinoamericanos con expresiones de socialismo bolivariano en Venezuela, o del socialismo Sumak Kawsay en Bolivia y Ecuador.

Es, pues, otra metodología, otra epistemología la que necesitamos para comprender el decurso de la historia de los pueblos de América Latina y de los gobiernos progresistas, donde los sujetos aparecen como los constructores de su propia historia, y no como determinados histórica y sistémicamente.

Así, podemos observar en América Latina una configuración de dos alternativas al modelo neoliberal, con diversas expresiones entre ambas. Primero, la socialdemocracia liberal latinoamericana; no la socialdemocracia alemana, la que supone la articulación del socialismo con el sistema capitalista, una relación contradictoria (Díaz Polanco, 2008). Segundo, el socialismo latinoamericano en dos acepciones: el socialismo del buen vivir, o Sumak Kawsay, un socialismo que concibe la diferencia, y el socialismo del siglo XXI.

Estas dos diferentes configuraciones alternativas se proponen una sociedad con igualdad y justicia social, y se definen anticoloniales, antiimperialistas, anticapitalistas y nacionalistas, inclusivas, antirracistas antipatriarcales y antipatrimonialistas. El concepto de *Estado Plurinacional* contiene y materializa la conjunción de proyectos políticos, económicos y culturales de la clase, la nación y las nacionalidades. Aparecen algunos Estados plurinacionales y pluriétnicos. El socialismo pretende alcanzar el *bien vivir,* opuesto al vivir bien, que supere

el paradigma de la modernidad y las contradicciones entre trabajo *vs.* capital, y capital *vs.* naturaleza. Una sociedad protectora de la vida de todos los seres biológicos.

La filosofía política de los gobiernos progresistas

Observamos que los gobiernos progresistas tienen algunos principios que son los referentes de su acción y que son producto de los movimientos sociales que los llevaron al poder. Podemos mencionarlos de manera genérica, pero sobresalen debido a que están basados fundamentalmente en el rescate de lo humano, lo social, la ética como acción; en la ecología política y en la biopolítica; en la libertad de ser y pensar; en la nación pluricultural, plurilingüística y pluriétnica; en el desarrollo. Están basados en valores éticos como la equidad, la justicia, la solidaridad y la honestidad. Son Estados sociales totalmente opuestos al neoliberalismo. Estos principios los encontramos en todos los gobiernos progresistas, y son claramente opuestos a los del modelo neoliberal, lo que los hace diferentes y alternativos.

La anteposición de lo humano les permite concebir otro tipo de Estado. Fundamentalmente, se propusieron la recuperación de la rectoría Estado, que con el neoliberalismo se había perdido, por considerar que éste no debía intervenir en la política económica y que tenía que dejarla en manos del capital. De ahí surgiría el Estado neoliberal, en oposición al Estado social, que se convertiría en el garante del capital y controlador y solapador de los conflictos sociales que producirían las políticas neoliberales derivadas del Consenso de Washington.

Entonces, la recuperación del Estado fue central. Se buscaba un Estado social, que recuperara las políticas sociales y el empleo (no en el pleno empleo como lo planeara Keynes, pero ésa era la aspiración) y que redujera la pobreza, la desigualdad social y la polarización social producto de las asimetrías entre ricos y pobres.

Sería un proyecto de sociedad donde se articularían y cohesionarían socialmente los diferentes referentes sociales (las regiones, las comunidades, las urbes, las colonias, etc.); un proyecto de recuperación cultural,

de identidad en los valores del pasado, de la memoria, de la cosmovisión, del pensar, del ser, de la nación y del crecimiento social y del país en oposición al desarrollo que mide sólo al capital pero no lo social. Sería un proyecto más amplio y profundo que no solo reharía el tejido social sino que daría un sentido de cambio a las estructurales mentales de la sociedad.

Se recuperaría la democracia, ya no sólo la liberal, garantizando y legitimando la elección a través de plebiscitos y referendos, generando un clima de confianza y, en consecuencia, la libertad de elegir. Incluso sería una modificación de la estructura jurídica del Estado, incluyendo un cuarto poder, el popular, como sucedió en Ecuador y Bolivia. Esta consideración era producto de la cascaga sangrienta que habían tenido los gobiernos neoliberales por imponer sus resultados. Se trataba de garantizar la libertad de elegir y acabar con los sistemáticos fraudes con miles de argucias "legales" en complicidad con los órganos electorales y legislativos estatales, las intervenciones internacionales de las transnacionales (por ejemplo de Odebrecht), los países (como Estados Unidos), los actores de la extrema derecha (por ejemplo del grupo Lima) y los organismos internacionales (OEA).

Habría políticas fiscales que protegerían del saqueo indiscriminado de capitales y de los contratos "leoninos" y de la pérdida de los bienes de la nación a favor de los capitales transnacionales. Se regularía y controlaría la indiscriminada deuda pública contraída con los organismos financieros internacionales (FMI, BM, BID, etc.), que, a cambio, imponían al grueso de la población políticas restrictivas, privatizadoras (en los ámbitos de la salud, la educación, la vivienda, la seguridad, la cultura, los sectores estratégicos de seguridad para el país, las telecomunicaciones, la energía, la aeronáutica, el agua, etc.), arancelarias, fiscales, etc., lo que estrangulaba al PIB de los países latinoamericanos; al señalar que la media de endeudamiento podía ser de 45 a 50%, se generaron cuellos de botella a la capacidad de desarrollo y crecimiento de estos países, pues se adquirieron deudas impagables por las altas tasas de interés y por las políticas neoliberales impuestas. Países endeudados condenados al fracaso.

Con este escenario, los países progresistas se proponían reactivar la economía y el desarrollo en beneficio de la nación con un sentido social y no en beneficio de los capitales transnacionales. Buscaban acabar con la corrupción, que impedía el desarrollo y crecimiento de los países.

No se trataba solamente de cambiar un gobierno neoliberal por otro social; se trataba de un cambio de régimen. No era una revolución radical, estructural, por un nuevo sistema económico no capitalista, pero sí se buscaba un sistema diferente al neoliberal, uno posneoliberal, antirracista, anticolonial y antipatriarcal. Se quería un sistema social diverso, autónomo, comunitario, equitativo y justo.

Bajo esta concepción filosófica y política es que surgieron los gobiernos progresistas como gobiernos alternativos, en formas de socialdemocracia latinoamericana, con tendencias nacionalistas, sociales, humanistas, intervencionistas, regulacionistas (en Brasil, Argentina, Chile, Honduras y Uruguay), y con tendencias al socialismo latinoamericano (como en Venezuela, Ecuador y Bolivia) con reconocimientos de la pluriculturalidad, la plurinacionalidad, la plurilingüística, pero también nacionalistas, sociales, humanistas, intervencionistas y regulacionistas.

Ambas concepciones, la socialdemocracia y el socialismo, tienen sentidos profundos —unos más (los socialistas) que otros (los socialdemócratas)— en cuanto a la identidad, subjetividad, intersubjetividad, bioética, biopolítica y bioecología, así como poseen una concepción filosófica de lo humano basada en el respeto, la equidad, la igualdad y la solidaridad.

Aunque ambas concepciones se mantienen en la esfera del capitalismo global, con ciertas diferencias, los países progresistas de tendencias socialdemócratas mantienen relaciones capitalistas reguladas (los socialdemócratas), a diferencia de los países progresistas y socialistas que tienden a privatizar los sectores estratégicos de seguridad nacional (hidrocarburos, telecomunicaciones, aeronáuticas, militares, agua, culturales, bancarias, etc.).

Consideraciones sobre el Estado en los gobiernos progresistas

Los gobiernos en procesos de transición posneoliberales han alcanzado espacios dentro del aparato de Estado, pero no al Estado. Alcanzar el poder del Estado implica destruir las relaciones estructurales de poder de las clases aristócratas neoliberales dominantes, los poderes fácticos y el capital y dominio imperantes, y establecer otros, crear un Estado nuevo, con una estructura de poder cimentada en las relaciones hegemónicas de las clases subalternas, creando así un bloque histórico (Portelli, 1997). Solo bajo esas condiciones se puede decir que se tiene el poder del Estado.

Esta concepción del *poder del Estado* no se fraguó en todos los países progresistas, salvo en Bolivia[8] y Venezuela.[9] Los demás países del bloque progresista (Brasil, Argentina, Ecuador, Honduras, Uruguay, Chile) no pudieron o no se plantearon crear las estructuras formales o informales de hegemonía orgánica de los sujetos y actores sociales, urbanos, sindicales, campesinos, comunitarios, etc., que le dieran una estructura hegemónica y que formaran parte de la estructura del Estado. Es en este sentido que la noción del Estado social debería estar definido no en una relación de sociedad-Estado, sino en la estructura del Estado en lo social.

Ello significaría detentar el poder político, tener la capacidad de articular a los movimientos sociales y a la sociedad en su conjunto en torno a proyectos sociales específicos con el Estado (ejemplos de ello los tenemos con las misiones en Venezuela, las mingas en Ecuador, las naciones en Ecuador y Bolivia, etc.). Significaría una nueva lógica del

---

8 A cuyo gobierno el capital y la extrema derecha, con apoyo de un grupo de países liderados por Estados Unidos y la OEA, no pudieron derrocar sino a través de un golpe de Estado en 2019.

9 A cuyo gobierno, el de Maduro, los Estados Unidos, con la complicidad de Colombia, el grupo de Lima y la OEA, con otros países europeos y latinoamericanos, han desconocido, pero que no han podido derrocar, pese a las distintas estrategias de bloqueos económicos, golpes de Estado, embargos comerciales y financieros, etcétera.

ejercicio del poder del Estado y una permanente revolución para construir una sociedad diferente, de las clases subalternas, constituyendo el bloque histórico sociedad-Estado, es decir, alcanzar una estructura socioeconómica y la consolidación política e ideológica en una unidad hegemónica (Portelli, 1997) y lograr el sistema hegemónico de los países progresistas.

Los gobiernos progresistas ascienden al poder impulsados por los movimientos sociales, indígenas, campesinos, afrodescendientes y otros muy diversos, definidos como altermundistas, anticapitalistas, globalifóbicos, antisistémicos, etc., categorías que le darían otra definición al Estado como alternativo, en transición al posneoliberalismo. Se daría la posibilidad de construir una estructura socioeconómica, política e ideológica. Es decir, los movimientos sociales (los indígenas de México y los de la cordillera andina, los afrodescendientes del norte de Sudamérica, los cocaleros de Bolivia, los Sin Tierra de Brasil, las mingas en Argentina, etc.), definidos de esa manera, tenían una concepción ideológica y política clara. Esos movimientos estaban organizados en formas comunitarias, de acuerdo con sus hábitos y costumbres históricas, en muchos casos anticoloniales, plurilingüísticos y pluriétnicos, en relaciones socioeconómicas de asamblea (así podemos señalar a los de Sin Tierra, las comunidades de Ecuador y Bolivia, las misiones de Venezuela,[10] etc.), en las que estaban creadas las estructurales socioeconómicas y de superestructura ideológica y política, pero en donde no se dio, en la mayoría de los casos de los países progresistas, el vínculo orgánico como hegemonía para lograr el poder hegemónico y, finalmente, el bloque histórico. ¿Por qué no se dio esto? Por la diversidad, heterogeneidad y proyectos políti-

---

[10] Para ejecutar los planes sociales del gobierno de Hugo Chávez se establecieron misiones con un alto contenido participativo y colectivista, ya que se movilizaron las masas sin discriminación alguna. Se propuso la sustitución de las políticas sociales paternalistas por políticas basadas en la participación, orientadas al fortalecimiento del tejido asociativo de las comunidades y a la creación de la ciudadanía política efectiva. Es en este contexto que se inicia el programa Barrio Adentro, que se convierte en el modelo a

cos y dependencias económicas de algunos de los países progresistas, no es sencilla la respuesta, pero trataremos dar una.

Los gobiernos alternativos dejaron de serlo cuando se burocratizaron (los líderes se volvieron diputados, asambleístas y senadores). Se mercantilizaron políticamente cuando no atendieron las epistemología sociales, rompieron los nexos con los movimientos sociales, no se mimetizaron con las subjetividades e intersubjetividades de los sujetos sociales —como en los casos de Brasil con el PT en los períodos de Lula y Dilma, y en Argentina, particularmente con Cristina Fernández—. También lo hicieron cuando ni siquiera se lo propusieron, no obstante el capital social y político que se había logrado a través de organizaciones y de muestras claras anticapitalistas y antineoliberales —como el caso de Michelle Bachelet en Chile—, o cuando consolidaron sus identidades en organizaciones obreras, campesinas, comunitarias e indígenas, y cuando, finalmente, aparecieron las traiciones, como con Lenín Moreno en Ecuador.

De los aprendizajes que quedan con la irradiación de los gobiernos alternativos, están el reconocer la memoria de los sujetos sociales, la plurinacionalidad, la pluridiversidad, la plurilingüística, su subjetividad e intersubjetividad, sus prácticas, costumbres, hábitos, sus formas de gobierno y de acción colectiva, donde los sujetos recuperen sus espacios sociales, públicos, sus territorios, apropiándoselos e imprimiéndoles otra significación, mediante una revolución cultural permanente. Ése es su sentido de historia, de historicidad (el legado de acciones formativas política y culturalmente cuajadas en sedimentos organizativos comunitaria

partir del cual sucesivamente se impulsan nuevas políticas sociales en diferentes ámbitos y que reciben el nombre de *misiones* (Edgardo Lander, 2007). Las misiones se concibieron en las esferas de la educación, la alimentación, los servicios básicos y la miscelánea. Con las misiones se logró cambiar la estructura social y política del Estado. Ahora éste está estructurado a partir de las misiones, no al revés, loo que constituye una producción de la política desde lo social (Casillas, 2018). Un análisis amplio se puede encontrar en Casillas (2018).

y socialmente); son sus raíces, su memoria, en las que se debe construir el Estado alternativo.

Sin embargo, esa irradiación territorial, geopolítica, regional de los gobiernos progresistas se ha estancado. Se creó un abismo entre Estado y sociedad al no reconocer la heterogeneidad y la identidad de los sujetos sociales.

Para ello se proponen romper con la antipolítica, hacer la *otra* política, la biopolítica, la ética política.

Las diversas propuestas económicas de los gobiernos progresistas

Los gobiernos alternativos han estado ensayando propuestas posneoliberales que permiten la recuperación de la rectoría del Estado en la producción de la riqueza y el reordenamiento de la gestión económica, priorizando los intereses nacionales y a las clases populares, con lo que se pretende la igualdad y justicia social.

Se han implementado varias formas económicas posneoliberales: algunos países alternativos impresos en el socialismo latinoamericano de Sumak Kawsay, o buen vivir, llevaron procesos de nacionalización de empresas que se habían privatizado con el modelo neoliberal de capital nacional e internacional en áreas estratégicas como el petróleo, el agua, las telecomunicaciones, los bancos, la vivienda, la alimentación, la medicina, la educación, las tierras, la electricidad, etc., en países como Venezuela, Bolivia y Ecuador. Sin embargo, no fue una nacionalización profunda y generalizada; hubo algunos sectores en el que se aplicó una economía gradualista, es decir, se mantuvo el capital nacional y el internacional, aunque este último en un porcentaje menor, entre un 30 y 35%. De tal suerte que 70% de las ganancias se quedaban en el país. Otros países como Brasil, Argentina, Uruguay y Chile optaron por una socialdemocracia latinoamericana y una economía mixta con la participación del capital internacional y nacional con regulación del Estado, sin realizar ninguna nacionalización.

Las propuestas económicas posneoliberales de los países alternativos, sin embargo, han convivido en la periferia del capitalismo global

(Wallerstein, 2013), pero no en el capitalismo neoliberal sino en las relaciones económicas internacionales, en el multilateralismo, en una franca ruptura de la dependencia con los Estados Unidos y con los organismos internacionales (BM, el FMI, y el BID). Para ello, constituyeron como estrategia el ALBA (la Alianza Bolivariana de los Pueblos de nuestra América), impulsaron la constitución de la UNASUR (Unión de Naciones Sudamericanas), formaron la CELAC (la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños), organizaciones que constituían una clara independencia regional latinoamericana en lo económico, comercial y diplomático, aunque los intereses norteamericanos en América Latina permanecían en las empresas petroleras y mineras —como en Brasil, Bolivia, Chile y Argentina— y en los bancos, como en Ecuador, Brasil, Chile y Uruguay. Es decir, la presencia norteamericana en Sudamérica aún permanecía y era fuerte; "los socios comerciales de la mayoría de los países latinoamericanos continuaban siendo norteamericanos" (Miranda, 2015).

El proyecto posneoliberal debía ser sostenible en el tiempo, y se enfrentaba con la encrucijada de establecer una política económica social para todos, que no significara, por satisfacer a algunos, debilitar la base social que le había dado vida a los gobiernos progresistas, moviéndose en las periferias regionales del capitalismo global (Wallerstein, 2013), por incrementar el PIB. Así, los gobiernos progresistas optaron por la relación Estado social-capitalismo global (Brasil, Argentina, Uruguay) o por un Estado socialista latinoamericano de capitalismo global (Ecuador, Bolivia, Venezuela). Si tomamos en cuenta la propuesta de Wallerstein, y tenemos en cuenta a André Gunder Frank para América Latina, la expansión de la economía-mundo capitalista del moderno sistema mundo se dio en tres dimensiones: en el centro de los países desarrollados, industrializados o hegemónicos; en la periferia, en los países semidesarrollados, semindustrializados y maquiladores; y en la semiperiferia, en países maquiladores, productores de materias primas y abundante fuerza de trabajo barata. Si esta propuesta es correcta, Sudamérica estaba moviéndose entre las periferias y semiperiferias de la eco-

nomía-mundo del capitalismo global, pero con el propósito de trascender la dialéctica de la dependencia y lograr su segunda independencia, la de Estados Unidos, que había llegado en 1880 en su fase imperialista a colonizar a América Latina (González Casanova, 1978).

Sin embargo, la estructura económica interna de algunos países latinoamericanos progresistas tendió a mantener el patrón de reproducción de capital de la década de 1980: el exportador de especialización productiva, con elevadas inversiones de capital extranjero. La planta productiva mantenía los modelos de producción de flexibilidad laboral, lo que significaba procesos de producción por productividad y calidad con métodos que exigían altos niveles de producción a ritmos de destajo, autogestivos, con propósitos de un mayor rendimiento de fuerza de trabajo y, en consecuencia, de una mayor de plusvalía. Así se daba la dependencia, la empresa de capital extranjero que contrataba fuerza de trabajo barata y calificada, y el producto de las ganancias, vía doble transferencia del valor,[11] se exportaba a los países del capital extranjero. Es decir, la riqueza que producían los países progresistas se exportaba y no se queda en esos países, con lo que se mantenía la dependencia y el subdesarrollo. Era un problema de la lógica de la reproducción del capital que los países progresistas se propusieron cambiar para que la riqueza se quedara con ellos; de lo contrario, se mantendría la relación del "moderno sistema mundo" en la periferia o semiperiferia de la moderna economía capitalista mundial.

La persistencia de algunos gobiernos progresistas de mantener el patrón exportador de especialización productiva y extractivo con la variante de una economía mixta, con regulación estatal, con relaciones pe-

---

[11] Raúl Prebisch había descubierto en su teoría del capitalismo periférico la transferencia del doble valor, que consistía en la exportación de la ganancia por plusvalía y del gravamen fiscal a los productos por exportación manufacturados o maquilados en los países periféricos sin haber sido exportados, y vendidos en los mercados locales. La relación centro-periferia ya no se daba por la distancia geográfica entre los países centrales con los periféricos sin en los propios países periféricos (Prebisch, 2014).

riféricas del sistema capitalista, de economía social, se dio fundamentalmente en los gobiernos de la socialdemocracia latinoamericana (Brasil, Argentina, Uruguay y Chile), que se desarrollaba en el espacio de la lógica de la reproducción del capital y la expansión. Ello significaba mantenerse en las relaciones de centro-periferia, y por ende de dependencia, aunque con propósitos de desarrollo. Aun cuando los organismos internacionales (FM, BM y BID) ya no imponían las políticas del Consenso de Washington.

Sin embargo, los países progresistas, por tratar de modificar el modelo de producción capitalista neoliberal en el caso del modelo extractivo, lo hacían bajo otra concepción, con políticas verdes (medioambientalistas), éticas ecológicas, el socialismo del buen vivir, bajo la rectoría de Estado (Venezuela, Bolivia, Ecuador). Esta concepción filosófica de la relación hombre-naturaleza, que asume una bioética, una bioecología y una biopolítica, se antepone a la concepción neoliberal de la extrema derecha que quiere un modelo extractivo por desposesión y de profundización neocolonial.

En un singular neocolonialismo capitalista extractivista, que no es global sino regional latinoamericano, se significará la ocupación de territorios para la explotación de la minería a cielo abierto y los monocultivos, que se logran a través de la expulsión de las comunidades indígenas, campesinas y negras con el ejército y los paramilitares, que es recurrente en los países neoliberales, como podemos observar en la Colombia de Álvaro Uribe, Manuel Santos e Iván Duque, así como en Chile con Sebastián Piñera, y en México desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, pasando por Vicente Fox y Felipe Calderón, aunque con mayor énfasis en este último.

Así podemos observar que el modelo extractivista se pretendía reinstalar en los gobiernos progresistas como un "nuevo patrón económico de explotación neocolonial", con diferencias sustanciales al colonialismo español (1600-1800), (Quijano, 1992): la explotación de la tierra, humana y ecológica, bajo el control absoluto de las transnacionales mediante el

Estado como instrumento de la lógica de la reproducción del capital.[12] De este modo, como en la etapa de la colonia española, se pretendía realizar la explotación de la fuerza de trabajo en la minería y en el monocultivo, por ejemplo en la soja, con salarios de hambre, de sobrevivencia, con jornadas hasta de 18 horas por día y con el aniquilamiento de la fuerza de trabajo por las jornadas coloniales y las condiciones contaminantes que acortan el ciclo de vida, no sólo humana sino de la tierra y de la ecología. Pero el neocolonialismo norteamericano no logró sus pretensiones debido a que los presidentes progresistas habían concebido al socialismo y a las socialdemocracias latinoamericanas, las habían practicado porque formaban la estructura política y económica de los países bajo la raíz de una cultura social y comunitaria. Es decir, se había dado un vínculo orgánico entre estructura socioeconómica e ideológica política, aunque en algunos casos no se haya formado el bloque histórico.

El modelo extractivista neocolonial no es asumido en los gobiernos progresistas por ser una economía de enclave (Zibechi, 2015), es decir, se desarrolla de manera aislada con su entorno social y económico de manera vertical, desarticulándose con la microeconomía local y regional, sólo con el propósito de la explotación de la fuerza de trabajo para extraer la mayor plusvalía de la tierra y sus recursos naturales (minerales, agua, flora y fauna), y de su ecología, empobreciendo el entorno y desmembrando el tejido social. Es decir, las economías de enclave no permiten el desarrollo y reproducción social de las poblaciones ni el de la región.[13]

12 Así, tenemos las mineras canadienses, norteamericanas y hasta mexicanas (las menos) y los monocultivos de soja en México y en América Latina como recurso de explotación de minerales a cielo abierto, de la fuerza de trabajo, los recursos naturales y el entorno social (Zibechi, 2015).

13 Varios colectivos y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) han observado que la minería en México (que no es una excepción de lo que sucede en América Latina sino que, por el contrario, es el modelo para los países que aplican el modelo neoliberal en Chile con Piñera, en Colombia con Duque, en Bolivia con Jeanine Áñez, en Ecuador con Lenín Moreno, en Brasil con Bolsonaro, etc.) generó una profunda

La economía de enclave, con las grandes empresas transnacionales de monocultivos (mineras y sojeras) y especulación urbana socava la soberanía y trastoca la autonomía local, regional y del país al otorgarles condiciones fiscales inmejorables a las transnacionales, exentándolas de impuestos, otorgándoles garantías de estabilidad de ganancias y de seguridad social y política, a cambio de un mal llamado mercado de trabajo y de ganancias nulas por la expropiación de sus fuentes naturales, territorios en los que se crearán zonas de *zombis humanos*, es decir, fuerza de trabajo subalimentada y de sobrevivencia, de naturaleza y urbes o comunidades muertas. Condiciones irreversibles que generan cambios climáticos, colapsos planetarios, crisis de la biodiversidad, generalización de la pobreza y crisis alimentaria; es decir, una crisis sistémica, mundial, total, que sitúa al ser humano en una crisis de su propia existencia humana a nivel planetario.

Sobre este nuevo patrón económico de explotación neocolonial se abre una perspectiva como variable analítica de los movimientos sociales tanto en los gobiernos neoliberales como en los progresistas, porque

"precariedad laboral, inseguridad, violencia generalizada, impunidad, falta de procuración de justicia, corrupción, violación de derechos humanos, criminalización de la protesta social, destrucción y contaminación de los ecosistemas y los bienes naturales, así como la imposición de políticas y leyes neoliberales entreguistas que atentan contra la identidad y cultura de los pueblos de México" (López Rivas, 2018). Esta condición es producto de las reformas estructurales neoliberales que se han realizado en México y América Latina, "porque justo esta actividad extractiva, es la que mejor representa el despojo y desplazamiento forzado de la población, la que más encarna la eliminación de la vida en su conjunto, y la que se encuentra encabezada por un grupo de 'selectos empresarios' que recurrentemente violan las leyes —sin que existan consecuencias al respecto—, violentan a las y los habitantes opositores a este tipo de proyectos, y establecen, en la mayoría de los casos, un abierto contubernio con el crimen organizado para implantar control territorial" (López Rivas, 2018). Condición imposible de exploración y explotación minera como modelo extractivo depredador sobre cualquier otro uso de la tierra sin un Estado neoliberal y neocolonialista basado en un capitalismo extractivista.

estos últimos dieron discursos muy similares a los de los movimientos sociales que había participado en la resistencia contra las privatizaciones y contra el modelo neoliberal, e hicieron políticas sociales más o menos profundas en algunos países en los que mejoraron las condiciones de vida, educación, e salario, salud, vivienda en los sectores populares, como sucedió en Brasil con Lula y Dilma, en Argentina con los Kirchner, en Ecuador con Correa, en Bolivia con Evo, en Uruguay con Mujica y en Venezuela con Chávez, durante la primera década del siglo xxi.

En estos países progresistas es perfectamente comprensible que no haya movimientos sociales antisistémicos, pues iba contra su propia convicción política, es decir, se asumían latinoamericanos y globalifóbicos, antineoliberales y antiimperiales o antiyanquis (salvo en algunos casos en los que el intervencionismo norteamericano e internacional ha tenido una fuerte presencia por intereses geopolíticos y energéticos como es el caso de Venezuela). Este espíritu venía de los países neoliberales donde se dieron resistencias y se enfrentaron contra el Estado, la clase política neoliberal y el monopolio del poder del Estado del poder mediático, no obstante su desarticulación y omisión, como sucedió en México con Peña Nieto, en Colombia con Juan Manuel Santos, en Brasil con Michel Temer, en Argentina con Mauricio Macri y en Chile con Sebastián Piñera, en los quienes aún permanecen en el poder, como Piñera, socavan, reprimen, niegan, excluyen y tratan de aniquilar a los movimientos sociales, como en el siglo anterior.

Estos movimientos sociales (en Colombia y Chile por ejemplo) no han tenido la capacidad de movilidad, transcendencia, aglutinamiento, organización y acción para derribar a los gobiernos como sucedió a finales del siglo pasado y a principios del actual en casos como Bolivia, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Perú, Nicaragua, Argentina o Brasil. Sin embargo, permanecen en la resistencia, en acción colectiva y en la lucha por recuperar su memoria; es decir, son movimientos latentes, vivos, diversos, heterogéneos, que están en una permanente transformación, con ritmos, profundidades, cohesiones, constituciones, identidades, visiones de mundo, sentidos de pertenencia, subjetividades (todas diversas); por

ello, son movimientos complejos que no tienen un proyecto regional, por su propia historicidad.

Algunos países progresistas siguieron un modelo más heterodoxo y neodesarrollista, y otros, un modelo más ortodoxo y neoliberal (Brasil, Argentina, Chile y Uruguay), que, a la postre, tuvieron los mismo efectos y contradicciones: "no pudieron desplegar un nuevo esquema productivo" diferente al agroindustrial neoliberal, ni aprovechar los desarrollos científicos y tecnológicos, salvo Brasil o Argentina, que rescataron e impulsaron algunos sectores estratégicos para el país como las telecomunicaciones, la aeronáutica, la petroquímica, el automotriz, la educación, etc. Esto no sucedió en Chile con Michelle Bachelet.

La relación entre la sociedad y los gobiernos progresistas

Los gobiernos alternativos se plantearon políticas sociales, un modelo económicos y una filosofía diferentes a las del modelo neoliberal. Incrementaron la educación; sacaron a la población de la extrema pobreza; fortalecieron y ampliaron a la clase media; resolvieron el problema de la vivienda y de la salud; incrementaron los salarios por encima de la inflación; aumentaron el poder adquisitivo y la calidad de vida (el bien vivir); generaron programas de becas para estudiantes; dieron apoyo financiero a los jubilados, los de la tercera edad, las madres solteras, la vivienda, la educación, la salud pública, los campesinos, etcétera, en un amplio abanico de apoyo a lo social, y se platearon la recuperación del Estado. Pero ¿por qué no permanecieron en el poder?

Algunos gobiernos alternativos llegaron al poder con coaliciones políticas con la derecha. Éste fue el caso de Lula y el PT en Brasil, y con mayor fuerza el de Dilma Rousseff; ellos realizaron coaliciones políticas con la derechista socialdemocracia latinoamericana, en donde Michel Temer era vicepresidente, y él y Eduardo Cunha crearían un golpe de Estado en 2016. En Argentina, Cristina Fernández formó coalición con la facción peronista de derecha, de la que saldría Mauricio Macri con una concepción de extrema derecha neoliberal. En el caso de Ecuador, Lenín Moreno (el vicepresidente de Rafael Correa) traicionaría a todo

el proyecto del socialismo latinoamericano y aplicaría el modelo neoliberal de extrema derecha a su arribo a la presidencia de la República. En estos gobiernos no hubo un claro proyecto de educación política, filosofía humana ni descolonización de la política, la cultura y las mentalidades (Freire, 2007; Mignolo, 2000; Quijano, 2012).

Algunos gobiernos alternativos no consolidaron a los movimientos sociales en una estructura política institucional que formara la base del Estado-gobierno progresista: una sociedad-Estado que consolidara la conciencia social y política que les dio origen (como no sucedió en Brasil y Argentina), aunque otros gobiernos sí lo hicieron (Venezuela, Bolivia y Ecuador).

El logro económico de la primavera latinoamericana creó un *confort* en la sociedad, incluso una soberbia política en Brasil y Argentina (Rousseff, 2017).

La contraofensiva de la extrema derecha ahora es más compleja; es mediática, económica, social e ideológico-cultural, y es llevada a cabo por los organismos internacionales, las transnacionales y los Estados Unidos contra los países progresistas para recuperar la hegemonía perdida a través de diversas y complejas intervenciones de golpes de facto (Honduras, Venezuela, Bolivia y Ecuador), de bloqueos económicos internacionales y continentales (Venezuela), de *impeachment* (Brasil), de intervenciones directas con apoyos diversos (económicos), de inteligencia, en las elecciones (Venezuela, Argentina, Brasil, Paraguay, Colombia, etc.). Todo esto ha originado un otoño, o estancamiento, de los movimientos sociales y de los gobiernos alternativos, y de su vínculo.

La estrategia de la contraofensiva de los Estados Unidos y de la extrema derecha hacia los países alternativos ha sido extremadamente estudiada y aplicada, teniendo en cuenta la correlación de fuerzas, la legitimidad y consolidación del Estado a intervenir, la fuerza política del gobierno, la vulnerabilidad de su economía, la fuerza del capital internacional y la recomposición de la derecha.

En política y, en general, en todas las luchas de las clases sociales, las acciones de la derecha no son las únicas que explican los resultados fina-

les, sino que son las propias acciones o inacciones de los sujetos sociales las que crean la historia en una condición diferente, en la otra historia (esta tesis va en sintonía con la de Marx del 18 brumario de Luis Bonaparte).

Sin embargo, hay un reaprendizaje social y político, y una contraofensiva de los movimientos sociales, de la pérdida de sus derechos políticos, sociales y económicos, de sus regresiones, después de la primavera el otoño (vuelven los sujetos a la acción en Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina).

Algunos gobiernos alternativos lograron legitimar y consolidar la soberanía del pueblo en el gobierno a través de la democracia participativa, en un concepto más amplio a través de *referendos* y *plebiscitos*. Fue una democracia de derechos, no de participación decisional en el Estado (García Linera, 2017).

Las perspectivas para los gobiernos progresistas

El regreso de algunos países alternativos, de la salida de la inflexión histórica (García Linera, 2017), vislumbraba la posibilidad de alternativas económicas y políticas menos crueles, salvajes y perversas para los indígenas, afrodescendientes, campesinos, obreros y, en general, para los grupos sociales vulnerables.

Sin embargo, el ascenso y contraofensiva de la derecha y los Estados Unidos, con la perspectiva de alcanzar la hegemonía en América Latina, que perdió a finales del siglo xx y que significó la primavera en América Latina, sobre todo en Sudamérica, se propuso no precisamente a través del discurso de alcanzar la democracia, la libertad, la equidad, el empleo, la capacidad del poder adquisitivo de las sociedades, de resolver la pobreza y la miseria, etc., sino de la profundización a ultranza del modelo neoliberal como única opción posible, así lo han venido pregonando los actores internacionales, los gobernantes y los organismos internacionales neoliberales (OEA, Grupo Lima, etc.), lo que ha significado la llegada del otoño de los países progresistas desde 2013, que no el invierno, porque en el ascenso al poder de los gobiernos progresistas se mantiene la

tendencia de la socialdemocracia latinoamericana con Andrés Manuel López Obrador en México y con Alberto Fernández en Argentina.

Este otoño es la recesión de los gobiernos progresistas por la contraofensiva de los Estados Unidos y el capital neoliberal a ultranza, que no han roto con las estructuras políticas de sus países y sus movimientos sociales que les dieron sustento y que los llevaron al poder, como podemos observarlo en Venezuela y en Brasil, en los que se pondrá a prueba en las elecciones en 2020 y 2021, respectivamente. El triunfo de la derecha en Colombia, Uruguay y Brasil en 2018 merma el escenario en América Latina para su integración. En este sentido vemos dos escenarios para el futuro inmediato en América Latina, uno promisorio y otro nada halagüeño. El primero, con escasas posibilidades de reposicionamiento de los países progresistas en el plazo inmediato, donde la autonomía e independencia, así como la viabilidad del tránsito a la democracia participativa y la recuperación del tejido social y económico a través de políticas públicas y de un Estado social, que permita que, a nivel continental, la reintegración latinoamericana se siga dando, pues la geopolítica regional ha tenido un cambio significativo con países como México, Argentina, Cuba, Nicaragua y Venezuela, tal vez el Salvador y Guatemala, y podría esbozar cambios importantes a nivel continental. Aun así, difícilmente, podemos pensar en una integración latinoamericana como sucedió en la primer década del siglo XXI con el MERCOSUR, la CELAC, el ALBA y el UNASUR, que constituyeron organismos de contención, autonomía y soberanía en contra de los Estados Unidos, los organismos internacionales y las transnacionales. En el segundo escenario, observamos un otoño largo y pronunciado, donde la derecha y el capital neoliberal, sobre todo con el triunfo de la ultraderecha en Brasil, se ha reposicionado junto con Estados Unidos, lo que significará la profundización del modelo neoliberal extractivista y neocolonial como está sucediendo en Brasil con Jair Bolsonaro, en Chile con Sebastián Piñera, en Colombia con Iván Duque, en Uruguay con Luis Lacalle Pou y en los demás países centroamericanos inclinados al modelo capitalista y ultraneoliberal.

Visto así, las expectativas de que la derecha latinoamericana no siga haciendo más daño del que ya ha hecho no son muy altas; con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández de tendencias socialdemócratas (al estilo de Luiz Inácio Lula y Pepe Mujica), se mantiene una ligera esperanza de que América Latina cuente con algunas posibilidades de contener a los Estados Unidos, los organismos internacionales y las transnacionales, y que México vuelva a ser un actor central en América Latina junto con los países de izquierda y progresistas (Cuba, Venezuela y Nicaragua).

Como podemos observar, en un análisis geopolítico, el contexto político y económico en América Latina en 2020 es de una coyuntura trascendental para la región. Está en juego el futuro inmediato de la posibilidad de una integración latinoamericana, pues observamos que México, Argentina, Venezuela, Cuba y Nicaragua podrían constituir un halo de esperanza, pero ahora eso es muy remoto debido a la contrahegemonía geopolítica latinoamericana en Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay, Chile, Uruguay, Panamá, Costa Rica, entre otros, quienes se posicionan no sólo en un neoliberalismo sino en su profundización. Además, la OEA, los Estados Unidos y los países neoliberales de la región se han abocado a desmantelar a los organismos regionales latinoamericanos que buscaban la integración latinoamericana (ALBA, UNASUR, MERCOSUR, etc.).

Éste es el escenario inmediato que tenemos en América Latina, que también comprende el modelo económico, y en él observamos una profundización del modelo neoliberal y una participación de la extrema derecha, junto con los Estados Unidos y una gran cantidad de países europeos y del Oriente occidental, además de otros organismos internacionales como la OEA, el Grupo de Lima, el BM, el FMI y el BM.

Conclusiones

Los países progresistas (México, Argentina, Venezuela, Cuba y Nicaragua) en América Latina, en estos momentos, en los que la contraofensiva del capital neoliberal pretende una profundización a ultranza, han

estado desempeñando un papel relevante a través de nuevas acciones colectivas en la participación de la democracia participativa y en el Estado social. Ésta es crucial porque significa no sólo el cambio de dirección de las políticas sociales, sino también la posibilidad de un cambio en el modelo de civilización industrial que está en crisis, en el modelo económico neoliberal a ultranza, en una economía de enclave y en el capitalismo neocolonial.

Hoy, la acción colectiva de los movimientos sociales se diferencia de los grandes movimientos de finales del siglo xx y principios del xxi, que fueron grandes movimientos sociales. No obstante, los actuales siguen siendo antisistémicos, globalifóbicos y antineoliberales, antirracistas y anticoloniales, es decir, sustancialmente siguen siendo los mismos, y están en una lucha por sus territorios, sus identidades y sus culturas. Por esta razón, son movimientos latentes, debido a su historicidad, y son los que eventualmente pueden regresar al poder en gobiernos progresistas.

La reactivación de las nuevas manifestaciones de los movimientos sociales se observa en los cambios en las resistencias y luchas, en las concepciones éticas y políticas, en la acción colectiva que derivó en gobiernos progresistas. El Estado es el principal actor de la agenda neoliberal, y los movimientos sociales y los gobiernos progresistas serán el centro del desplazamiento.

No es un fin del ciclo progresista sino una reconstrucción, una reconfiguración, una resignificación de los movimientos sociales.

Bibliografía

Azamar Alonso, Alaida *et al.* (2016), "Las promesas del extractvismo en América Latina: Luces y sombras", Juan José Carillo Nieto *et al., Los gobiernos progresistas latinoamericanos. Contradicciones, avances y retrocesos*, México, UAM.

Casillas Herrera, Pablo (2018), "Los rumbos de los movimientos sociales de América Latina en el capitalismo neoliberal. La primavera", Argentina, Insumisos Latinoamericanos.

De Sousa Santos, Boaventura (2011), "Epistemologías del Sur", *Utopía y Praxis Latinoamericana*, núm. 64, año 16, Maracaibo, Universidad de Zulia, julio-septiembre.
___ (2015), "Construyendo la contrahegemonía: Traducción intercultural entre los movimientos sociales", Rafael Sandoval (coord.), *Pensar desde la resistencia anticapitalista y la autonomía,* México, CIESAS,
Díaz-Polanco, Héctor (2008), "Socialdemocracia con aroma liberal", *Rebelión*, México, 18 de marzo, en http://diaz-polancoartculos.blogspot.mx/2008/10/la-antropologa-social-en-perspectiva-el.html
Flores Olea, Víctor y Abelardo Mariña (2000), "Globalización política y crisis del Estado liberal", *Crítica a la globalidad. Dominación y liberación en nuestro tiempo*, FCE, 2000, pp. 107-170.
Freire, Paulo (2007), *Pedagogía del oprimido*, México, Siglo XXI.
Fukuyama, Francis (1988), *El fin de la historia*, International Interest, en www.alianaeditorial.es
García Linera, Álvaro (2017), "Fin de ciclo progresista proceso por oleadas revolucionarias?", en internet.
González Casanova, Pablo (1978), *Imperialismo y liberación. Una introducción a la historia contemporánea de América Latina*, Siglo XXI, pp. 14-49.
Hegel, G.W.F. (1987), *Fenomenología del Espíritu*, México, FCE.
Mignolo, Walter (2000), "La colonialidad a lo largo y a lo ancho: El hemisferio occidental en el horizonte colonial de la modernidad", Edgardo Lander, *La colonialidad del saber: Eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*, Argentina, CLACSO, Argentina, pp. 34-52.
Miranda, Pablo (2015), "El fracaso de los gobiernos progresistas de América Latina", CEPRID, 4 de diciembre.
Osorio, Jaime (2016), "Razones estructurales del auge y declive de los gobiernos populares", Juan José Carillo Nieto *et al., Los gobiernos progresistas latinoamericanos. Contradicciones, avances y retrocesos*, México, UAM.
Portelli, Hugues (1997), *Gramsci y el bloque histórico*, México, Siglo XXI.

Prebisch, Raúl (2014), *Los caminos del desarrollo*, Argentina, Los Libros De La Catara.
Quijano, Aníbal (1992), "Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina", en http://www.decolonialtranslation.com/espanol/quijano-colonialidad-del-poder.pdf
___, (2012), "Des/colonialidad del poder: El horizonte alternativo", *Revista electrónica contextualizacioneslatinoamericanas.com.mx*, núm. 6, año 4, enero-junio.
Rousseff, Dilma (2017), *Primer Congreso Paraguayo de Ciencias Sociales*, Paraguay.
San Martín, Raquel (2019), "América Latina: El desencanto progresista", *La Nación*, en http://lanacion.com.ar/1887186
Wallerstein, Immanuel (2013), *El moderno sistema mundo. La segunda era de la gran expansión de la economía-mundo capitalista, 1730-1850,* vol. III, México, Siglo XXI.
Wolf, Eric R. (1994), *Europa y la gente sin historia*, México, FCE.
Zea, Leopoldo (1978), "De la dependencia a la liberación", Leopoldo Zea, *Filosofía de la historia americana*, México, Tierra Firme, FCE.
Zibechi, Raúl (2015), "Movimientos antisistémicos y descolonialidad", Rafael Sandoval (coord.), *Pensar desde la resistencia anticapitalista y la autonomía,* México, CIESAS.

La difícil transición hacia la 4T. Desarrollo, inercias y antagonismos

JORGE CEJA MARTÍNEZ*
DAVID DE ANDA GONZÁLEZ**

Introducción

El arrollador triunfo del partido político Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en las elecciones federales mexicanas de julio de 2018, especialmente la de su candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), generó múltiples expectativas, tanto dentro como fuera del país.[16]

A pesar del breve lapso que —hasta agosto de 2020— había transcurrido desde que AMLO asumió el cargo (1 de diciembre de 2018), ya se habían iniciado importantes cambios en materia de política exterior, disminución en la contratación de deuda externa, austeridad del gasto público, eliminación de privilegios fiscales, ampliación de derechos de ciudadanía social, giro en la política de comunicación, reversión de algunas

* Profesor e investigador del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de Guadalajara.
** Candidato a doctor en Ciencia Política. Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de Guadalajara.

16 Fue en este tenor que Boaventura de Sousa Santos expresó: "Si México se va, si el proyecto de López Obrador fracasa, realmente estaremos en la oscuridad total sin proyecto político y, ¿qué nos queda en el continente?". (Velázquez, 2019: 8.). Esta declaración fue previa a la elección del 27 de octubre de 2019, en la que Alberto Fernández resultó electo como presidente de Argentina.

contrarreformas impulsadas por el mandatario anterior, reorientación de las políticas de seguridad y, entre otros cambios significativos, el combate frontal a la corrupción. Todo lo anterior ha amotinado a muchos que se vieron perjudicados por las políticas de saneamiento de la vida nacional impulsadas por el presidente de la República. Sin duda, se trata de un sector minoritario, aunque ciertamente muy poderoso, de extracción y clase diversas. Entre ellos se hallan exfuncionarios y exsindicalistas corruptos; empresarios y grandes potentados; delincuentes largamente protegidos por el poder estatal —y ahora difíciles de controlar—; y, entre otros, no pocos propietarios de medios de difusión, quienes vieron mermados sus ingresos por la nueva política de comunicación social del gobierno federal. Más allá del estatus y fortuna personal de cada cual, a este sector los une el desprecio que les merece el Estado de derecho, como la propia democracia. Se trata de un sector golpista que —a través de propaganda calumniosa, sin ética ni memoria de por medio— anhela recuperar la vieja "normalidad" perdida, o que amenaza con desvanecerse.

Sin desconocer el peligro que para la existencia de la democracia —como para quienes la enarbolan— significa la presencia, intolerancia y beligerancia de los sectores arriba enunciados, lo que aquí nos interesa es dar cuenta de otra oposición con la que el presidente ha entrado en conflicto. Se trata de un heterogéneo grupo que, a diferencia de la derecha fascista opositora enunciada en el párrafo anterior, se identifica, más que por aglutinarse por intereses egoístas, por enarbolar otro tipo de principios: la defensa de la vida, el territorio, la naturaleza y los derechos humanos.[17]

---

[17] A la par de la existencia de estos sectores opositores, también se halla un tercer grupo muy heterogéneo, del cual tampoco hablaremos en este texto. En general, se puede afirmar que se trata de personas que forman parte de la sociedad civil o de la sociedad política que, a pesar de sus críticas, se muestran respetuosas de la institucionalidad democrática y reconocen la legitimidad del nuevo gobierno. Quienes forman parte de la derecha golpista buscan adhesiones, simpatizantes o base social entre este sector intermedio, como también los hacen entre los "indiferentes" o "apolíticos". En todo ello, la propaganda calumniosa o sucia constituye una de sus principales herramientas.

Muchos de estos actores colectivos antisistémicos ya existían desde mucho antes de que iniciara el actual gobierno. Se trata de diversas resistencias, algunas muy antiguas, que —bajo distintas temporalidades, contextos sociohistóricos e intensidades— nos resultan familiares. Otras, como las que se oponen a los cuatro principales megaproyectos impulsados por AMLO (la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, Estado de México; el Tren Maya que atravesará los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; el Corredor Multimodal Interoceánico, a instrumentarse en los estados de Oaxaca y Veracruz; y la creación de la refinería de Dos Bocas, Tabasco), han sido incitadas por él. Se trata de un grupo opositor muy heterogéneo. Por ejemplo, en cuanto al proyecto aeroportuario General Felipe Ángeles, hay desde grandes empresarios que se vieron agraviados por la cancelación de la construcción del aeropuerto de Texcoco hasta campesinos ejidatarios que se sienten afectados. Obviamente, también hay quienes suponen que dichos proyectos podrán significar la oportunidad de hacer grandes negocios, como aquellos otros que estiman que simplemente les permitirá superar la marginación en que se encuentran. El tema nos obliga a pensar en cómo es que el presidente y su equipo cercano —sin desconocer las contradicciones internas— conciben el desarrollo, el bienestar y el cuidado de la naturaleza.

Ciertamente, en un sector de la comunidad académica (aunque no sólo en ésta), existe la preocupación de que en México se repita la visión desarrollista y extractivista que caracterizó a los denominados *gobiernos progresistas* sudamericanos y que, combinado con otros factores, finalmente se tradujo en una disminución del apoyo popular y en el retorno al poder de derechas revanchistas que tienen muy clara su misión histórica: la eliminación de cualquier obstáculo que impida la acumulación capitalista.

La primera parte del texto da cuenta de las circunstancias en que se dio el triunfo de Morena, su significación histórica y las expectativas generadas por el triunfo de AMLO; presenta un breve esbozo de su persona, como su ideario político y económico, el cual, desde su perspectiva, con-

lleva, entre otras cosas, abandonar el paradigma neoliberal. La segunda parte recoge algunas de las ideas centrales o directrices delineadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, la postura gubernamental ante el fenómeno del extractivismo minero, y también exhibe algunas contradicciones y conflictos derivados de la visión desarrollista de AMLO, específicamente a partir de los megaproyectos que su administración se ha propuesto impulsar. La tercera y última parte muestra la conformación y las resistencias desplegadas por un sector de la derecha mexicana que se propone lograr la restauración autoritaria.

El significado histórico del triunfo de AMLO

Los resultados oficiales de los comicios federales celebrados el 1 de julio de 2018 sorprendieron a todos. No únicamente por el triunfo de AMLO, de alguna manera ya anticipado por todas las encuestas realizadas con anterioridad al día de la elección (aunque la amenaza del fraude electoral no se disipó sino hasta que, pocos minutos después de concluida la jornada, los candidatos del PRI y del PAN reconocieron su derrota), sino, sobre todo, por lo apabullante que resultó su triunfo, como el del partido Morena (constituido en 2014), que también postuló candidatos para las cámaras federales de diputados y de senadores; y, en las escalas locales, para diputados locales, gobernadores y alcaldes. En dicha elección, tanto la Cámara de Diputados (500 diputados) como la de Senadores (128 escaños) fueron renovadas en su totalidad. De las 32 entidades que integran al país, hubo elecciones locales en nueve. Morena triunfó en cinco (Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Tabasco y Veracruz).

En cuanto a la elección para presidente de la República, la coalición "Todos por México", integrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza, postuló como su candidato a José Antonio Meade Kuribreña. El priista y exintegrante del gabinete de Enrique Peña Nieto (2012-2018) obtuvo 9 289 853 sufragios. La coalición "Por México al Frente", integrada por el Partido Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano y el desmejorado Partido de la Revolución Democrática (PRD), pos-

tuló como su abanderado al panista Ricardo Anaya Cortés, quien logró 12 610 120 votos. La tercera coalición que participó en los comicios "Juntos haremos historia", conformada por el Partido del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES) y Morena, lanzó a López Obrador como su candidato, aspirante que obtuvo 30 113 483 votos (INE, 2019).

Además, hubo tres intentos de candidaturas independientes, aunque sólo una se logró: la de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, gobernador con licencia de Nuevo León —quien, durante su campaña, generó polémica al afirmar, entre otras cosas, que a los ladrones habría que cortarles las manos para que dejaran de robar—. Él obtuvo 2 961 732 votos. La segunda corrió a cargo de Margarita Zavala (esposa de Felipe Calderón, quien, gracias al fraude electoral de 2006, gobernó el país entre 2006 y 2012). La ex primera dama se retiró de la contienda tras las expectativas no logradas después de su participación en el primer debate presidencial. Cuando ella tomó la decisión de abandonar la competencia ya se encontraban impresas las boletas electorales, con sus datos en ellas. El Instituto Nacional Electoral (INE) valoró que sería demasiado costoso volver a imprimirlas, ahora sin la figura de Zavala. Su inútil aparición en las boletas le cosechó 32 743 votos. La tercera candidatura, la de María de Jesús Patricio Martínez, postulada por el Consejo Nacional Indígena/Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), tampoco prosperó, ya que sólo logró menos de la tercera parte de las firmas de apoyo necesarias para cubrir el requisito establecido por el INE (866 593 simpatizantes) para ser registrada como candidata independiente, por lo que ella no apareció en las boletas. También hubo 1 571 114 votos nulos y 31 982 votos dentro del rubro *candidatos no registrados*.

En total votaron 56 611 027 ciudadanos, 63% de los electores de la lista nominal. De acuerdo con los datos oficiales, 53% de quienes votaron lo hicieron a favor de López Obrador; 22% lo hizo por Anaya; y 16% por Meade. Se recibieron 98 470 votos de mexicanos residentes en el extranjero. Entre ellos, 63 863 se pronunciaron a favor de AMLO (INE, 2018). Una hipotética declinación de última hora del candidato del PRI

a favor del panista les hubiera arrojado, en el mejor de los casos, 38% de la votación. Aun así, la ventaja para AMLO hubiera sido de 15 puntos.

Esta concurrencia masiva —más los dolorosos aprendizajes acumulados tras largas décadas de imposiciones— fue lo que impidió que prosperara cualquier tentativa de fraude.

Los partidos hegemónicos, el PRI, el PAN y el PRD (en ese orden de importancia), también sufrieron una fuerte derrota en las elecciones legislativas.

En cuanto a la integración de la Cámara de Diputados (LXIV Legislatura), el PRI sólo triunfó en 9 de los 300 distritos electorales en que se divide el país; el PAN únicamente en 39 distritos; y el PRD solamente ganó en 7. Dada la figura de diputados proporcionales que otorga 200 escaños adicionales a los 300 distritales, la composición en la Cámara quedó de la siguiente manera: Morena dispuso de 259 diputados (51.8%); el PAN, de 78 (15.5%); el PRI, de 47 (9.4%), el PES, de 29 (5.8%); el PT, de 28 (5.65); el PVEM, de 11 (2.2%). Existen también 8 diputados sin partido (1.6%). Recordemos que el PT y el PES fueron parte de la coalición que postuló a López Obrador, por lo que, en términos reales, la fuerza de la bancada hegemonizada por Morena es mucho mayor (Cámara de Diputados, 2019).

Dicho fenómeno también se replicó en la Cámara de Senadores (LXIV Legislatura). De los 128 escaños, Morena logró 59 (46.09%); el PAN, 24 (18.75); el PRI, 14 (10.94%); el PES, 5; PT, 6; MC, 8; PVEM, 6, el PRD, 5. A esto habrá que agregar a un senador que no cuenta con grupo parlamentario (Senado de la República, 2019).

El triunfo de AMLO resultó muy significativo dado que logró imponerse a la hegemónica coalición neoliberal, constituida, entre otros partidos políticos, por el PRI, el PAN y un importante sector de la derecha social y empresarial. Dicha alianza (a la que en años más recientes se sumó el PRD) tuvo su momento fundacional en 1988, año en que se consumó el fraude electoral en contra de Cuauhtémoc Cárdenas —y el pueblo de México— y que, con el apoyo del PAN, impuso en la presidencia al priista Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). Ni el triunfo

electoral del PAN en el año 2000 —que llevó a Vicente Fox Quesada a la presidencia de la República—, ni el fraude electoral de 2006 —que ahora, con el apoyo del PRI, sentó en la silla presidencial al panista Felipe Calderón Hinojosa—, ni mucho menos la desaseada elección de 2012 —que significó el retorno del PRI— representaron cambio de régimen alguno. Lejos de ello, los reiterados fraudes electorales, la alternancia panista y el arribo del priista Enrique Peña Nieto al ejecutivo se constituyeron —junto con la violencia de Estado, la corrupción y la impunidad— en mecanismos estratégicos necesarios para mantener y reforzar el modelo político y económico vigente en el país desde diciembre de 1982.

Más allá de la tenacidad y perseverancia de AMLO, de sus largos recorridos durante más de 12 años por todos los municipios del país (cerca de 2 500), los resultados de los comicios federales de 2018 reflejaron la indignación de, por lo menos, treinta millones de mexicanos hartos de la desbordada corrupción, la sistémica impunidad y extendida violación de los derechos humanos, la incontrolable violencia, el crecimiento de la desigualdad, el atroz desconocimiento de los derechos de ciudadanía, la degradación de la naturaleza y el sometimiento del Estado a los intereses empresariales nacionales y extranjeros, como al narcotráfico (Hernández, 2019). Pero el comportamiento de los votantes también reflejó la imperiosa necesidad y esperanza por lograr un verdadero cambio.

Hoy, el país enfrenta múltiples y complejos problemas que nos fueron heredados por gobiernos anteriores. La derecha golpista se vale de la desmemoria para posicionar la idea de que todos los males que existen en el país iniciaron con la llegada de López Obrador. Por tratarse de propaganda, la objetividad es lo que menos les importa; de hecho, ni siquiera importa. Claro está que la historia viene de mucho más atrás.

Vale la pena recordar que, entre algunos de los legados que los mexicanos y la administración de AMLO recibimos el 1 de diciembre de 2018, se encuentran los siguientes: la carga fiscal derivada del endeudamiento

interno y externo;[18] la pobreza que alcanza a 80% de la población y la extrema desigualdad existente; el precario estado —e inexistencia para millones de personas— de los derechos de ciudanía;[19] la subordinación del país a los intereses de corporaciones extranjeras y del gobierno de Estados Unidos; la gravísima degradación ambiental; la alarmante violencia y el enquistamiento del narcotráfico en múltiples esferas gubernamentales; la deuda histórica para con las comunidades indígenas; la crisis en materia de derechos humanos y los pendientes de la justicia acumulados por décadas de impunidad;[20] y, entre otros gigantescos obstáculos a superar, se encuentra el sometimiento de los intereses y derechos de pueblos y comunidades rurales a corporaciones de todo tipo que se han apropiado —o se proponen hacerlo— de los recursos naturales que se encuentran en sus territorios.

---

[18] De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre el año "2000 y junio de 2015 fueron transferidos al exterior recursos públicos por 516 mil 62.9 millones de dólares para cubrir el servicio de la deuda externa del sector público federal" (González, 2015: 25). En 2019 el gobierno federal destinó 666 478 000 de pesos para pagar los intereses de la deuda interna y externa (González, 2019: 21). Esto equivale a 47 veces (o años, si se quiere) de presupuesto anual de la Universidad de Guadalajara, cuyo presupuesto para el año 2020 fue 14 128 000 de pesos para atender a 300 000 alumnos matriculados.

[19] En 2020 el gobierno federal debió hacer frente a la pandemia del COVID-19 con la infraestructura hospitalaria pública prácticamente desmantelada: más de 320 hospitales inconclusos o abandonados, insuficiente equipo e instrumental médico, déficit de más de 200 000 médicos y 300 000 enfermeras, según estimaciones de Jorge Alcocer, Secretario de Salud. Se trata de una muestra bastante contundente de la precariedad que guarda tan sólo uno de los derechos de ciudadanía, el de la salud.

[20] Tasas de impunidad estimadas en 99%, más de 200 000 asesinatos en los últimos 12 años, decenas de miles de desapariciones forzadas. La presencia activa de decenas de organismos civiles que buscan a sus familiares desaparecidos tiene su razón de ser ante la indolencia —y frecuentemente, la complicidad— histórica e institucional que caracteriza al sistema de justicia en México.

AMLO, breve trayectoria política

AMLO (n. 1953. Tepetitán, Macuspana, Tabasco) cursó la licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México e inició su trayectoria política como director del Centro Coordinador Indigenista Chontal de Tabasco, donde laboró de 1977 a 1982. Desde allí impulsó importantes políticas sociales (educación, salud, vivienda) y económicas (creación de cooperativas de producción, transporte e impulso a la agricultura y ganadería). Tras un breve paso por la presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI de Tabasco, de enero a agosto de 1983 (Cedeño, 1995) y un cargo en el Instituto Nacional del Consumidor, en 1988 se sumó a la ola renovadora impulsada, entre otros, por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Cárdenas, inconforme con los mecanismos unipersonales de designación del candidato priista a la presidencia de la República para la elección federal de julio de 1988, rompió con el PRI y, finalmente, logró su propia candidatura al ser postulado por el Frente Democrático Nacional (FDN), coalición integrada, entre otros, por un importante sector de la vieja y nueva izquierda social y política mexicana. AMLO replicó esto a nivel local. También en dicho año fue candidato por el FDN a gobernador en su estado natal. Como Cárdenas, cinco meses atrás, también fue víctima de un fraude electoral.

Con la disolución del FDN (mayo 1989) se dio pasó a la constitución del PRD, y AMLO quedó a cargo del comité estatal en Tabasco. Las elecciones municipales de 1991 derivaron en fraudes electorales, específicamente en el municipio de Cárdenas. Ante ello, AMLO encabezó el "éxodo por la democracia", marcha cuyo contingente caminó a lo largo de 1 050 kilómetros (desde Villahermosa, Tabasco, hasta la Ciudad de México) durante cincuenta días (Avilés, 2012). Fue una victoria para el movimiento, ya que el gobierno federal se vio forzado a reconocer el triunfo del candidato perredista a la alcaldía, Carlos A. Wilson. El segundo "éxodo por la democracia", ahora como respuesta al fraude electoral cometido en los comicios de 1994 en contra de AMLO, quien por segunda ocasión contendió por la gubernatura, realizó el mismo recorrido, ahora del 23 de abril al 3 de junio de 1995. A pesar de que se

demostró que el candidato priista a la gubernatura, Roberto Madrazo, se había excedido en demasía en los gastos de campaña fijados por la autoridad electoral (ejerció 241 000 00 de pesos en contraste con los 3 000 000 de pesos permitidos, es decir, 8 000%), la impugnación no prosperó (Avilés, 2012). Como una muestra mayor de desfachatez, 12 años después, en 2006, el PRI abanderó a Madrazo como su candidato a la presidencia de la República.

De agosto de 1996 a abril de 1999, AMLO ocupó la presidencia nacional del PRD. En las elecciones de julio de 2000, AMLO —quien ya contaba con un amplio reconocimiento a nivel nacional— ganó el cargo de jefe de Gobierno del Distrito Federal (D.F., hoy Ciudad de México). De forma simultánea, Cuauhtémoc Cárdenas, quien previamente había gobernado el D.F., compitió por tercera ocasión por la presidencia de la República. Por distintas razones, la figura de Cárdenas se había desgastado. La elección la ganó el candidato panista Vicente Fox Quesada, quien ejerció el cargo de diciembre de 2000 a noviembre de 2006. La popularidad de AMLO siguió acrecentándose durante el tiempo que gobernó el D.F. (diciembre de 2000 a julio de 2005), las políticas públicas instrumentadas por su gobierno, la honestidad con que se condujo y el contraste con el frívolo y decepcionante Vicente Fox (como con respecto al resto de los gobernantes panistas) lo cristalizaron como el candidato natural de la izquierda para los comicios federales que tendrían lugar en julio de 2006.

La derecha también realizó la misma lectura, razón por la cual, en un primer momento, lanzó una intensa campaña de desprestigio en contra de AMLO, vinculándolo a actos de corrupción (los *video escándalos*); en un segundo momento, al no prosperar la estrategia anterior, en mayo de 2004 se valieron de la Procuraduría General de la República (PGR) para solicitarle a la Cámara de Diputados el inicio de un juicio de desafuero en contra del jefe de gobierno "al haber incumplido una resolución judicial", delito que jamás se cometió. Sin embargo, el 8 de abril de 2005, 360 diputados federales del PRI y del PAN lo destituyeron del cargo, con lo que abrieron la puerta para que la PGR iniciara el proceso de enjuicia-

miento que, según el buen ánimo de la derecha, lo conduciría a la cárcel, con lo que evitarían su postulación como candidato presidencial. Desde Roma, el presidente Fox monitoreó el desenlace. Allí declaró que el desafuero era un ejemplo al mundo "de que en México se vive un nuevo paradigma: el de la legalidad, el del Estado de derecho y el del fortalecimiento de las instituciones" (*La Jornada,* 2007: 19).

Durante el período que transcurrió entre mayo de 2004 y abril de 2005 (14 meses), hubo múltiples expresiones de repudio en todo el país en contra de tan burda maniobra autoritaria. Finalmente, las cuentas no resultaron tan alegres para quienes impulsaron dicha artimaña judicial. El 24 de abril de 2005, en la Ciudad de México, se efectuó la "Marcha del silencio", a la cual, según cálculos de las autoridades locales, acudieron 1 200 000 personas. La marcha fue tan numerosa que pronto el Zócalo, donde se celebró el mitin, se llenó al tope. Ese día hubo cientos de miles de manifestantes que se quedaron varados a más de un kilómetro de distancia de la plaza mayor. En la Ciudad de México nunca se había presenciado una protesta política con tanta gente. Pero no sólo la ciudad capital se encontraba movilizada, sino todo el país. Fox temió una mayor reacción popular y se vio forzado a recular. El 27 de abril, Fox retiró la infantil y tramposa acusación y, para limpiarse las manos, despidió al procurador comparsa.

Ante semejante derrota, la derecha inició su tercera estrategia, tan burda como la anterior, aunque mucho más sofisticada: el descarado fraude electoral preparado antes, durante y después de la elección. Los golpistas cerraron filas para defender el "triunfo" del panista Felipe Calderón Hinojosa. Ni las manifestaciones del 16 de julio (a la que acudieron 1 500 000 de personas), ni la del 30 de julio (en la que participaron más de 2 000 000 de ciudadanos), ambas realizadas en la Ciudad de México; ni el plantón de cerca de cincuenta días de duración que se tendió desde el Zócalo hasta al bosque de Chapultepec, lograron que se limpiara la elección. Entre los "defensores de las instituciones democráticas" y, por ende, la "victoria" del panista, hubo algunos renombrados académicos. Una vergüenza para el gremio, sin duda. Con malaba-

rismos intelectuales apoyaron a un deleznable personaje que, a lo largo de su administración (2006-2012), enlutó decenas de miles de hogares. La "guerra contra el narco" iniciada por su gobierno fue el pretexto para justificar la presencia de las fuerzas represivas a lo largo y ancho del país. Su propósito fue el de disuadir e intimidar al pueblo a través del terror. El sexenio 2012-2018, encabezado por el priista Enrique Peña Nieto, continuó con las mismas políticas y profundizó aún más el despojo neoliberal. No olvidemos que los hechos del 26 de septiembre de 2014, ocurridos en Iguala, Guerrero, en el que 43 estudiantes normalistas fueron detenidos-desparecidos sucedió durante su gobierno; y también sucedieron miles de desapariciones y asesinatos, entre otros incidentes violentos. La naturaleza y extensión del presente capítulo nos impide realizar un esbozo más pormenorizado del período 2006-2018. A pesar de ello, consideramos que lo hasta hoy expuesto permite valorar la trascendencia histórica del triunfo —inocultable— de López Obrador en 2018. Se trató de una conquista abonada por millones de personas, por innumerables luchadores sociales de distintas generaciones, muchos de los cuales no vivieron para presenciarlo.

Ideario político y alternativa económica

Para AMLO ser de izquierda

> Además de tener amor al pueblo y ser honesto, implica luchar para transformar […] El que no actúa para cambiar un régimen de injusticias y opresión, aunque sea buen teórico y viva criticando, no deja de ser conservador […] La política es pensamiento, pero fundamentalmente es acción transformadora, revolucionaria (López, 2018: 23).

En este contexto

> El poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. No es sólo la lucha por cargos públicos lo que debe movernos; lo principal es la lucha por los ideales y por las causas que defendemos. En to-

> dos los dirigentes de izquierda debe haber humildad. El poder es humildad. No debe prevalecer una visión personalista o individualista (López, 2007: 91-92).

En cuanto a su definición política-ideológica, plantea que

> A quienes incluso, de manera simplista, quieren saber si estoy más cerca de Chávez o de Lula de una vez aprovecho para decirles que me considero de izquierda y pelliceriano [Carlos Pellicer, 1897-1977. Poeta y político mexicano]. Soy de izquierda porque de ese lado está ubicado el corazón, y pelliceriano porque este maestro protestó por la injusticia social y escribió poemas en voz alta, siempre llenos de esperanza [...] (López, 2007: 300).

Con respecto al modelo económico neoliberal vigente en México, advierte que dicha política económica sólo buscó "satisfacer la voracidad de las minorías, sin interés alguno por el destino del país, ni mucho menos por los reclamos de todo un pueblo que se ahoga en la injusticia y la pobreza" (López, 2007: 67-68). "Sólo ha servido de parapeto para beneficiar a unos cuantos que no tienen interés alguno en el destino del país ni en el bienestar del pueblo" (López, 2010: 67). Sostiene que el ciclo neoliberal fue "una verdadera fábrica de pobres, y la pobreza se ha reproducido y agravado ante la ausencia de un Estado con sentido y visión social" (López, 2019: 141). En cuanto a sus adversarios políticos afirma que "El Estado se ha convertido en un mero comité al servicio de una minoría rapaz [...] [donde] los gobernantes forman parte de la principal pandilla de saqueadores que opera el país" (López, 2017: 13). Exhibe cómo buena parte de la plutocracia mexicana se desarrolló gracias a las privatizaciones impulsadas por los gobernantes neoliberales que habían tenido la conducción del Estado durante 36 años (1982-2018), pero también a costa de la corrupción política y la degradación social y ambiental. Plantea que el Estado debe promover el desarrollo político, económico y social del país. Dado que "su razón de ser es garantizar a todos los ciudadanos una vida digna y justa, con seguridad y

bienestar, y su función básica es evitar que los pocos que tienen mucho se aprovechen y abusen de los muchos que tienen poco" (López, 2017: 99-100).

Para López Obrador el principal problema que enfrenta México es la corrupción. A ella se debe la desigualdad, la inseguridad y la violencia. Su erradicación total permitirá el renacimiento de México. Para combatirla se requiere honestidad. Es decir, gobernar con el ejemplo. La impunidad deberá ser abolida y el gobierno debe actuar con austeridad por medio de la reducción del gasto corriente, los lujos y privilegios, y los ahorros devengados deben destinarse a la inversión pública. La salida a la crisis actual del país es la honestidad (López, 2018).

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Modernidad desde abajo y desarrollo para el bienestar

La Constitución mexicana (artículo 26) faculta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, durante sus primeros meses de gobierno, establezca "[…] los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo […] los cuales deberán recoger —mediante la participación de los diversos sectores sociales— las aspiraciones y demandas de la sociedad. La Carta Magna sanciona que el Estado deberá "organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación" (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2005: 22).

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), cuya redacción concluyó el 30 de abril de 2019, reconoce el desastre social y económico en el que —durante 36 años— los gobernantes neoliberales sumieron al país; período durante el cual México se encontró gobernado por una *oligarquía política empresarial*. El PND plantea que éste deberá recoger "el cambio de paradigma aprobado en las urnas el 1 de julio de 2018 y ese cambio incluye el del concepto mismo de desarrollo" (PND, 2019: 7). A dicho mandato popular y social se le identifica como la *Cuarta*

Transformación (4T); se trata —reconoce el texto— de "construir una propuesta posneoliberal y de convertirla en un modelo viable de desarrollo económico, ordenamiento político y convivencia entre los sectores sociales (PND: 8). Entre otros propósitos, el PND se plantea erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad; recuperar el Estado de derecho; separar el poder político del poder económico; y cambiar el paradigma en seguridad.

El PND plantea someter a consulta las decisiones estratégicas de interés nacional, consultar a las poblaciones los asuntos de interés regional y local "y someter a veredicto de las comunidades las acciones gubernamentales que las afecten o involucren" (PND: 28) y se compromete a acatar las disposiciones jurídicas de los múltiples tratados internacionales signados por México, entre los cuales, explícitamente menciona al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Sostiene que el objetivo más importante del gobierno de la 4T "es que en 2024 la población de México esté viviendo en un entorno de bienestar" (PND: 34), para lo cual plantea un número considerable de programas sociales tendentes a brindar derechos a los sectores sociales excluidos. El Estado, por lo tanto, no será un "gestor de oportunidades" sino un "garante de derechos". En su libro *Hacia una economía moral* (publicado en noviembre de 2019), López Obrador explica la diferencia que hay entre "ser gestor de oportunidades" y "garante de derechos".

> La diferencia entre unas y otras es clara: las oportunidades son circunstancias azarosas y temporales o concesiones discrecionales sujetas a término que se le presentan a un afortunado entre muchos y pueden ser aprovechadas o no; los derechos, en cambio, son inmanentes a la persona, irrenunciables, universales y de cumplimiento obligatorio (López, 2019: 140-141).

El PND se propone el impulso de una nueva vía hacia el *desarrollo para el bienestar* dentro de la cual resulta indispensable la participación de la sociedad en aras de construir la *modernidad desde abajo* sin ningún tipo de exclusión.

Es así como explica que

> La referencia a ese "abajo" social refiere el protagonismo histórico que se han ganado los siempre desposeídos, oprimidos, despojados y discriminados, aquellos que han sido tradicionalmente atropellados por los grandes intereses económicos, ignorados por los medios y privados del ejercicio del poder político; pero hace referencia también a la formidable reserva de civilización contenida en la herencia cultural y social mesoamericana y que ha resistido trescientos años de dominio colonial, un siglo de guerras e [*sic*] intestinas durante la república independiente y, por supuesto, más de tres décadas de neoliberalismo rapaz (PND: 36).

> Lo nuestro, lo ya emprendido [ampliaría el presidente posteriormente en *Hacia una economía moral*], es una construcción colectiva, que incluye la vasta diversidad de posturas políticas, condiciones socioeconómicas, espiritualidades, culturas, regiones, idiomas, ocupaciones y oficios, edades, identidades y preferencias sexuales que confluyen en la población actual de México. No discrimina a nadie porque es, precisamente, una respuesta positiva y constructiva a las décadas de exclusión en las que las mayorías fueron impedidas de participar, mediante la manipulación política, la desinformación y la represión abierta, en las decisiones nacionales (López, 2019: 140).

El PND explicita el compromiso del gobierno federal en el impulso del desarrollo sostenible, al cual define como a aquél encaminado a

> la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. [...] Por ello, el Ejecutivo Federal considerará en toda circunstancia los impactos que tendrán sus políticas y programas en el tejido social, en la ecología y en los horizontes políticos y económicos del país. Además, se guiará por una idea de desarrollo que subsane las injusticias sociales e impulse el crecimiento económico sin provocar afectaciones a la convivencia pacífica, a los lazos de solidaridad, a la diversidad cultural ni al entorno (PND: 37).

AMLO ha planteado que "no se trata de crecer destruyendo el territorio, sino cuidando los bienes de la naturaleza, los cuales pertenecen a todos, incluidas, por supuesto, las generaciones futuras" (López, 2019: 104). Aquí encontramos una fuerte problemática, ya que muchos de los proyectos de desarrollo impulsados, tanto por las corporaciones como por el propio Estado mexicano, en sus múltiples ámbitos o esferas, no son de ninguna manera sustentables.

Extractivismo minero

Un caso, entre tantos, es el de la minería. Actividad altamente contaminante del suelo, subsuelo y la atmósfera, de las aguas superficiales y subterráneas. Consume y degrada inmensos volúmenes de agua —a pesar de su uso y abuso en regiones que padecen estrés hídrico—. Irremediablemente, desplaza comunidades enteras, destruye paisajes naturales, altera y extingue la flora y la fauna, contribuye al cambio climático, consume grandes cantidades de energía, sobreexplota a sus trabajadores, despoja al país de sus recursos naturales y bienes comunes y, entre otros efectos nocivos e insustentables, genera graves afectaciones a la salud de la naturaleza, los trabajadores y poblaciones cercanas. Sin omitir, por supuesto, las inmensas fortunas que, a costa de todo lo anterior, obtienen los empresarios del ramo, quienes cínicamente argumentan ser ecológicamente sustentables y socialmente responsables. Según datos dados a conocer por Fundar, entre los años 2006-2015 las mineras que operan en el país en su conjunto "obtuvieron ingresos por un billón 714 mil 342.7 millones de pesos, pero sólo pagaron por impuestos 22 mil 397 millones" (Carbajal, 2020a: 21); es decir, 0.13% de sus ganancias.

Lejos de este "desarrollismo verde y virtuoso", la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) le ha reiterado al presidente de la República que no hay nadie que pueda sostener —apoyado en evidencias reales, científicas y coherentes— que existe tal cosa como una "minería verde, sustentable y amigable con el ambiente". De tal forma que

> Toda la actividad minera contamina, pero el uso de las nuevas técnicas ha hecho que la contaminación alcance realmente niveles irracionales, entre los cuales, la técnica a Cielo Abierto es esencialmente la más depredadora del medio ambiente. Su elevadísimo consumo de agua, la contaminación de la misma y los millones de toneladas de desechos, terrenos, jales, despolves plagados de metales tóxicos y partículas de tamaño PM 10 y 2.5 literalmente expuestas al aire libre, son algunos de sus componentes que generan daños cotidianos, permanentes e irreversibles, de tal tamaño y tan obvio que a simple vista se puede discernir cómo es que no hay voluntad política para detener la minería (Rema, 2019: 1).

En dicho pronunciamiento, la Rema reconoce la voluntad política del presidente de no entregar ni una sola concesión minera durante su administración, pero, entre otras cosas, le solicitan que cancele las miles de concesiones entregadas por los gobiernos previos, donde no existan proyectos en operación. No se trata de un detalle menor. Distintas fuentes estiman que entre 25 y 50% del territorio nacional ha sido concesionado a los corporativos mineros. AMLO afirma que "en 36 años se concesionaron 90 000 000 de hectáreas, es decir el 45% del territorio nacional" (López, 2019: 82). Sólo en 2018, de acuerdo con datos del INEGI, se produjeron 89 078 kilogramos de oro; 3 808 512 kilogramos de plata; y 550 000 de toneladas de cobre (Fundar, 2019).

Aunque, en agosto de 2019, AMLO anunció que pronto quedaría integrada una mesa para analizar los problemas desencadenados por la industria minera, hasta el momento no existe información al respecto. El mandatario ha expresado que se revisarán las concesiones de oro y plata; pero, a la par, consoló a los concesionarios al afirmar que "se mantienen las concesiones, no se revocan. Así de claro para que no salgan nuestros adversarios o sus voceros con que se está perjudicando a la iniciativa privada o a la inversión extranjera […] hay que explicar que como dicen los jóvenes, se pasaron, no tuvieron llenadera" (Jiménez, 2019: 19). Lo que el presidente no parece dispuesto a reconocer es que este tipo de capitalistas extractivistas, como muchos otros, por más riqueza que acumulen,

jamás tendrán "llenadera", lo que imposibilita que, al mismo tiempo, se les haga justicia a "los de abajo" y se tenga contentos y saciados a "los de arriba". Ello cancela cualquier posibilidad de lograr el *desarrollo con bienestar* y el *desarrollo sostenible*, como el presidente lo plasmó en el PND.

Cabe señalar que las contradicciones también se viven dentro del propio gobierno federal. Así tenemos, por ejemplo, que la Secretaría de Economía (de la cual depende la Subsecretaría de Minería) ni siquiera ha reemplazado documentos publicados durante la administración de Peña Nieto, donde a los posibles interesados en invertir en el ramo se les presume y anticipa que México es "el 5° país con el mejor ambiente para hacer negocios mineros, de acuerdo al reporte de la consultora Behre Dolbear publicado en agosto de 2015" (Secretaría de Economía, 2019).[21] En un contexto de despojo, explotación y degradación ambiental no resulta necesario explicar qué debe entenderse por *mejor ambiente para hacer negocios mineros* (recordemos la cifra de 0.13% señalada líneas arriba).

Aunado a lo anterior, Francisco José Quiroga Fernández, subsecretario de Minería del gobierno de AMLO[22], ha expresado que el hecho de que la minería sea vista como dañina para las comunidades y el medio ambiente es debido a que

> no hemos sabido comunicar que esta industria consume mucho menos agua y recursos naturales que otras o que la agricultura. […] La minería es lo

---

21 Consultado el 30 de junio de 2020.

22 El investigador de El Colegio de San Luis Juan Carlos Ruíz Guadalajara ha recordado que el subsecretario de Minería, Francisco Quiroga, se desempeñó como funcionario de la Secretaría de Economía durante las administraciones de Ernesto Zedillo (1994-2000) y de Vicente Fox (2000-2006) y que, posteriormente, fue "empleado de las mineras y comercializadoras de hierro Grupo Villacero, Coutinho & Ferrostaal y ArcelorMittal" (Ruiz, 2019: 12). El Grupo Villacero adquirió la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, empresa estatal privatizada durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994 (Carlos Fernández-Vega, 2020).

> mejor que le pudo haber pasada a muchas comunidades. Ni siquiera debería haber discusión al respecto, pero tenemos que explicar que la minería moderna no contamina (González, 2019: 24).

Según Carbajal, en México se realizan las mejores prácticas del mundo en la minería (2020b: 21).

AMLO también ha declarado que durante su gobierno no habrá explotación de hidrocarburos mediante el *fracking*, como tampoco el uso de semillas de maíz transgénico y que se prohibirá el uso de agroquímicos, cuyo uso ha sido declarado ilegal en otros países. Ya veremos cómo se resuelven los intereses encontrados y si el titular del Poder Ejecutivo federal —junto con los funcionarios progresistas— logra imponer su voluntad y neutralizar a los burócratas de su gobierno que profesan posiciones diametralmente opuestas.

No obstante, también cabe admitir que la actitud conciliadora, condescendiente, de AMLO para con los empresarios —a varios de los cuales durante sus años como dirigente opositor tildó como *mafiosos y amos de México*— genera desconfianza y recelo entre sus propias bases de apoyo, los sectores más críticos de la sociedad, y un fuerte rechazo de quienes directamente sufren las consecuencias de los abusos de los empresarios mineros. El presidente ha advertido que no habrá cancelación de contratos. Ha dicho: "no queremos que se cierren las minas que están produciendo; queremos que haya empleos" (Urrutia y Jiménez, 2019: 6). Entre los capitalistas a los que tiempo atrás AMLO reconoció como integrantes de esa *mafia* se encuentran los principales empresarios mineros mexicanos: Alberto Bailleres (Grupo Peñoles), Jorge y Germán Larrea (Grupo México) y Carlos Slim (Grupo Carso). Se trata de los hombres más ricos del país y quienes, a decir de AMLO, gracias a las privatizaciones de los gobiernos previos, se beneficiaron con la transferencia de "seis millones 600 mil hectáreas de reservas mineras nacionales" (López, 2010: 23). *Forbes* estimó que, en 2019, Slim era el empresario más rico de México; el segundo lugar lo ocupaba Germán Larrea; y el

cuarto, Bailleres (*Forbes*, 2019). De acuerdo con información oficial de la Subsecretaría de Minas, durante el primer semestre de 2019 existían 235 empresas mineras en México (Subsecretaría de Minería, 2019a); las canadienses constituyen 63% del total.

Las empresas mineras demandan grandes volúmenes de agua, mucho del cual termina contaminado. Compiten por apropiarse del líquido y despojan a las comunidades de éste. Un estudio realizado por la Fundación Heinrich Böll y CartoCrítica evidenció los volúmenes de agua de que disponen las grandes empresas mineras en México. Así, el Estado mexicano —a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)— le ha concesionado a Grupo México 142 títulos que le permiten hacer uso directo de más 90 612 942 metros cúbicos de agua al año; a la canadiense Goldcorp Inc., 74 permisos que le permiten apropiarse de 47 656 34 metros cúbicos al año; al Grupo CEMEX le ha otorgado 48 concesiones y puede disponer de 12 903 727 metros cúbicos de agua; y, finalmente, la Minera Frisco cuenta con 36 concesiones y puede disponer de 10 251 000 metros cúbicos de agua al año (Lemus, 2019).

Para defender sus intereses, algunas empresas mineras se han asociado con el crimen organizado, sobre todo para intimidar a quienes se oponen a ellas (Lemus, 2019). Esto se ha traducido en asesinatos de defensores del territorio, desplazamientos forzados, etc. Sin el apoyo del Estado —y a pesar del Estado—, miles de comunidades rurales se han visto obligadas a organizarse para hacer frente a estos invasores "emisarios del progreso". Miguel Mijangos, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, ha señalado que en el país hay más de seiscientos municipios con actividad minera; pero también existen más de 2 000 comunidades rurales de cerca de cincuenta municipios en varios estados "que se han declarado libres de minería con acciones legales, no políticas" (Valadez, 2019: 26). Todo indica que, con respecto a la minería (y sin obviar algunas acciones importantes impulsadas por el gobierno de la 4T, como la prohibición del *fracking*, la no entrega de nuevas concesiones mineras o el rechazo al proyecto de explotación de la mina de oro a cielo abierto Los Cardones, en Baja California Sur), el gobierno federal

está muy lejos de asumir la responsabilidad que habría de corresponderle para ser consecuente con su lema "Primero los pobres".

El Tren Maya

Hoy, AMLO enfrenta fuertes resistencias populares a dos de sus proyectos de desarrollo regional considerados en el PND: el Tren Maya y el Corredor Transístmico (o Corredor Multimodal Interoceánico).

El primero se plantea como el más importante proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo del sexenio. Tendrá un recorrido de 1 525 kilómetros; cruzará los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Se estima que tendrá 15 estaciones y requerirá entre 120 mil y 150 mil millones de pesos (PND). Se ha señalado que la mayor parte de su ruta transitará por derechos de vía ya existentes. Se teme que, como sucede con todas las megaobras, ésta también genere una monumental huella ecológica. Los opositores desconfían porque intuyen que la colonización de la naturaleza se acelerará, la presencia humana se multiplicará y, entre otras preocupaciones, temen el arribo de una gran cantidad de establecimientos comerciales y de servicios.

El proyecto del Corredor Transístmico se plantea como el principal eje del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Se propone la modernización de la infraestructura terrestre y portuaria para conectar los océanos Pacífico y Atlántico para favorecer la movilización de mercancías. Es obvio que el territorio en cuestión será fuertemente alterado. También en esto se observan enérgicas resistencias. Las experiencias modernizadoras —por ejemplo, la instalación de inmensos parques eólicos— no han sido gratas para las comunidades rurales, quienes se quejan de los abusos cometidos por los empresarios y por ya no poder trabajar sus tierras. Aunque AMLO ha presumido haber consultado a las comunidades y contar con su apoyo, lo cierto es que dichas consultas no han considerado la participación de todos los habitantes donde se instalaría el corredor.

Con respecto al proyecto del Tren Maya, lo primero que habría que reconocer es que las comunidades rurales de las entidades y municipios por el que éste transitará no necesariamente viven en un paraíso. En muchas localidades hay problemas de marginación, pobreza, degradación ambiental, violencia y presencia del crimen organizado. En buena medida, la migración histórica, como ha sucedido en todo el país, ha sido forzada dada la ausencia de condiciones para que la gente pueda conducir sus vidas de manera digna y en paz. Las realidades señaladas obligan a la búsqueda de alternativas para superar los problemas que allí se viven. Sin embargo, hay serias dudas de que el Tren Maya, las 15 estaciones que se contempla construir —cuyas sedes terminarán convirtiéndose en *polos de atracción*—, como toda la especulación inmobiliaria que se desatará ante la eventual presencia masiva de turistas, vaya a favorecer a las comunidades y a la naturaleza. No en balde, se teme que el proyecto facilite una mayor colonización del territorio y termine subordinando a los habitantes a los intereses de los empresarios.

Además, habrá que prever que el proyecto podrá desatar efectos perjudiciales que no necesariamente serán variables que los gobiernos locales, estatales y federal, actuales o futuros, podrán controlar, o pudieran estar dispuesto a evitar o contrarrestar. Hay quienes han externado su preocupación al observar lo que sucedió en Cancún al haberse convertido, en pocos años, en un fuerte polo de atracción turística. Se teme que el proyecto pueda fragmentar aún más la cohesión comunitaria, que la presencia masiva de turistas genere una grave huella ecológica, que los campesinos terminen convirtiéndose en la servidumbre de los empresarios, que los intereses del crimen organizando se asienten todavía más, que se propicie el despojo de tierras y que la drogadicción y la trata de personas también se asienten, como sucedió en Cancún.

Por otro lado, hay quienes insisten en que el proyecto tomará en cuenta el parecer de las comunidades, cuya incidencia está siendo considerada. Es el caso del titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor M. Toledo, para quien “los pueblos indígenas,

sus naturalezas, cosmovisiones y memorias van estableciendo alianzas con la 4T".

El prestigioso ecólogo político señala

> Para sorpresa de los negacionistas, hoy esa alianza avanza: dos grandes reuniones con las organizaciones de apicultores mayas, 80 investigadores organizados por el Conacyt para analizar el tren, un encuentro con las tres principales organizaciones de turismo alternativo, diálogos con las comunidades de conservación voluntaria, los chicleros y ejidos forestales, 20 mil familias sembradoras de vida de 367 comunidades, y sobre todo 15 consultas con 5 mil 266 participantes, incluyendo 80% de los presidentes municipales y 85% de las autoridades ejidales. Primer resultado: los ordenamientos ecológicos participativos que serán realizados en cada uno de los 78 municipios donde pasará el tren (Toledo, 2020: 16).

Sin afán de agotar la discusión, tememos que, como sucedió durante la Revolución mexicana, al final el tren pueda ser utilizado en contra de quien lo impulsó, y, otorgándole el beneficio de la duda a AMLO, de sus buenos propósitos. Sin embargo, en este hipotético e indeseable caso, no serían las fuerzas revolucionarias las que lo abordarían, sino los conservadores cuya voracidad no tiene límites. Y descarriarlo después, francamente significaría un costo humano adicional muy doloroso para quienes lo intentaran.

Somos de la idea de que primero hay que resarcir los daños causados a la naturaleza —lo que todavía se pueda lograr considerando el tiempo que aún nos queda—, y, en buena parte, esto significa disminuir la presión del ser humano sobre ella y tratar de armonizar la relación con la naturaleza donde ya existe presencia humana, más que impulsar el turismo masivo que inevitablemente dejará su huella ecológica.

La derecha opositora. Ser y estar entre calumnias y fantasmas

Andrés Manuel López Obrador se ha distinguido como un reconocido líder social opositor a la política neoliberal, criticando acremente a los

grupos empresariales entronizados durante la época de Carlos Salinas de Gortari, posteriormente rescatados durante el Fobaproa, y a quienes ha llamado la *mafia del poder*.

En su discurso de toma de posición, AMLO afirmó que el nuevo gobierno que encabeza "no va a ser un comité al servicio de una minoría rapaz. Representará a ricos y pobres, creyentes y libres pensadores, y a todas las mexicanas y mexicanos, al margen de ideologías, orientación sexual, cultura, idioma, lugar de origen, nivel educativo, o posición socioeconómica" (*Animal Político*, 2018), separando al poder económico del poder político.

Sin embargo, bajo su exitoso mandato como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (de 2000 a 2005, hasta su renuncia), quedó claro que gobernar implicaba conciliar, negociar y reconocer a los grupos de interés que concurrían en la gran urbe.

Un ejemplo de esto es su relación con el empresario mexicano Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, quien fue invitado al Programa para el Desarrollo del Centro Histórico con el objetivo de repoblar una zona que había quedado muy deteriorada desde el terremoto de 1985. Como resultado de esta alianza, el Centro Histórico fue reconstruido y apuntalado hacia una dinámica económica y social, al tiempo que el gobierno de la Ciudad de México se ahorró más de 4 mil 200 millones de pesos, que a AMLO le sirvieron para financiar su programa de política social bajo la convicción de "Por el bien de todos, primero los pobres", que entre otras cosas se destinaron a la atención gratuita en hospitales, pensión para ancianos mayores, becas para madres solteras y discapacitados, créditos para construcción de vivienda, así como vales de despensa (Mejía, 2018).

Esta relación amistosa y claramente pragmática no fue suficiente para evitar la animadversión de algunos grupos empresariales durante su campaña para la presidencia de México en 2006. Los encontronazos con los poderosos grupos empresariales han continuado hasta la fecha.

Poco después del inicio de su gobierno en la Ciudad de México, en el año 2001, López Obrador se convirtió en el gran opositor al proyecto de construcción del aeropuerto en Texcoco, señalándolo como una obra sujeta a los intereses de las empresas inmobiliarias, además de que se asentaba en una cuenca lacustre que trastornaría la humedad, la temperatura y la calidad del aire del Valle de México (Mejía, 2018). A la postre, sería su enterrador.

En las democracias políticas reales bajo un entorno capitalista global, las decisiones de gobierno no siempre son resultado de las deliberaciones democráticas. La sobredeterminación de las fuerzas económicas (que a la manera de una mano invisible se autocorrigen, supuestamente instaurando orden y concordia que en automático genera prosperidad, progreso y paz social) han facilitado la participación de fuerzas *paraderaocráticas*, ya sea como grupos de presión o de interés, y en su forma más dañina por estar soterrados, como poderes fácticos.

Resulta claro que la actividad política va más allá de los partidos políticos, la estructura de gobierno y la composición clásica de los tres poderes. De tal suerte, los denominados *grupos de presión*, que incluyen asociaciones y organizaciones que "cabildean" manifestando intereses particulares o de grupo, y que de manera directa no buscan el poder público, son consustanciales a los regímenes políticos modernos.

Actualmente, los grupos de presión representan sindicatos, confederaciones campesinas, asociaciones estudiantiles, empresarios, comerciantes, Iglesias, banqueros, gobiernos extranjeros y académicos, incluso poderes subrepticios como el narcotráfico. Algunos de ellos se caracterizan por una fuerte influencia económica, como los grupos de banqueros y los grandes empresarios. También se considera grupos de presión a las organizaciones de la sociedad civil y las ONG, ya sea al interior del país o con presencia internacional. Usualmente, participan en órganos consultivos reconocidos por los propios gobiernos.

¿Cómo presionan dichos grupos? Son varias las formas de manifestarse, que van desde la persuasión y convencimiento hasta la intimidación y la corrupción, en donde se compran las decisiones que favorezcan

a su grupo (Sánchez, 2020). Lo cierto es que dichos grupos buscan beneficios concretos, utilizando recursos económicos o el chantaje político, si es necesario.

En México, los grupos de presión han colocado legisladores afines, que se convierten en sus voceros o testaferros. La actual legislatura, la LXIV (2018-2021), es la que menos grupos de interés mantiene (Solís y Cortez, 2019). En esta legislatura, los grupos civiles han cobrado mayor importancia, como aquellos que defienden a colonos, los ambientalistas, los que se enfocan a temas de salud o los que buscan promover los derechos de las mujeres, en su mayoría pertenecientes al partido Morena.

En otros momentos, los partidos PAN, PVEM, PRI, MC y PRD incorporaron a grupos sindicales y empresariales. Tenemos el caso del contingente sindical de los trabajadores de la educación, agregado por Nueva Alianza, mientras que el PRI ostentó la membresía de los sindicatos de trabajadores petroleros o de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Por su parte, gracias al PAN acceden grupos de interés pertenecientes a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) (Solís y Cortez, 2019).

Tristemente célebre por su corruptor protagonismo, está la conocida *telebancada*, o legisladores de los grupos de la industria de la radio y la televisión, que fueron representados por el PVEM y el PRI.

Complementario a esta representación directa en el legislativo, los grupos profesionales o sectoriales (los *lobbies*), así como las ONG y movimientos sociales, conciben estrategias de presión (*lobbying*) ante los poderes públicos, actuando indirectamente y creando un estado de opinión favorable a los intereses que defienden, utilizando métodos que van desde reuniones amistosas hasta la coacción y la violencia. Uno de los recursos predilectos es llamar la atención de la opinión pública gracias a la utilización y servicio de algunos medios de comunicación. Si esto no fuera suficiente, recurren a la acción directa como huelgas, manifestaciones y toma de espacios.

Los *lobbies* o cabilderos conforman agencias con recursos humanos como abogados o comunicólogos, tratando de llegar a los tomadores de decisiones públicas para obtener su beneplácito. Para esto, los medios de comunicación (convencionales y digitales) son prioritarios.

Los medios de comunicación más influyentes en México se concentran en 11 grupos empresariales. Entre las cuales se encuentran la familia Azcárraga del grupo Televisa, la familia Vázquez Raña con el grupo empresarial Ángeles e Imagen TV y la familia Salinas Pliego con Grupo Salinas. Carlos Slim es dueño de América Móvil. Antes de la llegada de AMLO, estas 11 familias concentraban la audiencia acaparando la mayor parte de la publicidad oficial, además de que sus intereses empresariales permitían colocar los contratos públicos y concesiones en la construcción, la salud o las telecomunicaciones.

Actualmente, el gasto en publicidad del gobierno mexicano corresponde a la tercera parte del gasto ejercido por Enrique Peña Nieto (*Animal Político*, 2020). El 40% de los recursos lo concentran cinco medios de comunicación, entre los que destacan Televisa, TV azteca y *La Jornada*.

Es evidente que el gobierno de la 4T no rompe con los grupos empresariales, como muchos estridentes lo anunciaban con el *petate del muerto* de la "venezolización" de México, sino que ha tratado de conciliarlos con el proyecto de nación, aunque bajo nuevas reglas. Un ejemplo notorio es la celebración de la entrada en vigor del T-MEC (el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos Canadá y México), donde el gobierno mexicano invitó a la cena celebrada el 8 de julio de 2020 en la Casa Blanca a conspicuos empresarios como Patricia Armendáriz Guerra, Carlos Bremer Gutiérrez, Daniel Chávez, Carlos Hank González, Bernardo Gómez Martínez, Carlos Slim y Olegario Vázquez Aldir. Meses antes, estos empresarios fueron invitados a formar el Consejo Asesor Empresarial, conformado con la intención de elevar el crecimiento y bienestar en México (González, 2020). Son empresarios líderes de los grupos económicos más fuertes del país. Por ejemplo, el grupo Televisa, Televisión Azteca, Interjet, el Grupo Hotelero Vidanta,

Gruma, Grupo Financiero Banorte, que van desde negocios diversificados como la industria alimenticia hasta los medios de comunicación.

Entonces, ¿por qué persiste una actitud claramente hostil de parte de algunos empresarios, intelectuales y líderes de opinión hacia el gobierno de la 4T? Con seguridad, debido a que muchas de las canonjías de las que gozaban están en proceso de desmantelarse. En momentos críticos, como la epidemia del covid-19, el gobierno de AMLO fue firme en no solicitar deuda para apoyar a estas empresas, que clamaban por una especie de Fobaproa. Al mismo tiempo, se reformaron las leyes para otorgarle al gobierno más capacidad en la compra de medicamentos, desplazando a los grupos de interés farmacéuticos que durante meses habían "jugado a las vencidas", quienes promovieron una campaña mediática para descalificar y romper la confianza hacia el gobierno.

Recientemente, una de las organizaciones que se ha distinguido por su lenguaje violento y de franca oposición al régimen de la 4T es el Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA), no obstante que se declara "ciudadano y pacífico". Conformado por 67 miembros de los que destacan Pedro Luis Martín Bringas (del Consejo de Administración de Soriana), Juan Bosco Abascal, Pedro Ferriz de Con y Rafael Loret de Mola. Con amplios recursos y gran poder de penetración mediática, mantienen una organización en diferentes tareas, desde una comisión de seguridad cibernética hasta una de vinculación internacional, amén de presumir de una "Comisión de vinculación militar a cargo del grupo Tlaxcala" (*Forbes México*, 2020).

Uno de sus miembros más visibles y estrafalarios es Gilberto Lozano, otrora directivo del Consejo de Administración de Femsa (dueña, entre otros, de Oxxo y de Coca-Cola México). Funcionario durante un breve tiempo en el gobierno de Vicente Fox, mantiene un discurso fascista contra los homosexuales, comunistas y la "ideología de género". Sus exabruptos han llegado al grado de solicitar que el ejército perpetre un golpe de Estado para sacar a Andrés Manuel López Obrador, al que llama "ganso bolivariano", en una narrativa de odio y denostación hacia los gobiernos de izquierda latinoamericanos. No obstante, sus manifes-

taciones en automóviles caros, esporádicas pero ruidosas, con consignas peculiares como "Seguiremos hasta que dimita o le dé otro infarto", o la desafortunada frase «Quiero vivir en un lugar donde no me gobierne mi sirvienta», no han logrado el impacto que quisieran, más allá de que son amplificadas por muchos de los medios. Sin duda, mantendrán un protagonismo en el 2021, así como durante la revocación del mandato en el 2022, en donde esperan ganar.

Paralelamente, reforzando lo que muchos indican como una estrategia de *golpe de Estado blando*, existe una fuerte y bien orquestada campaña tanto en medios digitales como en las televisoras y radio, que, evidentemente, requiere inmensos recursos económicos y humanos. Para lograr este objetivo, recurren a técnicas y estrategias mediáticas de nuevo cuño. Veámoslas.

Las *fake news* propagan noticias falsas, utilizando la difamación y la ofensa, así como encuestas de dudosa procedencia, minando un derecho fundamental que es la información confiable, como lo estipulan los artículos 6 y 41 de la Carta Magna. Además, se recurre al *troll*, que es un mensaje simplificado que aparece en los medios digitales y en las redes sociales para provocar, fastidiar, confundir, acosar y causar daño, recurriendo al desprecio, por lo que también atenta al derecho a la información. Tanto las *fake news* como los *trolls* son armados intencionalmente por consultores profesionales y los mismos servicios de inteligencia para incidir, modificar o perturbar campañas electorales o procesos de decisión pública. De manera mecánica, aparentan ser personas que tuitean sobre un tema, consiguiendo un *trending topic*. Luego, intensifican la campaña sucia con textos radiados o repetitivos (RT) por medio de granjas de *bots*, manipulando la opinión pública (Steinsleger, 2020).

Tras estas campañas se ha detectado el trabajo intelectual de los llamados *tanques de pensamiento* (*think tanks*), quienes conciben estrategias pagadas por corporaciones a través de los medios de comunicación, intelectuales orgánicos y espacios académicos que los financian y de los cuales incluso son dueños, generando una corriente de conformismo y desmovilización, como una especie de cortina de humo (Velázquez,

2019). Desafortunadamente, dominan y fagocitan a los organismos autónomos en México, y se postulan como supuestas voces autorizadas. Por ello, en parte se explica la desconfianza del gobierno de AMLO hacia estos organismos autónomos, además de sus altos sueldos, tema que será tratado en otra ocasión.

Distintas investigaciones periodísticas y de algunos organismos del gobierno han detectado algunos sitios especializados para difundir notas falsas, entre ellos *La Central del Gorgojo, Eje Central, 24 Horas Mx, Nación Unida, Pejendejadas, Amor a México, Evaluando Gobernantes, Quinto Poder, La Otra Opinión, Argumento Político, Fisgón Político, Zócalo Virtual, Tumbaburros, El Mexicano Digital, Todo Informe* (Diálogos por la Democracia, 2018).

Para ver cómo estos sitios manejan la "información", hicimos la prueba en varios de estos dominios. Algunos ya están fuera de servicio. La distorsión y la falta de escrúpulos es evidente; por ejemplo, en *Argumento Político*, que coloca a varios personajes de la vida política y de la farándula (Adal Ramones, Lili Téllez, Galilea Montijo) haciendo declaraciones que exigen la renuncia inmediata de AMLO "por su mediocridad". Al final del texto, aparece una leyenda que dice "Aclaración: esta nota no es real, sólo fue creada con fines humorísticos". Suponemos que los aludidos no hacen ningún reclamo, pero sorprende la forma en que posicionan este tipo de infundios como si fueran declaraciones reales.

Lo cierto es que las empresas de *marketing* digital se han convertido en jugosos negocios con la participación de cientos de jóvenes *millennials*, donde lo principal es generar una audiencia sin importar la veracidad de los hechos, pues se recompensa si la noticia es retomada por los medios convencionales, algo así como "falsos positivos" mediáticos.

Las noticias falsas se han utilizado en diferentes momentos contra AMLO. Se le acusó de tener relaciones zoofílicas, o de que su esposa era hija de un líder nazi. Uno de los más viscerales es Ricardo Alemán, quien incluso acusó a AMLO de tener vínculos con el narco. Estas calumnias jamás fueron investigadas y mucho menos castigadas, lo que deja un mal precedente.

Algunas investigaciones revelan que en la cuenta de Twitter @tumbaburross, asociada a Jeff Scott Szeszko y responsable de continuos ataques de *bots* en contra del gobierno federal, intervienen Luis Calderón Zavala (hijo de Felipe Calderón y Margarita Zavala), Aurelio Nuño (exsecretario de Educación) y Juan Carlos Romero Hicks (senador del PAN). Tumbaburros se define abiertamente opositor al gobierno de AMLO "como si fuera una guerra", utilizando *fake news*, granjas de *bots* y otras estrategias que de inmediato son replicadas por los medios de comunicación convencionales, y no se diga en los digitales (Guevara, 2019).

Usuarios de Twitter contratados como *bot* para atacar al gobierno de AMLO comentan que reciben su pago por medio de una tarjeta de débito, y que el monto puede aumentar si su comentario crece en las tendencias. Aseveran que el dinero proviene de México Libre y prominentes miembros del PAN, como antes lo hacía el PRI. Su función es crear noticias falsas enfocadas a usuarios ocasionales e ignorantes, con el principal objetivo de "dar a conocer un Estado fallido, ridiculizar el gobierno de AMLO" (*Regeneración*, 2020). Sus estrategias no tienen escrúpulos, como se ha visto en la creación de historias de enfermos que no fueron atendidos por el IMSS o el supuesto fracaso de la política del gobierno durante el covid-19, que luego son viralizadas para "calentar la plaza" y provocar manifestaciones.

Finalmente, para terminar este somero análisis de los grupos de presión y sus campañas mediáticas, mencionamos la carta titulada "Contra la deriva autoritaria y por la defensa de la democracia", publicada en varios medios como inserción pagada el 16 de julio de 2020, en donde se acusa al presidente AMLO, entre otras cosas, de la demolición del Estado, la asfixia del pluralismo, el sometimiento del Poder Legislativo, el fracaso de la política de salud durante el covid-19, etc. Para recuperar un supuesto pluralismo político, proponen la alianza entre partidos de oposición y la ciudadanía para las elecciones de 2021. Entre los abajo firmantes, destacan algunos intelectuales orgánicos del neoliberalismo, como Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín. Cabe recordar que 14

de ellos[23] ya habían aparecido juntos en un pronunciamiento firmado 19 años atrás, el 3 de agosto de 2006, en donde, entre otras cosas, afirmaron "No debemos alimentar una espiral de crispación y alarma. No inyectemos elementos que envenenen el ambiente político, no enfrentemos a los adversarios como si se tratara de enemigos. Edifiquemos un clima que refuerce la convivencia política y social" (García Vergara, 2008: 84). Eso lo declararon entre dos fechas claves: el 2 julio y el 5 de septiembre de 2006. La primera correspondió al día de la elección para presidente de la República, donde el Instituto Federal Electoral, indebidamente, le dio el triunfo a Felipe Calderón; la segunda, el día en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictaminó la validez de los comicios y —con un supuesto 0.56% de ventaja sobre AMLO— declaró, "haiga sido como haiga sido" (Calderón *dixit*), al panista como presidente electo. Ahora, con AMLO como titular del Poder Ejecutivo y con Morena como primera fuerza en ambas cámaras legislativas, el ánimo *reconciliador* de este grupo se desvaneció.

Con respecto al desplegado del 16 de julio del 2020, López Obrador contestó casi de inmediato con la carta "Bendito coraje", señalando que daba pena ajena que los firmantes buscaran una alianza en las elecciones de 2021, cuando dicho contrapeso jamás existió en los gobiernos que antecedieron y a los cuales casi nunca criticaron, guardando "un silencio cómplice ante los fraudes electorales de la historia reciente del país". Una respuesta contundente sobre la hipocresía de estos intelectuales y activistas nos la brinda Martí Batres con su artículo "Contrapesos", entregando una larga lista de todos los momentos donde el legislativo se sometió al ejecutivo, con reformas estructurales que tuvieron nefastos efectos en la vida política del país. Lo más grave fue con la votación resultado del cohecho y el soborno. Batres se pregunta "¿Cuál pasado

[23] Héctor Aguilar Camín, José Antonio Aguilar, Roger Bartra, Humberto Beck, Jorge Castañeda, Christofer Domínguez, Enrique Krauze, Soledad Loaeza, Ángeles Mastreta, Jean Meyer, Guillermo Sheridan, Fernanda Solórzano, Isabel Turrent y José Woldenberg.

de 'contrapesos' quieren 'recuperar'? ¿El de Salinas-Diego? ¿El del Pacto por México? ¿El de los moches?" (Batres, 2020).

Ahora, con Emilio Lozoya Austin (exdirector de Petróleos Mexicanos durante el sexenio de Peña Nieto) bajo proceso judicial y cuyas primeras declaraciones sobre cómo se construyó el Pacto por México, como los sobornos auspiciados por Odebrecht; y la detención en Estados Unidos de Genaro García Luna (extitular de la Secretaría de Seguridad Pública con Felipe Calderón y exdirector de la Agencia de Federal de Investigación de México con Vicente Fox) los bonos del PAN, del PRI y del PRD están por los suelos. La corrupción de que fueron partícipes los ha derrotado moralmente. Pero, como sabemos, para estos grupos, la moral no es algo que realmente les preocupe.

Lo que la experiencia latinoamericana ha mostrada hasta el cansancio es que la derecha juega a la democracia política cuando supone llevar ventaja, pero, cuando no es así, hacen todo lo posible para subvertir el orden legal. AMLO cuenta con una amplia legitimidad, pero, para mantenerla, deberá construir puentes con el pueblo y sus movimientos sociales y, sobre todo, deberá reconocer su papel como actores. Sólo así, la 4T dejará de gatear y se erguirá, haciendo a un lado los fuertes obstáculos que la amenazan.

Para concluir: AMLO ¿posneoliberal o preneoliberal?

Sin duda, como líder opositor, AMLO supo representar y expresar el rechazo antisistémico compartido por millones de mexicanos. Agravios como la corrupción, la impunidad, la violencia, el desmantelamiento de los derechos de la ciudadanía, el derroche gubernamental y, entre otros, la conformación de una élite política-empresarial neoliberal abusiva y autoritaria siempre fueron denunciados por él. Asimismo, a lo largo de su vida ha mostrado honestidad y preocupación por los pobres, lo que, ciertamente, lo dotó de un fuerte capital político y arraigo popular, aunque también representó una amenaza para quienes se han servido de la corrupción y los privilegios otorgados desde el poder político.

Durante el año y medio que lleva su gobierno, hemos observado una fuerte oposición de muchos de aquellos que anhelan el pasado. Se trata de un sector heterogéneo donde igual cabe la ultraderecha; la delincuencia enquistada dentro del gobierno como fuera de éste y, no pocas veces, ambas en connivencia; los empresarios renuentes a disminuir sus privilegios y cumplir con sus obligaciones; la oposición democrática legítima; y, entre otros, millones de ciudadanos manipulados por una guerra mediática, permanentemente bombardeados por mentiras, desinformación y supuestas amenazas alimentadas por fantasmas como el *chavismo,* el *comunismo*, el *castrismo*, el *populismo echeverrista*, el *socialismo*, la *ideología de género*, etcétera.

AMLO está comprometido con el retorno y florecimiento del Estado de bienestar, lo cual lo convierte, parcialmente, en antineoliberal, pero no en anticapitalista. ¿Acaso la reactualización del salinista Tratado de Libre Comercio (ahora renombrado como T-MEC o USMCA, por sus siglas en inglés) suscrito entre Canadá, México y Estados Unidos no constituye un pacto neoliberal? El presidente también está enganchado con el desarrollismo (como una forma de generar progreso y distribuir la riqueza). Pero el antineoliberalismo de AMLO concierne sobre todo a garantizar la puesta en marcha de derechos de ciudadanía social (sin omitir los civiles y los políticos). Más que antineoliberal, AMLO es *bienestarista.* Su propósito es garantizar la presencia del Estado de bienestar, lo cual, despueés de más de treinta años de clasismo neoliberal, es muy encomiable. En este sentido, siguiendo a Agustín Basave (2020), nos parece que AMLO, más que ser posneoliberal, es preneoliberal. Él tiene muy presente a John M. Keynes y a Franklin D. Roosevelt. Pero los problemas con los que arribamos al siglo XXI nos obligan a repensar no sólo nuestra relación entre nosotros, sino también —y hoy más nunca— a replantear nuestra relación con la naturaleza, con las ideas de progreso y desarrollo y con sentar las bases que nos permitan pensar en cómo queremos estar de aquí a 20 o 50 años.

Sin duda, AMLO hubiera sido el mejor presidente que hubiéramos tenido en la segunda mitad del siglo XX. Y aunque sostenemos que, hasta

ahora, es el mejor gobernante que —junto con Lázaro Cárdenas, 1934-1940— hemos tenido desde que concluyó la Revolución mexicana, el presidente no parece estar en condiciones de advertir —como tampoco lo están la mayoría de los gobernantes actuales del mundo— la crisis civilizatoria que enfrentamos y de cómo desde hoy debemos contribuir a sentar las bases que garanticen la sobrevivencia digna de todos los seres vivos que habitamos —y, sobre todo, habitarán— el planeta.

Es cierto que a través del programa *Sembrando vida* se busca promover sistemas productivos agroforestales que combinen cultivos tradicionales con árboles frutícolas y maderables. A la vez que se promueve recuperar la cobertura forestal de más de un millón de hectáreas. Pero hoy también resulta prioritario conservar la naturaleza que aún nos queda, transitar aceleradamente hacia formas de convivencia con ella, cambiar nuestros hábitos de consumo y el derroche y degradación de la naturaleza y detener el tren de la destrucción en el que la sociedad planetaria se halla. Más que pensar en restaurar la grandeza de Pemex —e invertir inmensos recursos en la nueva refinería de Dos Bocas—, habría que invertir para avanzar rápidamente en la transición energética. Con AMLO, millones de mexicanos se encuentran mejor, no cabe duda. El siempre posible regreso del neoliberalismo llegará de la mano del fascismo. Será el oscurantismo del que nos habla Boaventura de Sousa, pero quienes lo padeceremos en primera instancia seremos los mexicanos.

Treinta millones de votos deberán convencer a AMLO de que no está solo; de que la participación ciudadana es una actividad de todos los días y de que la gente organizada constituye una fuerza colosal para respaldar y acelerar los cambios que la mayoría desea. Dados los inmensos obstáculos que su gobierno enfrenta, la tarea de gobernar ha sido ardua. Diario debe enfrentar antagonismos, sobre todo los que vienen de la derecha golpista. Todo indica que su gobierno, dentro del horizonte histórico de sus posibilidades, no será el que sentará las bases para preconfigurar una sociedad poscapitalista. Sin duda, la existencia de un clima no represivo, de combate a la corrupción y de efectivización de los derechos de ciudadanía social son muy importantes. Pero la agenda radical, frente

a la reformista de AMLO, será delineada, en primer lugar, por los movimientos sociales antisistémicos. Por aquellos que hoy, a lo largo y ancho del país, despliegan sus esfuerzos cotidianos en defensa de la naturaleza, el territorio, la libertad, la igualdad y los derechos humanos.

Bibliografía

Avilés, Jaime (2012), *AMLO: Vida privada de un hombre público*, México, Grijalbo.

Basave, Agustín (2020), "La visión preneoliberal de AMLO", *Proceso*, núm. 2272, 31 de mayo, pp. 42-43.

Batres, Martí (2020), "Contrapesos", *El Universal*, 17 de julio.

"Bot pagado por la derecha revela estrategia en redes contra AMLO" (2020), *Regeneración*, 8 de abril, en https://regeneracion.mx/bot-pagado-por-la-derecha-revela-la-estrategia-en-redes-contra-amlo/

Cámara de Diputados. LXIV Legislatura, en http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/info_diputados.php

Carbajal, Braulio (2020a), "Mineras ganan millones, pero pagan impuestos casi de manera simbólica", *La Jornada*, 21 de junio, p. 21.

___ (2020b), "La minería debe ser un empuje para las comunidades: Quiroga", *La Jornada*, 14 de agosto, p. 21.

Cedeño del Olmo, Manuel (1995), "Las elecciones en Tabasco y la pugna por la gubernatura, 1988-1994. Los nudos de la transición regional", *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, núm. 161, México, UNAM, en http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmcpys/article/view/49749

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2005), México, Ediciones Fiscales ISEF.

"Discurso íntegro de Andrés Manuel López Obrador al rendir protesta como Presidente de México" (2018), *Animal Político,* 1 de diciembre, en https://www.animalpolitico.com/2018/12/discurso-integro-amlo-protesta-presidente/

Fernández-Vaga, Carlos (2020), "México SA. Barones placean a funcionarios//No todos jalan parejo en la 4T", *La Jornada*, 4 de mayo, p. 23.

García Guevara, Tania Joanna (2008), "Los intelectuales y la derecha en México", *El Cotidiano*, núm. 149, México, UAM/Azcapotzalco, mayo-junio.
"Gobierno gastó 3 245 mdp en publicidad oficial en 2019; cinco medios concentran 40% de los recursos" (2020), *Animal Político,* 3 de julio, en https://www.animalpolitico.com/2020/07/gobierno-amlo-gasto-publicidad-oficial-medios/
Gonzáles, Lilia (2020), "Miembros del Consejo Empresarial acompañarán a AMLO a Estados Unidos", *El Economista,* 6 de julio.
González, Roberto (2015), "En 15 años se ha pagado 7 veces el monto de la deuda externa", *La Jornada*, 5 de septiembre, p. 25.
___ (2020), "Crece la deuda; intereses superan el gasto en salud", *La Jornada*, p. 21.
González, Susana (2019), "Acumula la Secretaría de Energía rezago de 20 mil trámites mineros", *La Jornada*, 7 de febrero, p. 24.
Guevara, Carlos F. (2019), "¿Quién es @tumbaburross? El tuitero del escándalo de bots contra AMLO", *El Sol de México,* 4 de noviembre.
Hernández, Anabel (2019), *El traidor. El diario secreto del hijo del Mayo,* México, Grijalbo.
Instituto Nacional Electoral (2018), *Numeralia. Proceso electoral 2017/2018*, en https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2018/08/1Numeralia01072018-SIJE08072018findocx-3.pdf
___ (2019), *Memoria gráfica. Proceso electoral 2017/2018,* en https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2019/04/MemoriaGrafica-PE2017-2018.pdf
Las actividades extractivas en México. Desafíos para la 4T (2019), México, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, en https://extractivismo.fundar.org.mx/wp-content/uploads/2019/08/Anuario_Extractivas_2018_WEB.pdf
Lemus, J. Jesús (2019), *El agua o la vida. Otra guerra ha comenzado en México,* México, Grijalbo.
López Obrador, Andrés Manuel (2007), *La mafia que nos robó la presidencia*, México, Grijalbo.

___ (2010), *La mafia que se adueñó de México… y el 2012*, México, Grijalbo.
___ (2017), *La salida. Decadencia y renacimiento de México*, México, Planeta.
___ (2018), *Esto soy,* México, libro de campaña, 71 pp.
___ (2019).,*Hacia una economía moral*, México, Planeta.
"Los millonarios en tiempos de AMLO" (2019), *Forbes,* en https://www.forbes.com.mx/mexicanos-millonarios-2019/
Mejía Madrid, Fabrizio (2018), *Crónica de la victoria*, México, Planeta.
"Noticias falsas" (2018), *Diálogos por la Democracia,* PUEDJS, Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, UNAM, en http://dialogosdemocracia.humanidades.unam.mx/informe/noticias-falsas/
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) (2019), en https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf
"¿Qué es el Frente Nacional anti-AMLO y quiénes lo apoyan?" (2020), *Forbes*, 31 de mayo, en https://www.forbes.com.mx/politica-que-es-el-frente-nacional-anti-amlo-quienes-lo-apoyan/
Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) (2019), "AMLO, la minería no es sustentable", en https://movimientom4.org/2019/08/amlo-la-mineria-no-es-sustentable/
"Resistencia, del desafuero al plantón" (2007), *La Jornada*.
Ruíz Guadalajara, Juan Carlos (2019), "AMLO y el ganso de los huevos de oro", *La Jornada*, 5 de enero, p. 12.
Sánchez Medero, Gema (2020), "Grupos de interés o presión (acción de *lobbying*)", *Diccionario Enciclopédico de Comunicación Política*, en http://www.alice-comunicacionpolitica.com/wikialice/index.php/Grupos_de_inter%C3%A9s_o_presi%C3%B3n_(acci%C3%B3n_de)_(lobbying)
Secretaría de Economía (2019), *Minería*, en https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mineria
Senado de la República. LXIV Legislatura (2019), en http://www.senado.gob.mx/64/

Solís Delgadillo, Diego y Josafat Cortez Salinas (2019), "Diputados con antecedentes en grupos de interés en México", *Oraculus*, 3 de noviembre, en https://oraculus.mx/2019/03/11/diputados-con-antecedentes-en-grupos-de-interes-en-mexico-2003-2021/
Subsecretaría de Minería (2019a), "Directorio de compañías de capital extranjero 2019", en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/495728/Directorio_de_Empresas_1er_Semestre_2019.pdf
___ (2019b), "La minería es una industria comprometida con las comunidades y el medio ambiente", en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/324246/La_Mineria.pdf
Steinsleger, José (2020), "De los *Trolls*", *La Jornada,* 19 de febrero.
Urrutia, Alonso y Néstor Jiménez (2019), "AMLO no cancelará concesiones ni cerrará minas", *La Jornada*, 7 de agosto, p. 6.
Valadez Rodríguez, Alfredo (2019), "Prevén otra ola de despojos de mineras y petroleras en México", *La Jornada*, 16 de marzo, p. 26.
Velázquez Barriga, Lev M. (2019), "La derecha educativa y su posverdad", *La Jornada,* 21 de septiembre.
Velázquez, Miguel Ángel (2019), "Si el proyecto de López Obrador fracasa, estaremos en la oscuridad", México, *La Jornada*, 4 de agosto, p. 8.

La política exterior mexicana. Un breve recorrido por el tiempo hasta la gestión de la cuarta transformación

ANABEL CASTILLÓN QUINTERO*

Planteamiento general

El presente trabajo tiene como cometido hablar de lo que ha sido la política exterior mexicana en diferentes momentos hasta llegar, de forma rápida y concisa, a la Cuarta Transformación, o 4T, como se ha llamado a esta poderosa idea de transformación social que llegó junto con Andrés Manuel López Obrador al poder y que tiene como propósito una serie de cambios a nivel social, económico y político, con una visón alejada del neoliberalismo —cuando menos en el discurso—. Por ello, esta conformación e ideario también sostienen una nueva manera de entender la política exterior mexicana.

La propuesta de este artículo es hacer una rápida reconstrucción de la evolución y las características de la política exterior del Estado mexicano para entender la propuesta internacional de la Cuarta Transformación. Se partirá de identificar algunos aspectos políticos e incluso económicos que permitan comprender la participación de México en el mundo. Al realizar el presente trabajo se tiene clara la gran cantidad de información que existe al respecto, pero la pretensión es presentar de forma breve elementos claros en la política exterior mexicana, para contrastarlos con los resultados obtenidos por la administración del

* Profesora e investigadora del Departamento de Estudios sobre los Movimientos Sociales, Universidad de Guadalajara.

presidente López Obrador. Debe tenerse en cuenta que es una administración en curso, por lo que se vierten acontecimientos, momentos y circunstancias que han impactado la política exterior. Sin embargo, creo conveniente mencionar que aún falta trecho por caminar y momentos y circunstancias que explorar, según lo que la Cuarta Transformación nos ofrezca para sorprendernos y dejar un legado en este contexto.

Cabe señalar que las doctrinas que han surgido a lo largo de la historia de la política exterior de México han sido diversas y que han servido de cimiento para establecer los principios que actualmente la rigen. Han sido importantes personajes políticos del país quienes las han sostenido y éstas, en algunos casos, han sido el resultado de ciertos sucesos históricos importantes. Por lo tanto: "Una doctrina de política exterior contiene principios en los que se enmarca la actitud internacional de un [Estado] en un momento histórico determinado cuya trascendencia es valorada para el futuro de las relaciones internacionales" (Levy, 2009). Así, este trabajo sólo destacará momentos clave de la política exterior mexicana.

México tiene una importante tradición de buen manejo de política exterior, desde el ya remoto siglo XIX, de forma más precisa 1867, cuando Benito Juárez, en relación con la Intervención Francesa y el segundo imperio planteó su frase máxima: "Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz". Con ello queda claro el pensamiento juarista de respeto y sana relación entre naciones, sin intromisiones en las políticas de países ajenos. Hoy, ante un gobierno que se autonombra juarista, la frase toma grandes proporciones.

Ahora bien, a principios del siglo XX también destacan algunas otras leyes que marcaron el rumbo en la política exterior del país; tal es el caso de la doctrina Carranza, que sostiene la igualdad entre los Estados y desaprueba toda intervención en los asuntos internos de otra nación. O bien la doctrina Estrada, de 1930, que estable la posición de mantener o romper relaciones con otro país sin que ello signifique la aprobación o reprobación de sus gobiernos locales. Tampoco debemos dejar pasar por alto la importancia de la política exterior en los años setenta, cuando, con México a la cabeza, se exaltó el panamericanismo. Esto es

un pequeño esbozo que sirve para entender la trascendencia de la política exterior mexicana y el peso específico que tiene en las decisiones del país e incluso en América Latina.

Política exterior

Para lograr un mejor acercamiento al tema, partamos por esclarecer el término *política exterior*, ya que ésta ha cobrado gran relevancia para la sociedad y la política de los países, y no puede ser de otra manera si pensamos que, en un mundo cada vez más globalizado, lo que ocurre en cualquier parte del mundo puede impactar la vida de la sociedad y, por ende, de los países. Con esta lógica bien vale la pena citar a Rafael Velázquez Flores, que en su libro *Introducción de la política exterior de México,* define en los siguientes términos la política exterior:

> La política exterior está conformada por aquellas conductas, posiciones, actitudes, decisiones y acciones que adopta un Estado más allá de sus fronteras, que se fundamentan en el interés nacional y la seguridad nacional y en objetivos concretos de carácter económico y político, básicamente. Dicha política se sustenta en un proyecto específico y depende de la capacidad de negociación internacional del Estado y de la sociedad civil. A su vez, la política exterior es determinada por los factores de situación tanto internos como externos y sigue las pautas de la política del poder y la política de presión (1995: 29).

A pesar de ser una explicación general, es claro que la política exterior de cada país no puede ser estática, ya que responde a una política de mayor envergadura, es decir, depende de las directrices del proyecto de gobierno del país en cuestión. De ahí que la política exterior cambia con el tiempo y se adecua a los momentos sociales, políticos y económicos de cada país y su entorno internacional. Es claro, entonces, que los países se manejan de forma libre e independiente con el propósito de lograr mejores resultados en la franca convivencia con otros países y las realidades internacionales de por sí complejas.

Pero no nos quedemos con una sola definición. Podemos utilizar como contraste la del *Diccionario de Política Internacional,* mencionada en el artículo de Carlos Levy (2009), donde define la política exterior en los siguientes términos:

> El conjunto de políticas, decisiones y acciones que integran un cuerpo de doctrina coherente y consistente basado en principios claros, sólidos e inmutables forjados a través de su evolución y experiencia histórica, permanentemente enriquecido y mejorado por el que cada Estado, u otro actor o sujeto de la sociedad internacional, define su conducta y establece metas y cursos de acción en todos los campos y cuestiones que trascienden sus fronteras, o que pueden repercutir al interior de las suyas, y que es aplicado sistemáticamente con el objeto de encauzar y aprovechar el entorno internacional para el mejor cumplimiento de los objetivos trazados en aras del bien general de la nación y de su desarrollo durable, así como de la búsqueda del mantenimiento de relaciones armoniosas con el exterior.

Sin duda esta definición ofrece un espectro más amplio de los lineamientos que debe contener la política exterior. Así, tomaremos como base estos referentes que permiten ubicar el rumbo internacional de cada país de acuerdo con su historia personal, que es la que define su actuar tanto al interior como al exterior. Sin embargo, no olvidemos el eje central de la discusión: la política exterior debe buscar relaciones armoniosas, de respeto e igualdad, con los distintos países del mundo.

Para autores como Mendoza Sánchez:

> La política exterior de México ha estado influida por el tiempo y el espacio en el que se desarrolla. Por ello, ha sido condicionada por tres factores de situación básicos: *1)* el modelo de desarrollo; *2)* el sistema político; *3)* el entorno internacional. De la combinación de estos tres factores de situación con el poder nacional de cada momento de nuestra historia desde la Revolución, se puede explicar la lógica y los intereses a los que ha respondido la política exterior del Estado mexicano desde el inicio de la Revolución hasta nuestros

> días. A estos tres factores debemos sumar el poder nacional del Estado, del que se desprende su capacidad de negociación internacional, la cual es clave en política exterior, porque determina las posibilidades reales que tiene el Estado para alcanzar sus objetivos (2013: 29).

Con esta postura es posible entender la complejidad que la política exterior tiene para cualquier país y nos permite ubicar a México en sus distintos contextos políticos, económicos y sociales, que son los que determinan sus diversas posturas en asuntos internacionales. Una vez establecidos estos criterios que permiten ubicar mejor la política exterior y contemplar estos aspectos teóricos que nos harán posible observar bajo qué lupa deben ser comprendidas las posturas, doctrinas y políticas, pasemos a acercarnos al eje de contraste, es decir, el recurso metodológico, que quedaría incompleto si antes no realizamos un breve recorrido por la historia que nos permita reconstruir una visión general del caminar en este aspecto del país; de esta manera lo podremos contrastar con la política ejercida o bien señalada, por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Un breve recorrido por la historia

Siglo XIX

La política exterior de México, una vez obtenida su independencia de España, fue diseñada como la del resto de los países recién emancipados y tenía como propósito fundamental la defensa de los intereses nacionales a través de la soberanía, la que tomó un nuevo significado, tono y, por ende, significancia. Es así como

> En los primeros años de vida autónoma. Ante la actitud de España de no resignarse a perder para siempre su antigua colonia la preocupación primordial del país fue la de sobrevivir como Estado independiente. Por tanto en la práctica soberanía significó supervivencia. Más tarde cuando el país se vio directamente amenazado por el expansionismo territorial norteamericano

> resultando a la postre víctima de éste en dos ocasiones la preocupación primordial en la práctica fue la de preservar intacto el territorio nacional. De aquí que soberanía viniera a identificarse con integridad territorial; aunque la preocupación por la independencia nunca dejó de ser un temor real como más tarde vino a demostrarlo la intervención francesa de 1862. Años más tarde cuando las regiones deshabitadas del país se fueron poblando y las grandes potencias pasaron de un expansionismo territorial a otro de tipo económico la preocupación principal en materia externa fue evitar que lo económico se convirtiera en pretexto para ejercer la intromisión política. Así la soberanía vino a ser en la práctica sinónimo de autodeterminación y de no intervención (Ojeda, 1984).

Por tanto, en el convulso siglo xix, la política exterior mexicana implementó distintos recursos con el fin de mantener la soberanía nacional; por ejemplo, acercarse a las grandes potencias como Gran Bretaña o incluso Estados Unidos con la intención de disuadir a España de sus intentos de reconquista. Posteriormente, y ante la amenaza de Francia y su posterior invasión, México buscó otra vez el apoyo de Estados Unidos como una medida de contrapeso, de la que, de manera rápida, tendrá que alejarse ante una invasión norteamericana. Será en este contexto, de constantes oleadas invasivas de las potencias europeas y de nuestro vecino del norte, que el presidente Benito Juárez se convertirá en el Benemérito de las Américas. Con su conocida frase "Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz", buscaba la defensa de la soberanía nacional contra el expansionismo de las distintas potencias.

El siglo xix, por tanto, se configura desde la visión del interés nacional de mantener la autonomía y la soberanía y fijar los lineamientos y preceptos de respeto a los intereses nacionales. Este siglo, conocido como un siglo largo por los distintos acontecimientos disruptivos, es un hito en la historia marcada por la defensa nacional. Desde esta postura se escribe la política exterior mexicana.

El siglo XX

El siglo xx se inicia con circunstancias también complicadas a causa de la Revolución mexicana, que surgió en respuesta de una economía en declive y un largo período presidencial ejercido por el controvertido Porfirio Díaz. En el contexto de esta guerra, México tuvo que vivir el intervencionismo de Estados Unidos amparado en la doctrina Monroe, situación que marcó la política exterior mexicana con la promulgación de la doctrina Carranza, que fue establecida por Venustiano Carranza el 1 de noviembre de 1918 y que se plantea en los siguientes términos:

> Las ideas directrices de nuestra política internacional son pocas, claras y sencillas. Se reducen a proclamar, que todos los países son iguales; deben respetar mutua y escrupulosamente sus instituciones, sus leyes y su soberanía; que ningún país debe intervenir en ninguna forma y por ningún motivo en los asuntos interiores de otros. Todos deben someterse estrictamente y sin excepciones, al principio universal de no-intervención, que ningún individuo debe pretender una situación mejor que la de los ciudadanos del país donde va a establecerse, ni hacer de su calidad de extranjero un título de protección y de privilegios. Nacionales y extranjeros deben ser iguales ante la soberanía del país en que se encuentran; y finalmente, que las legislaciones deben ser uniformes e iguales en lo posible, sin establecer distinciones por causa de nacionalidad, excepto en lo referente al ejercicio de la soberanía (Mendoza, 2013: 69).

Está doctrina marcó un hito en la historia de México e hizo que ganara un gran respeto a nivel internacional, incluso hoy sigue vigente y es base de la política exterior mexicana. Fue al amparo de estos principios doctrinarios que la diplomacia mexicana dio sus mejores batallas en defensa del interés nacional, buscando siempre el bienestar de todos los pueblos sin importar la magnitud de sus poderes nacionales (Mendoza, 2013: 70).

Después de la Revolución, el gobierno de Álvaro Obregón buscó el reconocimiento internacional, pero no fue admitido a la Sociedad de

Naciones por la presión de Gran Bretaña; por su parte, Estados Unidos pretendía, entre otras cosas, como pago por su reconocimiento, la firma de un opresivo tratado de comercio. México era objeto de un chantaje en ciernes por parte de las potencias extranjeras, al mismo tiempo que veía cómo la política intervencionista de Estados Unidos cobraba fuerza en América Central. Y, pese a lograr ser reconocido por la Casa Blanca en 1924, las hostilidades no cesaron. De ahí que, en el gobierno de Pascual Ortiz Rubio, tocó a don Genaro Estrada ser el portavoz autorizado del sentimiento de rechazo contra esos inaceptables procederes, y encarnar la protesta contra el continuo intervencionismo. Así, el 27 de septiembre de 1930, el secretario de Relaciones Exteriores, refirió la siguiente doctrina que lleva su nombre:

> Después de un estudio muy atento sobre la materia, el gobierno de México ha transmitido instrucciones a sus ministros o encargados de negocios en los países afectados por las recientes crisis políticas, haciéndoles conocer que México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos, porque considera que ésta es una práctica denigrante que, sobre herir la soberanía de otras naciones, coloca a éstas en el caso de que sus asuntos interiores puedan ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos, quienes de hecho asumen una actitud crítica al decidir, favorable o desfavorablemente, sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros. En consecuencia, el gobierno de México se limita a mantener o retirar, cuando lo crea procedente, a sus agentes diplomáticos, y a continuar aceptando, cuando también lo considere procedente, a los similares agentes diplomáticos que las naciones respectivas tengan acreditadas en México, sin calificar, ni precipitadamente ni a posteriori, el derecho que tengan las naciones extranjeras para aceptar, mantener o substituir a sus gobiernos o autoridades (Sepúlveda, 1986: 10).

La doctrina resultó ser tan impactante que, al poco tiempo de emitida, internacionalistas y diplomáticos de todo el mundo se dieron a la tarea de recoger sus diversas interpretaciones, lo que revela el enorme

interés con que fue acogida. Pero, más allá de la ambigüedad a la que puede prestarse, el jurista César Sepúlveda (1986) destaca:

> Ella ha servido para reducir en mucho los abusos que se perpetraban, por los países poderosos, en el caso de la ocurrencia de un cambio irregular de gobierno. Ha templado los excesos de los Estados deseosos de aprovecharse de la debilidad del nuevo gobierno de hecho, y ha sido útil para establecer normas de comportamiento más ajustadas a la equidad. Puede decirse que ha sido el primer paso hacia la sujeción del reconocimiento a normas jurídicas ciertas. Ha funcionado como un vigoroso elemento catalítico en el camino hacia un orden internacional más justo. La Doctrina Estrada ha rendido un señalado servicio a las relaciones internacionales justas, amistosas y productivas.

Ahora bien, desde los últimos años de la década de los treinta, la tensión estuvo presente en el escenario internacional. El olor a guerra se encontraba en las relaciones internacionales, las discusiones iban en torno de un posible socialismo *versus* capitalismo, y las diferencias que estos dos sistemas traerían consigo en la economía, el mercado, la forma de funcionar del Estado de bienestar, el proteccionismo y el libre comercio.

Una vez iniciada la guerra y con un mundo dividido entre dos bandos —los Aliados y las potencias de Eje—, México trató de ser imparcial y no participar; sin embargo, en apoyo a Estados Unidos, que había sufrido el ataque japonés a Pearl Harbor, México rompió relaciones diplomáticas con Japón el 8 de diciembre de 1941. Y tres días más tarde puso fin a la relación con Alemania e Italia. De esta forma, al suspender sus relaciones diplomáticas con las potencias del Eje Berlín-Roma-Tokio, México en realidad estaba tomando partido por los países aliados; su entrada a la guerra era ya inevitable.

El pretexto necesario lo proporcionaron los submarinos alemanes que, en mayo de 1942, hundieron los buques petroleros mexicanos *Potrero del Llano* y *Faja de Oro*. Bajo estas circunstancias, el 30 de mayo de

1942, el H. Congreso de la Unión aprobó la iniciativa presidencial que declaraba el estado de guerra con las potencias del Eje; México había sido forzado a entrar a una guerra mundial que había buscado detener a través de todos los medios a su alcance en la Sociedad de Naciones (Mendoza, 2013: 123). Y así, en 1944 el presidente Ávila Camacho pasó revista a los miembros del Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Mexicana, que fueron enviados a las batallas de las Filipinas.

Cuando la guerra terminó, la parte política del nuevo orden internacional de posguerra fue decidida por los triunfadores, es decir, las potencias aliadas, que Estados Unidos encabezaba, quienes se reunieron en la capital estadounidense del 21 de agosto al 7 de octubre de 1944 con la intención de establecer directrices de acción. Por su parte, los países americanos, convocados por México, se reunieron en el Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México, del 21 de febrero al 8 de marzo de 1945, para analizar y coordinar sus posiciones ante la proximidad de la Conferencia de San Francisco.

En esta "Conferencia interamericana sobre problemas de la guerra y de la paz", también conocida como *Conferencia de Chapultepec*, participaron todos los países americanos con excepción de Argentina. El documento más importante emitido por la Conferencia de Chapultepec fue la *Declaración de México de 1945*, el cual contenía 17 principios básicos de la comunidad americana. Los principios incluyeron la inviolabilidad del territorio de los países americanos, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la guerra de agresión en cualquiera de sus formas, pero, sobre todo, el principio noveno en el que se estableció que la agresión a un Estado americano constituía una agresión a todos los Estados de América. Este principio fue el que dio origen al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) (Mendoza, 2013: 123).

Para Gaytán Guzmán (2019: 222) lo que explica la política exterior después de este tratado fue el hecho de que la acción internacional regida por los llamados *principios* permitió a los distintos gobiernos mexicanos una gran libertad de acción. Así, se pudieron resolver cuestiones es-

pecíficas en cada momento, de acuerdo con un marco consensuado que respondía a experiencias históricas que conformaron la cultura política nacional, y, por otro lado, como se señaló ya, la dependencia económica no se cuestionaba. Los estudiosos de la política internacional de México también han afirmado que nuestro país pudo practicar la citada política externa de relativa independencia frente a Estados Unidos porque no incluía en ella los temas torales, sino sólo los que quedaban en un plano secundario en el círculo de los intereses estadounidenses.

Avanzando en el tiempo, para autores como Mendoza Sánchez (2013: 134), un tratado que será clave no sólo para México, sino para América Latina, será el Tratado de Tlatelolco, que se firmó el 14 de febrero de 1967 y que tiene como fin la proscripción de las armas nucleares en toda la región. Por virtud del Tratado de Tlatelolco, América Latina es la única región geográfica del planeta que, hasta la fecha, se encuentra libre de la amenaza que significan las armas nucleares. El Tratado de Tlatelolco ha tenido implicaciones en todo el orbe y a esta iniciativa se han sumado distintos países europeos, ya que la firma se dio en un ambiente de gran tensión mundial por la posesión de armas nucleares.

La década de los setenta fue de grandes retos para el sistema capitalista porque se llegó a un momento en el que lograr tasas crecientes de utilidad comenzó a complicarse obligando a las empresas y a todo el sistema económico internacional a buscar mecanismos compensatorios. Al mismo tiempo, los ciclos de auge y depresión de la producción mundial comenzaron a ser más cortos. El tiempo de las empresas transnacionales comenzó a agotarse y empezaron a delinearse las empresas de clase mundial (Gaytán, 2019: 223). Con este panorama internacional llegamos al gobierno de Luis Echeverría Álvarez, quien el 12 de diciembre de 1974 culminó exitosamente la odisea diplomática que había iniciado México desde 1972 al seno de la III UNCTAD, realizada en Santiago de Chile, ya que 98 países, el número más alto en la historia, habían presentado conjuntamente la *Carta de deberes y derechos económicos de los Estados*, que fue aprobada, con el voto en contra de Estados Unidos y otros

países, por la Asamblea General de la ONU como nuevo código de las relaciones internacionales mediante la resolución 3281/XXIX. La "tiranía de las mayorías", como afirmó la prensa estadounidense, se había unido para imponer a Estados Unidos un código de conducta que debía ser observado por las potencias en la política internacional.

Conocida también como *Carta mexicana* o *Carta Echeverría*, la *Carta de deberes y derechos económicos de los Estados* fue un triunfo político y diplomático de los países en desarrollo. Ésta buscaba promover, en las relaciones entre los países, la democracia que Estados Unidos siempre ha demandado a los Estados en su propia vida interna como parte de su lucha teórico-ideológica contra la expansión del socialismo (Mendoza, 2013: 140). La política exterior de Echeverría, que se puede considerar muy activa, respondía a la premisa de la desigualdad entre los países pobres y ricos, situación que, además de injusta, podría ser precursora de aires de conflictos sociales y una amenaza a la paz y a la seguridad internacional. Esta carta mexicana dio pie al panamericanismo.

Continuando con esta secuencia, para Mendoza Sánchez (2013: 141), la crisis económica que enfrentó México hacia el final del gobierno de Luis Echeverría Álvarez provocó fisuras en el sistema político mexicano que impactarían en el sector empresarial y provocarían la polarización entre dos políticas económicas radicalmente distintas: la del nacionalismo revolucionario, que a todas luces se había agotado junto con el modelo de desarrollo hacia adentro, y la que simpatizaba con la apertura comercial. El gobierno lopezportillista se caracterizó por su discurso basado en el nacionalismo revolucionario, sobre todo en política exterior; por mantener el modelo de desarrollo hacia adentro negándose a adoptar la apertura económica; y por rechazar la entrada del país al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). La crisis que se presentó en la parte final de este gobierno coincidió con el surgimiento de la crisis centroamericana, que se convirtió en una amenaza para la seguridad nacional mexicana, no sólo por su cercanía a los pozos petroleros, sino porque, desde 1979, fue el escenario del enfrenta-

miento ideológico entre las dos superpotencias nucleares: Estados Unidos y la Unión Soviética.

Poco se puede agregar sobre las relaciones exteriores del último presidente que se autonombró *revolucionario*; su política fincada en el petróleo sólo generó un fuerte endeudamiento y un incremento de las importaciones, en especial de Estados Unidos. Las relaciones internacionales las resolvió conforme fueron ocurriendo. El mejoramiento de la relación con Estados Unidos, el restablecimiento de las relaciones con España o el rompimiento de relaciones con el gobierno de Somoza en Nicaragua fueron quizás algunos de sus aspectos más destacables (Mendoza, 2013: 142).

Continuando con esta somera narrativa de hechos cruciales, baste decir que, con Miguel de la Madrid Hurtado, se inició la era del neoliberalismo, que se ha mantenido hasta nuestros días y al que el actual gobierno trata de poner un freno; sin embargo, al parecer la esencia política y social se mantiene como por inercia. Según Mendoza Sánchez (2013: 146), con el neoliberalismo, la política exterior sería de naturaleza muy diferente a la de la era del modelo de la Revolución mexicana; el mismo concepto de soberanía circunscrito a la vigilancia estricta de la integridad territorial sería modernizado, ya que se consideraba a la estrategia de modernización como un proyecto de oportunidades para consolidar el proyecto como nación, por lo que la política exterior se convertía en un instrumento para el desarrollo interno. Quizá lo más relevante en política internacional —lo cual no quiere decir que sea lo mejor— sería la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, porque logró anclar la política económica neoliberal.

La llegada de Vicente Fox a la presidencia de México, el 1 de diciembre de 2000, rompió con siete décadas de monopolio del gobierno por parte del PRI. La llegada del Pan al poder significaba un avance democrático, y con ello se daba inició a un sistema electoral más limpio, que permitiera la alternancia en el poder por medios pacíficos. No obstante, el cambio de partido —pese a las expectativas que generó— no

trajo consigo cambios sustanciales. En materia económica fue un cambio más de forma que de contenido, porque el modelo neoliberal de desarrollo que se inició en 1982 quedó anclado con el TLCAN. De hecho, el PRI y el PAN gobernaron el país con los mismos criterios, ya que compartían la misma filosofía en cuanto a política económica.

Durante la primera década del siglo XX, la política exterior se enfrentó también a otra realidad que la hacía diferente a su antecesora, la de los gobiernos del nacionalismo revolucionario. Lejos quedaron los momentos gloriosos de la diplomacia mexicana. El cambio que el sistema neoliberal trajo fue la modernización, y la política exterior se convirtió en un pivote del desarrollo interno y, por ende, evolucionó hacia un mayor pragmatismo. En la era de la globalización, los momentos trascendentes de la política exterior ya no fueron únicamente batallas diplomáticas y defensas jurídicas, sino que fueron fundamentalmente batallas comerciales (Mendoza, 2013: 198). El servicio exterior consular y la diplomacia mexicana se debilitaron como nunca en su historia. La política exterior de México pareció haber perdido el rumbo, mostrando sólo destellos en negociaciones y olvidándose de cuestiones esenciales como el apoyo a migrantes, quienes fueron olvidados pese a la gran diáspora de compatriotas que fueron deportados en gran escala por el gobierno de Barack Obama, y al gobierno poco le interesó el problema. El gobierno calderonista mantenía puesto el interés sólo en su batalla contra el narcotráfico, sin importar las consecuencias.

La llegada de Enrique Peña Nieto al gobierno, con su estandarte del nuevo PRI, también fue una consecuencia de ello. El gobierno y su proceder respondieron al interés de realizar profundas reformas que llamaron *estructurales*; desde ahí se movieron las directrices del gobierno, y a ellas respondió el plan de acción de política exterior para convertir a México en un actor con responsabilidad global. Tal plan se asentaba en cuatro objetivos en los que la palabra *soberanía* ya no aparecía: *1)* ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo; *2)* promover el valor de México en el mundo mediante la difusión económica, turística y cultural; *3)* reafirmar el compromiso del país con el libre comercio, la

movilidad de capitales y la integración productiva; *4)* velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en el territorio nacional (Mendoza, 2013: 205).

Poco o nada se logró. La relación internacional no se consolidó, pese a la gran cantidad de giras políticas y de negociaciones del presidente de México. Veamos algunos casos. En la región centroamericana, que debe ser prioridad para la política exterior de México, no se logró fortalecer la cooperación porque la pobreza y la inseguridad que afectan la zona prevalecen, y el comercio entre México y los países centroamericanos se encuentra aún por debajo de su potencial real. De ahí el interés del gobierno de López Obrador de fortalecer su presencia en la región. Con el resto de América Latina se mejoraron las relaciones con países como Brasil y Perú. Además de que Alianza del Pacífico, una alianza construida a fines del mandato del presidente Calderón, dio posibilidades de crecer a partir de la estrategia de integración productiva porque México, Colombia, Perú y Chile, los cuatro países que integran la alianza, participan en las negociaciones del Acuerdo Transpacífico, lo que representó una oportunidad para acceder de manera conjunta a una región económica por demás dinámica. Con la Unión Europea se firmaron convenios de cooperación bilateral para duplicar el comercio. En la región Asia Pacifico México también mantuvo presencia y un buen número de convenios bilaterales constatan la actividad diplomática.

La política exterior mexicana en este período tuvo como objetivo fundamental acuerdos comerciales, pero la realidad es que se firmaron muchos y se concretaron pocos. México se movió desde la expectativa y no la realidad de las circunstancias. Mantuvo hechos por demás vergonzosos, como la invitación del entonces candidato Trump a la presidencia y el agravió que esto constituyó a la nación; negociar —en específico con Estados Unidos— sin reglas básicas fue una constante; la falta de respeto a la soberanía nacional fue continua y totalmente permitida por México. Los experimentados diplomáticos poco podían hacer ante las pifias del gobierno y ante los cada vez más débiles personajes que integraban los distintos niveles de gobierno.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador habrá de enfrentarse con todos estos problemas subyacentes: un cuerpo diplomático golpeado, relaciones poco fructíferas con las naciones centroamericanas, la posibilidad de firmar el tratado de libre comercio con los vecinos del norte, que se encontraba en proceso de negociación, una disparidad de tratados y acuerdos bilaterales sin funcionar y la urgente necesidad de dar una nueva misión a la política exterior mexicana que vuelva a colocar a México en el lugar que históricamente le corresponde y en el que se recuperen elementos que dieron a la diplomacia mexicana gloria, como es el caso de la defensa a la soberanía nacional. Un panorama por demás complejo que el presidente de la 4T tiene que enfrentar, y en ocasiones lo está haciendo con lo inercia de lo que se tenía y la premura de resolver los problemas que van surgiendo. Por tanto, el ofrecer un plan y certezas se vuelve un asunto urgente.

Dicho lo anterior, veamos un poco los asuntos a los que se ha enfrentado la actual administración y la respuesta que ésta les ha dado.

La política exterior en la 4T

Para muchos entendidos sobre el tema, el ascenso al poder de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en México sin duda ha generado una serie de cambios en el sistema político mexicano, tanto en el ámbito interno como en el internacional. Sin embargo, y bien vale decirlo, muchos de esos cambios se han planteado a largo y mediano plazo, por lo que aún no quedan claros al menos hasta estos momentos. En lo interno, la Cuarta Transformación plantea reformas y cambios drásticos frente a los gobiernos anteriores del PRI y del PAN. En el ámbito internacional, el escenario no es precisamente de transformación; su discurso se asienta en el pasado, con un discurso juarista y con un aparente retorno a los principios tradicionales de la política exterior mexicana consagrados en la Constitución. Con ello, priorizó las condiciones internas de México antes que fortalecer su rol en la política internacional. Sin embargo, insistió en el regreso a los principios de la política exterior mexicana recogidos en el artículo 89, inciso X, de la Constitución Política:

> Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

¿Cuál es el resultado de este acercamiento total a la Constitución? Para periodistas como Garza Girón y Blomeier (2020), la Constitución mexicana ciertamente aporta principios generales que deben orientar la actuación internacional de México, pero no puede ser catalogada como un plan o programa de gobierno en materia internacional. Ambos periodistas coinciden en resaltar la falta de conceptos operativos y estrategias concretas en cuestiones internacionales, por lo que se puede deducir que existe un vacío en la política internacional.

La afirmación del presidente López Obrador de que "la mejor política exterior es la interior" confirma esa percepción. Y a pesar de que no se quisiera ver así, vemos constantemente al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, implicado en todo tipo de discusiones internas del país y no necesariamente ocupándose de asuntos propios de su nombramiento. Coincidiendo con lo que señalan las noticias nacionales, hay que resaltar el hecho de que se recortó considerablemente el presupuesto y los recursos humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que tiene implicaciones en la cantidad y calidad del personal diplomático y consecuencias institucionales como el fin de la agencia de promoción de comercio e inversiones ProMéxico (Garza, 2020) .

La Cuarta Transformación y su artífice llevan prácticamente dos años en el poder, y en ellos ha sido más que notorio que muchos asuntos internacionales han sido postergados. El presidente no había salido de

México a ninguna reunión internacional, sino hasta su visita a Washington el pasado 8 de julio, en un ambiente enrarecido por una pandemia que azota sin piedad tanto a Estados Unidos como a México, los disturbios por asuntos raciales en Estados Unidos y una próxima elección presidencial en el país vecino. La visita fue más que criticada por el entorno en el cual se presentó y por no tomar una postura firme ante los discursos antimexicanos del presidente Trump.

Sin embargo, vale la pena reflexionar que esto parte de la postura del presidente que, como ya se mencionó, asume que la mejor política exterior es la interior, y de una postura más personal que busca marcar la diferencia con respecto a sus antecesores, ya que considera que salir del país es hacer turismo político. Por sí mismo, si se piensa en el ahorro económico y en el despilfarro de anteriores administraciones, esto suena atractivo; sin embargo, era importante que el presidente tuviera presencia en cumbres internacionales como la del G20 en junio de 2019, a la que no asistió y a la que sólo envió al secretario Ebrard. Con esta postura sin postura, México da pie a perder su presencia internacional que, si bien con muchos inconvenientes, había logrado.

Durante el primer año de su gobierno, esta administración ha ido postergando los temas internaciones, dando a entender que no están entre sus prioridades. Los asuntos se han ido resolviendo conforme suceden. Es por ello que, como sobre las rodillas, se trató de encontrar solución al avance de distintas caravanas migratorias provenientes de Centro y Sudamérica, que se presentaron de forma constante desde octubre de 2018 hasta principios de 2020 con el propósito de llegar a Estados Unidos. En mayo de 2019, Trump amenazó con implementar un arancel de 5% para importaciones desde México si éste no detenía la llegada de migrantes centroamericanos a la frontera con Estados Unidos. Incluso, Trump anunció una escalada del gravamen hasta de 25% si la Casa Blanca consideraba que México no estaba tomando las medidas necesarias. Cabe señalar que, con base en cifras del primer trimestre de 2019, un aumento de tan sólo 5% de los aranceles significaría una pérdida de

alrededor de 17 000 millones de dólares al año, lo que representa 1.5% del PIB de México (Garza, 2020).

Ante la presión de los vecinos del norte, México envió elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur del país, lo que ha ocasionado enfrenamientos con los migrantes. El caso más reciente, en enero de 2020, fue la caravana de migrantes conformada por alrededor de 4 000 personas que fueron retenidas. En este contexto México se tuvo que convertir en la muralla de contención de estas caravanas para llevar una relación cordial con el gobierno de Trump, que constantemente se jacta de mencionar la gran amistad que lo une con el presidente López Obrador y el excelente trabajo que ha hecho México para reprimir a estos grupos migratorios. Asimismo, Trump ha insinuado en más de una ocasión que México sí está pagando el muro fronterizo.

Ante el problema que estas caravanas representan en un país con pocas posibilidades de apoyo a los migrantes, México retomó el interés en la región de Centroamérica, especialmente en el grupo de países que conforman el llamado *Triángulo Norte*, conformado por El Salvador, Guatemala y Honduras, retomando el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica. Asimismo, tomó acciones para proteger el derecho de aquellos que desean iniciar y seguir un procedimiento de asilo en Estados Unidos, comprometiéndose a aplicar la *Convención sobre el estatuto de los refugiados* de las Naciones Unidas y su protocolo. Sin embargo, estas iniciativas han sido llevadas a cabo con poco éxito.

Un aspecto que resultó interesante —por decirlo de alguna manera— fue la posición del gobierno de México hacia Venezuela. Amparándose en la doctrina Estrada, a principios de enero de 2019, el gobierno mexicano decidió no firmar una nueva declaración del Grupo de Lima que pedía desconocer al gobierno del presidente Nicolás Maduro y reconocer a la Asamblea Nacional como la legítima representante de la soberanía popular. Entre otros, México adujo al principio de no intervención para no firmarla. De tal forma, buscó mantener una posición de país mediador en la región y mantener su voluntad para sostener sus relaciones diplomáticas con Caracas.

Otro caso que bien vale la pena mencionar por sus implicaciones sociales es el referente al expresidente boliviano Evo Morales, personaje que tomó notoriedad en noviembre de 2019. Tras unas elecciones controvertidas y puestas en tela de juicio en 2019, ante las protestas masivas de la oposición, Evo Morales decidió renunciar a la presidencia de su país. El gobierno mexicano, aplicando de forma discrecional la doctrina Estrada que alude a la no intervención, constantemente manifestada por el gobierno mexicano, le otorgó oficialmente asilo político a Evo Morales en el país. El gobierno argumentó que esto se hacía por "razones humanitarias", ya que, de no hacerlo, la vida de Morales corría peligro a raíz de que se había infligido un "golpe de Estado" en su contra. Con esta debatida postura, México abrió brecha con la OEA y se acercó a los posicionamientos de Argentina, Venezuela, Nicaragua o Cuba. Pero éste no sería el objeto principal de debate. La situación se polemizó cuando se envió una aeronave del ejército mexicano para traer al expresidente Morales, lo que causó problemas diplomáticos e inconformidad en distintos grupos políticos del país y poco apoyo por parte de la población. La llegada de Morales fue trasmitida con bombo y platillo y su salida tres meses después con destino a Argentina se realizó en total secrecía. Hecho difícil de catalogar en la política exterior mexicana.

Fuera de estos momentos puntuales y por lo demás ríspidos que han marcado un hito en la política exterior mexicana, veamos ahora los manejos de la política internacional. Conviene resaltar que ésta se realiza prácticamente con todos los países del orbe, pero en muchos casos lo que predomina son acuerdos comerciales, como lo podemos ver con la relación que se tiene con Estados Unidos y Canadá. Fuera de las expresiones de amenazas y de agravió de Trump, lo que prevalece en esas relaciones es un acuerdo comercial con nuestros principales socios económicos. Así, el TLCAN, o Tratado de libre comercio de América del Norte, fue renegociado y concretado en este sexenio, ahora con el nombre de T-MEC (Tratado México-Estados Unidos-Canadá). La firma del tratado fue tortuosa y se dio en momentos delicados, ya que las exigencias del gobierno de Trump hacían dudar de la viabilidad del proyecto. No obs-

tante, si pensamos que Estados Unidos es el principal socio comercial, no era factible que, pese a las restricciones y obligaciones comerciales, se perdiera la oportunidad de continuar con el tratado.

Desplazándonos a otras latitudes, en la relación con el resto de países de América Latina, vale la pena destacar la labor del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, como figura clave para que se diera el consenso alcanzado por México para ostentar la presidencia pro tempore (PPT) de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en 2020, los que sucedió durante el marco de la XVI Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la CELAC, celebrada durante el 74.° período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. En esta reunión, se definieron las condiciones pertinentes para concluir el proceso de reflexión sobre el futuro de la CELAC (iniciado en septiembre de 2018), derivado de la ausencia de un diálogo sobre temas relevantes y la polarización de eventos suscitados en la región. El interés de México al respecto radica en fortalecer a la comunidad, y sumar esfuerzos para rencauzar el trabajo y la revitalización del único mecanismo que reúne a los 33 países de la región de América Latina y el Caribe (Herrera, 2019).

Indudablemente, lo anterior se presenta como una oportunidad única para fortalecer la posición de México en la región, pero, a pesar de ser una buena oportunidad, no está clara la forma que tendrá la integración y la cooperación regional con los países de América Latina. Recordemos que, en las políticas mexicanas hacia América Central, predominan los intereses económicos. México ha tenido una presencia permanente en la región en las últimas décadas, expresada en iniciativas como el Plan Puebla Panamá, el Proyecto Mesoamérica o la Iniciativa Mérida.

No obstante,

> estos espacios han sido criticados por ser funcionales a la estrategia de promoción y libre comercio y lucha contra las drogas de Estados Unidos. Se argumenta que estas iniciativas no responden a los problemas centrales de

la región, como son las desigualdades sociales, la falta de infraestructura, la debilidad de las instituciones públicas, la creciente violencia o el flujo de ciudadanos centroamericanos que cruzan por México hacia Estados Unidos. Esta situación se ha agravado en los últimos años, como lo demuestran los constantes y crecientes flujos de migrantes que, partiendo del Triángulo Norte Centroamericano (Honduras, Guatemala y El Salvador), atraviesan en caravanas el territorio mexicano hacia los Estados Unidos (Garza, 2020) .

En el caso de América del Sur, las relaciones exteriores de México se concentran principalmente en la Alianza del Pacífico, creada en 2011 con Colombia, Chile y Perú, y en apenas una pequeña presencia como observador en el Mercado Común del Sur (Mercosur). Pero, de cualquier forma, actualmente se respira incertidumbre, ya que no queda claro si el gobierno mexicano mantendrá su compromiso con la Alianza del Pacífico, ya que existen tensiones de orden ideológico en la región suscitadas por la presencia de Bolsonaro en Brasil y Fernández en Argentina.

Como se mencionó, México mantiene su política exterior en función a acuerdos comerciales, y al parecer esto va a continuar en el caso de la Unión Europea, con la que México mantiene, desde el año 2000, una relación comercial, que, valga decirlo, año con año ha ido cobrando importancia. Así, suponemos que esta línea será igual en este gobierno que en el de sus antecesores, pues no ha habido ningún pronunciamiento de cambios al respecto, pese a que el principal miembro (Alemania) se ha manifestado en contra de algunas políticas mexicanas.

Cuando se suscitó la crisis por la firma del tratado de libre comercio con nuestros socios comerciales del norte, muchos analistas miraron con buenos ojos la oportunidad de virar y comerciar con las potencias asiáticas. Los inconvenientes son claros: la distancia y los pocos acuerdos comerciales con China. Hoy, ya con la firma del T-MEC, el asunto se vuelve más complicado

> ya que el artículo 32.10 del nuevo T-MEC objeta la firma de acuerdos comerciales con países que no sean economías de mercado. Parece evidente que esta cláusula va dirigida a China y en el texto mismo se menciona que si algún miembro del T-MEC firma un acuerdo de este tipo, el resto tiene el derecho de excluirse del acuerdo norteamericano. En otras palabras, el T-MEC establece un claro condicionante a un posible acercamiento entre México y China en un futuro cercano. Hasta la fecha, el gobierno mexicano ha aceptado estas condiciones sin objeción alguna (Garza, 2020).

En fin, esas son las circunstancias generales en las que se ha movido la política exterior mexicana. Queda pensar que el gobierno del cambio actuará de forma más precisa en este tenor y conseguirá que México siga siendo el país que lidera América Latina, manteniendo una presencia internacional, utilizando los mejores recursos que la historia le proporcione y adecuándose a las condiciones que presenta este nuevo mundo.

Reflexiones finales

Después de un somero recuento sobre la política exterior mexicana, conviene resaltar el papel predominante que en distintos momentos ha desempeñado México. Desde épocas tempranas, éste ha fijado un precedente de respeto hacia el resto de las naciones y, ante todo, ha privilegiado el diálogo cuando los conflictos entre países se suscitan.

México cuenta con toda una trayectoria anclada en su historia de ser el país más influyente de Latinoamérica y se ha distinguido en momentos claves por su clara intervención pacifista.

La política exterior mexicana se sustenta en una serie de acuerdos comerciales con distintos países del orbe. El acuerdo más importante lo mantiene con los vecinos del norte, en particular con los Estados Unidos. Con él, México comparte la frontera con mayor cruce de personas del mundo, además de que es nuestro mayor socio comercial con la firma del T-MEC. México ha tenido que aceptar distintos agravios discursivos del presidente Trump e incluso ha debido servir a los intereses de Estados Unidos ante el flujo migratorio de las caravanas.

La idea de que la mejor política exterior se hace desde el interior ha impedido tener una estrategia clara, de manejo internacional, situación que lleva a tener una política exterior incierta. Y, pese a los esfuerzos de Marcelo Ebrard, parece que la política exterior mexicana no tiene rumbo ni dirección. Al contrario, da la impresión de que la política internacional ha quedado relegada a un segundo plano, y el secretario de Relaciones Exteriores realiza cualquier tipo de encomienda, aunque no sea de su incumbencia laboral. Eso sí, nunca un secretario de Relaciones Exteriores había tenido tanta presencia mediática….

Sin embargo, debemos ser optimistas. Los tiempos políticos, sociales y económicos no sólo de México sino del mundo han sido severamente golpeados. Los nuevos paradigmas se están gestando y las viejas formas tienden a desaparecer. Esperemos que el gobierno de la Cuarta Transformación, con su discurso anclado en el juarismo, saque nuevas ideas de franca convivencia con el resto de los países, respetando la valiosa tradición histórica de nuestro país, pero, a la vez, con una visión integral e innovadora para hacer frente a los nuevos tiempos.

Sin duda, es un gobierno nuevo en tiempos nuevos, y las adecuaciones siempre han costado. Cortar con el pasado no es un asunto menor, Por ello, se le da un voto de confianza al gobierno de la 4T para que vuelva a poner a México en el lugar que merece a nivel mundial.

Bibliografía

Garza Girón, Patricio, Hans Blomeier y Ann Katherin Beck (2020), "La política exterior de AMLO: Entre apatía, economía e ideología", *Revista Digital. Dialogo político,* 24 de febrero, en https://dialogopolitico.org/agenda/la-politica-exterior-de-amlo-entre-apatia-economia-e-ideologia/

Gaytán Guzmán, Rosa Isabel (2019), "La política exterior de México durante el siglo XX: Hechos y análisis", *Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM*, núm. 133, pp. 207-238, enero-abril, en http://www.revistas.unam.mx/index.php/rri/article/view/69379

Herrera Caballero, Gustavo Edgar (2019), "México, en búsqueda de la integración regional. PPT-CELAC 2020", *Foreign affairs Latinoamérica*, ITAM, 3 de octubre, en http://revistafal.com/mexico-en-busqueda-de-la-integracion-regional-ppt-celac-2020/

Levy, Carlos (2009), "Crisis y retos de la política exterior de México: 2006-2012", *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, 51(205), pp. 119-141, en http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-19182009000100007&lng=es&tlng=es

Mendoza Sánchez, Juan Carlos (2014), *Cien años de política exterior mexicana: De Francisco I. Madero a Enrique Peña Nieto. Momentos trascendentes*, Cenzontle, en https://inehrm.gob.mx/recursos/Libros/Cien_Interiores_Final.pdf

Ojeda, Mario (1984), "La política exterior de México: Objetivos, principios e instrumentos", *Revista Mexicana de Política Exterior*, vol. 1, núm. 2, enero-marzo, en https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n2/ojeda.pdf

Sepúlveda, César (1986), "Proyecciones internacionales, políticas y jurídicas de la doctrina Estrada", *Revista Mexicana de Política Exterior*, núm. 12, julio-septiembre, en https://revistadigit,al.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n12/sepulvedadoctrinaestrada.pdf

Velázquez Flores, Rafael (1995), *Introducción al estudio de la política exterior de México*, México, Nuestro Tiempo.

Las tensiones de los gobiernos progresistas y su reflejo en la reacción conservadora: El golpe suave en Brasil como enseñanza histórica[25]

MARTHA G. LOZA VÁZQUEZ

Introducción

El ejemplo fundamental de la reacción conservadora a las acciones de los gobiernos progresistas lo encontramos en la situación que vivió Brasil entre los años 2014 y 2016. Es éste un caso paradigmático en América Latina de la desestabilización de un gobierno que pretendía *1)* ensayar elementos de transformación en las estructuras de poder tradicionales, *2)* contribuir a la formación de una cultura política basada en relaciones más equitativas y *3)* utilizar las herramientas de la globalización para proyectar a un país latinoamericano como líder regional. Las acciones ilegítimas emprendidas contra el gobierno PT Lula-Dilma no sólo implicaron la derrota de las aspiraciones de la izquierda continental, sino que también trajeron una desestabilización con altos costos para la economía, la política y las relaciones sociales; además, contribuyeron al decaimiento de la proyección mundial de Latinoamérica, representada por Brasil.

Subrayar algunas características de la evidente agresión desestabilizadora dirigida contra los gobiernos de Lula y Dilma (2003-2016) no

[25] Originalmente, este material atendió la convocatoria del *Seminario gobiernos conservadores y gobiernos progresistas en América Latina*, de manera particular la participación en el debate del Panel 2: "Los golpes *suaves* en la región", realizado el jueves 10 de octubre de 2019.

solamente es un acto de solidaridad hacia un gobierno progresista atacado por las fuerzas conservadoras, sino que es una labor necesaria para mostrar lo que la izquierda continental debe aprender de este proceso, particularmente el gobierno de México, que, desde 2018, se encuentra en la mira reaccionaria, e identificamos aquí rasgos que están siendo replicados de la experiencia brasileña. Cabe mencionar que la agresión de la derecha radical ha perjudicado a Bolivia, Ecuador, Venezuela e incluso a Uruguay, pero, sin duda, las acciones principales se observan en los dos gobiernos de izquierda progresista en el poder en el 2020: México y Argentina.

Para entender la embestida conservadora, servirá reflexionar sobre las características de la corriente progresista desde el comienzo del siglo, que ha estado envuelta en un amplio debate en torno a su denominación y objetivos. Más allá de la confrontación entre dos visiones de Estado y de mundo entre la izquierda o la derecha, la lucha desde el campo popular para disminuir la hegemonía y el poder de la derecha latinoamericana ha sufrido en los últimos años una respuesta más agresiva en el espacio ideológico. Lo anterior no es novedoso, pero ocurre en un momento histórico que supondría mejores condiciones de estabilidad democrática.

Un tema obligado al abordar estos asuntos y sobre lo cual se ha escrito bastante desde inicio del siglo es el intento de definir a un *gobierno progresista*, pero fundamentalmente, la incerteza de ubicar ideológicamente a estos regímenes. En el siguiente párrafo se resume la falta de definición consensada:

> Un problema que se manifiesta al intentar el análisis de las políticas económicas y sociales de los actuales gobiernos progresistas de América Latina es su caracterización ideológica, ya que en la literatura académica y política se utilizan diversos adjetivos, no siempre análogos o de sentido único. Mientras algunos analistas se refieren a administraciones de “izquierda” o de “centroizquierda”, otros aluden a gobiernos “progresistas” o a regímenes “populistas” (Chávez, 2007: 63-64).

Este fenómeno sociopolítico tiene un antecedente en el régimen de Hugo Chávez en Venezuela en 1999, pero se consolidará a partir de la llegada de Lula a la presidencia brasileña en 2003. Probablemente, entre ellos hay una sola constante: es un fenómeno en transición y producto de una serie de tensiones en varios espacios. Por tanto, ante la infructuosa posibilidad de definir de una forma unívoca a estos gobiernos, sólo queda observar sus características, lo que se hará en el primer apartado de este trabajo.

La segunda parte del artículo propone que las contradicciones de estos gobiernos en transición han sido aprovechadas por la derecha conservadora para crear ambientes hostiles con propósitos desestabilizadores como sucedió en Brasil.

Viviendo en la confrontación. Las cinco tensiones en y del progresismo

El progresismo y la tensión elemental: Confrontación entre la lógica dominante y el campo popular

La respuesta conservadora se debe a que gobiernos de izquierda han alcanzado el poder del Estado a través de procesos legales y legítimos, es decir, sustentados en la fuerza mayoritaria que se ha manifestado electoralmente. Desde hace treinta años, con el gobierno de Salvador Allende, y tras las derrotas y la persecución de la izquierda latinoamericana, la llegada de Luiz Inácio Lula da Silva al Ejecutivo brasileño en 2003 marcó una nueva etapa política del continente: la izquierda podía tomar las decisiones del Estado-nación en el escenario de globalización, terreno "natural" del neoliberalismo. Posteriormente, se replicaron los triunfos en Bolivia, Ecuador, Argentina y Uruguay; la fuerza de los candidatos de izquierda en otros países aumentaba.

El fenómeno que observamos a partir del 2000 es un proceso de transformación en Latinoamérica. Si bien éste se evidenció en el ámbito electoral, es indudable que los movimientos sociales tuvieron un papel fundamental en la transformación y en los triunfos electorales.

A esta convergencia de agentes sociales que coinciden ideológicamente contra la hegemonía y poder del capitalismo dependiente latinoamericano, que puede organizarse en manifestaciones políticas concretas, sean o no electorales, y que incluye confrontaciones internas, se le puede definir como campo popular.[26]

A lo largo del siglo xx las políticas populares se han llegado a aproximar al poder estatal. La mayoría de las veces han ganado posiciones en espacios particulares y poderes regionales y, con altas y bajas, han influido en las transformaciones de Latinoamérica. El triunfo en Brasil significó una convergencia afortunada que rebasó lo regional y obtuvo el poder nacional.

Una característica del progresismo es que estos regímenes no llegan al poder sólo a través de frentes electorales, y es frecuente que se desmantelan al conseguir el triunfo. La fuerza de un campo popular es su pretensión de llevar a cabo un cambio cultural, lo que explica que en su interior participen los movimientos sociales legítimos. Como establece Alfredo Falero:

> Es clave la importancia de visualizar el campo popular como un espacio potencial de producciones simbólicas alternativas a las lógicas dominantes, frente a la naturalización de formas de ver la sociedad que emanan de agentes

[26] La definición de *campo* proveniente de la sociología de Bourdieu y es útil para conocer a este tipo de "frente" político: constituido por una red de relaciones entre agentes o instituciones que guardan diferentes posiciones, cada uno con una lógica específica y que proyectan hacia los actores sociales cuatro tipos de capital: económico —bienes—, cultural —conocimientos—; social —relaciones sociales valiosas para los agentes—, y finalmente simbólico —honor y prestigio de los participantes—. Utilizan este capital para impulsar sus estrategias o líneas de acción dirigidas a penetrar en la cultura de la sociedad (Bourdieu, Wacquant, 2005: 147-172). El campo popular va más allá de la llamada sociedad civil, que aglutina más actores de diferentes signos (Forero, 2008), porque aquí se comparten mayores afinidades culturales y visiones de mundo, sin ser homogéneas.

económicos y políticos —y que son canalizadas y construidas por el campo de la comunicación— el campo popular tiene más allá de sus tensiones, de sus conflictos, la potencialidad de disputar sentidos alternativos de sociedad (Falero, 2009: 3).

Entonces, si la fortaleza del campo político es su capital simbólico y su propuesta de llevar a cabo una transformación cultural a largo plazo, parte de la desestabilización que busca ocasionar la derecha retardataria está dirigida contra los actores sociales proclives de ser alcanzados por las estrategias populares. De ahí la clave de los medios de comunicación masiva.

El progresismo, entre el neoliberalismo-neodesarrollismo

En el siglo xxi, con su llegada al poder gubernamental federal, la izquierda comenzó a disputar directamente con los agentes tradicionales del capitalismo subordinado; la confrontación se evidenciaría políticamente, y sobre todo en el espacio fundamental de las acciones, el económico. A decir de Calderón y Castells (2019), las transformaciones experimentadas en América Latina durante los primeros años de este siglo se deben precisamente a la tensión entre neoliberalismo y progresismo. "Dicha transformación es el resultado de dos modelos socioeconómicos contrapuestos, de su ascenso y de sus crisis" (Calderón; Castells, 2019: 17).

Como es sabido, las élites globalistas que ostentaron el poder desde los ochenta sustentaron el modelo neoliberal, cuyo arquetipo para lograr el desarrollo está basado en el crecimiento macroeconómico a partir de la apertura al mercado internacional, con el apoyo del Estado. Las consecuencias sociales del modelo de mercado abierto —la precariedad laboral, la lectura de la economía desde estándares financieros y la mercantilización de la vida social— se convirtieron en un paradigma cultural, pero el empobrecimiento generalizado y la pérdida de seguridad no pasaron desapercibidos. Si América Latina era ya victimizada por la economía subordinada, el neoliberalismo agravó su situación, e incluso la decadencia tocó a los agentes globalistas que luchaban por mantener su hegemonía.

Ahora bien, es necesario dar cuenta de la la definición del modelo económico impulsado por los gobiernos progresistas. Para Calderón y Castells, en estos gobiernos se impulsó un modelo que ellos denominan *neodesarrollista*: "[…] es el Estado el motor del crecimiento económico y el reparto del producto, interviniendo activamente en los procesos del mercado y en la creación de infraestructura, aunque sin estatizar la economía" (Calderón, Castells, 2019: 17).

Ríos Vera afirma que el neodesarrollismo fue el modelo que asumieron los gobiernos brasileños de Lula y Dilma, y lo define como el de "[…] carácter 'social', 'regulador', 'distribucionista' del neodesarrollismo, interesado en reducir condiciones de desigualdad y pobreza, no obstante subordinado a los lineamientos preponderantes del neoliberalismo ortodoxo" (Ríos, 2018: 187).

Por su parte, Bresser-Pereira también apoya la tesis del neodesarrollismo como modelo opuesto al neoliberalismo, pero le imprime un optimismo político:

> El nuevo desarrollismo nace del fracaso económico y político de la globalización, la financiarización y el neoliberalismo. En los países en desarrollo pretende garantizar la democracia, la reducción de las desigualdades y la protección al medio ambiente. Es una estrategia nacional que le otorga al Estado un papel central, y como condición indispensable, propone una dirección sólida y eficiente; pues no cree que el mercado pueda resolverlo todo, ni que las instituciones deban limitarse a garantizar la propiedad privada y el cumplimiento de los contratos. El nuevo desarrollismo es un sistema teórico incluyente, heredero del desarrollismo clásico, con propuestas actualizadas que le permitirán a los países de mediano desarrollo tener los elementos para acercarse en mejores condiciones a las naciones más prósperas (Bresser-Pereira, 2017: 48).

Compartiendo la idea de que se trata del inicio de una etapa esperanzadora, también se ha dado la definición de estas transformaciones

a partir de la superación del neoliberalismo. Es la postura posneoliberal que asume Emir Sader:

> […] el posneoliberalismo es el camino de negación del capitalismo en su fase neoliberal, que mercantiliza todo, en que todo tiene precio, todo se compra, todo se vende. El posneoliberalismo, al contrario, afirma derechos, valores, esfera pública, ciudadanía y ahí se da la disputa fundamental de nuestro tiempo, en que América Latina es el escenario más importante, el eslabón más débil de la cadena neoliberal (2008: 43).

Independientemente de si lo llamamos neodesarrollista o posneoliberal, el progresismo se sustenta en la tensión de dos modelos económicos, uno decadente y otro que aún no se define.[27] Es, digamos, reflejo de una sociedad emergente.

El progresismo entre la política social y la política económica heredada

El intento de desarrollar una economía neodesarrollista conduce a otra de las tensiones de los gobiernos progresistas: sortear la contradicción de aplicar una política social sólida y efectiva y ceñirse a los dictámenes de la política económica que canaliza recursos al cumplimiento de exigencias heredadas, síntomas de subordinación.

Al surgir del campo popular, los gobiernos progresistas mantienen en su seno corrientes herederas de la historia que reivindica la justicia social. Para ellos el principal desafío es transformar las condiciones que sustentan las estructuras desiguales en Latinoamérica. En el plano internacional, las instituciones y la agenda, hay coincidencia respecto a la interpretación multifactorial de este problema estructural, en buena me-

[27] La tesis de Calderón y Castell establece que el modelo económico, político y social que define a la nueva América Latina, la de la segunda década del siglo xxi, es una especie de neoglobalización en la que es evidente la crisis de los dos modelos económicos: el neoliberalismo y el neodesarrollismo.

dida influenciados por los discursos y las acciones del progresismo. A decir de la CEPAL (2016), la desigualdad

> [...] es un fenómeno que se expresa en múltiples dimensiones y es causado por múltiples factores [... la igualdad...] no se refiere solamente a una [mejor] distribución de los ingresos monetarios de que disponen las personas y las familias para procurar su bienestar y desarrollar sus capacidades [...] la distribución funcional del ingreso entre capital y trabajo, y a la distribución de la propiedad de activos financieros y no financieros; [...] se refiere también a la igualdad en el ejercicio de derechos, en el desarrollo de capacidades [...] (habilidades, conocimientos y destrezas [para] emprender proyectos de vida que consideren valiosos), al reconocimiento recíproco de los actores y la igualdad de género, étnica y racial [...]. La igualdad de derechos es [...] primordial [...] y se refiere a la plena titularidad de los derechos económicos, sociales y culturales como horizonte normativo y práctico para todas las personas sin distinción de sexo, raza, etnia, edad, religión, origen, situación socioeconómica u otra condición, y a la inclusión de todos los ciudadanos y ciudadanas en la dinámica del desarrollo, lo que implica una efectiva pertenencia a la sociedad y un ejercicio pleno de la ciudadanía (CEPAL, 2016: 11).

De acuerdo con la experiencia sobre las políticas públicas, si bien la inspiración de la lucha contra la desigualdad coincide con la anterior concepción, la solución para los problemas sociales se ha enfocado en los aspectos económicos, sin duda los más urgentes. De manera particular, lo ha hecho a través de herramientas para abatir la pobreza y la pobreza extrema, con resultados positivos.

La canalización de recursos a estos programas especiales ha entrado en conflicto con funcionarios de los propios gobiernos, cuya función es manejar las reglas económico-comerciales y financieras, de tal manera que no han podido distanciarse del todo de las prácticas constituidas. Las redes de dependencia son tales que la separación brusca generaría severas consecuencias. Se intenta combinar la aplicación de políticas sociales y, en la medida de lo posible, disminuir el diseño económico dirigido

exclusivamente al comercio mundial, procurando fortalecer el mercado interno. En esta estrategia, la dirección del Estado es fundamental, y eso es lo que caracteriza al neodesarrollismo.

En su intento de revertir la pobreza y la pobreza extrema, otro de los sellos del neodesarrollismo es guiarse bajo las sugerencias de la agenda internacional ODM y ODS.[28] Ahora bien, para sustentar su política social, principalmente se aplican las *transferencias económicas*, que lograron importantes alcances sobre todo en el abatimiento de la pobreza extrema.

Tabla 1
Combate a la pobreza y pobreza extrema.
Países con regímenes progresistas.
Porcentajes nacionales 2003-2014-2018

País	Pobreza			Pobreza extrema		
	2003	2014	2018	2003	2014	2018
Argentina	50.0	24.9	24.4	11.2	3.3	3.6
Brasil	38.8	16.5	19.4	7.6	3.3	5.4
Bolivia	66.6*	33.7	33.2	36.9*	14.9	14.7
Ecuador	48.7	23.4	24.2	16.3	5.9	6.5
Uruguay	27.3	4.5	2.9	5.9	0.2	0.1
Venezuela	57.2	28.3	**	9.2	12.2	**

*Bolivia: los porcentajes registrados corresponde al 2005.

**Venezuela: no se presentan datos correspondientes al 2018.

Fuente: CEPALSTAT (2020), Porcentaje, en https://cepalstat-prod.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=3328&idioma=e

Además de las "negociaciones" al interior de los gobiernos, la tensión en este rubro se da con otros agentes del propio campo popular:

28 ODM: Objetivos del Desarrollo del Milenio, proyecto entre 2000 y 2015; ODS: Objetivos de Desarrollo Sustentables.

la izquierda histórica y el movimiento social. Aunque éstos reconocen avances en la disminución de la pobreza extrema, cuestionan, en primer lugar, el dar soluciones inmediatistas sin abatir los problemas de desigualdad estructural y que las políticas de transferencia estén fundamentadas en la apreciación que tiene el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional sobre el problema de la desigualdad.

En segundo lugar, además de cuestionar la parcialidad de la solución al priorizar lo económico, debaten que, al impulsar el mercado interno, se establezcan pactos con los agentes económicos tradicionales y con los globalistas.[29] Así, la subsistencia de esquemas de explotación tradicionales contradice la política social paliativa, de por sí insuficiente.

El progresismo, entre la tensión de la cultura incluyente y la cultura conservadora

Un componente muy importante del progresismo es que remite a elementos culturales, simbólicos e ideológicos asociados con las propuestas más avanzadas para construir una nueva sociabilidad: el aborto, la despenalización de la mariguana y otras drogas no químicas, el derecho al matrimonio igualitario, la adopción por parte de parejas del mismo sexo, etc. El eje de todos ellos son la reivindicación feminista y el respeto al medio ambiente.

---

[29] Una de las características estructurales latinoamericanas es la importancia política y económica de los poderes regionales. La actividad agropecuaria es fundamental, por lo que se combinó en el agronegocio, el monocultivo de exportación y otras actividades de las que depende la región y que abonan a las finanzas federales. Paralelamente, las zonas más apartadas que no son aptas para la agricultura, a las que fueron remitidas numerosas comunidades —en su mayoría indígenas— y que han estado abandonadas durante años, fueron activadas por el neoextractivismo minero. Esto se convirtió en una fuente de ingresos para los gobiernos neodesarrollistas, a pesar de provocar desplazamientos de comunidades, devastación climática y explotación de mano de obra; se trata, sin duda, de una de las grandes contradicciones del progresismo,

Esta faceta sociológica evidencia la confrontación con la perspectiva dominante, la visión de mundo conservadora e incluso refractaria al cambio de civilización. Así, en la respuesta de los grupos de derecha, se plantea no sólo la reacción a la posible pérdida de privilegios económicos, sino también al peligro de perder su estabilidad psicológica ante propuestas que no responden a su visión de un orden social patriarcal, jerárquico, clasista y heterónomo. Paralelamente, ven como un peligro para el orden social el perder las herramientas propagandísticas, los medios masivos de información.

Parte fundamental del golpe suave son, por un lado, los discursos incendiados que combinan rechazo a la participación del Estado en la economía, al mismo tiempo que exigen seguir siendo subsidiados por éste y las políticas sociales juzgadas como desperdicio presupuestal; por otro lado, aparecen discursos anacrónicos de todo tipo, incendiados de homofobia, misoginia, fanatismo religioso o anticomunismo. Éstos desempeñaron un papel importante en la derrota del gobierno Lula-Dilma, y se vieron en el golpe en Bolivia, el discurso de Macri en Argentina, el eje de la deserción de Lenín Moreno en Ecuador y en los opositores al gobierno de López Obrador en México o de Fernández en Argentina.

La tensión entre el régimen progresista y los aliados del campo popular

Otro tipo de tensiones son las que provienen de los agentes que acompañan a las fuerzas políticas que tomaron el poder progresista en el campo popular y las de los agentes internos al gobierno. Las observaciones desde la izquierda histórica son totalmente oportunas, pues evidencian el riesgo que corre el nuevo modelo al involucrar agentes del orden hegemónico; esto puede considerarse una situación legítima porque surge desde el debate ideológico-político. Como establece Forero:

> En cuanto a las fuerzas del campo popular que mantienen diálogo con la fuerza política que está en el gobierno […] en general no pueden dejar de evaluar contradictoriamente la coyuntura: gobiernos que se acercan más que otros a sus posturas históricas, pero al mismo tiempo expectativas limitadas

> en cuanto a la canalización de sus demandas y proyectos sociopolíticos […] (Farero, 2009: 9).

El centro del debate es si se logran conciliar o no las visiones encontradas sobre la arquitectura del Estado. Por un lado, la que busca implementar un modelo de desarrollo que incluya a los grupos tradicionalmente excluidos y que tiene por eje la política social y el distanciamiento definitivo del orden convencional; por otro lado, el modelo que concibe el desarrollo ligado con el progreso, el crecimiento macroeconómico y el reconocimiento internacional, algo que no puede evadirse en un mundo interrelacionado. La interrogante es si podrá construirse un modelo que combine ambas percepciones sin dejar en la marginalidad a los marginados de siempre, por el afán de mantener contacto con quienes aún tienen mucho peso en la economía, la política y la sociedad.

Para la izquierda tradicional latinoamericana, formada a través de la resistencia al Estado, las acciones paulatinas de estos gobiernos son insuficientes, en la tradición del *reformismo*, una especie de gatopardismo o *revolución pasiva* como Gramsci lo señalaba. Es importante rescatar el concepto, ya que es común que en los debates se sugiera la idea de que el progresismo parece ejecutar medidas de transformación, pero que en realidad no hay un cambio sustantivo. Es lo que Gramsci llamaba "una revolución sin revolución".

Alberto Aggio (1998) recupera de los *Cuadernos de la cárcel* los contenidos de la revolución pasiva. Primero, afirma que ninguna formación social desaparece mientras que las fuerzas productivas que se desarrollaron en su interior aún encuentran posibilidades de moverse progresivamente, por lo que continúa su dominación; segundo, comenta que la sociedad se plantea objetivos para los que no se han dado las condiciones necesarias. Y concluye que existen aspectos progresivos de cambios históricos, durante épocas revolucionarias, que llegan a ser disminuidos, lo que da como resultado que se reconstituyan las relaciones sociales, pero dentro de un nuevo orden capitalista (Aggio, 1998: 64-166).

Ahora bien, hay otro tipo de tensiones provenientes de los "aliados" de los progresistas en los frentes electorales, considerados más como parte de las estrategias pragmáticas para conseguir el poder, pero con los que no hay verdaderas coincidencias, lo que tarde o temprano genera conflictos en lo que se refiere a su inclusión. Como la llegada de estos gobiernos al poder ha sido a través de mecanismos propios de la democracia liberal representativa, estas alianzas son comunes, pero los miembros de esas coaliciones exigirán participación en la toma de decisiones del Estado, y presionarán para incluir sus propias estrategias de poder o para incorporar en el *staff* principal a sus políticos profesionales.[30] Lo más vergonzoso es generar esquemas de corrupción partidista, como la que explotó en Brasil en 2005,[31] pues esto marca la imagen negativa de la izquierda del gobierno.

Los gobiernos progresistas son de transición, por lo que las contradicciones los ponen a expensas de la pérdida de apoyo de sus aliados

---

[30] Ejemplo de esto es que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, ha sido promotor de los monocultivos masificados y con uso de transgénicos, y aliado del empresario Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, y proveniente de cúpulas empresariales, que han sido invitados al gobierno en una estrategia de inclusión plural; mientras que al frente de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales estuvo el mayor académico y promotor de la ecología y autosuficiencia alimentaria, Víctor Manuel Toledo, que tiende a favorecer el fortalecimiento de las comunidades y su soberanía alimentaria y que es contrario al agronegocio y los transgénicos. Toledo es reconocido por la izquierda histórica mexicana y terminó renunciando al gabinete.

[31] La compra de votos de los partidos aliados en la coalición Lula Presidente para mantener el apoyo a las iniciativas del PT en la Cámara de Diputados a través de un estipendio mensual, mejor conocido como *mensalão*. La alianza se formó entre el Partido dos Trabalhadores (PT); el Partido Liberal (PL), de tendencia liberal social; el Partido da Mobilização Nacional (PMN), sin una claridad ideológica; el PCB, de ideología marxista-leninista y el más antiguo del país (1922); y el Partido Comunista do Brasil (PCdoB), escisión estalinista del PCB.

del campo popular y de la población; sin embargo, lo sucedido en Brasil rebasa el agotamiento esperado de un régimen que nació con grandes expectativas. Aunque hubiera perdido en una confrontación legal, pero sobre todo legítima, hubiera dejado un sello en el Estado. Lo que observaremos en la historia fue un ataque frontal del conservadurismo utilizando estrategias ilegales e ilegítimas en un intento de borrarlo de la memoria, sin importar las consecuencias para la sociedad brasileña.

La evidencia de la reacción conservadora: El golpe suave en Brasil

A partir de 2014 el mundo comenzó a preguntarse qué estaba sucediendo en Brasil, una economía representante de la pujanza emergente, protagonista del grupo BRICS y cuyo máximo reconocimiento internacional fue entregarle dos eventos mundiales, el Mundial de Futbol y las Olimpiadas. Ese modelo estaba haciendo agua, como el sueño frustrado de erguirse con la copa futbolera.

Al inicio del siglo XXI observábamos en Brasil un impulso de renovación económica y política cuya experiencia de poder sería el ejemplo más elaborado de lo que se ratificaría como progresismo. Movimientos sociales legítimos y ejemplares se fueron tornando con mayor poder de negociación: el obrero y el icónico *Movimento dos Trabalhadores sem Terra*. La reivindicación de diferentes identidades de género se consolidaba paulatinamente; el reconocimiento de las comunidades indígenas, abandonadas durante siglos, también comenzaba un proceso de negociación con el Estado y ya no sólo de confrontación. Y estos procesos se acompañaban con políticas sociales más agresivas en el intento de paliar las brechas sociales entre las élites y la población trabajadora en el país que durante años fue considerado el más desigual de Latinoamérica.[32]

---

[32] En el texto de la CEPAL *Panorama Social 2000-2001 en América Latina* se informaba que, a fines de la década de 1990, según el coeficiente de Gini —que toma en cuenta el ingreso de las personas— reportaba que Brasil mostraba el índice más alto en desigualdad: 0.64 (CEPAL, 2001: 19).

El proceso político brasileño comenzó a constituirse como referente de una configuración política diferente en América Latina. Representaba un camino de fortalecimiento democrático desde 1994, que permitió que, desde Salvador Allende, en 2002 un gobierno de izquierda volviera a llegar vía las urnas. Las características sobre la formación de un modelo de transición señaladas en el apartado anterior se observan en Brasil: un gobierno en América Latina intentaba controlar a un sistema capitalista dependiente, haciéndolo menos agresivo, penetrándolo con altas dosis de compensación social. Pese al escepticismo, parecía que Brasil podía cumplir la promesa democrática de resarcir las deudas sociales. Sin embargo, la realidad se impuso.

Años después, en 2005, un error imperdonable de corrupción generaría un ambiente adverso que fue motivo de escalando. Independientemente de la corrupción en la Cámara, el gobierno del PT era constantemente cuestionado por las contradicciones entre la gestión de un gobierno formado desde una plataforma y actores de izquierda, que en múltiples ocasiones beneficiaba y promovía a agentes de las élites tradicionales. Estos y otros errores internos no eran en sí mismos suficientes para retroceder políticamente como pasó en Brasil; sobre todo, después del triunfo de Lula que evidenciaba el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Estaban sentadas las bases para dirimir la lucha en el campo político; las negociaciones entre las fuerzas políticas eran constantes; se fortalecía el empresariado y el mercado interno; la capacidad de consumo de la población aumentó. Mas ello no fue suficiente para que el régimen se mantuviera. La élite que fue beneficiada no se conformó con las ventajas obtenidas y el mercado mundial tocado por la crisis de 2008 no dio tregua en sus exigencia para que el Estado brasileño cumpliera los compromisos que había adquiridos con el sector privado.

Lo más grave fue que el sector privado beneficiado por el gobierno al permitírsele adquirir capital, después de arriesgar y perder los recursos en actividades riesgosas, sobre todo especulativas, responsabilizó al régimen de su destino. Cuando no obtuvo respuesta, se convirtió primero

en crítico, después en adversario y, al final, en el apoyo furibundo de las acciones desestabilizadoras.

Como se iba haciendo evidente y tal como era denunciado en múltiples espacios, las provocaciones se basaban en la falsedad de datos o en la manipulación de actos de corrupción para hacerlos aparecer como exclusivos del gobierno y los presidentes petistas. Ése fue el comienzo de lo que dramáticamente resultó en una vuelta al primitivismo político latinoamericano; lo más representativo del oscurantismo se irguió el 28 de octubre de 2018: la ignorancia, la intolerancia, el racismo, el clasismo y el fanatismo religioso dieron un contragolpe al proceso de la libertad no sólo en Brasil, sino en toda América Latina.

Las pistas de un golpe suave

Lo que se ha definido en los últimos años como *golpe suave* es el resumen de tres tipos de estrategias —no claramente definidas— utilizadas por quienes se oponen a un gobierno: *a)* la utilización de distorsiones informativas difundidas a través de medios de comunicación masivos; *b)* la difusión de rumores falseados, uso de *bots* y campañas de denostación a través de las redes sociales, y *c)* la implementación excesiva y compleja de procesos judiciales al interior y exterior de los espacios nacionales contra acciones del gobierno (*lawfere*), que constituyen una acción dirigida a derrotar a un gobierno legalmente constituido y que llegó al poder por vías democráticas. Así, el uso de este tipo de estrategia se basa en especulaciones y distorsiones intencionadas y evade el espacio de confrontación política directa y abierta.

Al golpe suave lo podemos identificar como un capítulo histórico más de las continuas agresiones contra las propuestas sociopolíticas alternativas provenientes del campo popular; hoy, como hemos visto en la primera parte, los gobiernos que se oponen a las tendencias de apertura comercial indiscriminada, con posibilidades de crear cambios socioculturales, son los que están sufriendo esa agresión.

Recordemos que, desde la perspectiva de la teoría de la dependencia, se identifica la asociación entre potencias hegemónicas y las élites

nacionales cuya base de poder es la habilitación de redes subordinadas hacia los centros de poder económico y político. Por tanto, la agresión hacia propuestas alternativas a estas políticas se construye desde un doble frente, interno y externo.

La guerra civil directa, acompañada por diferentes grados de invasión extranjera, se ha ido abandonando, a causa de la resistencia de los pueblos y del descrédito de las potencias hegemónicas, el club de las llamadas *democracias occidentales*. La agresión ha ido trasladándose a las guerras de baja intensidad, en las que es evidente la penetración de agentes desestabilizadores tanto para derrocar gobiernos como para reprimir movimientos sociales.

De esta manera, el golpe blando constituye una etapa más de la agresión dirigida a los gobiernos nacionalistas o progresistas, que han llegado al poder a través del voto y el apoyo popular. Hoy en día, la estrategia del golpe de Estado directo no es efectiva, como sí lo fue en 1973 contra el gobierno de la UP de Allende. La estrategia de derrocamiento directo puede traer complicaciones a los agentes que las provocan al interior de los Estados y a los países que las apoyan.

Este nuevo escenario ha significado entrar a una guerra de cuarta generación, que se hace sin fusil y a la preceden la denostación y la desestabilización. Como explica Marcos Roitman, "Hoy las técnicas son mucho más refinadas, sibilinas; se ejecutan desde los despachos de los poderes industriales y financieros, con la connivencia de jueces, policía e instituciones ajenas a las urnas" (Roitman, 2019).

Los detonantes del golpe suave

Producto de las tensiones expuestas en el primer aparatado, hubo evidentes contradicciones que fueron aprovechadas por el conservadurismo de derecha en Brasil.

El gobierno de Lula intentó ser el mediador entre los extremos económicos, la clase industrial y comercial, beneficiadas de la globalización económica, y las capas desfavorecidas, las víctimas de las deudas históricas (Ríos, 2018). La fórmula fue la propuesta neodesarrollista, en la

que el Estado tuvo prioridad para trazar el modelo de desarrollo y disponer de recursos para resarcir el rezago social; sin embargo, la voluntad política no fue suficiente y la realidad de los intereses hegemónicos se impuso.

Al respetarse las estructuras financieras y de los grandes negocios industriales de exportación, estos agentes globalistas continuaron teniendo un poder real y, paulatinamente, se fueron imponiendo a los gobiernos de Lula y Dilma (2003-2016).

Como coinciden diferentes analistas (Martins, 2018; Singer, 2012; Ríos, 2018), con la disminución de las ventajas internacionales con que contaban estos gobiernos —como la caída los *commodities*—, las alteraciones de las tasas de interés hacia el alza y con la disminución de la inversión, comenzó un escenario perjudicial que presionó a la mediana y pequeña empresa, aumentó la inflación y los salarios entraron en crisis.

La distribución de la renta, la inversión social en el norte y nordeste, el incremento al salario de las capas más desfavorecidas, 50% de la población fue bien recibido, pero también se benefició a los más ricos. Hubo un descuido en una parte fundamental de la base social del gobierno —las clases medias urbanas—, y al llegar la crisis, buena parte de ella se volvió profundamente crítica.

Los segmentos conservadores de derecha que, en Brasil como en América Latina, son dueños de los medios de comunicación masiva hicieron de caja de resonancia a las críticas de la sociedad media, y a ellas sumaron las crecientes demandas de los beneficiarios de las becas. Así, se comenzó una ofensiva contra los gobiernos petistas.

El resultado de lo anterior fue la recreación del campo de poder tradicional en Brasil: intereses económicos tradicionales, altamente poderosos, y las nuevas élites financieras pusieron a prueba al régimen. Pese a haber recibido su apoyo, lo abandonaron en la crisis y le hicieron sentir las consecuencias de haber creado un modelo que dirige el presupuesto a los programas sociales; de acuerdo con sus intereses, esto era generar desvíos de recursos estratégicos que serían mejor utilizados en la industria exportadora. Estos grupos fueron acompañados por las élites de

la comunicación, que difundieron campañas ideológicamente agresivas, aprovechando los resultados de la despolitización.

Las fases del golpe suave en Brasil

Fue el analista político estadunidense Gene Sharp quien acuñó el término *golpe suave* como resultado de la acción estadunidense en Latinoamérica en los años setenta. A partir de diferentes referencias, divide en cinco etapas —secuenciales o simultáneas— a este proceso. A continuación, las mencionaremos y señalamos los eventos principales en Brasil entre 2014-2016 que les corresponden. Cabe señalar que, en lo que se refiere a la denostación y difamación contra el PT y Lula, éstas comenzaron desde 1989, una suerte que compartían todas las izquierdas en el continente cuando la era neoliberal iniciaba.

Primera etapa: El ablandamiento

Se promueven el descontento y el malestar. En el caso de Brasil, este clima será suscitado en un principio por las élites beneficiadas durante más de diez años de petismo; sólo toleraban el régimen mientras obtenían beneficios, y al sentirse vulneradas, en vez de pactar con el Estado para encontrar salidas conjuntas, iniciaron una agresiva campaña mediática, que se incrementó en 2013.

El detonador fueron las consecuencias de las medidas económicas del primer mandato de Dilma Rousseff: la exportación de materias primas cayó y el crecimiento chino —principal apoyo externo de Brasil— cesó; se intentó soportar la crisis económica con desgravaciones fiscales: entre 2010 y 2014, la renuncia fiscal aumentó 42.7% los precios corrientes.

Los grandes empresarios tomaron estas medidas como una traición del gobierno, y comienzan a difundirse noticias constantes sobre "el abandono a la industria nacional", lo que ocasionó la desconfianza de las pymes.

Por la sequía desatada en 2015, se aumentaron las tarifas eléctricas; las notas difundidas enfatizaban la falta de apoyo al pueblo; se explotó

el sentimiento de desilusión política dirigida hacia quienes habían prometido estabilidad y que, además, habían incurrido en la corrupción; el sentimiento de desmoralización fue difícil de combatir en poblaciones de por sí con baja estima, como sucede en buena parte de los extractos populares de América Latina.

Se promovió una desconfianza generalizada hacia las instituciones políticas a causa del exacerbado discurso anticorrupción promovido por grupos de derecha; se despolitizó el debate y, en cambio, se enfocaron en la rabia y decepción de los electores contra el gobierno del Partido de los Trabajadores.

Desde los grupos políticos, económicos y mediáticos más importantes del país, se construyó un discurso moralista como cortina de humo y para negar la corresponsabilidad en la crisis de las élites comercializadoras internacionales y de la industria privada que hacía negocios con Odebrecht. De esta manera, se logró conquistar partes significativas del electorado descontentas con el gobierno y el PT.

Segunda etapa: La deslegitimación

Los prejuicios ideológicos son manipulados. En Brasil, medios de comunicación aliados a la campaña de desprestigio mantuvieron una evidente alianza de élites. Tal es el caso de Globo, que se volvió la principal promotora del discurso anticorrupción del juez Sérgio Moro —*Odebrecht*—, quien acusó al gobierno de querer acallarlo en remedo de la dictadura venezolana.

El extremismo conservador observado en Brasil muestra la latencia de un *fascismo criollo*, históricamente presente (Beyhaut, 2006). Apoyándose en una doctrina de las dicotomías sociales, crearon discursos de confrontación contra estratos sociales populares, raciales, de mujeres y otras identidades de género, quienes, en su opinión, generan desestabilidad del orden y la tradición, y que habían sido apoyados por los gobiernos petistas. Estos discursos provienen de élites fundamentalmente blancas y, evidentemente, clasistas y racistas.

La mentira de la derecha brasileña y su manipulación a través de la prensa no es nueva. Cuando el régimen militar derrocó al presidente democrático Jânio Quadros, en 1964, prometió restablecer el orden institucional en apenas un día. Permaneció en el poder 21 años. El primer editorial del diario *O Globo* después del golpe sentenciaba: "resurge la democracia". Años después, Fernando Collor derrotó a Lula con el apoyo solidario de la Red Globo.

Tercera etapa: "Calentamiento" de las calles

En esta fase se promueven manifestaciones callejeras. Se exacerba el odio. Las élites económicas orquestan campaña sin proyecto político, sino como proyecto moral e ideológico, porque a lo que apuestan los orquestadores del golpe blanco es a una sociedad despolitizada, como infortunadamente sucede con la mayor parte de la población que, dados los discursos del neoliberalismo, hoy está desideologizada; siguiendo el pensamiento de Roitman "[…] conlleva una trasformación en las formas de pensar y de actuar. La política se redefine en la lógica del mercado y en su interior sólo priman consumidores guiados por emociones, instintos y sentimientos. El miedo hace el resto" (Roitman, 2019).

La aprobación del gobierno, que a la salida de Lula en 2010 contaba con 80% de aceptación, en el gobierno de Dilma cayó estrepitosamente a partir de las manifestaciones de junio de 2013:

Desaprobación hacia el gobierno brasileño

Fecha	Porcentaje
marzo de 2012	7%
marzo de 2013	7%
junio de 2013	25%
marzo de 2015	entre 20 y 26%
marzo de 2016	69%

Fuente: O Estado de São Paulo, 2016.

Cuarta etapa: La desestabilización

En esta fase, arrecia la guerra psicológica y se crea un clima de ingobernabilidad. En el caso de Brasil, el descrédito a todas las instituciones se agravó paulatinamente con el discurso anticorrupción en 2014.

Los argumentos despolitizados fueron cada vez más fuertes, igual que las expresiones irracionales enfocadas a un pseudodebate sobre la rabia y decepción de los electores del gobierno de Rousseff y Lula.

Los grupos políticos —como el partido del vicepresidente Temer, el PMDB—, económicos y mediáticos negociaron con representantes de los partidos fisiócratas (que ofrecen sus favores al mejor postor) para imponer en el Parlamento sus propios intereses.

Los más beneficiados fueron los partidos y grupos pentecostales, caracterizados por su profundo conservadurismo, moralidad extrema y que usan lo religioso como propuesta catártica e inmediatista, pero sin compromiso social. Manejan un evangelio llamado *de la prosperidad*, según el cual Dios quiere que el ser humano tenga dinero —articulado *vs.* la crisis económica—, y lo acompañan de técnicas vivenciales de la emoción.

Quinta etapa: Se da el golpe blando

Crecen las revueltas, se prepara una embestida, incluso con apoyo internacional.

El proceso de desafuero de la presidenta Dilma Rousseff comenzó el 2 de diciembre de 2015. Los principales promotores del golpe suave en Brasil fueron:

- *El Parlamento:* De ahí que en las referencias a la desestabilización se le denomine *golpe Legislativo* o *golpe de la Cámara*. Existen 28 partidos con representantes; los opositores que jamás aceptaron el resultado electoral desde 2014 intentaron continuamente deslegitimar o destituir al gobierno accionando el veto para imposibilitar el avance de la agenda gubernamental.

- *El Poder Judicial:* Ejerció oposición directa al Ejecutivo y presionó a través de la continua judicialización de los procesos, forzando las reglas instituidas para desmantelar los argumentos del gobierno, hasta lograr su derrocamiento.

La acusación fundamental fue por "crimen de responsabilidad", lo que no se comprobó en realidad. Se basó en la violación a la ley presupuestaria, que la prensa llamó "Pedaladas fiscales". La presidenta informaba oficialmente que se recaudaba más de lo que se gastaba. Los bancos que prestaron dinero para las becas sociales acusaron al gobierno de no pagarles, de que esa deuda mostraba que se gastaba más de lo recibido y, por tanto, a su costa, el gobierno daba la impresión de que sus finanzas eran estables. El 17 de abril de 2016, se dio la votación en la Cámara de Diputados: 357 a favor del desafuero; 137 en contra y 7 abstenciones. El 12 de mayo de 2016, se dio la decisión del Senado: 55 votos a favor del desafuero; 22 en contra. Su función quedó paralizada.

Después de una "investigación" la entonces presidenta fue destituida definitivamente tres meses después. Los enemigos político-ideológicos del líder de la transformación brasileña, Luiz Inácio Lula da Silva, rescataron las denuncias de sobornos en el Senado del año 2005 y los casos de corrupción en Petrobras; al finalizar, el juez Sérgio Moro ordenó la aprehensión de Lula, al decretarlo "culpable de aceptar sobornos por US$1.1 millones" y comprar un departamento lujoso de tres pisos. Éstos no fueron sino pretextos para inhabilitar sus derechos electorales, en el momento que contaba con la mayor preferencia electoral para 2018.

De esta manera, se orquestó la desestabilización de un gobierno a partir de estrategias en medios de comunicación, tribunales y redes sociales, todas ellas parte del golpe suave.

Las lecciones de Brasil

Como coinciden los análisis, los regímenes progresistas no constituyen un bloque uniforme: "[…] la relación de fuerzas y el grado en el que

se han producido cambios sociales, políticos y culturales han sido muy distintos en Brasil y Argentina, por un lado, y en Venezuela, Bolivia y Ecuador por otro" (González, 2016: 1).

A Brasil lo distingue su conformación de país capitalista periférico y con participación activa en el mercado internacional bajo características dependientes. Desde las ciencias sociales latinoamericanas, se hace hincapié en el dilema del desarrollo nacional y la dependencia, junto con la caracterización de la burguesía nacional, su formación y resultados. No obstante, para nuestro tema es imprescindible incorporar su papel como creador de un modelo de nación incluyente que transcurre paulatinamente hacia la superación de las desigualdades estructurales.

Lo que distingue a Brasil encuentra importantes semejanzas en los casos de México y Argentina, en lo que se refiere a lo económico y, sobre todo, al proceso sociopolítico que ambas naciones atraviesan a partir de 2018. Para Argentina —con su segunda vuelta al progresismo— y para México —con el desarrollo de un progresismo tardío—, el caso brasileño ofrece la posibilidad de aprender de los errores y tomar precauciones ante las reacciones conservadoras que buscan la desestabilización.

La academia brasileña, además, es uno de los pilares de la creación de pensamiento propio emanado de la discusión sobre tales asuntos. Vuelve a surgir la necesidad de repasar debates como los que, por ejemplo, Emir Sader propone al revisar la obra de Ruy Mauro Marini respecto a la tensión entre proceso nacional y tendencia al desarrollo, frente a la relación de dependencia que se genera en el entorno del capitalismo internacional,[33] en el que el papel de los agentes de tales procesos es evidente.

Siguiendo con los aportes de la teoría brasileña, el progresismo podría leerse en la óptica de escenarios diferenciados del capitalismo dependiente que Vânia Bambirra propondría en los setenta (Benítez, 2019) como la extensión del tipo A en pleno proceso capitalista globa-

[33] El debate se dibuja en el artículo Emir Sader, (2012) "América Latina y la economía global. En diálogo con la dialéctica de la dependencia de Ruy Mauro Marini", *Revista Nueva Sociedad*, núm. 238, marzo-abril de 2012, pp. 54-59.

lista, donde la existencia de una élite desnacionalizada vuelve a ser un elemento clave de un proyecto particular de desarrollo y que, como observamos en Brasil, desempeñó un papel protagónico en el golpe, pese a haber sido beneficiada.

Así pues, la experiencia progresista brasileña nos ofrece valiosas lecciones sobre las estrategias de transformación de los poderes tradicionales aplicando reglas claras para la participación política y económica; intentando crear una cultura política basada en relaciones más equitativas e incluyentes en una sociedad profundamente clasista y racista, y utilizando las herramientas de la globalización para proyectar a un país latinoamericano como líder regional, lo que claramente logró Brasil.

El mercado libre dio inicio al ascenso de la burguesía nacional brasileña, pero fue el impulso al mercado interno apoyado en la proyección internacional del país el que la consolidó en el poder económico y en su protagonismo político. El internacionalismo que logró Brasil no fue un evento espontáneo y exclusivo del gobierno lulista, PT, sino que es la continuidad de las políticas de Fernando Henrique Cardoso, entre las que la internacionalización de la economía fue quizá la más clara.

Es importante dar lugar a la proyección internacional de Brasil —desde las acciones meramente diplomáticas hasta los recursos de interacciones económicas—, para resaltar que, pese a las enormes ventajas que esto trajo para las capas empresariales, el oscurantismo conservador no tuvo reparos en los costos que implicaba desmantelar la imagen del país y la subsiguiente pérdida de apoyo. Se pueden mencionar cinco acciones que engloban el proceso de proyección internacional de Brasil a partir de 2003:

1. Se da su participación en la MINUSTAH.[34] Para el gobierno petista, esto fue una estrategia de política exterior para impulsarse como un importante

[34] Posterior a la formación de la ONU, Brasil tuvo sus primeras misiones internacionales durante el período que va de 1957 a 1967, en la crisis del Canal de Suez. Durante la dictadura, el país envió tropas a República Dominicana en 1965; luego de algunas otras acciones, su mayor presencia se dio con la participación de los cascos azules en la "Mi-

actor mundial; sin embargo, concordando con la postura ideológica, Itamarati declaró que el envío de soldados a los cascos azules no serviría de mucho si no se acompañaba con planes para combatir las desigualdades fundamentales económicas y sociales de la pobreza.

2. De esta misión derivó la apertura de las fronteras brasileñas a la migración haitiana. Se trató de una respuesta a la crisis humanitaria, agravada con el terremoto de 2010.
3. Se desplegaron acciones de diplomacia cultural con el relanzamiento de la política exterior brasileña en África, para reconocer su herencia cultural y apostando por una región que las relaciones internacionales habían mantenido en el olvido y buscando erguirse como líder del multeraletarismo (Saraiva, 2006). También es destacable la promoción de la lengua portuguesa, base de la cooperación Sur-Sur, con Brasil como líder.
4. El programa *"Fome Zero"*, bandera de la agenda de la ONU, presente en los ODM y transportados a los ODS, que, paralelamente, impulsaría con mayor fuerza las políticas de transferencias condicionadas. Si bien éstas se practicaban en Brasil y en otros países latinoamericanos, alcanzaron su mejor organización durante el gobierno petista con la Bolsa Familia.
5. Conformación del grupo BRICS,[35] el conjunto de países que representaban las economías más pujantes en el siglo XXI; encontramos sistemas

sión de estabilización" de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), y si bien Argentina y Chile también participaron, las tropas brasileñas desempeñaron el papel principal (Llenderrozas, 2006).

[35] Iniciado en 2006, empezó de manera informal con el acercamiento entre los cancilleres de Brasil, Rusia, India y China —BRIC—, durante su asistencia a la convocatoria anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas; lo que los reunió fue el protagonismo que sus respectivas economías mostraban al inicio del siglo XX. Si bien se propagandizaba la conjunción de economías "emergentes", la presencia de Rusia y China anunciaba las intenciones de generar un frente de países con capacidad de negociación internacional. Sudáfrica se incorporó en 2011 para ampliar su presencia en los cinco continentes.

> económicos que a través de sus propios procesos irán teniendo un papel fundamental en la economía globalizada. Estas economías comparten la fortaleza participativa del Estado en las decisiones económicas. La práctica de la cooperación internacional obtenida a través de este marco de acción le permitió a Brasil el fortalecimiento de su economía y de su empresariado.

A los grupos golpistas no parecieron interesarles las consecuencias de la desestructuración del gobierno y su economía en la proyección de las relaciones económicas internacionales de Brasil.

Se podrían arriesgar algunas observaciones sobre cómo los grupos reaccionarios están ligados a intereses mundiales, que igualmente se beneficiaron con el golpe blando; sin embargo, en este capítulo nos hemos concentrado en la reacción interna. Faltarían elementos para hacer un análisis de este tipo sin caer en la irresponsabilidad de argumentar razones "conspirativas".

No obstante, lo que muestra el caso de Brasil es que los golpistas pertenecen a capas aún oligarcas, tan viejas políticamente como las castas coloniales, pero ahora cubiertas con nuevos ropajes. Nos referimos a aquellos filones que esperaron y se nutrieron de los negocios fomentados por la protección del mercado internacional, pero que políticamente se identifican con la tradición autoritaria y destructiva; destrucción provocada desde la base económica de los privilegios.

Es evidente que para los golpistas no es importante la acción humanitaria en la política interior, mucho menos en la exterior, donde operó la fuerza del racismo contra la solidaridad del Brasil progresista hacia Haití. Fueron totalmente indiferentes a las tendencias políticas internacionales promotoras del multilateralismo; al final, quedó patente la visión realista y de acuerdo con la hegemonía de la dependencia: grupos que combinan la visión de mercado abierto y de corte militarista, cuya muestra es la actitud de Bolsonaro ante Trump en la prepandemia 2020.

Conclusiones

Sin pretender agotar las líneas de análisis que se desprenden de los párrafos anteriores, pueden señalarse ciertas conclusiones o definiciones —una más—, sobre qué son los gobiernos progresistas.

Evidentemente, se trata de regímenes de transición política, es decir, aún están atados a un orden capitalista dependiente muy poderoso, pero intentan generar transformaciones estructurales. No es posible encontrar una definición unívoca, pero sí pueden extraerse algunas ideas a partir de sus tensiones.

Los gobiernos progresistas nacen de la confrontación entre la lógica dominante y el campo popular, lo que pone a estos gobiernos en constante presión; si bien no se pueden deshacer por completo de las directrices neoliberales, intentan aplicar medidas económicas que pueden considerarse neodesarrollistas. Al intentar aplicar una política social a favor de las bases populares, pero aún comprimidos por la política económica que canaliza recursos a los interesas aliados del exterior, estos gobiernos quedan marcados por una continua contradicción. Lo que más define al progresismo es que argumenta a favor de una cultura incluyente por encima de la conservadora, aunque también aquí encontramos contradicciones provenientes de visiones más tradicionales desde el campo popular. Esto último nos lleva a la que es, quizá, su característica más interesante y definitiva: el progresismo siempre es cuestionado, saludablemente, por los aliados del campo popular.

Es evidente que aún falta mucho para superar la desigualdad social y crear un ambiente social incluyente, justo y equitativo. La confrontación política entre el campo hegemónico y popular en América Latina es constante y ha manifestado diferentes facetas de resolución en momentos históricos específicos, la gran mayoría a favor de la oligarquía y esto de manera autoritaria y hasta sangrienta. Los golpes suaves son sólo otra forma en que las corrientes conservadoras buscan defender sus privilegios; a través de sus ataques, procuran eliminar del escenario político a quienes consideran no oponentes en un escenario legal, sino sujetos que dañan el orden social. Esto sucede en un escenario políti-

co que en algunos aspectos es diferente a la lucha política del pasado. Frente a las posibles acciones que un gobierno debería emprender para revertir cinco siglos de desigualdades, más bien encontramos las tensiones básicas del ejercicio de poder, y más que fórmulas de acción surgen preguntas: ¿Cómo hacer que, al eliminar los privilegios de las élites, no se desaten demandas contra el gobierno por supuestos derechos vulnerados? ¿Cómo recuperar los bienes naturales que ahora están en manos de grupos mercantilistas y evitar el litigio en "defensa" de contratos hechos con gobiernos privatizadores?

La experiencia histórica de los últimos 18 años nos hace preguntarnos si la única tensión —única por ser legítima— es la que se da entre el progresismo y las exigencias de la izquierda histórica; sería en esa tensión donde se dirimiría el destino político y social del continente.

Y yendo más allá, nos preguntamos si el progresismo y la izquierda histórica podrían llegar a ser agentes complementarios, no antagónicos, que se unan frente a las nuevas formas de combate que la ultraderecha latinoamericana despliega y cuyos dos objetivos son claros: derrotar a la izquierda y recomponer un orden social basado en una concepción normativa colonial.

Las observaciones desde la izquierda histórica son totalmente oportunas, como cuando advierte al nuevo modelo del riesgo que implica involucrar agentes de la hegemonía, si bien sigue siendo una incógnita si es posible para una transición evitarlo. Sobre la sugerencia de sacudir de una vez el sistema oligárquico para evitar infiltraciones, queda la duda de lo que esto significa en términos de consecuencias para una sociedad enraizada económica y políticamente en la economía dependiente

Ciertamente, los derechos sociales lesionados no se negocian, se recuperan, tal como propone la izquierda más radical. Sin embargo, la reacción de los grupos privilegiados a estas gestiones progresistas, aun cuando sean tan sólo un esbozo de rescate, ha desatado lo que hemos visto en los últimos diez años en Latinoamérica: demandas, manipulación de la imagen hacia el exterior y, sobre todo, falsa propaganda que generan un ambiente adverso para los gobiernos progresistas.

Asuntos como éstos no sólo se concentran en la lucha por el poder del Estado o la renovación de un gobierno; las fuerzas que aquí se levantan evidencian las características de una élite política heredera de las oligarquías históricas. En un marco de mayor apertura, producto de años de lucha social, se puede decir que los métodos de estas élites —la denostación, la mentira y el uso de medios para borrar los avances conseguidos— muestran a una corriente primitiva de la política para quien la palabra *democracia* no significa nada.

La estructura social de nuestros países se enraíza con los intereses de las élites económicas y políticas que dependen del círculo de capital internacional. Las acciones revolucionarias intentaron transformar las circunstancias y la historia nos mostró que el Estado reacciona con violencia contra esta alternativa y que la sociedad se aleja de ella. Una lección es que las medidas de confrontación directa contra las élites resultan contraproducentes y, dado el grado de dependencia al capital transnacional, las consecuencias del desmantelamiento serían muy graves, sobre todo para la población trabajadora.

Por eso el entusiasmo levantado por el progresismo. Comparte su origen en el campo popular con otras fuerzas radicales; viene de una izquierda que ha aprovechado los mecanismos de la democracia electoral para conseguir gobiernos con la suficiente duración como para generar cambios: Uruguay, 5 años; Argentina, 8; Ecuador, 10; Bolivia y Brasil, los más longevos, 13 años, o Hugo Chávez, 14. Deberían hacer ejercicios políticos semejantes que busquen transformar desde el poder las estructuras excluyentes a través de acciones en un proceso de integración y desmantelamiento paulatino de grupos de poder arraigados. Pero la derecha asecha aún con grandes recursos.

Lo que viene es el poder de la información veraz y medios alternativos para difundir una visión de mundo sin corrupción, sin violencia e incluyente, porque la recuperación de los derechos sociales exige hacerlo de manera urgente frente a una derecha de tintes fascistas. Llevar a cabo un desarrollo incluyente ha sido el objetivo de los gobiernos progresistas, pero esto implicaría un apoyo social activo y generalizado

de la población, sin que por ello se dejen de hacer las críticas necesaria. Sin embargo, la lección de lo narrado aquí es que, si bien el gobierno Lula-PT —y otros regímenes— llegó al poder con apoyo popular, el ser un gobierno negociador o de alianzas pluriclasistas no le consiguió el apoyo masivo necesario para encarar la represalia de los privilegiados, ahora llamados a sentirse damnificados.

La historia aguarda.

Bibliografía

Aggio, Alberto (1998), "A revolução passiva como hipótese interpretativa da história política latino-americana", Alberto Aggio, Gramsci, *a vitalidade de um pensamento*, São Paulo, UNESP, pp. 161-176.

Benítez, Francisca (2019), "'Una misma unidad histórica': Vânia Bambirra y el capitalismo dependiente de América Latina", *Cuadernos de Teoría Social*, núm. 9, año 5, en http://www.cuadernosdeteoriasocial.udp.cl/index.php/tsocial/issue/view/11

Beyhaut, Gustavo y Hélèn (2006), "De la independencia a la Segunda Guerra Mundial", *Historia universal siglo XXI. América Latina*, vol. 23, México, Siglo XXI.

Bourdieu, Pierre y Loïc Wacquant (2005), *Una invitación a la sociología reflexiva*, Buenos Aires, Siglo XXI, pp. 147-172.

Bresser-Pereira, Luiz C. (2017), "La nueva teoría desarrollista", *Revista Economía UNAM*, núm. 40, vol. 14, UNAM, pp. 48-66.

CEPAL (2001), 2000-2001, *Panorama Social América Latina*, Santiago de Chile, CEPAL.

CEPAL (2016), *Panorama Social de América Latina*, Santiago de Chile, CEPAL.

Chávez, Daniel (2007), "Los gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay frente a las privatizaciones", *Revista Nueva Sociedad*, núm. 207, enero-febrero, pp. 63-69.

Falero, Alfredo (2009), "Campo popular y consenso social progresista en el Cono Sur. Tendencias y escenarios en un contexto de crisis", *Ponencia XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. VIII* Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, Buenos

Aires, Asociación Latinoamericana de Sociología.
Gentili, Pablo (2018), "Lula para Principiantes", *La Jornada*, 8 de abril, en https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2018/04/08/lula-para-principiantes-277.html
González, Erica (2016), "Gobiernos progresistas en América Latina, notas sobre el fin de un ciclo", *Revista pueblos.org*, en http://www.revistapueblos.org/blog/2016/09/09/gobiernos-progresistas-en-america-latina-notas-sobre-el-fin-de-un-ciclo/
Llenderrozas, Elsa (2006), "Argentina, Brasil y Chile en la reconstrucción de Haití: Intereses y motivaciones de la participación conjunta", ponencia presentada en el *Congreso de la Latin American Studies Association*, San Juan, Puerto Rico, 15-18 de marzo.
Llopis, Enric (2019), "Entrevista al sociólogo Marcos Roitman. 'No hay golpes de Estado sin una trama cívico-militar, otra cosa es el lugar que ocupen las fuerzas armadas'", *Rebelión*, 22 de abril, en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=255064
Merino, G. (2018), "Entrevista com Carlos Eduardo Martins", *Geograficando*, 142(2), e045, en https://doi.org/10.24215/2346898Xe045
Ríos, José (2018), "Tres etapas del golpe 'blando' en Brasil. Hacia una rearticulación social del capital", *Revista de Ciencias Sociales*, vol. 31, núm. 43, DS-FCS, Universidad de la República Uruguay, julio-diciembre, pp. 183-204.
Roitman, Marcos (2019), Por la razón o la fuerza. *Historia y memoria de los golpes de Estado, dictaduras y resistencias en América Latina*, México, Siglo XXI.
Sader, Emir (2008), Refundar el Estado. *Posneoliberalismo en América Latina*, Buenos Aires, CLACSO.
Saraiva, José (2002), "Política exterior do Governo Lula: O desafio africano", *Revista Brasileira de Política Internacional*, 45(2), pp. 5-25, en https://doi.org/10.1590/S0034-73292002000200001
Singer, André (2012), *Os sentidos do lulismo*, San Pablo, Companhia das Letras.

Argentina y sus vaivenes político-económicos. El ascenso y declive de la derecha con Mauricio Macri y el PRO

LETICIA CARRASCO GUTIÉRREZ

Introducción

El 5 de agosto de 2005 se formó el partido político Compromiso por el Cambio, presidido por el empresario Mauricio Macri, quien, junto con Ricardo López Murphy, líder del partido Recrear para el Crecimiento, formó una alianza electoral con proyección nacional: Propuesta Republicana. En las elecciones legislativas de 2005, PRO obtuvo nueve diputados nacionales, seis en la Capital Federal. En las elecciones de 2007-2013, PRO se presentó con Mauricio Macri y fue electo para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires con 45.6% de los votos y, el 10 de julio de 2011, se reeligió como jefe de Gobierno con 64.3% de los votos. El 22 de noviembre de 2015 Macri ganó la presidencia de la Argentina, hecho inédito en la historia política de ese país, porque fue electo democráticamente y accedió al poder desde la derecha, y con una propuesta neoliberal derrotó al peronismo. ¿Que posibilitó este rápido ascenso de un presidente que representaba a la derecha argentina?

Nuestro texto abordará de manera general dos puntos que considero relevantes para trazar y entender este inédito ascenso al poder: por una parte, el bipartidismo, que ha marcado el proceso de democratización y que ha dado presidentes radicales o peronistas, y, por otra, las derechas argentinas del siglo XX y el triunfo en 2015 de un gobierno de corte neoliberal que derrotó al peronismo. Nos enfocaremos sobre algunos aspectos del contexto histórico político de Argentina y, de manera gene-

ral, perfilaré ese ascenso, permanencia y declive que se hizo evidente en agosto de 2019 en medio de la crisis económica.

Un país de crisis cíclicas

Argentina es un país que "ha ido consolidando a lo largo de su historia, un patrón singularmente enloquecido, que se traduce en una crisis devastadora aproximadamente cada diez años, acompañada en general por una intensa conflictividad social y una ruptura política" (Natanson, 2018). Recordemos cómo esa conflictividad producto de repetidas crisis se ha presentado en los últimos cuarenta años. En 1982, en el tramo final de la dictadura del Proceso de Reconstrucción Nacional (PNR), el país se encontraba en una crisis económica y social, con una deuda de 40 000 millones de dólares, cero crecimiento del producto interno bruto y dos millones de desempleados; esta crisis fue agravada por la Guerra de las Malvinas y la derrota sufrida que precipitó la caída de la dictadura y la vuelta a la democracia en 1983 con el triunfo de Raúl Alfonsín (1983-1989). En el año de 1989 accedió al poder Carlos Menem (1989-1999); en este período se dio una hiperinflación, aumentaron la pobreza y el desempleo, el producto interno bruto se desplomó, hubo fuga de capitales y atrasos en el pago de la deuda externa. La hiperinflación, "una situación que algunos especialistas asemejan a la angustia y desesperación que una población vive en estado de guerra fue el potente disciplinador social que facilitó las reformas estructurales de los noventa realizadas por el menemismo. El año 1989 abrió así la puerta para el despliegue neoliberal de los ´90 con las Leyes de Emergencias Económicas (eliminación de subsidios) y Reforma del Estado (privatizaciones)" (Zaiat, 2017). En 2001, en el gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001), ocurrió la crisis más grave en la historia de Argentina, la cual no se trató de sólo una crisis económica, sino que "puso en juego la continuidad del Estado nacional como entidad con capacidad de autogobierno" (Aronskind, 2011).

En el año 2003 accedió al poder Néstor Kirchner (2003-2007) y, posteriormente, Cristina Fernández (2007-2011). El período kirchne-

rista se caracterizó por una mayor intervención del Estado, particularmente en el gobierno de Fernández de Kirchner. La buena situación económica permitió revertir en parte los procesos de exclusión social que se venían gestando desde la dictadura militar y que habían alcanzado picos extremos durante la crisis 2001-2002 (Mesina, 2012). Cristina Fernández se reeligió para el período (2012-2015). "Aunque el segundo período en la presidencia de Cristina Fernández estuvo marcado por el deterioro económico, hubo, en un contexto de caída de casi todos los indicadores, dos que se mantuvieron en niveles razonables: el empleo y la deuda" (Natanson, 2018).

Después del período kirchnerista, tuvo lugar en la Argentina y su historia política el inédito triunfo de un candidato de la derecha para la presidencia de la nación y que no proviene de alguno de los dos principales partidos: ni peronista, ni justicialista; fue electo democráticamente y ganó los principales distritos. Mauricio Macri y su partido Propuesta Republicana (PRO) ya gobernaba la ciudad de Buenos Aires desde 2007, consiguió reelecciones en 2011 y sólo se había conformado definitivamente en 2003. PRO llegó al poder por medio de alianzas electorales. El 22 de noviembre de 2015, ganó la presidencia con el 51.34% de los votos, derrotando a Daniel Scioli, quien obtuvo 48.66%. Cambiemos fue la alianza que lo llevó a la presidencia. El triunfo de Macri sobre el peronismo significó una sacudida en la historia argentina, debido a que, en primer lugar, ninguna fuerza política había conseguido hacerse del control simultáneo de las tres jurisdicciones, es decir, gobernar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en la provincia de Buenos Aires y en el país. En segundo lugar, fue una sacudida por el conglomerado electoral de conformación reciente que el PRO logró reunir y, en tercer lugar, por el hecho de ser una coalición de derecha que ganó democráticamente (Bohoslavsky y Morresi, 2016).

Como sostienen Bohoslavsky y Morresi, "Desde 1912 ningún partido autoidentificado con la derecha —o reconocido por sus adversarios como tal— ganó elecciones presidenciales en Argentina, sin recurrir al fraude o a la proscripción de los partidos más importantes, el radicalis-

mo y el peronismo" (2016). Macri fue el primer presidente electo democráticamente que no pertenecía a los dos principales partidos y cuyo programa era neoliberal.

El bipartidismo en Argentina

Como sostiene Ana María Mustapic, "en la literatura sobre el sistema de partidos en Argentina existe consenso en sostener que, por lo menos hasta 1995, ha habido una combinación entre bipartidismo para las elecciones presidenciales y multipartidismo para las legislativas y desde el año de 1916 los presidentes que han sido electos son radicales o peronistas" (2002: 167), es decir, de la Unión Cívica Radical (UCR) y del Partido Justicialista.

Éstos son los dos principales partidos en la Argentina. El primero tiene sus antecedentes de su surgimiento a finales del siglo XIX y fue fundado por Leandro N. Alem en 1891. A lo largo de la historia argentina, la UCR ha dado nueve presidentes, empezando en 1916 con Hipólito Yrigoyen, que lo fue dos veces, y el último fue Fernando de la Rúa. La UCR generó la corriente denominada *radicalismo.*

Por otra parte, el Partido Justicialista surgió entre los años 1945-1949 y tuvo como figura relevante a Juan Domingo Perón, quien, desde de sus actividades como secretario del Trabajo en el régimen militar de Pedro P. Ramírez, generó un movimiento de masas y una corriente de mucha influencia política e ideológica en la Argentina: el justicialismo o peronismo. En su forma partidaria, primero fue Partido Laborista en 1945 y después el Partido Peronista. Finalmente, Partido Justicialista. Ha ganado nueve elecciones y, adicionalmente, las más recientes en 2019. Perdió las de 1983, 1993 y 2015. En su historia se registran dos golpes de Estado militares (en 1955 y en 1976), y fue proscrito en 1955 por la llamada Revolución Libertadora. Para Spinelli:

> […] el nombre "revolución libertadora", con su enorme carga valorativa, sólo podía quedar librado a la controversia. Ese nombre que el antiperonismo triunfante dio a su llegada al poder, fue sin duda representativo del mani-

> queísmo vigente en 1955 y junto con él se proyectó con fuerza en la cultura política argentina de la segunda mitad del siglo xx, como sinónimo del antiperonismo más radical (2005: 1).

El justicialismo se relaciona con el énfasis en la justicia social que imprimió paralelamente con su accionar político el general Perón, quien fue presidente de la Argentina en dos períodos: de 1946 a 1955, y un tercer período en 1973. Según Alan Rouquié:

> […] el coronel Perón se hizo designar en el Departamento del Trabajo con un objetivo bien definido. Era más consciente que cualquier otro militar del carácter explosivo de la situación social argentina […] justicia social, control de la clase obrera y despolitización de las organizaciones sindicales, constituyeron los tres ejes de su proyecto de acción política. El 1 de diciembre de 1943, se convirtió en el secretario de Trabajo y Previsión, y sus primeras acciones legislativas [de Perón] que beneficiaron a la clase trabajadora, fueron: descanso dominical para 50 000 trabajadores de la carne, el derecho a agremiarse de trabajadores administrativos de ferrocarriles, beneficios jubilatorios; cajas de seguridad social, viviendas, etc. (1986: 139, 140 y 152).

Este mismo autor, menciona que "una de las medidas más avanzada y de mayores consecuencias políticas y sociales fue el estatuto del peón, instaurado por el decreto 28/169/44". (Rouquié, 1986: 52). Recordemos que en Argentina las clases dominantes y oligarcas tienen su bastión en el campo en la Sociedad Rural Argentina, que desde 1866 agrupa a los grandes propietarios de tierras dedicados a la agricultura y a la ganadería y que, a lo largo de la historia argentina, han mantenido una gran influencia política y económica no exenta de grandes conflictos con los gobiernos, sobre todo con los peronistas aunque con mejores relaciones con las dictaduras.

> En apariencia, nada en dicho estatuto resultaba muy revolucionario. El decreto establece un salario mínimo, condiciones mínimas de alimentación y

de vivienda, y precisa también las obligaciones de las partes en materia de horarios de trabajo, indemnizaciones por despido y asistencia médica; establece además la obligatoriedad del descanso dominical y de las vacaciones pagas. Pero si las clases dirigente podían aceptar que los trabajadores urbanos obtuvieran ciertos beneficios sociales por la intervención del gobierno, consideraban que el sector rural, sostén del poder oligárquico, era intocable y escapaba a la acción estatal. El estatuto intentaba reemplazar la buena voluntad del patrón y modificaba las relaciones sociales paternalistas del campo argentino. El Estado penetraba en las estancias, cometiendo así una verdadera violación de la propiedad privada. El estatuto protege al peón que ya no depende sólo del patrón sino de una voluntad superior a la de éste. Ese decreto, que no introducía grandes cambios en el terreno económico, ni en las condiciones de vida de los peones, fue recibido entonces como una verdadera revolución y provocó el odio social tenaz de los grandes propietarios contra Perón (Rouquié, 1986: 52).

Lo anterior nos da luz sobre algunos antecedentes de posturas políticas e ideológicas que marcaron la historia política, la identidad y la cultura de los argentinos: los inicios de la doctrina justicialista y el movimiento peronista y, a partir de la oposición a Perón por parte de las clases dominantes (como la oligarquía terrateniente), el antiperonismo, que perdura hasta la actualidad y que en 2015 llegó al poder. En el artículo "Argentina: Elecciones en tiempos de grieta", Natanson sostiene que "el macrismo, heredero de la tradición liberal-republicana, representa a las capas medias antiperonistas, las sensibilidades conservadoras y el espíritu antiestatista de los núcleos más dinámicos de la economía agropecuaria y de servicios" (2019). Para ilustrar de manera general la influencia y el peso del peronismo en la historia, la política y la cultura argentinas, son ilustrativas las siguientes opiniones:

Para Casullo (2015),

[…] el peronismo es la única identidad política en el país que asume de manera plena el carácter extremadamente competitivo del mercado electoral

> argentino y que, por tanto, entiende que la ideología, la coherencia y la trayectoria biográfica de sus dirigentes son secundarias en relación de su capacidad de ganar elecciones […] es popular, cercano a la sociedad y es vertical. Popular, porque en un país en el que todos los demás partidos políticos se precian de presentarse como educados, civilizados y de clase media, la autopresentación de los candidatos peronistas […] les permite establecer lazos culturales y emocionales con sectores populares que, además de estar politizados y ejercer su voto, se sienten culturalmente excluidos por los circuitos delimitados por las "esferas públicas del gusto" de clase media demarcados por la prensa y los formadores de opinión metropolitanos; asimismo […] el peronismo es el único movimiento político que cuenta con presencia en todas las arenas de la vida social: tiene organizaciones en los barrios, tiene bancas en el Congreso, tiene agrupaciones universitarias, tiene sindicatos, tiene organizaciones de jóvenes. Este carácter enraizado del peronismo, le permite canalizar demandas desde abajo hacia arriba: es decir, el peronismo genera permanentemente representación. Y por último, el peronismo es vertical. Al mismo tiempo que cultural y organizativamente multiforme, el peronismo es un partido-máquina liderado siempre desde un centro cuyo lema máximo es: "el que gana gobierna, el que pierde acompaña" (2015).

Volviendo con Casullo, "el peronismo ocupa la centralidad del espacio político y los otros partidos políticos juega un rol reactivo. Ellos llenan los espacios que deja vacantes el movimiento del peronismo y desarrollan sus propias identidades en reacción a él" (2015).

El peronismo frente al triunfo de PRO

Como lo mencionamos previamente, el peronismo tiene su contraparte en el antiperonismo, y en el antikirchnerismo, y esta postura parece ser un elemento identitario de las clases conservadoras y derechistas, principalmente. Como sostiene Natanson, "la coalición social macrista está integrada por los sectores medios y altos, es decir, las clases acomodadas; además de que recibe apoyos de los adultos mayores de 50 años, de perfil conservador y de la economía de la soja, lo que constituye el corazón

del rechazo al kirchnerismo y el germen a partir del cual el macrismo logró expandir su respaldo social" (Natanson, 2017).

Por otra parte, Bohoslavsky y Morresi (2016) caracterizan a las derechas argentinas en dos principales ramas o familias: la nacionalista católica y la liberal conservadora. De manera muy general, presentamos dos aspectos importantes con relación a esta caracterización y que conviene tener en cuenta:

1. "Cada una de ellas contiene tensiones internas que se derivan de competencias por ejercer el liderazgo [...] captar recursos, atención pública y ocasionalmente votos. No son tradiciones autoconscientes, aunque sus integrantes se dan a la tarea de construir un panteón de figuras de referencia (Bohoslavsky y Morresi, 2016).
2. "Ambas tradiciones han mantenido vínculos complejos y cambiantes y, con un enemigo en común: el peronismo, a inicios de la década de los 70, aminoraron sus enfrentamientos y dieron lugar a comportamientos consensuales" (Bohoslavsky y Morresi, 2016).

La tradición nacionalista católica partía de la convicción de que la identidad argentina es inseparable de su legado hispanocatólico y que las Fuerzas Armadas y la Iglesia son los custodios naturales del ser nacional. Su peso más fuerte se evidencia en el campo literario y cultural, antes que en el político-partidario (Echeverría, 2009, citado en Bohoslavsky y Morresi, 2016).

La segunda familia de derecha, la liberal conservadora, abarca a fuerzas, políticos e intelectuales con simpatías por la organización liberal de la economía y republicana de la política. Por ejemplo, partidos provinciales a fines del siglo XIX, corporaciones empresarias y círculos intelectuales. Las figuras representantes de esta familia no tienen un discurso antidemocrático, pero expresan reservas por los posibles abusos de la democracia. La democracia suele ser asociada a demagogia, populismo y desconocimiento de las reglas de la economía. El peronismo era su principal enemigo ya que para estas tradiciones aparecía como asocia-

do al totalitarismo y antesala del comunismo (Morresi, 2008, citado por Bohoslavsky, 2016).

"Después del regreso de la democracia en 1983, distintas expresiones partidarias de la derecha intentaron quebrar el bipartidismo y acceder al poder por medio de las urnas [...] sin embargo, no lograron persistir por demasiado tiempo, por ejemplo, su proyecto más exitoso que llegó a ser tercera fuerza nacional: la Unión del Centro Democrático (UceDe) no lograron su independencia y tuvieron que aliarse con los partidos mayoritarios del justicialismo y los radicales para ubicar a sus líderes en los gabinetes" (Bohoslavsky y Morresi, 2016).

Según Catterberg, "la cultura política argentina puede caracterizarse como una configuración poco ideológica en términos clásicos, impregnada de demandas y expectativas que percibe la democracia más asociada a sus logros materiales que como un conjunto de reglas, además de que, la dimensión izquierda-derecha tiene una limitada inserción en la cultura política argentina" (1989: 10).

Se considera el caso argentino como atípico, respecto a la postura izquierda-derecha y una particularidad en su historia política. El sistema político argentino no está estructurado en torno a la división izquierda-derecha tan claramente como en otros países. En el sigo XX no existió como tal un partido de derecha, liberal clásico, con capacidad electoral. Astarita y De Piero aducen como causa de lo anterior "la pereza de las clases dominantes que prefirieron la vía rápida de los golpes militares, antes que construir una fuerza hegemónica propia. En suma, las fuerzas de orientación ideológica de derecha han sido electoralmente débiles y debieron recurrir a los golpes de Estado o a la colonización de los partidos (PJ, UCR) para acceder al poder e influir en la toma de decisiones" (2016).

Macri y el PRO: Ascenso y declive

Para finales de 2015, apareció como novedad y reto para el peronismo la figura de Mauricio Macri, quien, como se mencionó, no procedía de las dos principales corrientes políticas de la Argentina. Ni peronista, ni

radical, él representaba una propuesta empresarial, juvenil y, a ojos de muchos, más fresca y que proyectaba una imagen de éxito.

Según Vommaro, "PRO se construye como un grupo político enraizado en el mundo empresario y, el mundo del voluntariado [...] el no compromiso con el pasado y la reivindicación de un mundo sin conflictos, por otra parte, al contrastar con el enmarcamiento político de la discursividad kirchnerista, contribuyó a la conquista de un electorado mayoritariamente contrario a las opciones peronistas" (2014: 68-70).

Un sello de los gobiernos neoliberales como el de Macri es que identifican el origen de los problemas económicos con una *excesiva politización*. En el gobierno, la alianza Cambiemos se ha distinguido por la presencia de CEOS y dirigentes empresariales en distintas áreas estatales y ya no sólo en la económica.

Mauricio Macri inició su mandato presidencial el 10 de diciembre de 2015; inmediatamente, implementó medidas de política económica que generaron costos sociales: la eliminación de los controles cambiarios que ocasionaron la devaluación de la moneda y, como consecuencia de esto, inflación y pérdida del poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones de entre 5 y 10%. También se recortaron los subsidios y se elevaron los costos de los servicios públicos como el gas, el agua y la electricidad (Natanson, 2017).

En el plano económico, el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda publicó en un estudio que más de cincuenta variables económicas y sociales sufrieron un marcado deterioro durante el mandato macrista. Se incrementó 35.9% la deuda pública bruta y 64.8% la deuda externa; el riesgo del país se incrementó 60.8% y las irregularidades en el crédito subieron 2.8% respecto al período anterior a su mandato. La fuga de capitales se aceleró a un promedio anual de 184.7%. La compra del dólar pasó de 15 pesos argentinos a 60 (Telesurtv.net, 2019).

Desde 2017, "el peso argentino se había devaluado 60% desde el inicio de la crisis, las reservas habían disminuido en 15 000 millones de dólares, el pronóstico de inflación anual pasó de 15% a 30% y el creci-

miento esperado para estos años se situaría por debajo de 1%. Desde el punto de vista político, el gobierno macrista, que supuestamente había llegado para reordenar una economía descalabrada, se revelaba, si no totalmente impotente, sí desorientado" (Natansón, 2018). A pesar de esta crítica realidad, el presidente Mauricio Macri decidió postularse nuevamente para otro período en la presidencia a pesar de que hubo quien le aconsejó no hacerlo, así lo menciona un artículo de Mariano Thieberger "Algún funcionario con poder institucional recuerda [...] que le sugirió tres veces a Macri que no se presentara a la reelección. Le recomendó concretamente declinar su candidatura presidencial. Ese dirigente cuenta que el presidente llegó a dudar cuando escuchó su propuesta. Pero se impuso el optimismo del microclima de poder y, como se sabe, fue candidato y perdió" (Thieberger, 2019).

Podemos resumir en términos muy generales la gestión de Mauricio Macri por el resultado y la luz que sobre ella proyecta el resultado de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se llevaron a cabo el 11 de agosto de 2019, y en las cuales la Coalición Frente de Todos, con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner triunfó con 47.79% sobre el 31.80% de Macri. En el período de éste, la deuda externa y la inflación se acrecentaron, las inversiones no llegaron. Los resultados de las PASO llevaron al oficialismo a una crisis y Macri agravó la situación con sus declaraciones tras la devaluación del peso de 40% (que llegó a cotizarse hasta 66 pesos). El expresidente del Banco Central Martin Redrado afirmó que el propio presidente Macri fue quien dio la orden "dejar correr el tipo de cambio sin tener techo" y que "eso generó la máxima devaluación que después se transfirió en esa corrida cambiaria [...] y expresó lo siguiente: 'para que los argentinos aprendan a votar'" (*Página 12*, 16 agosto 2019).

Conclusión

Podemos preguntarnos ¿por qué Macri no logró un segundo mandato y el peronismo volvió a ganar? Por supuesto que la respuesta debe considerar elementos explicativos históricos, políticos y culturales de mayor

profundidad y que exceden los alcances de este trabajo; sin embargo, podemos tomar en cuenta lo que menciona Liliana de Riz:

> El carácter volátil del voto a partir de 1987, introdujo otra novedad en la política argentina: la arena electoral pasó a ser un territorio incierto para los dos grandes partidos nacionales. La oscilación del voto entre el radicalismo y el peronismo puso de manifiesto la erosión de viejas lealtades y el surgimiento de ciclos breves de consenso que obedecen al comportamiento de sectores para los que la percepción del desempeño del gobierno es un factor decisivo en sus preferencias (De Riz, 1993: 42).

Por ejemplo, en 2015 "el desgaste del kirchnerismo aunado al rechazo conservador expresado en antiperonismo y antikirchnerismo, fueron factores importantes y *el germen a partir del cual el macrismo logró expandir su respaldo social*" (Natanson, 2017), y como se mencionó, la desastrosa gestión de Macri contribuyó a que perdiera el gobierno y el poder. La decisión de Cristina Fernández de postular a Alberto Fernández como presidente, y para ella la vicepresidencia, fue un giro político imprevisto que modificó el escenario político electoral y puso de vuelta al peronismo kirchnerista.

Juan Pablo Ferrero en el artículo titulado "El avance conservador no significa el simple retorno al neoliberalismo en Argentina", después de la toma de posesión del presidente Macri, sostenía que: "Es demasiado pronto para comentar más […] hay razones para pensar que a pesar de la llegada de Macri y su coalición conservadora promercado Cambiemos, un regreso contundente al neoliberalismo parece poco probable hoy en la Argentina. Es claro que una victoria en las urnas no significa que el electorado haya delegado su soberanía" (2015).

El 27 de octubre de 2019 los resultados de las elecciones presidenciales en la Argentina respaldaron el vaticinio de Ferrero y Mauricio Macri entregó el mando a un presidente peronista, Alberto Fernández, y, nuevamente, en el cambio de gobierno como en períodos anteriores ya mencionados, se habla de un país en crisis. El ministro de Desarrollo

Social del nuevo gobierno declaraba respecto del saliente: termina con más pobreza, desocupación y desigualdad. No hay una crisis acotada a una zona del país, a un sector o a una industria; hay una catástrofe social. Se quebró toda la estructura social (Telesurtv.net, 2019). Finalmente, el electorado eligió la opción peronista, tras el desastre de Macri.

Bibliografía

Aronskind, R. (2011), *Las causas de la crisis de 2001,* Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires , 6 de diciembre, en https://www.unicen.edu.ar/content/las-causas-de-la-crisis-de-2001 [Consultado el 29 de marzo de 2020].

Astarita, M. y S. De Piero (2016), "La identidad político-ideológica del gobierno de Macri: ¿Una nueva derecha ha emergido en la Argentina?", *Socio Debate. Revista de Ciencias Sociales*, año 2, núm. 4, diciembre, en http://www.feej.org/images/publicaciones/numero4/AstaritaDePiero.pdf [Consultado el 2 de septiembre de 2019].

Bohoslavsky, E. y S. Morresi (2016), "El partido PRO y el triunfo de la nueva derecha en Argentina", *Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM*, 32, 9 diciembre, en http://journals.openedition.org/alhim/5619 [Consultado el 5 abril 2020].

Casullo, M. (2015), "Argentina: Del bipartidismo a la 'democracia peronista'", *Nueva Sociedad*, núm. 258, julio-agosto, en https://www.nuso.org/articulo/argentina-del-bipartidismo-la-democracia-peronista/ [Consultado el 29 de marzo de 2020].

Catterberg, E. y M. Braun (1989), "¿Izquierda y derecha en la opinión pública argentina?", *Critica y Utopía*, núm. 18, en http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/critica/nro18/CATTER.pdf. [Consultado el 30 marzo 2020].

"¿Cómo deja Mauricio Macri la Argentina tras cuatro años de mandato?" (2019), *Telesurtv.net*, 9 de diciembre, en https://www.telesurtv.net/news/argentina-mauricio-macri-balance-gobierno-20191209-0035.html [Consultado el 18 de abril de 2020].

De Riz, L. (1993), “Los partidos políticos y el gobierno de la crisis en Argentina”, M. Garreton (ed.), *Los partidos y la transformación política de América Latina*, Chile, CLACSO, Flacso, en http://flacsochile.org/biblioteca/pub/publicos/1993/libro/000576.pdf#page=43

Fraga, R. (2019), “Al final ¿de qué se trata el peronismo que vuelve?”, *Fortuna*, 26 de noviembre, en https://fortuna.perfil.com/2019-11-26-207746-al-final-de-que-se-trata-el-peronismo-que-vuelve/ [Consultado el 17 de abril de 2020].

Mesina, G. (2012), *Una evaluación de los gobiernos Kirchner: El impacto sobre la exclusión social de los cambios en las políticas sociales argentinas,* en https://www.openstarts.units.it/bitstream/10077/7282/1/Visioni-LA_7_2012.pdf#page=72 [Consultado el 20 de septiembre de 2019].

Mustapic, A., “Argentina: La crisis de representación y los partidos políticos”, *Revista Usal.es,* Ediciones Universidad de Salamanca, en https://revistas.usal.es/index.php/1130-2887/article/viewFile/2398/2447 [Consultado el 15 de septiembre de 2019].

Natanson, J. (2018), “Mauricio Macri en su ratonera .El fin de la utopía gradualista”, *Nueva Sociedad*, núm. 276, julio-agosto, en https://nuso.org/articulo/mauricio-macri-en-su-ratonera/ [Consultado el 1 septiembre 2019].

___ (2019), “Argentina: Elecciones en tiempos de grieta”, *Nueva Sociedad*, núm. 281, mayo-junio, en https://www.nuso.org/articulo/argentina-elecciones-grieta-macrismo-kirchnerismo/

___ (2017), “‘La ola amarilla’ en Argentina. Reconfiguraciones tras el triunfo de Cambiemos”, *Nueva Sociedad,* núm. 272, noviembre-diciembre, en https://www.nuso.org/articulo/la-ola-amarilla-en-argentina/ [Consultado el 15 de abril de 2020].

Rosso, Fernando (2019), “La descomposición política de Mauricio Macri y el laberinto argentino”, *Nueva Sociedad*, agosto, en https://nuso.org/articulo/argentina-macri-alberto-cristina-crisis-inflacion-mercados/

Rouquié, A. (1986), *Poder militar y sociedad política en la Argentina*, Argentina, Hyspamérica.

Spinelli, M. (2005), "La 'revolución libertadora'. Una ilusión antiperonista", *Prohistoria*, 9, pp. 185-189, en https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=3801/380135835010 [Consultado el 18 de abril de 2020].
Thieberger, M. (2019), "Mauricio Macri y Marcos Peña intentan inyectar optimismo, pero en el PRO ya empezó la ceremonia del adiós", en https://www.infobae.com/politica/2019/09/08/mauricio-macri-y-marcos-pena-intentan-inyectar-optimismo-pero-en-el-pro-ya-empezo-la-ceremonia-del-adios/ [Consultado el 20 de septiembre de 2019].
Vommaro, G. (2014), "'Meterse en política': La construcción de PRO y la renovación de la centroderecha argentina", *Nueva Sociedad*, núm. 254, noviembre-diciembre, en https://nuso.org/articulo/meterse-en-politica-la-construccion-de-pro-y-la-renovacion-de-la-centroderecha-argentina/ [Consultado el 2 de septiembre de 2019].
Zaiat, A. (2017), "El año Caótico", *Pagina 12*, 26 de mayo, en https://www.pagina12.com.ar/40028-el-ano-caotico

Implicaciones socioambientales del gobernar y la conflictividad social en América Latina y el Caribe

JORGE GASTÓN GUTIÉRREZ ROSETE HERNÁNDEZ

Introducción

El cierre del siglo xx y las primeras dos décadas del xxi se caracterizan por una crisis civilizatoria, multidimensional y de alcance planetario, cuyas raíces y manifestaciones, complejas y entrelazadas, van desde las de índole económico y político hasta las de carácter socioambiental, pasando por una multiplicidad de procesos que abarcan tanto la contaminación y el deterioro ambiental en localidades y regiones específicas como los problemas globales de cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la alteración de ecosistemas marinos, la deforestación en bosques y selvas, la devastación de grandes cuencas, etc. En estrecha relación con ello, se presentan procesos de concentración poblacional urbana y abandono del campo, creciente vulnerabilidad ante contingencias ambientales y catástrofes tecnológicas, incremento de enfermedades zoonóticas y pandemias, migraciones y desplazamientos forzados, así como despojo de territorios y extractivismo rampante y la erosión de bienes culturales, valores y procesos identitarios.

Entre las raíces vertebrales de esta crisis y sus diversas expresiones, ocupa un papel preponderante un modelo de sociedad promovido desde una racionalidad económica globalizada de corte neoimperialista, propia del capitalismo en su fase neoliberal, fundamentada en la liberalización de los mercados, los procesos de privatización y el despojo de bienes comunes naturales, culturales y sociales. Racionalidad que identifica de-

sarrollo con crecimiento económico, bajo la lógica de buscar la máxima ganancia, con el menor esfuerzo posible, en el menor tiempo posible y sin importar los impactos sociales y ambientales que ello genere.

La región de América Latina y el Caribe —véase como Nuestra América, Abya Yala— no escapa a esta situación. Los complejos procesos de carácter económico, político, cultural y ambiental, propios de esta crisis global, tienen asiento y expresión en esta región. Y éstos se dan en un contexto sociohistórico, dinámico y cambiante, de relaciones entre diversas clases, sectores y actores sociales, plenos de encuentros y desencuentros, afinidades y diferencias, coincidencias y contradicciones.

Por un lado, gobiernos y consorcios empresariales nacionales y trasnacionales y, por otro, organizaciones y redes civiles, movimientos sociales, trabajadores, campesinos, comunidades y pueblos originarios, mestizos, afrodescendientes, etc., forman parte de esa trama de relaciones, crecientemente conflictivas, que, desde esa lógica neoliberal predominante, han venido concretándose en diversas repercusiones socioambientales de la referida crisis, como el despojo de territorios y medios comunes de la naturaleza, la devastación de ecosistemas y el deterioro de entornos urbanos y rurales, la explotación, la exclusión, el racismo, las desigualdades económicas y de género, el empobrecimiento de cada vez más amplios sectores de la población, el incremento de la violencia institucional, de grupos paramilitares y del crimen organizado, etc.

Frente a esto, surgen y se manifiestan movimientos de resistencia, defensa, reapropiación y generación de alternativas que apuntan hacia otros modos y formas de concebir y vivir en aras de la construcción de sociedades sustentables y justas.

Acercamiento desde la ecología política

Para realizar un acercamiento a estos procesos, particularmente en lo concerniente a las relaciones entre formas de gobernar, dinámicas productivas y de apropiación de la naturaleza, movimientos de resistencia y alternativas, así como los conflictos que de ello se derivan, uno de los caminos posibles es el de la recuperación de la noción de *ecología política*,

que, si bien es un concepto con diversos significados y sentidos, en este artículo se centra en la manera en que corrientes y autores, con un importante grado de afinidad, la conciben. Un punto de arranque es lo que menciona Delgado en cuanto a antecedentes clave de la ecología política, cuando, desde la década de los ochenta, se comienza a gestar "un encuentro de aportes provenientes de distintas disciplinas abocadas al estudio del conflicto por el acceso, despojo, uso y usufructo de los territorios y los recursos que éstos contienen (incluyendo, en muchos casos, el reconocimiento y la verificación de las contrafuerzas existentes y sus propuestas alternativas)" (Delgado, 2013: 47). Agrega que la vigencia de la ecología política es cada vez más evidente ante el hecho de que "la creciente acumulación de capital demanda una explotación y transformación mayor del entorno natural y social con implicaciones desiguales, sinérgicas e incluso irreversibles" (Delgado, 2013: 47).

En estos términos es que Carrasco visualiza las consecuencias del despojo y del derroche de recursos naturales al resaltar que las políticas de preservación de la naturaleza son subsumidas por la voracidad de tres factores interrelacionados: "*a)* por la privatización, es decir, como instancia de la ideología dominante en el neoliberalismo; *b)* las políticas ambientales en la tesitura de las presiones del capital que necesita cuando menos de los recursos (agua, energéticos y la biodiversidad), y *c)* bajo las actuales relaciones sociales de producción que subordinan a la producción, consumo y distribución en una lógica de la rentabilidad abierta al mercado especulativo" (Carrasco, 2007).

Prácticas de despojo, extracción, explotación, contaminación y deterioro ambiental que, a decir de Martínez Alier (2015), inciden en el aumento del metabolismo social, esto es, en los flujos de energía y materiales implicados en los procesos de exploración, extracción y transporte de materias primas, así como en la transformación, distribución y consumo de productos y mercancías, y en la disposición final de residuos. Aumento del metabolismo social que, a su vez, incide en el aumento de conflictos socioambientales, en tanto diversos sectores sociales afectados promueven movimientos de resistencia, defensa y reapropiación de

territorios y bienes comunes, así como la construcción de alternativas, frente a sectores gubernamentales y del capital que mantienen el poder político y económico y promueven prácticas social y ambientalmente injustas y depredadoras. Es en este sentido que Martínez Alier considera que "a la Ecología Política le interesa dar cuenta de cómo el poder político incide en los conflictos socioambientales, se argumenta que ésta se centra en el estudio paralelo del metabolismo social y los conflictos ecológicos distributivos" (Martínez Alier, 2015: 57).

En estrecha relación con lo expuesto, y redimensionando los alcances, por un lado, del poder político y del gobernar de quienes lo detentan y, por otro, de quienes gestan procesos organizativos y de movilización y resistencia, vale considerar el enfoque de ecogubernamentalidad en fricción, que Trentini y Sorroche entienden de la siguiente manera: "Este enfoque permite dar cuenta de las múltiples relaciones de poder y desigualdad en que se inscriben estos conflictos, y de cómo estas relaciones operan a escala transnacional, nacional y local, configurando formas particulares de explotación, apropiación, distribución, regulación, activismo y resistencia, en donde las prácticas cotidianas producen políticas más allá de lo establecido y definido en los programas y modelos globales" (Trentini y Sorroche, 2016: 132).

En el vasto ámbito que abarca desde las concepciones y prácticas del poder político hasta las movilizaciones y la vida cotidiana de grupos y comunidades en resistencia, resulta pertinente recuperar el planteamiento de Leff en el sentido de que "La ecología política se establece en ese espacio que es el del conflicto por la reapropiación de la naturaleza y de la cultura, allí donde la naturaleza y la cultura resisten a la homologación de valores y procesos (simbólicos, ecológicos, epistemológicos, políticos) inconmensurables y a ser absorbidos en términos de valores de mercado" (Leff, 2003: 5). Asumiendo que "La ecología política es la política de la reapropiación de la naturaleza" (Leff, 2003: 12), pero no sólo como una estrategia práctica por procesos discursivos y aplicaciones del conocimiento, sino como una lucha en torno a la producción y apropiación de conceptos, este autor afirma que "La orientación de las acciones

hacia la construcción de sociedades sustentables se da en un campo de luchas teóricas y de politización de conceptos. Así, los conceptos de biodiversidad, territorio, autonomía, autogestión, están reconfigurando sus significados en el campo conflictivo de las estrategias de reapropiación de la naturaleza" (Leff, 2003).

Despojo y extractivismo en América Latina y el Caribe

América Latina y el Caribe conforman una de las regiones más biodiversas del planeta y con una de las mayores reservas de bienes comunes de la naturaleza, a la vez que poseen una gran diversidad cultural, de cosmovisiones y culturas ancestrales de pueblos originarios y un gran potencial de procesos y dinámicas interculturales. Desde la visión y las prácticas del neoimperialismo, la región es considerada reservorio o bodega de materias primas, de "recursos naturales", con toda su connotación recursista, economicista. Minería, petróleo, gas, *fracking*, agroindustria, transgénicos, agrotóxicos, monocultivos de forestería comercial, grandes presas hidroeléctricas, macroproyectos turísticos, de vías de transporte, de corredores industriales, etc., son parte de las megaobras y proyectos extractivistas, altamente depredadores, que obedecen a dinámicas productivas basadas en el despojo, la injusticia y el deterioro social y ambiental.

Serios impactos socioambientales, que son minimizados por quienes detentan el poder económico, así como el poder económico que lo sostiene, como es el caso de los incendios forestales en la Amazonía, o que, incluso, son negados, como el caso del cambio climático, o, cuando más, que motivan el discurso y la aplicación de las soluciones aparentes mediante la tecnología verde, controlada por los mismos consorcios empresariales, nacionales y trasnacionales que generan dichos impactos. Un círculo de causa y solución aparente, que se convierte en un jugoso negocio de la *economía verde*, concepto central que desplazó al de *desarrollo sustentable* en la Cumbre Río+20, realizada en Río de Janeiro, Brasil, en junio del 2012. A fin de cuentas, capitalismo neoimperialista maquillado de verde.

En esta lógica, América Latina y el Caribe se convierten en una región más donde la explotación de la fuerza de trabajo y las crecientes desigualdades sociales se articulan con la sobreexplotación de la naturaleza, como parte de una misma racionalidad y proceso depredador. Proceso en el que los gobiernos que se asientan en las naciones que conforman esta región tienen un rol determinante y estrechamente relacionado con la incidencia que tienen grandes economías representadas por gobiernos y capitales de países como Estados Unidos, China y Rusia. Proceso que resulta complejo, dinámico y cambiante, tanto por las competencias y tensiones entre esas grandes economías como por los vaivenes pendulantes en la llegada y paso tanto de gobiernos *neoconservadores* como de gobiernos *progresistas* o nacional populares, en naciones específicas y en períodos sucesivos.

Destacan en estas oscilaciones procesos electorales cuestionables, así como golpes de Estado en países con gobiernos progresistas que, en algunos casos, se interpretan como *blandos*, puesto que no implican imposiciones militares violentas extremas, pero que bien pueden concebirse como rudos por el despliegue de diversas modalidades de violencia institucional ejercida por la alianza de sectores neoconservadores de carácter político, empresarial, religioso y militar, apoyadas por fuertes intereses económicos nacionales y extranjeros.

Gobiernos neoconservadores y gobiernos progresistas. Políticas sociales y políticas productivas

Considerando estas complejas y cambiantes dinámicas, cabe resaltar dos cuestiones clave para la comprensión de las relaciones entre el poder político y económico y otros sectores sociales de los países de la región. Una tiene que ver con las diferencias entre gobiernos neoconservadores y progresistas, en lo referente a políticas sociales enfocadas en el bienestar de la población, especialmente de los sectores más empobrecidos o menos beneficiados en cuanto a servicios públicos y condiciones básicas de vida, enfocadas principalmente a través de la distribución de la renta básica en el gasto social, en donde los gobiernos

progresistas dedican un mayor presupuesto y diversifican la cobertura de diversos rubros como educación, salud, alimentación, pensión, etc., a diferencia de los gobiernos neoconservadores que, a la par de adelgazar las capacidades del Estado para diseñar y atender dichas políticas sociales, reducen considerablemente dicho gasto social. Si bien el hacer de gobiernos que atienden políticas sociales y gasto social tiene una importante incidencia en los programas de apoyo y la atención de necesidades sociales y las condiciones de justicia social, no quedan exentos de limitaciones, contradicciones y cuestionamientos. Sin embargo, permiten evidenciar diferencias sustanciales entre la concepción y aplicación de dichas políticas sociales y la reducción y omisión de éstas en los gobiernos neoconservadores.

Una segunda cuestión clave —de especial interés para este escrito— para la comprensión de las relaciones entre el poder político y económico, el metabolismo social vinculado con la racionalidad y prácticas del capital y la conflictividad socioambiental en la región, es el relativo a las políticas económicas y productivas relacionadas con dinámicas de despojo, extracción y explotación de territorios y bienes comunes de la naturaleza, de erosión de patrimonios y bienes culturales, así como de contaminación y depredación, que generan fuertes impactos socioambientales. En este sentido, las concepciones y prácticas de los gobiernos neoconservadores y de los gobiernos progresistas de la región, si bien pueden evidenciar algunos matices en cuanto a la forma y los objetivos, presentan sustanciales similitudes de fondo.

Así, un común denominador es que, en ambos casos, se impulsan políticas productivas afines con las referidas dinámicas de despojo y depredación, enfocadas predominantemente en la sobreexplotación vía extractivismo y neoextractivismo (noción aplicada para el caso de los gobiernos progresistas) de materias primas y bienes básicos o *commodities*. En el caso de los primeros, plenamente bajo la racionalidad económica del capital y la búsqueda del lucro y la acumulación, y en los segundos, manteniendo de fondo la misma racionalidad, pero buscando también el incremento de la renta o los ingresos, vía exportaciones

de materias primas, para el aumento del gasto social. Cabe entonces cuestionarse en qué sentido y hasta dónde pueden considerarse como gobiernos progresistas, o como gobiernos que mantienen la matriz productiva capitalista, con un matiz de corte social.

Cabe reiterar que, en ambos tipos de gobiernos, se impulsan políticas y proyectos relacionados con la minería, los agronegocios, el petróleo y el gas, los proyectos hidroeléctricos y los de infraestructura, etc., a la par de la expropiación y despojo de territorios y bienes comunes de la naturaleza, de comunidades y pueblos originarios. Así, vemos que mantienen un modelo extractivista privatizador o neoextractivista de producción y exportación (usualmente monoexportador) de materias primas, como medio fundamental para la acumulación de capitales favorecidos, en ambos casos, y para el mantenimiento de los ingresos de los gobiernos nacional populares, tratando de sostener, de manera muy endeble y sujeta a las variaciones de la baja de precios de dichas materias, una distribución de la renta, enfocada principalmente en su aplicación para el gasto social, mas no para impulsar alternativas de cambio en cuanto a la matriz productiva ni para lograr una distribución más equitativa y sustentable de la riqueza, a la par de la construcción de autonomía y soberanía, así como de justicia social y ambiental.

Conflictividad socioambiental en América Latina y el Caribe

De acuerdo con Martínez Alier (2015), esas concepciones y prácticas inciden en el aumento del metabolismo social que, a su vez, implica el aumento de conflictos socioambientales y de procesos organizativos y movimientos de resistencia, defensa y reapropiación de territorios y bienes naturales, así como en la generación de alternativas, frente a gobiernos y capitales que detentan el poder político y económico. En afinidad con esto, puede considerarse que es así como se generan dinámicas de lo que Trentini y Sorroche (2016) conciben como *ecogubernametalidad en fricción*.

En este sentido, una respuesta común es que tanto sectores gubernamentales como empresariales, e incluso grupos paramilitares y de

crimen organizado, suelen responder denostando a los grupos, comunidades, redes y movimientos de resistencia y alternativa, con discursos y prácticas que buscan desacreditarlos, criminalizarlos e, incluso, reprimirlos con acciones que abarcan desde la violencia institucional encubierta hasta la desapariciones forzadas y asesinatos.

Como un medio alternativo para dar cuenta de las dimensiones de la conflictividad socioambiental y la búsqueda de alternativas para la justicia ambiental, desde 2012 se ha creado la iniciativa del Atlas de Justicia Ambiental, o EJAtlas (Temper, Del Bene y Martínez Alier, 2015), en la Universidad Autónoma de Barcelona, con la participación de un equipo de colaboradores muy comprometido y que tiene como uno de sus principales impulsores a Joan Martínez Alier. En este proyecto, para 2015, se tenían registrados de manera detallada alrededor de 2 100 conflictos socioambientales a nivel mundial, más varios cientos de casos que están en proceso de indagación y registro.

Mediante este proyecto, se identifican y registran una diversidad de modalidades, casos e implicaciones relacionados con conflictos socioambientales, desde los relacionados con asesinatos hasta los que han logrados avances o resultados exitosos. En cuanto a la muerte de defensores de los territorios y los bienes de la naturaleza, el EJAtlas ha identificado alrededor de 260 casos, lo que representa más de 12% de conflictos registrados. Lo que llama la atención es que la mayoría de los asesinatos se concentran en América Latina, seguidos por el sur y sudeste de Asia. Si bien, no se tiene una total cobertura a nivel planetario y algunas zonas están en proceso de indagación, el dato, tendencialmente, no deja de ser muy revelador.

Por otra parte, el EJAtlas también ha identificado casos en los que se han logrado avances y resultados favorables para las organizaciones, comunidades y movimientos de resistencia y defensa de territorios y bienes naturales, frente a proyectos mineros, hidráulicos, de hidrocarburos, de agronegocios, de plantaciones de monocultivos forestales, etc. Han registrado más de 360 casos con resultados positivos, que representan alrededor de 17% del total. Significativamente, también vale resaltar que

la mayoría de esos casos se han concretado en América del Sur, con 95 casos, seguida por Europa occidental con 55 casos.

Se resalta que, de la diversidad de casos registrados, otros, además de los mencionados, tiene que ver con movimientos frente al *fracking*, movimientos de pescadores artesanales, luchas sindicalistas, agrarias y ecologistas, conflictos urbanos, movimientos locales e internacionales contra represas, movimientos por la salud de pueblos perjudicados por los agroquímicos y movimientos en defensa de los manglares y las zonas costeras (Bouzas, s.f.).

Para mediados de 2020, en el EJAtlas (ejatlas.org, 2020) se tienen registrados más de 3 262 casos de conflictos socioambientales a nivel mundial; de éstos, América Latina y el Caribe concentran 936. Esto es, 28.69% del total. De los 15 países a nivel mundial con más casos identificados para el mismo año, se encuentran India con 338, Brasil con 161, China con 145, Estados Unidos con 141, Colombia con 129, México con 125, Perú con 96, España con 85, Nigeria con 84, Indonesia con 84, Argentina con 72, Ecuador con 63, Canadá con 61, Chile con 57 y Sudáfrica con 56.

Así, de los 15 países con más casos registrados a nivel mundial, siete son de la región, y de éstos destacan Brasil en segundo lugar, Colombia en quinto y México en sexto. Aunado a ello, de los siete países de la región que encabezan esta lista, cinco de ellos —Brasil, México, Argentina, Ecuador y Chile— han tenido, entre el cierre del siglo xx y las dos primeras décadas del xxi, oscilaciones entre gobiernos neoconservadores y gobiernos progresistas o nacional populares, en tanto las dinámicas y prácticas productivas y extractivistas, así como los niveles de conflictividad socioambiental se han mantenido, al igual que en el resto de países con más permanencia de gobiernos proneoliberales, como Colombia y Perú.

Ahora bien, en cuanto a los conflictos socioambientales, por categoría o tipo de problemática relacionada, el mismo EJAtlas refiere que, a nivel mundial, los diez más frecuentemente identificados son los conflictos por tenencia de la tierra, con 847 casos; exploración de yacimien-

tos mineros, con 499; acceso a derechos de agua, con 443; deforestación, con 412; represas y conflictos por distribución de agua, con 404; basurales, tratamiento de residuos tóxicos y vertederos no controlados, con 306; exploración y extracción de petróleo y gas, con 274; infraestructura de transporte, con 272; relaves para minas, con 244; y procesamiento de minerales, con 233 casos. También destacan conflictos por desarrollos urbanos, con 213 casos; conflictos por plantaciones, con 195; parques nacionales y reservas, con 192; contaminación por transporte, con 176; y producción intensiva de alimentos, con 168 casos (ejatlas.org, 2020).

Aunado a lo anterior, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), de 98 casos a los que les da seguimiento para el 2019, encuentra que 66 se relacionan con proyectos de minería, y 23, con proyectos relacionados con la producción de energía. En tanto que los países de origen de las inversiones de los proyectos vinculados con esos 98 casos son principalmente Canadá, con 27 casos; Chile, con 17; Estados Unidos, con 16; Japón, con 7; Suiza, con 6; Australia, con 5; Inglaterra, con 5; México, con 5; Perú, con 5, y Austria con 2 (OLCA, 2019).

En cuanto a los casos vinculados a conflictos socioambientales y violencia extrema, un indicador tendencial lo proporciona el análisis *Goblal Front Line Defenders 2019*, de la Front Line, Fundación Internacional para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, que anualmente realiza uno de los informes más detallados de asesinatos de defensores de derechos humanos y ambientalistas a nivel mundial y por regiones. En el referido análisis de 2019, se presentan cifras muy preocupantes que, si bien suman casos de asesinatos, tanto de defensores de derechos humanos como de activistas ambientalistas, dan muestra fehaciente de las tendencias en cuanto a violencia extrema de personas involucradas en movimientos y luchas por derechos humanos y socioambientales.

El análisis *Global Front Line Defenders 2019* reporta y analiza casos de amenazas, agresiones, campañas de difamación, acosos judiciales y riesgos a los que se enfrentan los defensores de derechos humanos y ambientales a nivel mundial. Destacan los casos de violencia extrema

que derivan en el asesinato de activistas. En este sentido, registra 304 asesinatos a nivel mundial para 2019, de los que 208 fueron perpetrados en la región de América Latina y el Caribe, lo que significa un alarmante 68.42% del total mundial reportado, lo que la convierte en la región con más riesgos y muertes de activistas del planeta. Agrega que los países con más asesinatos documentados a nivel mundial son Colombia, con 106 casos; Filipinas, con 43; Honduras, con 31; México, con 23; y Brasil, con 23 casos. Con ello se muestra que, de los cinco países con más asesinatos registrados, cuatro (a excepción de Filipinas) son de la región.

Aunado a esto, en el mismo informe se detalla que 85% de las personas asesinadas habían sido amenazadas previamente; que en 75% de los casos se habían presentado ataques previos hacia las personas posteriormente asesinadas, o hacia compañeras o compañeros de las comunidades, grupos u organizaciones involucrados en las acciones de defensa; que 13% de las personas asesinadas eran mujeres y que 40% de las personas asesinadas defendía la tierra, los derechos de pueblos indígenas y el medio ambiente (Front Line Defenders, 2019). Esto da cuenta, por un lado, de que la mayoría de los casos están relacionados con luchas y conflictos socioambientales ligados a la defensa de la tierra y territorios de los pueblos originarios, así como de bienes comunes de la naturaleza y, por otro lado, de que las amenazas y agresiones previas que, a fin de cuentas derivaron en asesinatos, implican una omisión o falta de capacidad para que los sectores gubernamentales a quienes corresponde garantizar los derechos y la seguridad de la población cumplan con tales responsabilidades.

A esto, cabe agregar que, de los países que encabezan los casos de conflictos socioambientales y de asesinatos de defensores y activistas de derechos humanos y ambientales, ninguno de sus gobiernos ha ratificado el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como *Acuerdo de Escazú.* El proceso de este acuerdo inició en el marco de la Conferencia de las Naciones

Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20), en 2012, y se adoptó en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, con la firma de los países integrantes de la región. Sin embargo, esa firma inicial no es suficiente para que entre en vigor y adquiera carácter vinculatorio, pues es necesaria la firma de ratificación del mismo acuerdo, la que no se ha plasmado por parte de la mayoría de los gobiernos de los países de la región, incluyendo a los que, como se mencionó, presentan mayor número de casos de conflictos y asesinatos. Cabe enfatizar que, en el texto del acuerdo, adquieren especial relevancia para el caso de este escrito los artículos 8 —sobre acceso a la justicia en asuntos ambientales— y 9 —sobre defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales—, que dictan garantías para la seguridad y protección de personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, así como para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que puedan sufrir en el ejercicio de sus derechos (CEPAL, 2018).

Con todo lo anterior, y ante las fricciones, desacreditaciones, criminalizaciones y acosos judiciales, ante los riesgos, amenazas, represiones y asesinatos, es fundamental el reconocimiento a los diversos y ejemplares procesos organizativos y movilizaciones de resistencia, defensa y reapropiación de tierras, territorios y bienes comunes de la naturaleza y las culturas que se dan en el marco de conflictos socioambientales en el mundo y en la región de América Latina y el Caribe, más aún en el medio de procesos identitarios, alimentados por cosmovisiones y concepciones otras que nos motivan a esbozar a Nuestra América, a Abya Yala.

Sin tratar de abarcarlo todo y asumiendo la responsabilidad de omisiones no intencionales, vale el reconocimiento y ejemplo de resistencia y construcción de alternativas del movimiento zapatista y los Caracoles en Chiapas, México; la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana; la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE); el movimiento contra transgénicos y agrotóxicos y el movimiento *antifracking* en Argentina; la Coordinadora Arauco Ma-

lleco de las comunidades Mapuches; el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH) de Honduras; el Movimiento Colombiano por la Defensa de los Territorios y Afectados por las Represas "Ríos Vivos" y los movimientos de defensa frente a proyectos de minería de Colombia; el Movimiento de los Pequeños Agricultores y el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, de Brasil; el Movimiento en defensa del agua en Cochabamba, el Movimiento Indianista Katarista y el pueblo Aymara de El Alto, en Bolivia; Vía Campesina y la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas (CLOC); la Red Latinoamericana contra Represas, en defensa de los ríos, sus comunidades y el agua (Redlar); el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), en México y Centroamérica; el Movimiento Nacional Contra Proyectos de Muerte (MNCPM) de El Salvador; el Frente de Lucha por la Defensa de los Derechos Indígenas de Térraba y el Frente Nacional por la Protección de los Humedales en Contra del PH Diquís en Costa Rica; el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, la Red Mexicana de Afectados por la Minería en México; el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala, la Unión de Cooperativas Tosepan de la Sierra Norte de Puebla y el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, en Jalisco, México; y muchos otros pueblos, comunidades, organizaciones, redes y movimientos en América Latina y el Caribe, ejemplos de resistencia, dignidad y alternativa.

Delgado hace una reflexión que bien puede servir como una recapitulación de estos procesos:

> […] los actores en resistencia o los movimientos de justicia socioambiental sugieren articularse cada vez más, trascendiendo lo local e involucrando una multiplicidad de interlocutores. La conformación de redes de actores en resistencia y de redes de redes es cada vez más significativa, y sobre todo su acompañamiento, simultáneo, en diversos procesos concretos de defensa del territorio y de su identidad sociocultural. Aún más: la resistencia social, pese a que es inevitablemente reactiva, también es cada vez más propositiva, tanto

en las formas de resistir como en la construcción de propuestas alternativas de y para los espacios territoriales concretos (58-59)

Conclusiones

Los gobiernos de diversos países de la región presentan algunos matices y diferencias en cuanto a políticas sociales, sea por su abandono o por la atención desde ciertos programas o acciones que buscan garantizar la satisfacción de necesidades y derechos básicos de bienestar. Hay abandono o reducción drástica por parte de gobiernos neoconservadores, y hay atención por parte de gobiernos nacional populares o progresistas. Sin embargo, presentan similitudes de fondo en cuanto a políticas productivas, ligadas a las dinámicas e intereses de despojo, lucro y acumulación del capital, de manera voraz desde los primeros y con ciertas regulaciones por parte de los segundos.

El despojo, el extractivismo, la depredación y el deterioro social y ambiental desde el hacer de gobiernos neoconservadores en alianza con grandes capitales nacionales y trasnacionales, a la vez que el despojo, el neoextractivismo, la depredación y el deterioro social y ambiental están presentes en el hacer de los gobiernos progresistas o nacional populares, en la búsqueda de obtener renta o ingresos para financiar el gasto social. Pareciera que son los mismos medios para diferentes fines. No obstante, eso resulta relativo, pues si en uno de los casos se atienden políticas y programas sociales y ciertas medidas económicas regulatorias, en ambos se reproducen dinámicas productivas extractivistas con serias repercusiones sociales y ambientales que incrementan los impactos negativos en el metabolismo social y que, a la vez, aumentan la conflictividad socioambiental.

Esto, de manera lamentable, deriva en la mayoría de los casos en dinámicas de fricción y respuestas gubernamentales de denostación, criminalización y amenazas hacia personas, organizaciones, pueblos y movimientos defensores de derechos humanos y ambientales, llegando incluso a la represión y a casos extremos de desaparición forzada y asesinatos, en manos de agentes del propio Estado o de grupos paramilitares

o del crimen organizado. A esto se agrega la impunidad, propiciada por la omisión, la negligencia o la probada incapacidad de los gobiernos de garantizar la seguridad, la protección y la vida misma de quienes dignamente defienden derechos humanos, sociales y ambientales.

Es por ello que adquieren cada vez más presencia y trascendencia los procesos organizativos y movimientos de resistencia, defensa y reapropiación de territorios, culturas, bienes comunes de la naturaleza y de la vida misma. Procesos organizativos y movimientos que, a la vez, generan y aportan conocimientos y experiencias, desde el hacer de grupos, organizaciones, redes, comunidades y pueblos, articulados de manera intersectorial, tanto en lo local y regional como en lo nacional e internacional, para la construcción de alternativas, desde la dignidad, la autonomía, el buen vivir, la comunalidad, la autogestión, la agroecología, la soberanía alimentaria, las economías solidarias y la justicia social y ambiental.

Bibliografía

Atlas de Justicia Ambiental, ejatlas.org [consultado el 1 de septiembre de 2020].

Bouzas, V. (s.f.), "El Atlas de Justicia Ambiental nos muestra los 2 100 conflictos socioambientales en el mundo", en https://www.tysmagazine.com/atlas-justicia-ambiental-nos-muestra-los-2-100-conflictos-socioambientales-activos-mundo/

Carrasco, R.J. (2007), "La ecología política como respuesta al problema medioambiental", ponencia presentada en el *IX Coloquio Internacional de Geocrítica "Los problemas del mundo actual. Soluciones y alternativas desde la Geografía y las Ciencias Sociales*, Porto Alegre, 28 de mayo a 1 de junio, Universidade Federal do Río Grande do Sul.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2018), *Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe*, Santiago de Chile, CEPAL.

Delgado, G.C. (2013), "¿Por qué es importante la ecología política?", *Nueva Sociedad*, núm. 244, marzo-abril, pp. 47-60.
Front Line Defenders (2019), *Análisis Globar de Front Line Defenders 2019*.
Front Line, *The International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders*, Dublín, Irlanda.
Leah Temper, D. Del Bene y J. Martinez-Alier (2015), "Mapping the frontiers and front lines of global environmental justice: The EJAtlas", *Journal of Political Ecology* 22, pp. 255-278.
Leff, E. (2003), "La ecología política en América Latina. Un campo en construcción", *Polis, Revista de la Universidad Bolivariana*, vol. 1, núm. 5, invierno, p. 0.
Martínez Alier, J. (2015), "Ecología política del extractivismo y justicia socioambiental", *Interdisciplina* 3, núm. 7, pp. 57-73.
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, en
http://olca.cl/oca/enlista02.php?pagn=0&c_sel=11 [Consultado el 1 de septiembre de 2020].
Trentini, F. y S. Sorroche (2016), "Repensando los conflictos socioambientales desde una ecogubernamentalidad en fricción", *Estudios Políticos*, núm. 49, p. 132-147.

Morena, de movimiento social a partido político, a pocos años de su conformación (2014-2019)

MARÍA GUADALUPE MORENO GONZÁLEZ*
LUCÍA IBARRA ORTIZ**

Introducción

El presente documento tiene como objetivo reflexionar sobre el proceso de institucionalización del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ya que, de ser un movimiento social en 2010, se constituyó como partido político en 2014; en 2018 participó como partido político y obtuvo el triunfo de la presidencia de la República y una mayoría en las cámaras de Senadores y Diputados con un resultado avasallante, sin precedente en la historia reciente de México.

Para la lectura de esta compleja relación movimiento-partido, partido-movimiento, sobre todo para el caso latinoamericano, se ha desarrollado en años recientes una serie de análisis teóricos metodológicos desde la sociología política que ayudan a explicar esta situación. Además de mostrar la complejidad que implica la naturaleza de las movilizaciones sociales y su institucionalización, en lo que confluyen en su mayoría estos análisis es en definir la importancia de los movimientos sociales y los partidos políticos como actores políticos para la construcción o el re-

* Doctora en Ciencias Sociales por El Colegio de Jalisco. Adscrita al Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales. Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Universidad de Guadalajara.

** Doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Guadalajara del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.

planteamiento de la vida democrática.Evidentemente, cuando se aborda el estudio de los movimientos sociales, además de analizar sus manifestaciones, sus acciones colectivas, su definición de movilización social y su construcción del espacio de protesta social, aparece un rasgo que ha caracterizado a la mayoría de los movimientos de los últimos veinte años: la crítica y la descalificación al modelo de desarrollo neoliberal, aunado, en la mayoría de los casos, a una crisis de gobernabilidad y al desencanto por la clase política en turno.

Como resultado, con cada vez mayor frecuencia, los partidos políticos experimentan importantes crisis de credibilidad y de representación, sobre todo en las realidades latinoamericanas, en las que es notorio el desgaste del sistema de partidos, lo que conlleva un serio cuestionamiento a las formas habituales de la democracia representativa y la erosión de la legitimidad y la confianza en las instituciones democráticas.

Ante estos escenarios, es posible cuestionar las categorías teóricas que, durante casi todo el siglo xx, definieron la naturaleza de los movimientos sociales y de los partidos políticos. En dichas categorías los movimientos aparecían como actores antagónicos alejados del poder y de la institucionalización para mantener su esencia social y los partidos se presentaban con origen institucional claramente definido.

Así pues, en la actualidad estas categorías se han modificado. Es cierto que algunos movimientos sociales buscan un cambio al margen de los actores políticos tradicionales, manteniendo su autonomía y priorizando la movilización masiva como estrategia de acción colectiva. No obstante, existen otros que han decidido convertirse en actores políticos mediante su conformación como partidos, participando dentro de las reglas del sistema político a través del sistema electoral para lograr el anhelado cambio social. Eder 1993 (Alonso, 2012) define esta tendencia cuando distingue los momentos del surgimiento de los movimientos como potencialidades nacientes y la tendencia a institucionalizarse.

Por ejemplo, algunas experiencias han mostrado la posibilidad de trascender de movimiento a partido político, como el caso del partido

Movimiento al Socialismo (MAS) de Bolivia, Morena en México y Podemos en España.

Sin embargo, Morena tiene algunas peculiaridades que no necesariamente se encuentran en otras experiencias de institucionalización de movimientos a partidos políticos; por ejemplo, la conformación de su base social, el poco tiempo que le tomó constituirse como partido político triunfante, la legitimidad lograda en las elecciones federales de 2018 —que lo constituyó como la primera fuerza política— y, sobre todo, el amplio capital social que tiene en la población.

En la primera parte de este trabajo se ofrece un contexto general sobre las condiciones sociopolíticas de México en las que surgió Morena; en la segunda, se hace un rápido bosquejo de los principales acercamientos teóricos, y en la tercera, se abordan de manera general los principales retos de Morena como partido-movimiento en estos cinco primeros años del partido, de 2014 a 2019.

Desarrollo

El triunfo de Morena para la presidencia de la República en las elecciones federales de 2018 fue un hecho sin precedente en la historia sociopolítica del México moderno, ya que, desde que emanó el Estado del movimiento armado revolucionario de 1910, el Estado fue prácticamente absorbido por el partido hegemónico que gobernó durante casi todo el siglo XX, de 1929 a 2000. Primero, como "Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929" (ICAP, 1981: 20), transformado en 1938 en el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y, de 1946 a la fecha, en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Este partido asumió como propios los ideales revolucionarios autorreferenciándose como el partido que garantizaría la libertad, la democracia, la soberanía nacional, etc. En resumen, pasaron más de setenta años en el poder para que, en el 2000, el PRI fuera sustituido por el Partido de Acción Nacional (PAN).

Con el triunfo de un partido político diferente al hegemónico, que había gobernado durante la mayor parte del siglo XX, el Partido Ac-

ción Nacional llegó por primera vez a la presidencia de la República con un discurso en el que, en más de una ocasión, parecía confundir la alternancia con la democracia. No obstante, también es importante señalar que, con esta alternancia, se modificó de manera casi permanente el terreno electoral, impactando en el sistema de partidos y la representación política de nuestro país en las elecciones federales del 2006, 2012 y 2018. Por ejemplo, la geografía electoral de 1994 claramente demostraba la hegemonía priista con más de 90% de gobernadores y la presidencia de la República, además de una mayoría en las cámaras de Diputados y Senadores.

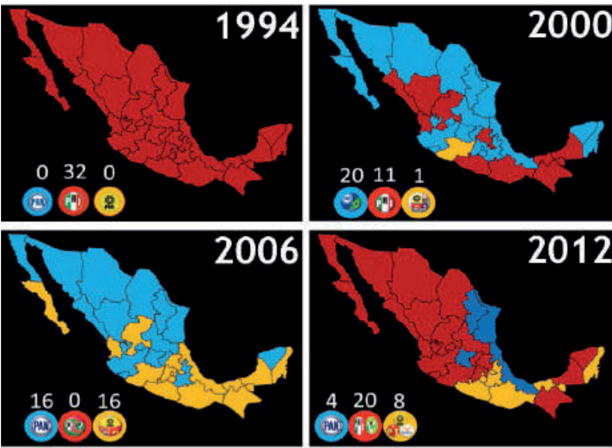
Sin embargo, la transición política de 2000 no resolvió los problemas sociales del siglo xx; al contrario, México inició el siglo xxi con la crisis más compleja en su historia contemporánea, ya que los problemas centenarios de desigualdad, pobreza extrema, polarización y exclusión social se acentuaron aún más por la implementación del modelo neoliberal y de la globalización. Esto se reflejó en el debilitamiento del Estado y el desgaste de la clase política y del sistema político, en la corrupción, la escalada de violencia y el crimen organizado. Además, el Estado se deslindó de su responsabilidad social con los grupos más vulnerables de la sociedad y fue evidente la falta de regulación del mercado.

Sergio Zermeño, en su obra *La sociedad derrotada*, señala entre otras cosas que el proyecto globalizador y la modernidad salvaje constituyen "poderosos disolventes de la sociedad civil mexicana" (Zermeño, 1996: 70) que se reflejan en los problemas actuales de las esferas social, económica y política, mismos que trascienden y se observan en el desdibujamiento del tejido social, la violencia social y estructural generalizada, la inseguridad, el crimen organizado y el miedo que éste genera por la impunidad, la corrupción y el escaso nivel de impartición de justicia, la polarización económica, el desempleo, el subempleo, el crecimiento de la pobreza extrema y el empobrecimiento de la clase media ante una clase política que se caracteriza por la poca o nula sensibilidad; ésta es la más clara evidencia del desgaste del sistema sociopolítico mexicano actual.

Se han agudizado y hecho más visibles la inseguridad respecto a los homicidios dolosos y la desaparición forzada, la presencia del crimen organizado en zonas urbanas y la violencia exacerbada a partir de la guerra contra el narcotráfico implementada por el segundo gobierno panista encabezado por Felipe Calderón (2006-2012), la que dio como resultado la aceleración de la descomposición del tejido social. Es importante mencionar que las elecciones federales de 2006 fueron sumamente polémicas debido al estrecho margen entre el candidato del PAN, Felipe Calderón Hinojosa, y el candidato de la Coalición del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC), Andrés Manuel López Obrador. Con el triunfo del primero, se presentó una movilización civil pacífica de la que, años después, surgió Morena como movimiento. En este período, el PRI pasó a ser la tercera fuerza política del país

Así, podemos identificar la transformación de la geografía electoral de esta manera:

Cuadro 1[38]



[38] Información obtenida de la página oficial de "CONSULTA MITOFSKY" @Mitofsky_group, en https://twitter.com/mitofsky_group/status/976852002478215169?lang=ga [consultada el 5 de noviembre de 2019].

Por otra parte, en el período 2000-2012, el clima social y político[39] del país se agudizó y surgieron diversos movimientos y resistencias sociales que se autorrefirieron *de izquierda,* y éstos se convirtieron en actores políticos de gran envergadura, puesto que sus esfuerzos confluyeron en la apuesta de transformar la realidad en una sociedad más justa y solidaria y en la fuerte crítica al sistema neoliberal y al actuar del gobierno mexicano.

Asimismo, con estos movimientos sociales se ha evidenciado el desgaste del sistema político mexicano, la desacreditación de la clase en el poder y la falta de credibilidad en las instituciones por un paulatino desmantelamiento del Estado. A manera de recuento, se señalan las movilizaciones más emblemáticas de este período:

- En 2005, el movimiento contra el desafuero de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y el arranque de la Otra Campaña, impulsada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
- En 2006, el movimiento contra el fraude electoral cometido a Andrés Manuel López Obrador y, con ello, el cuestionamiento de la legitimidad de la elección presidencial de Felipe Calderón Hinojosa; por otra parte, la movilización de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y el Movimiento Magisterial Popular en México.
- En 2007, la lucha contra la privatización de las pensiones.

[39] En palabras de Olvera, este período de 12 años le permitió a López Obrador construir la base de su partido mediante la movilización, al desprenderse del PRD y dejar atrás todo acto relacionado con las coaliciones que en su momento generaron períodos presidenciales manejados por acuerdos; se estableció una diferencia entre este partido autodenominado de izquierda y todos los partidos que hasta ese momento conservaban su registro federal. Sumando los eventos críticos de la sociedad como Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán y la Casa Blanca, se expone la corrupción y complicidad del Estado con el crimen organizado (2015: 288-289). Esa coyuntura radicaliza los movimientos populares que son apoyados y respaldados por Morena.

- En 2008 y 2009, la resistencia contra el golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
- En 2010, el surgimiento del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que se autodefinió "[…] como una organización plural, amplia e incluyente que convoca al pueblo de México a luchar por la vía pacífica para cambiar el régimen de injusticia, corrupción y autoritarismo que gobierna México" (Programa del Movimiento Regeneración Nacional, 2013: 1).
- En 2011, los campamentos de indignados que reclamaban un México y un mundo más justo, así como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

Posteriormente, en las elecciones presidenciales de 2012, la geografía electoral volvió a cambiar y el triunfo fue para el PRI, lo que dio inicio al sexenio de Enrique Peña Nieto. El PAN se ubicó en la tercera posición como fuerza política del país. La coalición PRD, PT y Movimiento Ciudadano continuó siendo la segunda fuerza con su, por segunda vez, candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.

Algo que caracterizó al sexenio de Enrique Peña Nieto fue que no sólo no se resolvieron los problemas descritos, sino que se incrementaron los índices de violencia, desapariciones forzadas, pobreza y polarización social, y se reveló una estrecha relación entre algunos políticos y militares del más alto nivel con el crimen organizado; además del despojo permanente de tierras, recursos naturales y calidad de vida, se evidenció una de las más altas olas de corrupción, al parecer, sin precedente alguno.

Cabe recordar los casos de los gobernadores priistas de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa,[40] de 2010 a 2016, y de Coahuila Humberto Moreira Valdés.[41]

---

[40] Acusado de los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero en 2016.

[41] Tras finalizar su gestión como gobernador en 2011, Moreira enfrentó acusaciones judiciales por haber adquirido una deuda de 33 mil millones de pesos para el Estado, cerca de 1 800 millones de dólares.

Las movilizaciones sociales continuaron y, en este sexenio, entre las más emblemáticas se identificaron:

- En 2012, el movimiento #Yosoy132 (contra el presidente Enrique Peña Nieto, México, 2012-2018) organizado por las redes sociales.
- En 2013, las luchas magisteriales encabezadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que cuestionaba, entre otras cosas, la hegemonía del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el Estado.
- Entre 2013 y 2014, el estallido de las autodefensas en Michoacán ante el crimen organizado, como la única medida para lograr la paz social que el Estado no garantizaba.
- En 2014, las movilizaciones de familiares y sociedad civil por los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa; hecho en el que se demostró la negligencia del gobierno y su complicidad.
- En 2014, el Movimiento por nuestros desaparecidos en México, que inició con 35 colectivos de familiares, que, en ese año, contaban con más de 25 000 desaparecidos. Problema que aún sigue vigente.
- En 2004, el caso Tlatlaya, en el que se evidenció el abuso de la fuerza pública y la violación de los derechos humanos con la matanza que se dio en esta localidad por parte del ejército mexicano.
- En 2015, una nueva ola de luchas magisteriales, impulsada por la CNTE, autodenominada como el magisterio democrático, en la que se demandó principalmente el paro a la reforma educativa aprobada en 2013.
- En 2017, el movimiento contra el gasolinazo, llevado a cabo por diferentes gremios, sindicatos, activistas y ciudadanos con el objetivo de oponerse al "gasolinazo" (el incremento del precio de la gasolina propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto).
- Durante los primeros meses de 2018, el movimiento #Exigimos Paz, por la desaparición forzada de personas, que refieren a más de 34 200

desaparecidos en el país. Lamentablemente, se trata de un problema que sigue vigente, y para el 30 de agosto de 2019, se reportaban 40 000 desaparecidos y 37 000 muertos sin identificar,[42] por lo que se ha conformado el Movimiento por Nuestros Desparecidos en México, integrado por más de sesenta colectivos de familiares provenientes de 22 entidades de la República mexicana y de tres países de Centroamérica.

Lo anterior tuvo como resultado inmediato que gran parte de la población mexicana otorgara una nula o baja credibilidad hacia a las instituciones del Estado, la clase política, el sistema de partidos, y que a la tan anhelada democracia ya ni siquiera se la viera como una utopía, sino como la panacea que las élites han utilizado por mucho tiempo para mantenerse en el poder sin importar las condiciones de su población.

Estas condiciones confluyeron durante 2011 con los movimientos estudiantiles, cuyo objetivo se fijó en la oposición a la candidatura de Enrique Peña Nieto; al sumar los recursos disponibles, la sociedad encontró una opción y, al consolidar la Asociación Civil requerida por la Ley, Morena pasó de ser un movimiento a convertirse en una organización política cuyo consejo consultivo se constituyó el 2 de octubre de 2011.

Estos acontecimientos cobran sentido en las afirmaciones de autores como Ramírez Sáiz, quien apoya los supuestos de Melucci respecto al comportamiento colectivo contemporáneo. Señala la relación entre la acción y el sistema social, y de este enfoque se tomó como referencia la crisis del sistema social, resaltando las condiciones que facilitan su aparición y que son consideradas "disfunciones del sistema". Para Ramírez Sáiz (1994: 7), dichas disfunciones tienen ambientes diferentes; por lo tanto, la forma en que se desarrollan los movimientos sociales son di-

42 Según datos del artículo publicado en https://aristeguinoticias.com/3008/mexico/en-mexico-hay-40-mil-desaparecidos-y-37-mil-muertos-sin-identificar-organizaciones/ [Consultado el 2 de septiembre de 2019].

versas. Al respecto tenemos la categorización que Melucci[43] realiza de acuerdo con la forma en que se desarrollan las acciones colectivas.

En la categoría de movimientos sociales, Melucci señala que existe un conflicto previo dentro de la sociedad. Al identificarse todos aquellos que se sienten indignados por la carencia de reivindicaciones, se solidarizan, se fija un objetivo y se toman acciones para llegar a éste.

Aunado a lo anterior, el índice Global de Impunidad de México (IGI-Mex) 2017 muestra que existe una impunidad generalizada en todos los estados del país, puesto que, en América Latina, "[…] los primeros cinco lugares en impunidad los ocupan México, Perú, Venezuela, Brasil y Colombia; mientras que los últimos los ocupan Barbados, Granada, Costa Rica, Canadá y Trinidad y Tobago" (Resultados Generales Índice Global de Impunidad, 2017: 13). De esta manera, México tiene el penoso primer lugar de impunidad en el continente. Y por si esto fuera poco, de los 69 países que integran la Organización de las Naciones (ONU), México se ubica en cuarto lugar a nivel internacional por debajo de Filipinas, India y Camerún.[44]

Estas condiciones dan un claro ejemplo del desgaste o fin de un sistema político y del generalizado desencanto y hartazgo que la población experimenta hacia la clase política en general y, con ello, del desprestigio de las instituciones gubernamentales, lo que debilita al Estado.

Sin embargo, es necesario aclarar que estas demandas de la sociedad civil no son exclusiva de nuestro país, sino que acompañan al sistema neoliberal. En casi todas las regiones del mundo globalizado, se experimentan movilizaciones de la sociedad en contra de este sistema, desde la Primavera Árabe (Túnez, Siria, Libia, Egipto, Argelia, Omán, Yemen y Jordania), el Occupy Wall Street en Estados Unidos, los Chalecos Ama-

---

43 Se realizó una tabla comparativa de la información analizada del texto *Challenging codes. Collective action in the information age, escrito en 1996 por Alberto Melucci; el cuadro se construyó con ideas propias para sintetizar los conceptos e ilustrar al lector con mayor facilidad.*

44 De acuerdo con https://www.udlap.mx/cesij/ [Consultado el 25 de abril de 2018].

rillos en Francia, las protestas estudiantiles en Hong Kong y Chile, el Movimiento de los Indignados en España, las protestas independentistas en Cataluña, las protestas en Latinoamérica (Chile, Ecuador, Colombia y Bolivia), entre otros. Una de las lecturas de esta situación nos dice que la existencia de las luchas contra el autoritarismos, las injusticias y las exclusiones generadas por la expansión de la modernidad capitalista fueron y han sido una constante en la historia de cualquier sociedad contemporánea que cuestione el sistema actual.

La aplicación de las políticas neoliberales en la era de la globalización y de la información ante el desmantelamiento del Estado —que se ha visto rebasado para dar respuesta a las demandas sociales, la exclusión de grandes sectores de la sociedad y el desarrollo económico— se traduce en el despojo de los territorios de los pueblos, la inminente desaparición de sus culturas, el desplazamiento forzado de grandes poblaciones de sus territorios, la explotación de sus recursos naturales sin consideración para el medio ambiente, la naturaleza y los espacios sagrados de las comunidades originarias, la ausencia del respeto de la dignidad humana y la falta de seguridad.

Boaventura de Sousa Santos plantea que, aunque en este momento existen movimientos sociales disímbolos, todos ellos están actuado contra dos grandes enemigos, "uno es la inmensa desigualdad de nuestro tiempo" y el otro "dos tipos de dictadura que están hoy en todo el mundo", las dictaduras personales, y las impersonales "de los mercados financieros, del neoliberalismo financiero" (2015: 23).

Esta descripción generalizada del sexenio 2012-2018 y de la desconfianza de la sociedad civil en las instituciones se evidenció una vez más con la respuesta de la sociedad ante los desastres naturales[45] que se pre-

---

[45] Inundaciones por fuertes lluvias en la Ciudad de México y Estado de México, el 6 de septiembre. Tormenta Tropical Lidia en la península de Baja California, el 3 de septiembre. Sismo de magnitud 8.2 con afectaciones en Oaxaca y Chiapas, el 7 de septiembre. Huracán Katia categoría 1, que impactó severamente al estado de Veracruz el 8 de septiembre. Sismo de magnitud 7.1 que afectó a la Ciudad de México, Morelos,

sentaron en nuestro país en 2017. En ese momento, la mayoría de la población pidió que la ayuda reunida por la población civil organizada y los fideicomisos civiles para los damnificados no pasara por el gobierno ni por institución alguna; esto con la finalidad de garantizar que la ayuda realmente llegara a los necesitados. Ahora, a más de dos años, hay familias que siguen viviendo en casas de campaña en la vía pública en espera de que se resuelva su situación.

Ante este panorama, es necesario pensar en qué medida estos acontecimientos favorecieron a Morena para que pasara de ser un movimiento a un partido político. A través de su líder, Andrés Manuel López Obrador, Morena logró capitalizar el descontento generalizado de los ciudadanos hacia los gobiernos y las instituciones. Un malestar causado por tras décadas de desgaste ocasionado por la triada partidista que gobernó México. De esta manera, Morena pudo llevar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, tras las elecciones para el período 2018-2024, logrando la mayor legitimidad y capital social que jamás haya tenido un presidente electo en la historia de México.

Desde su surgimiento, Morena se ha autodenominado como un movimiento político y social, y con ello se expresa una forma más compleja e innovadora de movimiento, porque se movilizan las dos esencias —política y social— para alcanzar una meta en común; sin embargo, desde las categorías teóricas que estudian los movimientos sociales, es complejo leer este acontecimiento, y no necesariamente alcanzan a explicarlo.

Su antecedente más inmediato se dio cuando el fundador de Morena, Andrés Manuel López Obrador, fue derrotado en los comicios para la presidencia de México de 2006 como candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Se informó de una diferencia mínima oficial de apenas 0.56 votos respecto a su competidor más cercano.

Puebla, Estado de México, Guerrero y Oaxaca el 19 de septiembre. Todos estos desastres naturales ocurrieron en 2017.

Después de un largo proceso de lucha y de inconformidad, López Obrador encabezó demandas sociales y viajó alrededor el país para formar su estructura electoral. Finalmente, el domingo 2 de octubre de 2011, en el Auditorio Nacional, se formalizó Morena como una Asociación Civil. Se señaló que, con ese nuevo estatus jurídico, a través de este organismo podría llevar a los tribunales demandas sociales. Durante el acto, Andrés Manuel mencionó que estaba listo para ser el candidato de la izquierda e invitó a los integrantes del movimiento a aplicarse en los próximos nueve meses "a fondo para despertar conciencias y lograr en este plazo el triunfo electoral que dé inicio a una etapa nueva en la vida pública de México" (*CNN*, 2011).

Este movimiento se autodefinió como "[…] mucho más que un movimiento político, es social y a la vez una asociación civil" (*Regeneración*, s.f.). Se trata, pues, de un movimiento complejo que se puede abordar desde diversos enfoques.

En 2012, a dos años de su surgimiento como movimiento, se realizó un Congreso Nacional de Morena con delegados estatales de todas las entidades del país, quienes platearon el nombramiento de trescientos consejeros que formarían parte del Consejo Nacional de Morena. Asimismo, tuvo lugar la elección del presidente nacional del partido y Andrés Manuel López Obrador fue elegido para este cargo. Por su parte, Martí Batres Guadarrama obtuvo la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional. Después de este congreso, se planteó el proceso de afiliación[46] y la constitución de asambleas, logrando un total de treinta asambleas estatales válidas y 496 729 militantes (*La Jornada*, 2014).

Cabe mencionar que el Instituto Nacional Electoral tiene la facultad de verificar el padrón de afiliados cada tres años, y en la verificación realizada en 2017 se obtuvieron los siguientes datos:

[46] La afiliación debía contemplar como mínimo el 0.26% del padrón electoral a nivel nacional, un aproximado de 220 000 ciudadanos que contaran con credencial de elector como se exige la ley.

Cuadro 2[47]

morena	MORENA	319,449	167,071	152,378

Los datos referidos dan cuenta de la movilización de recursos, ya que para la conformación del partido se reunió más del porcentaje mínimo señalado en la ley. Tres años después, es evidente la rotación de militantes y la modificación del recurso humano.

En este sentido, un enfoque teórico que aporta al entendimiento de Morena es la teoría de la movilización de recursos, que surgió en Estados Unidos durante la década de 1970. En cierta forma, fue una crítica radical a los enfoques del comportamiento colectivo; uno de los principales autores de esta teoría fue Charles Tilly (1977). Él argumentó que siempre hay motivos para la acción colectiva, pero lo que en realidad determina si estos motivos llegan a traducirse en movilización o no es que haya un grupo capaz de organización y liderazgo para articular sus intereses en forma activa.

Así surgió el Movimiento de Regeneración Nacional, puesto que fue a través de la movilización de los recursos y del liderazgo de un grupo cercano a un líder que se gestó el surgimiento del movimiento, con el objetivo inicial de llevar al movimiento político a las elecciones federales de 2012. A la vez, se autodefinió como una asociación civil abierta a todo público que reúne los esfuerzos políticos de un grupo de ciudadanos para encauzar la lucha política, social y electoral en México.

La manera de articular a los movimientos sociales con una proyección política clara para sus actores y sujetos sociales es innovadora y es

47 Información obtenida de la página oficial del Instituto Nacional Electoral, en https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/padron-afiliados/ [Consultado el 5 de noviembre de 2019].

el aporte más amplio para entender esta nueva forma de movimientos sociales. No obstante, esta explicación es insuficiente para dar cuenta de Morena, ya que también se autodefinió como movimiento político.

Otro de los fenómenos que apareció con Morena fue el uso de las TIC para ejercer un posicionamiento de lo social en lo político. Las TIC brindan las condiciones para colocar en la esfera pública un asunto o conjunto de demandas, logrando una amplia respuesta. De esta manera, las plataformas virtuales —además de las formas tradicionales de manifestación— establecen procesos de socialización que pueden llegar a crear sentido de comunidad en los movimientos sociales. Como lo señala Melucci, "[…] las redes de reclutamiento juegan un papel fundamental en el proceso de implicación individual. Ningún proceso de movilización social comienza en el vacío […] quienes se movilizan no son individuos aislados y arraigados (Melucci, 2002: 62). Éste es el escenario en el que Morena se inserta.

En enero de 2014, el Partido de Regeneración Nacional logró certificar su Asamblea Nacional Constitutiva y se conformó como partido político ante el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), cumpliendo con los requisitos que establecía la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (2014) para la creación de partidos políticos, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) el 9 de julio del mismo año.

En sus principios éticos y estatutos oficiales señala que es un partido político de hombres y mujeres libres de México que luchan por la transformación pacífica y democrática de nuestro país.

Sus objetivos son:

1. Garantizar a todas las y los habitantes del país una vida digna, con derechos plenos; que se realice la justicia, se viva sin temor y no haya exclusiones ni privilegios.
2. Un cambio de régimen: Se propone acabar con la corrupción, la impunidad, el abuso del poder, el enriquecimiento ilimitado de unos cuantos a costa del empobrecimiento de la mayoría de la población.

3. Ejercer el auténtico ejercicio de la democracia: El derecho a decidir de manera libre, sin presiones ni coacción, y que la representación ciudadana se transforme en una actividad de servicio a la colectividad, vigilada, acompañada y supervisada por el conjunto de la sociedad.
4. Hacer realidad el amor entre las familias, al prójimo, a la naturaleza y a la patria (*Estatuto de Morena*, 2014).

Morena es un partido político que ha crecido en los últimos años. Fueron 16.4 millones de votos los que lo posicionaron como la opción viable para las elecciones del 2018. Ha participado en 87 elecciones, y la Ciudad de México y el Estado de Veracruz son sin duda los bastiones electorales del partido. El siete de junio de 2015, obtuvo una votación efectiva de 7.8%; en esta ocasión, se llevó a cabo una doble jornada electoral en el ámbito federal por diputaciones y para las elecciones locales: gobernadores, diputados locales en 16 estados de la República, presidentes municipales y jefes delegacionales. Chiapas fue el único estado del país que tuvo dos fechas diferentes para las elecciones. Las elecciones locales en Chiapas se realizaron el 19 de julio.

En 2016, obtuvo 13.3%, y en los últimos comicios logró avanzar a 20.5 por ciento.[48]

En las elecciones de 2018 en el Estado de México se consolidó mediante la coalición PT, Morena, Encuentro Social y se obtuvieron los siguientes resultados:

Cuadro 3[49]

	PAN	PRI	PRD	PT	VERDE		alianza	morena		VÍA RADICAL	PAN PRD Coalición	PT morena Coalición
Distritos obtenidos	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	41

[48] *Tercer reporte electoral Integralia*, 2016.

[49] La imagen se obtuvo a partir de los datos publicados por el Instituto Electoral del Estado de México, en http://www.ieem.org.mx/prep2018/diputados/Entidad/01_candidato/index.html [Consultada el 5 de noviembre de 2019].

En la elección de 2018, Morena ganó cinco de los nueve estados que eligieron gobernadores. Más tarde, tras la muerte de los Moreno Valle, logró ganar en Puebla en elecciones extraordinarias, en las que Barbosa Huerta, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), obtuvo 44.6% de los votos. Con respecto a las elecciones para gobernadores, encontramos los siguientes resultados:

Tabla 1[50]

Claudia Sheinbaum	Ciudad de México	Morena
Cuauhtémoc Blanco	Morelos	Morena
Cuitláhuac García	Veracruz	Coalición Juntos Haremos Historia
Adán López	Tabasco	Coalición Juntos Haremos Historia
Rutilio Escandón	Chiapas	Coalición Juntos Haremos Historia

Pero ¿cómo es que Morena pasó de ser un movimiento a un partido político? Y, sobre todo, ¿cómo logró consolidarse como la primera fuerza política del país con un enorme capital social?

Touraine (1984) concibe al movimiento social como una forma de acción colectiva. La existencia de ese tipo de acción implica la preexistencia de un conflicto, de una tensión, que el movimiento social trata de resolver haciéndolo visible. Así, un movimiento social surge porque existen tensiones estructurales. La organización y la movilización colectiva, al constituir sujetos sociales, ha sido uno de los mecanismos más

[50] La tabla se realizó a partir de los datos disponibles sobre las elecciones para gobernadores del año 2018, en https://politica.expansion.mx/estados/2018/07/02/morena-tiene-ventaja-en-5-de-9-estados-con-2-por-definir [Consultados el 5 de noviembre de 2019].

eficaces de los sectores subalternos de la sociedad para impugnar las arbitrariedades de los gobernantes, hacer visibles sus intereses y reivindicar sus derechos civiles y sociales.

Por ello, resulta pertinente la explicación de Tarrow (2009), quien señala propiedades básicas del concepto *movimientos sociales* cuando los define como "[…] desafíos colectivos planteados por personas que comparten objetivos comunes y solidaridad en una intervención mantenida con la élites, los oponentes y las autoridades" (Tarrow, 2009: 26). De esta definición se desprenden los siguientes elementos de los movimientos sociales: desafío colectivo (conflicto), objetivos comunes, solidaridad (identidad) e interacción mantenida en el tiempo (mantenimiento de la acción colectiva).

Estas características están presentes en la génesis de Morena, porque surgió del conflicto social y político de las elecciones federales de 2006. No obstante, no sólo ha de destacarse el conflicto de origen, sino también cómo miles de simpatizantes de toda la República se adhirieron voluntariamente al movimiento, lo que le da legitimidad. La problemática social a la que responde Morena es sentida por un alto porcentaje de ciudadanos de contextos socioeconómicos diversos y con diferentes enfoques, quienes no necesariamente son partidarios de la izquierda, pero que confluyen en el movimiento al verlo como una alternativa de cambio, es decir, comparten objetivos y se mantienen en el tiempo.

Para Somuano (2007), la relación conceptual y práctica entre los movimientos sociales y los partidos políticos suele ser compleja. De hecho, las organizaciones sociales derivadas de los movimientos y que constituyen sus bloques o estructuras pueden llegar a parecerse a los partidos políticos o a los grupos de interés, por lo que es muy importante establecer sus diferencias. Tanto los partidos como los grupos de interés están especializados en las tareas de representación.

En el proceso electoral de 2018, el triunfo del Partido Movimiento de Regeneración Nacional se logró con 52.96% de la votación federal. Una diferencia abismal respecto a sus principales contendientes, pues-

to que obtuvo un total de 24 127 451 votos,[51] lo que hace de Andrés Manuel López Obrador el candidato que más votos ha recibido en la historia de México. Además, Morena ganó la mayoría de las posiciones del Congreso, lo que puede garantizarle una mayor gobernabilidad, a pesar de tener un escenario sociopolítico adverso y muy complejo, que probablemente no alcance a mejorar, si bien millones de simpatizantes mantienen la esperanza de que se mejoren las condiciones del país:

Cuadro 4[52]

128

Partido	Senadores Mayoría relativa	Senadores Primera minoría	Senadores Rep. Proporcional	Total
Partido Acción Nacional	7	11	6	24
Partido Revolucionario Institucional	1	7	6	14
Partido de la Revolución Democrática	0	2	1	3
Partido del Trabajo	5	0	1	6
Partido Verde Ecologista de México	2	2	3	7
Movimiento Ciudadano	4	3	2	9
Movimiento Regeneración Nacional	44	5	10	59
Partido Encuentro Social	1	1	3	5
Sin partido	0	1	0	1
Total	64	32	32	128

Fuentes: Instituto Nacional Electoral[3] Senado de la República[4]

En el caso de la Cámara de Diputados tenemos como resultado de la elección un total de 259 curules para Morena de las 500 disponibles:

---

[51] De acuerdo con los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), en https://prep2018.ine.mx/#/presidencia/nacional/1/1/1/1 [Consultado el 4 de agosto de 2018].

[52] La ilustración se obtuvo a partir de la información publicada por el Instituto Nacional Electoral respecto al acuerdo INE/CG1180/2018, en https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98204/CGor201808-23-ap-4.pdf [Consultado el 5 de noviembre de 2019].

Cuadro 5[53]



500

Partido	Diputados Mayoría relativa	Diputados Rep. Proporcional	Total
Partido Acción Nacional	39	39	78
Partido Revolucionario Institucional	9	38	47
Partido de la Revolución Democrática	6	5	11
Partido del Trabajo	30	3	33
Partido Verde Ecologista de México	6	7	13
Movimiento Ciudadano	17	11	28
Movimiento Regeneración Nacional	166	93	259
Partido Encuentro Social	26	0	26
Sin partido	0	4	4
Total	**299**	**200**	**499**

Fuente: H. Cámara de Diputados.[22]

Por otra parte, y siguiendo la idea del cambio de la geografía electoral que se vivió desde 2000, en 2018 se vivió por tercera ocasión un cambio radical en las representaciones políticas en casi todo el país. Pero, esta vez, fue un partido de reciente creación quien llegó al poder. Un partido que, además, se autodenomina de izquierda. Este resultado electoral da lugar a diversas lecturas. Algunas apuestan a la construcción de una cultura política en la sociedad civil que genera votos razonados para colocar a un partido político en el poder. Otras aún siguen apos-

53 La ilustración se obtuvo a partir de la información publicada por el Honorable Congreso de la Unión, mediante los datos del cómputo distrital concluido, y publicado al término del escrutinio. Actualmente, los datos publicados en el portal indican 258 diputados por Morena, lo que significa que conforman 51.6% y, por lo tanto, son la primera fuerza. Los datos publicados se refieren a la sesión del 31 de octubre de 2019, en http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/info_diputados.php

tando a que ese resultado fue en gran medida el voto de castigo a los partidos políticos de derecha que habían estado en el poder, causado por el desencanto y el hartazgo de su ineficacia.

Sin embargo, lo que se evidencia es la composición política de México para el sexenio 2018-2024:

Cuadro 6[54]
Resultado de las elecciones presidenciales en México
Candidatos con más votos en cada estado



Fuente: Instituto Nacional Electoral de México

Lo descrito explica la copiosa votación de Morena y su ascenso al poder. Y también ayuda a explicar, por supuesto, el talante de Morena como partido, que se propone dar por terminada toda una época en la historia de México: la era del neoliberalismo, el imperio del mercado y el surgimiento de una sociedad egoísta y atomizada, donde la esfera

---

[54] La ilustración se obtuvo de la página oficial del Instituto Nacional Electoral, en https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44689634 [Consultado el 5 de noviembre de 2019].

pública e institucional gira en torno a intereses materiales privados y a otros poderes fácticos.

Esta problemática ha sido la causa de que las movilizaciones y resistencias sociales de varios sectores de la sociedad mexicana cuestionen de manera crítica al Estado y sus instituciones, que no han garantizado el desarrollo, la seguridad y el bienestar de grandes sectores de su población.

Por otra parte, también es importante señalar que la derecha realiza críticas al gobierno de Morena y a su líder, AMLO, de manera cotidiana. Entre ellas se encuentran la falta de un proyecto de nación, una política que carece de rumbo, la falta de crecimiento económico y apoyo a la educación, la suspensión de obras importantes, el incremento a la inseguridad, fallecimientos causados por la falta de medicamentos, el aumento en la violencia y las desapariciones forzadas, el mantener a los ninis, la repetición de las viejas formas corporativas del priismo, el carecer de estrategias de seguridad nacional, el dar privilegios a delincuentes, el asumir lo que el gobierno estadounidense diga, el populismo, el violentar el principio de laicidad, la planeación de su reelección, el que el presidente es otro Hugo Chávez y que México será otra Venezuela, el que se está preparando el terreno para constituir otra gran hegemonía, la falta de escucha a sus asesores y un largo etcétera. Sin duda, es necesario señalar que existe una polarización social alimentada por grupos de ultraderecha, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil —como el caso de FRENAAA (Frente Nacional Anti AMLO)— y sobre todo por el mismo presidente.

Sin embargo, Morena también es un partido cuyo presidente, a casi un año de estar en el poder, ha tenido aciertos de gran trascendencia nacional, como no lo había hecho otro partido o presidente en la historia de México. Por ejemplo:

- Ha puesto un alto al huachicol por el robo del combustible (gasolina y diesel) y ha emprendido investigaciones judiciales contra altos funcionarios de PEMEX.

- Ha quitado las pensiones millonarias a expresidentes de la República.
- Ha establecido topes salariales en los que nadie gana más que el presidente de la República, en armonía con lo dispuesto en el artículo 127 constitucional, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
- Ha implementado un Plan de Austeridad en el ejercicio del gasto público.
- Ha implementado una cultura de paz a través de diversos medios, basada en la recuperación de los valores, la vida y la dignidad del ser humano.
- Ha quitado los privilegios de exentar el pago de impuestos a los grandes monopolios, políticos y empresarios que dejaron de pagar durante años.
- Ha iniciado procesos penales e investigaciones judiciales a funcionarios del más alto nivel por desvío de recursos públicos, por enriquecimiento ilícito y vínculos con el crimen organizado, entre otros.
- Ha iniciado auditorías a instituciones públicas de salud, educación y programas sociales.
- Ha creado la Guardia Nacional como una medida de seguridad.
- Modificó el artículo 108 constitucional para que el presidente pueda ser enjuiciado por corrupción y delitos electorales, además de eliminar el fuero para todos los funcionarios.
- A través de una modificación de la ley, trasladó al Estado Mayor Presidencial a la Secretaría de la Defensa Nacional.
- Revirtió el reciente decreto de "la privatización del agua", impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
- Aumentó el salario mínimo al doble en la zona fronteriza del norte del país.

Estas y otras acciones son consideradas reivindicaciones por algunos de los sectores afectados por los gobiernos anteriores, que favorecieron empresas a costa de desproteger a los trabajadores, solaparon los bajos salarios y la falta de educación continua y que no ofrecieron expectativas

de mejora. Sin embargo, es importante hacer un amplio análisis de los costos sociales que han representado estas acciones, de su alcance real y sobre todo de su impacto en la vida cotidiana de la sociedad.

En el caso que nos ocupa, encontramos todas las características del movimiento social, ya que la base social o *fuerza progresista*[55] se identifica con el discurso y las promesas de un cambio social que tiende a desaparecer la brecha de la pobreza y la injusticia y que reivindica a los pueblos originarios.

A partir de 2006, poco a poco se fue gestando la integración de una minoría activa decidida a transformar la vida política en México. Cuando esta minoría encontró un desviante con una propuesta innovadora se consolidó el movimiento social, orientando su objetivo hacia el establecimiento de una nueva organización política. El resultado de tomar el zócalo capitalino no tuvo un resultado positivo, y este grupo encaminó sus acciones hacia la no violencia. Como explica Gene Sharp, la planificación estratégica aumenta la probabilidad de que todos los recursos que puedan conseguirse se movilicen y empleen de la manera más efectiva. Esto es especialmente cierto cuando se trata de un movimiento democrático (2011: 42).

La labor de conocer el territorio y la base social incentivó la participación ciudadana dentro del proceso democratizador e implicó la solidaridad y la cooperación para participar en la toma de decisiones desde un plano igualitario, situación que es difícil en México, pues, con aproximadamente veinte millones de personas viviendo en extrema pobreza, no es posible pensar en una sociedad equitativa. Pareciera que esta situación de desigualdad predomina en zonas periurbanas y rurales, donde los índices de marginación muestran los niveles de desigualdad

---

55 En su discurso de la Asamblea del 2 de octubre de 2011, Andrés Manuel hizo un llamado a la sociedad: "Ya sé que muchos de ustedes me apoyan, pero también con toda claridad y franqueza les digo: no podré ser candidato si no cuento con el respaldo de las fuerzas progresistas del país". En https://www.jornada.com.mx/2011/10/03/politica/006n1pol

en que viven algunas comunidades. Queda implícita la cultura de la dominación: no puede haber verdadera democratización si permanecen las relaciones de subordinación. Rauber (2013: 16) dice que hay considerar que la construcción de una democracia tiene origen en lo reivindicativo, pues todos los hombres son iguales en un sistema democrático.

Sin embargo, como partido de corte progresista, los retos de Morena no son menores. Además del recrudecimiento de la violencia en el país, la crítica situación económica por la que éste atraviesa, la escasa credibilidad en las instituciones del Estado y la corrupción como un problema transversal que ha permeado todas las capas sociales, Morena ha de enfrentarse también a su consolidación como partido, puesto que en su interior se repiten las prácticas y los vicios tan criticados por su líder y, al parecer, no terminan de actuar como oposición más que como partido en el poder. Además, uno de sus mayores retos es aprovechar esta coyuntura del probable final de un régimen y el comienzo, lo que sólo se logrará a partir de la unidad o de un gran acuerdo social, y no con la polarización que el propio presidente genera en muchas ocasiones.

Conclusión

Durante la Asamblea del 2 de octubre de 2011, Andrés Manuel declaró en su discurso que ésta es la primera asociación civil que dirige, y afirmó que es una consecuencia del fraude electoral del proceso de 2006. La experiencia adquirida en cinco años de resistencia civil pacífica, de los recorridos por el país, estado por estado, municipio por municipio y distrito electoral por distrito electoral, consolidó este movimiento social y lo dirigió hacia su institucionalización.[56]

---

56 Se integró un consejo consultivo conformado por 84 destacados ciudadanos, escritores, intelectuales, científicos, académicos, empresarios, líderes sociales, periodistas, politólogos, economistas y artistas, y un comité ejecutivo integrado por 17 especialistas en diferentes áreas, entre los cuales están sus más cercanos colaboradores. Destaca la incorporación de René Drucker Colín como responsable de Ciencia y Tecnología; Elena Poniatowska, en Arte y Cultura, y el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la

Klachko indica que el ascenso del representante de un movimiento social al gobierno le permite a éste recoger las metas planteadas durante la resistencia, contribuyendo al cambio político (2015: 148). Éste es el caso de López Obrador, ya que, a lo largo del período 1988-2012, su estrategia y comportamiento político tuvo cambios tendientes a establecer un liderazgo más carismático y menos dominante. Lo anterior se colige de los pasos que apuntalaron la carrera a la presidencia de López Obrador, ya que en el período 2000-2006 fue evidente el rompimiento con el PRD a causa de la falta de empatía entre la estructura del partido y las acciones del candidato (Espinoza y Navarrete, 2015: 86-87).

A causa de los acontecimientos poselectorales de 2006, se dio una fractura entre López Obrador y el grupo de los Chuchos,[57] lo que predispuso la creación de Morena. Primero, se trató de un movimiento alterno al sistema de partidos hegemónicos (incluidos los de izquierda) y, después, se convirtió en una base sólida que en el siguiente proceso electoral le proporcionó a López Obrador los sufragios necesarios para constituirse como el representante de los mexicanos. Las acciones no violentas[58] le permitieron el acercamiento social que Espinoza y Navarrete califican como comportamiento moderado (2015: 96). El discurso público, la abierta oposición al régimen totalitario, acusaciones públicas sobre las prácticas corruptas, los videos, *spots*[59] y las delegaciones (que

Nación Genaro Góngora Pimentel, como responsable de Justicia, Legalidad y Gobierno. Acta constitutiva realizada por el notario público 128 del Distrito Federal, Sergio Navarrete Mardueño; disponible en Archivo de Instrumentos Públicos.

57 Jesús Ortega y Jesús Zambrano llegaron al seno del PRD creando fricciones y distanciamiento al interior del partido porque nunca comulgaron con las ideas obradoristas respecto a las acciones poselectorales y la presidencia legítima, desconociendo su liderazgo. (Espinoza y Navarrete, 2015: 94-95).

58 Véase el cuadernillo *Métodos de acción no violenta* de Gene Sharp, el cual detalla los métodos de persuasión y protesta pacíficas, presiones y no cooperación social, en http://www.noviolencia.org/publicaciones/metodos_sharp.pdf

59 Consúltese en "Morena es la esperanza de México" el *sport* de la campaña en donde

al llegar al poder se consolidarían como una función organizacional del partido con la designación de delegados estatales) fueron acciones que poco a poco articularon el movimiento social que pudo evidenciar los límites de la transición de 2000 y que permitió establecer la promesa de democratizar al Estado una vez que el partido hubiere llegado al poder (Olvera, 2015: 282).

Desde 2000 hasta 2018, otro poder fáctico se consolidó como parte de nuestro sistema político: el crimen organizado, que es una de las necesidades no resultas de la ciudadanía. Por tanto, también es parte de las promesas del líder del movimiento pacificar el país; dados los resultados de las estrategias en seguridad de los gobiernos panistas, se genera un elemento más de cooperación para vigorizar el movimiento (Olvera, 2015: 284-285).

En la actualidad, se observa el resultado del tránsito de Morena movimiento social al Morena partido político. Con la mayoría representativa dentro de las cámaras de Senadores y de Diputados, las gubernaturas, alcaldías y congresos locales, es palpable y se pone en evidencia la necesidad de la sociedad de alcanzar el respeto hacia su dignidad y de dejar en el pasado las condiciones de subordinación; las prácticas autoritarias que alguna vez estancaron la democracia en México deben ser erradicadas, pero ello implica que el imaginario social cambie, así como las prácticas que amplían la brecha de la desigualdad social.

Existe una serie de desafíos que se han agudizado y que son resultado de problemas sociales que parecen no tener una atención y solución a corto o mediano plazo; entre ellos la polarización y la exclusión social, la erradicación del crimen organizado, la violencia, el tráfico de personas y de sustancias prohibidas, la falta de garantías a los derechos políticos, sociales, jurídicos y humanos de la población más vulnerable y de las minorías, la explotación de los recursos naturales, el desplazamiento de poblaciones indígenas o rurales por intereses económicos, entre otros.

Andrés Manuel López Obrador invita a la militancia, en https://www.youtube.com/watch?v=wUxGDUKCR78

Sin embargo, además de los descritos, uno de los mayores desafíos será generar en la población la credibilidad en sus gobernantes o representantes populares. Además de minimizar la polarización entre sus seguidores y adversarios, el principal reto del presidente es construir una moral institucional que apoye a la reconstrucción e integración del país.

Las acciones de Morena como movimiento social siempre fueron tendientes a la solidaridad y la cooperación con la sociedad. Hoy, como partido político Morena debe reencausar sus acciones, ya que un rompimiento interno puede diseminar la transformación prometida por Andrés Manuel López Obrador en su discurso del 2 de octubre de 2011. Los ciudadanos que buscaron alternativas para participar activamente en lo público y que aceptaron la propuesta para transformar las formas de representación propusieron acciones para impulsar innovaciones en el campo de la política y, mediante elecciones libres, han elegido a su representante. La acción no violenta es una forma de controlar y usar el poder político y social sin violencia. Es imprescindible que el grupo no violento sea capaz de usar su poder contra el poder de sus oponentes.

Sus métodos son completamente diferentes de los de la política violenta. Sharp (2014), en otras palabras, las acciones políticas que implican manifestar inconformidad, rechazo, desconfianza, desapego al sistema que nos mantiene cautivos también es hacer política, son expresiones que demuestran lo erosionado de nuestra confianza hacia los partidos políticos, los políticos tradicionalistas y sus prácticas. Es decir, la participación de los ciudadanos en la política es expresión de la democracia participativa, es parte fundamental de la democracia representativa.

Para consolidarse entre la población como el líder del movimiento, Andrés Manuel López Obrador realizó visitas por todo el territorio mexicano. El resultado positivo de esta estrategia es evidente al revisar la resolución del procedimiento especial sancionador,[60] identificado con

[60] Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto del procedimiento especial sancionador incoado con motivo de la denuncia interpuesta por el Par-

el número de expediente SCG/PE/PRI/CG/155/PEF/71/2011 y su acumulado SCG/PE/PRI/CG/001/PEF/78/2012. En dicho documento se identifican al menos 16 eventos masivos, los cuales fueron motivo de denuncia por actos de precampaña, en un corto lapso; es decir, el día de la jornada electoral se generó un capital social y su fuerza se hizo evidente, pero esto causó temor en los partidos hegemónicos que habían restado importancia a las acciones no violentas llevadas a cabo por Morena movimiento.

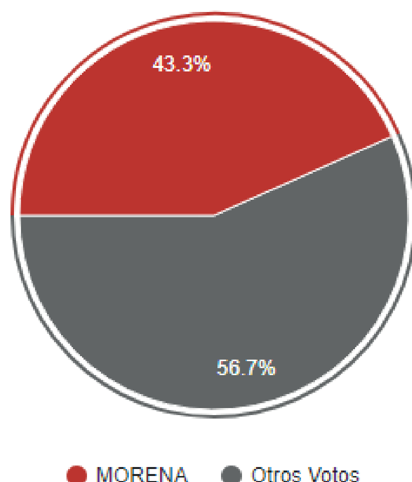
Al revisar el expediente referido, vemos cómo el proceso de institucionalización se volvió indispensable para Morena, ya que el objetivo específico consistía en acceder al poder, al gobierno nacional, como resultado y muestra del ascenso de las masas populares (Klachko, 2015: 148). De esta idea se desprende que el sustento de el ir y venir de ideas (dialéctica de los movimientos), son elementos entrelazados.

En el proceso que Morena puso en marcha para su constitución como partido, identificamos los discursos que invitan a formar parte de la "esperanza de México", el repudio verbal a las acciones corruptas y nepotistas de los gobiernos anteriores y el reclamo por los 20 000 desaparecidos y 100 000 muertos causados por la guerra de Calderón, y todos ellos crearon la esfera perfecta para empoderar todas las luchas: la de clases, las populares, las estudiantiles, las obreras, etc. (Olvera, 2015: 285). A partir de estas acciones se solidificó la fuerza electoral de Morena.

---

tido Revolucionario Institucional, en contra del C. Andrés Manuel López Obrador, así como de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo, y Movimiento Ciudadano, y Movimiento Regeneración Nacional, A.C. (Morena) por hechos que considera constituyen infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, identificado con el número de expediente SCG/PE/PRI/CG/155/PEF/71/2011 y su acumulado SCG/PE/PRI/CG/001/PEF/78/2012, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia identificada con el número de expediente SUP-RAP-64/2012, en: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/82825

Cuadro 7[61]
Fuerza electoral por partido político
2018 - Presidencial - Nacional - Total de votos



De los resultados expuestos se colige la importancia que tuvo la cercanía que se generó entre la base social y Andrés Manuel López Obrador. Las personas se sintieron involucradas en la vida política y, al final, le otorgaron 24 535 379 millones de votos.[62]

Si bien es cierto que en la democracia representativa el ciudadano elige directamente a su representante, no le otorga un poder absoluto y menos aún delega en él la toma de decisiones, sino escuchando y transmitiendo la voluntad colectiva. Ramírez Nárdiz afirma que por participación ciudadana se entiende la intervención de los ciudadanos en su propio gobierno (2009). Esta expresión de la democracia participativa

---

61 Información obtenida del Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones del Proceso Electoral 2017-2018, en https://siceen.ine.mx:3000/#/fuerza-electoral

62 La lista nominal se integró por 89 250 974 millones de ciudadanos; de éstos, 56 601 874 fueron votos válidos. Así, el porcentaje obtenido para ganar la presidencia fue de 43.35%. Datos consultados en https://siceen.ine.mx:3000/#/fuerza-electoral

no fue un elemento promovido por los partidos políticos con anterioridad al proceso electoral 2012. Esta práctica es la innovación de Morena movimiento, y para conservarse en el poder como partido político, debe regresar la mirada hacia sus primeros pasos y consolidar sus primeras acciones.

Entre las acciones que la oposición política ha llevado a cabo para deslegitimar al gobierno de López Obrador, encontramos un incipiente golpe suave. Como señala Sharp,[63] el golpe suave se identifica por *1)* el ablandamiento, que consiste en mantener una campaña a través de los medios de comunicación que cause malestar, descrédito y que condicione a la sociedad con mentiras y falsedades; *2)* el calentamiento en las calles, que consiste en la movilización programada de grupos organizados por los adversarios políticos. En este sentido, cabe mencionar que no han podido concretarse las acciones suficientes, ya que, en este momento, la fractura institucional y la deslegitimación son poco probables, pues la aprobación se mantiene para el actual presidente. Las encuestas reflejan un alto porcentaje de aprobación desde el momento de la elección hasta su primer año de gobierno, manteniendo un porcentaje que oscila entre 68 y 78%;[64] es decir que los ciudadanos todavía consideran que el trabajo que ha realizado es bueno y que ha cumplido con sus compromisos.

América Latina tiene experiencias vivas de gobiernos que han caído a manos de estrategias psicológicas como Guatemala con el caso de Árbenz y, más recientemente, los casos de Zelaya en Honduras, Correa en

63 *De la dictadura a la democracia. Un sistema conceptual para la liberación* de Gene Sharp fue publicado por primera vez en Bangkok en 1993 por el Comité para la Restauración de la Democracia en Birmania, conjuntamente con *Khit Pyaing* [El Periódico de la Nueva Era]. Primera impresión, diciembre 2003, Segunda impresión, diciembre 2011. Traducción al español por Caridad Inda, La Institución Albert Einstein, Estados Unidos de América.

64 Revisar información disponible en https://www.eluniversal.com.mx/nacion/violencia-quita-amlo-diez-puntos-de-aprobacion-encuesta

Ecuador y Morales en Bolivia. Las actividades que buscan producir un golpe blando[65] son casi desconocidas para la ciudadanía, pero, hoy, México está viviendo de forma casi imperceptible estas estrategias. Entre ellas el ya mencionado ablandamiento, que consiste en crear una esfera de influencia negativa que busca difundir (no crear) descontento; la manipulación a través de *fake news*[66] con la finalidad de deslegitimar al presidente,[67] y el calentamiento de las calles. Todas estas estrategias se encuentran detalladas en el manual de Sharp, donde señala que "[…] la acción no violenta, por lo tanto, no es pasiva. No es inacción. Es acción que es no violenta" (2014: 26).

Parte de esta estrategia consistente, como se ha dicho, en calentar las calles y causa graves daños a la población, pues los grupos que contribuyen a estas situaciones incluyen la agresión física y la violencia psicológica y lesionan gravemente el entramado social. De esta manera, crean una percepción de aumento de la violencia,[68] cuando en realidad se trata

---

[65] Consúltese el capítulo denominado "La acción no violenta: Una técnica activa de lucha" del texto escrito por Gene Sharp, *Cómo funciona la lucha no violenta*, un manual que permite derrocar a un gobierno a través de ciertas estrategias que no implican la intervención militar o de confrontación.

[66] *Noticias falsas*: término con el que se identifica la difusión de un rumor o noticia sin fundamento procedente de una fuente desconocida.

[67] Esta condición de deslegitimación parece imposible, ya que los índices de aprobación de AMLO se han mantenido en 70% en el transcurso de 12 meses. La baja en su aprobación está relacionada con el operativo en Sinaloa para detener a Ovidio Guzmán, con lo que la aprobación cayó a 61%. Los resultados de esos porcentajes se pueden revisar en la página oficial de consulta Mitofsky; "El presidente Andrés Manuel López Obrador llega a su Primer Informe de Gobierno con una aprobación de 61.8% de los mexicanos, un porcentaje menor a 66% de respaldo social que tuvo en el 2007 Felipe Calderón al tercer trimestre de su gobierno, de acuerdo con una encuesta de Consulta Mitofsky para El Economista", en http://www.consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/evaluacion-de-gobierno/item/1166-evaluacion-tercer-trimestre

[68] Esta percepción se manipula a través de los medios de comunicación que difunden

de una tarea individual atribuible a grupos políticos que buscan crear miedo y, con ello, desprestigiar al gobernante.

Morena movimiento debe continuar latente para asegurar su fuerza electoral y mantener a Morena partido en el poder. La reconfiguración de su estructura es importante para no dar la impresión de franquicia política ante su electorado y militancia, con el propósito de obtener triunfos particulares (Espinoza y Navarrete, 2011: 92).

La rotación de los partidos políticos hegemónicos ha desaparecido por la fuerza del movimiento generado por Morena en los estados y municipios del país. Morena debe afianzar sus bases para mantenerse en el camino de la institucionalización. Como indica Zibechi, el proceso que se lleva a cabo para integrar a las zonas periféricas de una ciudad o a las provincias de un estado es el nuevo escenario político. Tal vez en otras latitudes ha sido un severo problema organizar a los más desposeídos, pero Morena movimiento logró establecer este proceso de organización y mantuvo esa línea casi horizontal convirtiéndose en la alternativa que otorgó representación a los millones de desprotegidos que hoy viven en México (2006: 228).

Natalucci hace referencia a ello cuando indica que la institucionalización debe contemplar la perspectiva de una integración al gobierno, como una mediación entre la sociedad civil y los regímenes políticos, redefiniendo las formas de participación y los mecanismos de representación (2011: 3).

Ésta es la característica particular que observamos en Morena partido: la tendencia a crear redes y proponer a un representante con el cual

más noticias negativas que positivas. Al respecto puede revisarse "A casi 365 días de su gobierno (se cumplen este 1 de diciembre), 45% de los ciudadanos cree que la corrupción a nivel federal ha disminuido y 27% que sigue igual. Pero 50% estima que la inseguridad en el país ha empeorado. En contraste, a juicio de 17% de los consultados, sí hubo mejoría", en http://www.consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/evaluacion-de-gobierno/item/1188-a-un-ano-de-lopez-obrador-45-opina-que-la-corrupcion-ha-disminuido

los electores se identificaran. ésta es una condición que los partidos políticos hegemónicos nunca tomaron en cuenta. Las redes clientelares que durante décadas sostuvieron al PRI y al PAN (en sus dos períodos presidenciales) hoy tienen contrapeso. El porcentaje de sufragio en favor de López Obrador es la muestra palpable, no se trata sólo de una percepción. Las élites subestimaron el poder de organización del pueblo.

Natalucci parafrasea a Jenkins al reconocer que los movimientos sociales son agentes del cambio, actores colectivos que luchan por el poder en un contexto determinado en busca de las recompensas sociales (2011: 14). Tal como Morena partido se articuló, determinando que, para lograr estas recompensas, debería integrarse al sistema político para transformarlo. Así, puso fin a la idea de que la práctica de la política es privilegio de unos cuantos y ciudadanizó el discurso, la práctica y los proyectos.

Bibliografía

Alonso, Jorge (2012), *Repensar los movimientos sociales*, texto inédito entregado para su discusión en el seminario interno del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales, febrero.

"Consejo general del INE dará hoy su aprobación a Morena como partido" (2014), *La Jornada,* https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/consejo-general-del-ine-dara-hoy-su-aprobacion-a-morena-como-partido/ [Consultado el 22 de agosto de 2017].

Espinoza Toledo, Ricardo y Juan Pablo Navarrete Vela (2011), *Morena en la reconfiguración del sistema de partidos en México*, núm. 37, México, UNAM, Facultad de Ciencias Políticas, enero-abril.

Estatuto de Morena (2014), en http://morena.si/wp-content/uploads/2014/12/Estatuto-de-MORENA-Publicado-DOF-5-nov-2014.pdf [Consultado el 17 de agosto de 2017].

ICAP, Instituto de Capacitación Política (1981), *Historia documental del Partido de la Revolución*, tomo I: PNR 1929-1932, PRI, en http://www.pri.org.mx/bancosecretarias/files/Archivos/Pdf/594-1-11_32_45.pdf [Consultado el 7 de octubre de 2019].

Klachko, Paula (2015), “Reflexiones sobre los procesos de institucionalización de los movimientos sociales en la nueva etapa de nuestra América, ¿repliegue o ascenso de masas?”, vol. II, núm. 3, Universidad Nacional De José C. Paz- Universidad Nacional De Avellaneda.

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (2014), Cámara De Diputados Del H. Congreso de la Unión.

“López Obrador formaliza a Morena” (2011), en http://mexico.cnn.com/nacional/2011/10/02/lopez-obrador-formaliza-a-morena-como-su-estructura-para-las-elecciones [Consultado el 10 de octubre de 2017].

Melucci, Alberto (1999), *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia,* 1.a ed., México, El Colegio de México [Consultado el 15 de octubre de 2017].

___ (2002), *Acción cotidiana y democracia*, 1.a reimpresión, El Colegio de México, México.

Morena (s.f.), *Regeneración,* en http://regeneracion.mx/morena [Consultado el 15 de septiembre de 2015].

Natalucci, Ana (2011), “Entre la movilización y la institucionalización”, *Polis. Revista Latinoamericana*, núm. 28, generado el 1 de mayo de 2019, en journals.openedition.org/polis/1448

Olvera, Alberto (2015), “La crisis política, los movimientos sociales y el futuro de la democracia en México”, *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, UNAM, Nueva Época, año LXI, núm. 226.

Programa del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) (2013), *Por Qué Luchamos,* en https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2013/02/Programa-MORENA.pdf [Consultado el 7 de julio de 2016].

Ramírez Nárdiz, Alfredo (2009), *Democracia participativa. La experiencia española contemporánea,* Alicante, Universidad de Alicante, en https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/14215/1/Tesis_ramirez.pdf [Recuperado el 30 de mayo de 2015].

Rauber, Isabel (2013), *Sujetos Políticos,* vol. 1 [Consultado el 15 de octubre de 2017].

Resultados Generales Índice Global de Impunidad (2017), en https://www.udlap.mx/cesij/files/IGI-2017-Resultados.pdf [Consultado el 15 de mayo de 2018].
Sharp, Gene (2014), *Cómo funciona la acción no violenta* [C. Inda, trad.], EUA, Institución Albert Einstein, en https://javuresistencia.files.wordpress.com/2014/04/como-funciona-la-lucha-no-violenta.pdf [Consultado el 30 de noviembre de 2017].
Somuano Ventura, Ma. Fernanda (2007), "Movimientos sociales y partidos políticos en América Latina: Una relación cambiante y compleja", *Política y cultura*, 27, pp. 31-53, en http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188- 77422007000100003&lng=es&tlng=es [Consultado el 20 de octubre de 2012].
Sousa Santos de, B. (2015), *Revueltas de indignación y otras conversas*, Bolivia, Proyecto ALICE, Consejo Europeo de Investigación.
Tarrow, Sydney (2009), *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política,* 2.a ed., España, Alianza.
Tercer reporte electoral Integralia (2016), en https://integralia.com.mx/web/index.php/2016/03/31/tercer-reporte-electoral-integralia-2016/ [Consultado el 28 de noviembre de 2016].
Tilly, Charles (1977), *De la movilización a la Revolución,* Universidad de Michigan, en http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/50931/156.pdf?sequence=1 [Consultada en septiembre de 2017].
Touraine, Alain (1984), *Los movimientos sociales,* México, Almagesto.
Zermeño, S. (1996), "El regreso de los liderazgos personalizados", *La sociedad derrotada. El desorden mexicano del fin de siglo XX*, 3.a ed., México, Siglo XXI.
Zibechi, Raúl (2006), *Movimientos sociales: nuevos escenarios y desafíos inéditos,* Buenos Aires, CLACSO.

Acerca de los autores

ALBERTO ROCHA VALENCIA Doctor por la Universidad de París VIII, 1982, Francia. Profesor investigador titular C y jefe del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericano (DEILA); profesor de la licenciatura en Relaciones Internacionales del Departamento de Estudios Internacionales; profesor de la maestría en Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación (énfasis en ALC y UE) del Centro Universitario en Ciencias Económicas y Administrativas; profesor de la maestría y doctorado en Ciencias Políticas del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SIN) nivel II, CONACYT, México. Miembro e integrante del Comité de Coordinación del Grupo de Reflexión sobre Integración y Desarrollo en América Latina y Europa (GRIDALE) del Centro de Pensamiento Global (CEPEG) de la Universidad Cooperativa de Colombia. Dominios de trabajo en docencia e investigación: ciencia política, política internacional, integración regional y globalización.

JAIME EZEQUIEL TAMAYO RODRÍGUEZ Profesor investigador titular C del Departamento de Estudios Sobre los Movimientos Sociales (DESMOS) de la Universidad de Guadalajara; investigador nacional I (SNI). Autor y coordinador de 28 libros, 37 capítulos y más de treinta artículos en revistas especializadas, sobre temas de Estado, sistema político y movimientos sociales.

DANIELA PAULINA IÑIGUEZ VARGAS Licenciada en Estudios Internacionales. Maestra en Ciencia Política. Estudiante del doctorado en Ciencia Política. Ha publicado diversos trabajos sobre el entorno postsoviético, la revolución del 52 en Bolivia y las revoluciones de colores.

ARMANDO PÁEZ FLORES Sociólogo por la Universidad de Guadalajara. Maestro y doctor en Ciencias Sociales. Profesor investigador en el Departamento de Estudios Sobre Movimientos Sociales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara hasta su jubilación en 2019. Sus investigaciones fueron sobre movimiento urbano popular, comunidades cristianas de base y cybermovimientos sociales.

PABLO CASILLAS HERRERA Profesor investigador del Departamento de Sociología, Universidad de Guadalajara. Doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Relaciones de Poder y Cultura Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, México; perfil SNI 2; línea de investigación: "Cultura Política y Movimientos Sociales en América Latina"; cuerpo académico: "Gobernabilidad y desarrollo en América Latina".

JORGE CEJA MARTÍNEZ Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Investigador del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos (CUCSH). Responsable del proyecto de investigación "Extractivismo minero, desposesión y movimientos de resistencia socioambientales en México". Profesor en las licenciaturas de Estudios Políticos y Sociología, en la maestría en Ciencias Sociales y en el doctorado de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara. Cuenta con un centenar de publicaciones sobre los temas de democracia, ciudadanía y transición política; globalización, el Foro Social Mundial y los movimientos sociales altermundistas; derechos humanos y violencia de Estado en México; extractivismo minero y movimientos socioambientales, entre otros. Coordinador del libro *Vivir en la encrucijada. Crisis civilizatoria. Dimensiones críticas, perspectivas y alternativas* (2018), Universidad de Guadalajara.

DAVID DE ANDA GONZÁLEZ Licenciado en Filosofía y maestro en Estudios Políticos por el CUCSH de la Universidad de Guadalajara. Candidato a doctor por el Programa de Doctorado en Ciencia Política del CUCSH, donde desarrolla el proyecto de investigación "Utopogemas *vs.*

ideologemas. El juego de la política latinoamericana". Activista social y promotor cultural. Fundador del Tianguis Cultural de Guadalajara A.C. Autor de *Cultura y porvenir* (2002), *Lotería Tianguis Cultural de Guadalajara* (2007) y *El libro maestro de la quena* (2011).

ANABEL CASTILLÓN QUINTERO Licenciada en Historia, con maestría y doctorado en Ciencias Sociales. Profesora investigadora del Departamento de Estudios Sobre Movimientos Sociales, Universidad de Guadalajara. Temas de investigación: resistencias, manifestaciones culturales y movimientos sociales.

MARTHA GUADALUPE LOZA VÁZQUEZ Socióloga y maestra en Estudios Latinoamericanos por la U. de G. Doctora en Sociología por la Universidade Estadual Paulista (UNESP), Brasil. Profesora investigadora en el Departamento de Estudios Latinoamericanos (DEILA, CUCSH desde 1989). Experiencia en investigación bajo las líneas mundialización, multilateralismo e integración y sobre todo en ciudadanía, cultura política y movimientos sociales en América Latina. Cuenta con tres tesis de grado y publicaciones referentes a integración latinoamericana, identidad nacional y procesos históricos de México y Brasil. Experiencia docente en los departamentos de Relaciones Internacionales, Estudios Políticos y Sociología; en posgrado en las maestrías en Desarrollo Social (1999-2001), Ciencias Sociales (desde 2008), Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación (desde 2013) y Relaciones Internacionales de los Gobiernos y Actores Locales (desde 2018) en disciplinas sobre historia latinoamericana y procesos identitarios de la región, metodología y proyección internacional de las culturas. Actualmente, trabaja sobre la relación entre identidad culinaria regional y soberanía alimentaria en América Latina.

LETICIA CARRASCO GUTIÉRREZ: Profesora investigadora del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales (Desmos) de la Universidad de Guadalajara. Maestra en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara. Doctorante por la Universidad de Buenos Aires (UBA), del doctorado en Ciencias Sociales. Ha investigado y escrito sobre

temas relativos a la desaparición forzada en México e historia de los movimientos armados y sus bases sociales.

JORGE GASTÓN GUTIÉRREZ ROSETE HERNÁNDEZ Doctor en Educación con especialidad en Mediación Pedagógica por la Universidad De La Salle Costa Rica y la Universidad Veracruzana. Maestro en Sociología con Atención en Desarrollo Regional. Profesor investigador en la Universidad de Guadalajara, coordinador de investigación del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos y profesor de la maestría en Ciencias Sociales, la maestría en Gestión y Desarrollo Social y el doctorado en Ciencia Política del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Profesor de la maestría en Educación Ambiental del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, así como de las licenciaturas en Psicología y en Nutrición del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Trabaja temas como sustentabilidad integral, procesos y organizaciones socioambientales civiles y comunitarias, experiencias de restauración forestal participativa y cambio alimentario.

MARÍA GUADALUPE MORENO GONZÁLEZ Doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Jalisco, profesora e investigadora titular B del Departamento de Estudios Sobre Movimientos Sociales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel I. Adscrita a la línea de investigación Estado, sistema político y movimientos sociales.

LUCIA IBARRA ORTIZ Abogada de la Universidad de Guadalajara. Maestra en Derecho Penal y doctora en Ciencias Políticas. Experiencia en procesos electorales como consejera distrital. Especialista en temas de transparencia y fiscalización.

Gobiernos progresistas y gobiernos
conservadores en América Latina del siglo XXI
se terminó de editar
en febrero de 2021
en los talleres gráficos
de Amateditorial, S.A. de C. V.
Prisciliano Sánchez 612, Colonia Centro
Guadalajara, Jalisco
Tel.: 36120751 / 36120068
amateditorial@gmail.com
www.amateditorial.com.mx

La edición consta de 1 ejemplar.

Edición: Alberto Rocha Valencia y Jaime Ezequiel Tamayo Rodríguez

El libro incursiona en la investigación de un período primaveral de América Latina (2000-2015), para luego dedicarse a la reflexión y análisis de otra etapa que se encuentra en curso (de 2016 hacia adelante). Una suerte de otoño que pareciera estar declinando antes de lo esperado. En el primer período, se revisa la actuación y desempeño de los gobiernos progresistas, para lo cual se analizan sus aportes y limitaciones. De esta manera, se subraya el avance histórico autónomo que se habría logrado en la región. En el segundo período, también se aborda la actuación y desempeño de los gobiernos conservadores y neoliberales, lo que muestra con claridad que no solamente se propusieron ir a contracorriente de la dinámica progresista, sino que emprendieron un conjunto de políticas públicas para desactivarla. De esta manera, se ha instalado en la región una suerte de dinámica histórica regresiva y dependiente. Y, claro está, entre ambos períodos, las fuerzas conservadoras y neoliberales usaron todos los medios a su alcance para llegar al gobierno; entre ellos, los llamados *golpes suaves*.

CUCSH
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Academia

open access

ISBN 78-607-571-071-6
9 786075 710716